

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

Departamento de Economía Aplicada IV (Economía Política y Hacienda Pública)



TESIS DOCTORAL

La gestión de la política económica en un estado descentralizado: el caso de México

MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR

PRESENTADA POR

Javier Duarte de Ochoa

Director

Francisco Cabrillo Rodríguez

Madrid, 2013



UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE DERECHO

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA IV (ECONOMÍA POLÍTICA Y
HACIENDA PÚBLICA)

“LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN UN ESTADO
DESCENTRALIZADO: EL CASO DE MÉXICO”

TESIS QUE PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR PRESENTA:

JAVIER DUARTE DE OCHOA

ASESOR DE TESIS: DOCTOR FRANCISCO CABRILLO RODRÍGUEZ.

MADRID, 2012.

ABREVIATURAS MÁS USADAS

C.A. Comunidad Autónoma.

CEESP: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.

CEFP: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

CNF: Convención Nacional Fiscal.

CNH. Convención Nacional Hacendaria.

CONAPO: Consejo Nacional de Población.

FCE: Fondo de Cultura Económica.

FGP: Fondo General de Participaciones.

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

IMCO: Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.

RFP: Recaudación Federal Participable.

SNCF: Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

UCM: Universidad Complutense de Madrid.

ÍNDICE.

A) ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS RELEVANTES

Índice de cuadros.	Página.
2.1. México: Evolución de los ingresos de las Entidades Federativas como porcentaje de los ingresos públicos, 1900-1997.	60
2.2. México: Evolución de las facultades tributarias exclusivas de la Federación.	64
2.3. Características de las etapas del federalismo en México.	66
2.4. México: Principales cambios a la composición del Ramo 33.	81
2.5. Transferencias fiscales a las Entidades Federativas en México, 1980-1998.	85
3.1. La libertad económica en las Comunidades Autónomas españolas.	93
3.2. Libertad económica de los Estados y Provincias de los Estados Unidos de América y Canadá.	111
4.1. Índice de libertad económica de los Estados, 2008 (Por resultados).	117
4.2. Índice de libertad económica de los Estados, 2008 (Alfabético).	118
4.3. Índice de regulación, 2008 (Por resultados).	122
4.4. Índice de regulación, 2008 (Alfabético).	123
4.5. Índice de dimensión del sector público, 2008 (Por resultados).	127
4.6. Índice de dimensión del sector público, 2008 (Alfabético).	128
4.7. Índice de comercio, 2008 (Por resultados).	132
4.8. Índice de comercio, 2008 (Alfabético).	133
4.9. Indicador de transparencia (Por resultados).	140
4.10. Indicador de transparencia (Alfabético).	141
4.11. Índice de sanidad, 2008 (Por resultados).	145
4.12. Índice de sanidad, 2008 (Alfabético).	146
4.13. Índice de seguridad, 2008 (Por resultados).	152
4.14. Índice de seguridad, 2008 (Alfabético).	153
4.15. Índice de educación, 2008 (Por resultados).	156
4.16. Índice de educación, 2008 (Alfabético).	157
4.17. Índice de deuda pública, 2008 (Por resultados).	161
4.18. Índice de deuda pública, 2008 (Alfabético).	162
4.19. Índice de balance financiero, 2008 (Por resultados).	166
4.20. Índice de balance financiero, 2008 (Alfabético).	167
4.21. Índice de burocracia estatal, 2008 (Por resultados).	171
4.22. Índice de burocracia estatal, 2008 (Alfabético).	172
4.23. Índice de gasto público, 2008 (Por resultados).	175
4.24. Índice de gasto público, 2008 (Alfabético).	176
4.25. Índice de esfuerzo fiscal, 2008 (Por resultados).	179
4.26. Índice de esfuerzo fiscal, 2008 (Alfabético).	180
Índice de gráficos	
4.1. Índice de libertad económica de los Estados, 2008 (Por resultados).	116
4.2. Índice de libertad económica de los Estados, 2008 (Alfabético).	116
4.3. Índice de regulación, 2008 (Por resultados).	121
4.4. Índice de regulación, 2008 (Alfabético).	121
4.5. Índice de dimensión del sector público, 2008 (Por resultados).	126
4.6. Índice de dimensión del sector público, 2008 (Alfabético).	126
4.7. Índice de comercio, 2008 (Por resultados).	130

4.8. Índice de comercio, 2008 (Alfabético).	130
4.9. Días promedio para abrir un negocio en los Estados, 2008 (Por resultados).	131
4.10. Indicador de transparencia (Por resultados).	139
4.11. Indicador de transparencia (Alfabético).	139
4.12. Índice de sanidad, 2008 (Por resultados).	144
4.13. Índice de sanidad, 2008 (Alfabético).	144
4.14. Índice de seguridad, 2008 (Por resultados).	151
4.15. Índice de seguridad, 2008 (Alfabético).	151
4.16. Índice de educación, 2008 (Por resultados).	155
4.17. Índice de educación, 2008 (Alfabético).	155
4.18. Índice de deuda pública, 2008 (Por resultados).	160
4.19. Índice de deuda pública, 2008 (Alfabético).	160
4.20. Índice de balance financiero, 2008 (Por resultados).	165
4.21. Índice de balance financiero, 2008 (Alfabético).	165
4.22. Índice de burocracia estatal, 2008 (Por resultados).	170
4.23. Índice de burocracia estatal, 2008 (Alfabético).	170
4.24. Índice de gasto público, 2008 (Por resultados).	174
4.25. Índice de gasto público, 2008 (Alfabético).	174
4.26. Índice de esfuerzo fiscal, 2008 (Por resultados).	178
4.27. Índice de esfuerzo fiscal, 2008 (Alfabético).	178

B) ÍNDICE DE CONTENIDOS.

	Página
ABREVIATURAS MÁS USADAS	II
ÍNDICE	III
a) Índice de cuadros y gráficos relevantes.	III
b) Índice de contenidos.	V
INTRODUCCIÓN	1
1.- LA TEORÍA ECONÓMICA DEL FEDERALISMO	11
1.1. Sobre el concepto de federalismo.	11
1.2. La teoría ortodoxa del federalismo y la teoría de la elección pública.	13
1.2.1. <i>La teoría ortodoxa del federalismo fiscal.</i>	14
1.2.1.1. El modelo de Tiebout.	17
1.2.1.2. El modelo de Oates.	18
1.2.1.3. Transferencias condicionadas y transferencias no condicionadas.	23
1.2.2. <i>La teoría de la elección pública o colectiva.</i>	29
1.2.2.1. Principales diferencias con la teoría ortodoxa	29
1.2.2.2. Las funciones del sector público para la teoría de la elección pública.	31
1.2.2.3. El federalismo para la elección colectiva.	38
1.2.2.4. La teoría de la burocracia.	47
1.2.3. <i>Literatura reciente: la segunda generación del federalismo fiscal y el enfoque de la economía política.</i>	53
2.- EL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO	58
2.1. Recuento histórico del federalismo fiscal mexicano.	58
2.2. Las Convenciones Nacionales Fiscales.	61
2.3. La Reforma Hacendaria de 2008.	65
2.3.1. La Convención Nacional Hacendaria (CNH).	65
2.3.2. Modificaciones básicas de la Reforma Hacendaria de 2008.	69
2.4. Las participaciones federales.	73
2.5. Las aportaciones federales.	79
2.6. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF)	82
2.6.1. Marco jurídico-constitucional del SNCF.	82
2.6.2. Composición del SNCF.	85
3.- LA LIBERTAD ECONÓMICA Y SU MEDICIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA DEL NORTE.	87
3.1. La libertad económica en las Comunidades Autónomas de España.	88
3.2. El índice de libertad económica de The Heritage Foundation y The Wall Street Journal.	93
3.3. El indicador del Instituto Fraser.	101
3.3.1. La libertad económica para América del Norte del Instituto Fraser	109
4.- RESULTADOS: EL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS DE MÉXICO.	112
4.1. Cálculo y resultados del índice de libertad económica.	114
4.2. Cálculo y resultados del índice de regulación económica.	119

4.3. Cálculo y resultados del índice de dimensión del sector público.	124
4.4. Índice de comercio.	129
4.5. Indicador de transparencia.	134
4.6. Indicador de sanidad.	142
4.7. Índice de seguridad.	147
4.8. Índice de educación.	154
4.9. Índice de deuda pública.	158
4.10. Índice de balance financiero.	163
4.11. Índice de burocracia estatal.	168
4.12. Índice de gasto del Estado como % del PIB	173
4.13. Índice de esfuerzo fiscal (Índice de Frank)	177
4.14. Resultados por Estados.	181
4.14.1. Aguascalientes.	182
4.14.2. Baja California.	187
4.14.3. Baja California Sur	192
4.14.4. Campeche.	197
4.14.5. Chiapas.	202
4.14.6. Chihuahua.	207
4.14.7. Coahuila.	212
4.14.8. Colima.	217
4.14.9. Durango.	222
4.14.10. Guanajuato.	227
4.14.11. Guerrero.	232
4.14.12. Hidalgo.	237
4.14.13. Jalisco.	242
4.14.14. México.	247
4.14.15. Michoacán.	252
4.14.16. Morelos.	257
4.14.17. Nayarit.	262
4.14.18. Nuevo León.	267
4.14.19. Oaxaca.	272
4.14.20. Puebla.	277
4.14.21. Querétaro.	282
4.14.22. Quintana Roo.	287
4.14.23. San Luis Potosí.	292
4.14.24. Sinaloa.	297
4.14.25. Sonora.	302
4.14.26. Tabasco.	307
4.14.27. Tamaulipas.	212
4.14.28. Tlaxcala.	317
4.14.29. Veracruz.	322
4.14.30. Yucatán.	327
4.14.31. Zacatecas.	332
5.- CONCLUSIONES.	337
6.- APÉNDICE ESTADÍSTICO.	342
7.- BIBLIOGRAFÍA.	362

INTRODUCCIÓN.

A) Planteamiento del problema.

En años recientes, los países occidentales han desarrollado un proceso de descentralización de la política económica, haciendo que la misma pase de la planeación y ejecución de un gobierno central, a entidades subcentrales; México no ha sido la excepción.

La política económica, grosso modo, comprende la interrelación entre los distintos agentes e instituciones que componen una democracia de cara a formular estrategias para el desarrollo económico y el bienestar social. A lo largo del tiempo, el concepto de política económica ha sido sujeto de precisiones, inclusive se ha confundido con la economía política, y aunque quizá sean conceptos parecidos, la política económica muestra una total diferencia de la economía política ya que la primera siempre ha tenido como objeto de estudio al individuo racional, mientras que la segunda tiene su origen en el siglo XVIII, y ha modificado constantemente su objeto de estudio dependiendo del autor y la corriente de pensamiento a la cual pertenezca.

La política económica es entonces un concepto amplio; incluye leyes, estrategias fiscales, monetarias, instituciones judiciales, democráticas, votantes, población, etc. Es decir, la determinación del contexto donde la actividad económica será realizada. Por lo que es de suma relevancia acotar el problema al estudio de un concepto que es el resultado de las políticas de los países que muestran el mayor avance económico a nivel mundial: La libertad económica.

Actualmente, existe un consenso académico que sostiene que la inversión productiva y el crecimiento económico se posan en las zonas geográficas que ofrecen mejores condiciones para la productividad de los factores. Estas condiciones, están definidas por la posibilidad del individuo de poder trabajar y vivir donde le convenga, de negociar su salario con libertad, de ser protegido en sus derechos y propiedades del agresor interno y externo, y por un gobierno que no interfiera en la actividad económica, entre otros. Tales condiciones son elementos que se encuentran dentro del concepto de la libertad económica.

Diversos objetivos económicos son de gran importancia para cualquier gobierno, sin embargo, el crecimiento económico quizá sea el indicador de mayor trascendencia, ya que de ahí se desprende la mayoría de los conceptos inherentes al bienestar social.

En investigaciones recientes, Paul Collier¹ afirma que para una región en situación de subdesarrollo (las propias de México) o hundida en niveles graves de pobreza, lo más importante es alcanzar el crecimiento económico.

Queda claro que la libertad económica fomenta un ambiente propicio para la libre empresa y el crecimiento económico. Sin embargo, es definitivo que no es el único elemento que proporciona el bienestar social, y que debe ser complementado por otros aspectos como la inversión en educación, la infraestructura adecuada, el cuidado del medio ambiente, una democracia participativa y competitiva y programas sociales y de desarrollo económico en general que funcionen eficientemente, por mencionar algunos.

De tal manera, que es necesario aclarar que no es lo mismo un bien de financiamiento público que un bien de provisión pública; un bien puede ser de provisión privada aunque su financiamiento sea público. Por ejemplo, la libertad económica está a favor de la participación del financiamiento público en la educación en tanto que bien cuasi-público², pero sostiene que esta participación debe darse en condiciones que promuevan la libertad de elegir de las personas; entonces, elaborar un índice de educación donde se valore una alta participación del sector privado no es estar en contra de la financiación pública de las escuelas, sino estar a favor de la competencia por los recursos fiscales y de la mejora en la calidad del sistema educativo. En un escenario donde se garantice la financiación pública para la educación y donde los alumnos, padres y tutores cuenten con un abanico de posibilidades para ejercer su derecho social sin duda alguna se maximiza el producto social del gasto público. La competencia entre escuelas, en este caso, formaría un marco donde tanto escuelas públicas como privadas buscarían elevar su nivel educativo buscando atender a la mayor cantidad de alumnos posibles, el objetivo de la política educativa sería la persona, no la institución. A grandes rasgos, la anterior puntualización ilustra el espíritu de algunas partes del concepto de la libertad económica.

¹ COLLIER, P. (2007). *El Club de la Miseria*, Madrid: Ed. Turner.

² Cada sociedad o país define la frontera donde la educación es un bien público.

B) Antecedentes.

Sobre las ventajas de la descentralización económica hay una gran cantidad de trabajos elaborados por la más amplia variedad de corrientes de pensamiento; en esta investigación se exponen los constructos de James M. Buchanan y Richard Musgrave, principalmente, así como algunos desarrollos de literatura reciente, como el federalismo de segunda generación.

Sobre la relación entre libertad y crecimiento económico hay una vasta bibliografía, por ejemplo, Benjamín Powell³ realiza una disertación acerca de la economía irlandesa y sobre cómo esta ha tenido una fase de crecimiento económico importante durante los últimos años del siglo XX, y concluye que el país en cuestión ha tenido una revolución en su producción debido a reformas institucionales que fomentaron la libertad económica.

Julio H. Cole⁴ utiliza el índice de libertad económica del Fraser Institute para realizar ejercicios de regresión con los referidos índices y distintos modelos de crecimiento; inclusive, incorpora el aspecto geográfico; los resultados de sus investigaciones mencionan que el capital humano, las inversiones y la situación geográfica son importantes para el crecimiento económico, pero también la libertad económica.

Vega y Álvarez⁵ realizan un análisis de panel donde incorporan no solamente la libertad económica, sino también la libertad política, presentan un recuento de estudios representativos en la temática como el de Barro (1997) y Baumol (2002), utilizan indicadores del Fraser Institute y llegan a la conclusión de que la libertad económica impulsa de manera vigorosa el crecimiento de la economía.

A pesar de la gran cantidad de estudios a favor de la libertad económica, sobre la construcción de un índice que permita monitorear las condiciones y el escenario donde los negocios son realizados hay mucho menos material. En los Estados Unidos de América destacan los trabajos realizados desde hace casi 15 años por el Wall Street

³ POWELL, B: (2003). *Libertad económica y crecimiento económico: El caso de Irlanda*, consultado en: <http://www.elcato.org/node/1257>

⁴ COLE, J. H: (2005). "Libertad económica y crecimiento económico mundial: Evidencia e implicaciones" en: Roemer, A. *Felicidad: Un enfoque de Derecho y Economía*, México: U.N.A.M. pp. 137-160.

⁵ VEGA M. J. y ÁLVAREZ J. L. (2005) "Libertad y crecimiento económico: Un estudio de causalidad" en: Roemer, A. *Felicidad: Un enfoque de Derecho y Economía*, México: U.N.A.M. pp. 161-185.

Journal y la Fundación Heritage, en Canadá, destacan los trabajos elaborados desde hace casi 30 años por el Instituto Fraser, que fue el organismo pionero en la materia. Los estudios citados han servido de base para la adecuación de la metodología a países concretos o la explicación de fenómenos económicos claramente definidos; como el buscar una relación entre la libertad económica y otros elementos que componen el bienestar social, tales como el ingreso per cápita, los derechos políticos, etc.

Una particularidad que manifiesta este tipo de investigaciones es que están referidas al ámbito nacional, y son importantes para tener conceptos generales o a gran escala de lo que una economía es o puede ser. Sin embargo, la mayoría de los países opera bajo un esquema de gobiernos subcentrales

De tal manera, que alrededor del último lustro han comenzado a elaborarse estudios que describen la libertad económica de los gobiernos subcentrales, en los Estados Unidos de América y Canadá destacan los documentos del Fraser Institute, que incluye a los mencionados países en la elaboración de un mismo indicador, con la perspectiva de incorporar a México en el mediano plazo.

En España, destaca desde el 2008 el trabajo elaborado por un grupo de investigadores universitarios bajo la dirección del profesor Francisco Cabrillo, que hace un análisis de la libertad económica de las Comunidades Autónomas del citado país, vale la pena mencionar que este documento es la guía metodológica de la presente investigación.

En México, conviene citar el estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad intitulado *Competitividad Estatal de México* y el del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de nombre *La Competitividad de los Estados Mexicanos 2010*⁶. Es necesario hacer notar, que estos trabajos utilizan una gran cantidad de información basada en encuestas, además su objetivo es exponer las características productivas de las regiones y no tanto los efectos de los gobiernos estatales sobre las mismas, ya que por ejemplo, el estudio del ITESM incluye el aspecto de las telecomunicaciones, que en México es de competencia claramente federal. Por lo que en dado caso, una deficiencia en materia de telecomunicaciones manifestada por un Estado no es debida a una política estatal, sino a una federal.

⁶ <http://www.itesm.mx/webtools/competitividad/>

Además, los ingresos fiscales, que para la libertad económica son un aspecto adverso, para el estudio citado son una virtud, por mencionar algunos ejemplos discordantes.

C) Justificación e importancia.

Las cuestiones señaladas anteriormente ofrecen un espacio para la investigación sobre la libertad económica de los Estados en México, es importante emprender un estudio que busque satisfacer las necesidades detectadas en la materia.

El presente documento puede tomarse como una guía para la elaboración de políticas económicas, y como tal, presenta algunos elementos que son de utilidad en la búsqueda de la maximización del bienestar de los ciudadanos, sin embargo, hay que tener cuidado con los supuestos realizados en la elaboración de cada indicador y no forzar los indicadores a extremos no adecuados. En muchos casos, los indicadores no son el fin por su propia naturaleza, sino elementos que ilustrarán ciertas características de un sector económico dado, y a partir de ahí, diseñar las políticas más adecuadas. Por ejemplo, el índice de balance financiero es un conducto fino para revisar si existe la posibilidad de reducir impuestos, en el caso de un superávit. O bien, disminuir el gasto en el caso del déficit, pero se antoja como un ejercicio sin ninguna utilidad social el mantener año tras año el superávit fiscal solamente por ubicarse arriba en el índice de libertad económica, ya que este superávit solamente es benéfico si para ejercicios venideros se ajusta la estructura fiscal en aras de llevar un mejor bienestar a la población mediante la promoción de la inversión productiva y el consumo, por lo que el superávit, se reitera, no es un fin por sí mismo.

Es preciso mencionar que los indicadores que se presentan no tienen la finalidad de juzgar ni personas ni instituciones, ello debido a que solo se realiza un ejercicio de comparación de la gestión de la política económica. Además, puesto que el índice apenas se constituye por vez primera, se desconoce la trayectoria de los Estados, por lo que actualmente se puede afirmar que un Estado está ubicado en el lugar siete o quince en el indicador de la libertad económica; si esto es bueno o malo, no es posible decirlo aún, ya que se desconoce en qué lugar estuvo hace un bienio. Pero el índice sí puede servir como un excelente punto de partida. Es decir, de un inicio en séptimo o trigésimo lugar, se puede planificar cuánto se puede avanzar en el corto y largo plazos e implementar programas al respecto, o bien, tener en cuenta cuánto se puede retroceder si no se toman las medidas adecuadas.

D) Objetivos.

El objetivo principal es realizar un estudio que cubra los aspectos teóricos y administrativos de la descentralización de la política económica mexicana para plasmar los resultados de manera estadística a través de la elaboración de un índice de libertad económica para México.

Los objetivos secundarios son los siguientes:

- Presentar de manera breve los principales paradigmas sobre la descentralización de la política económica.
- Conseguir la exposición de un recorrido histórico sobre el proceso de descentralización de la política económica en México, sobre la base de las competencias de gasto y tributación.
- Revisar la bibliografía y los trabajos sobre libertad económica que se han realizado en los principales socios comerciales y políticos de México con el fin de lograr su síntesis metodológica.
- Elaborar una monografía que explique de manera sucinta las estrategias, resultados y retos en materia de libertad económica que ha enfrentado cada uno de los treinta y un Estados de México.
- En base a lo anterior, lograr conclusiones y poder emitir algunas recomendaciones.

E) Hipótesis.

La descentralización de la política económica es una medida eficiente para la mejora de la actividad productiva de los Estados que componen la geografía mexicana. Además, al tiempo que se descentraliza la estrategia económica, es obligatorio el diseño de mecanismos que permitan la dirección óptima de las instituciones y condiciones de mercado con la finalidad de potencializar el rendimiento de los factores de la producción: La construcción de un índice que mida la libertad económica de los Estados es una herramienta de suma utilidad para la consecución de tales objetivos.

F) Metodología.

La investigación que se presenta no incluye al Distrito Federal, ya que aunque es Entidad Federativa, no es un Estado y, en referencia con los mismos, cuenta con amplias diferencias en sus órganos administrativos, normativos y de gobierno en general. Por mencionar algunos ejemplos, observa bastante singularidad en sus facultades presupuestarias, de deuda pública, seguridad y legislativas, entre otros. Por lo que incorporar la mencionada Entidad sería introducir un sesgo al estudio. Asimismo, se utilizan los nombres de los Estados en la forma en que están establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no en la manera en que se establecen en sus cartas magnas locales, que observan una mayor extensión y pueden hacer de difícil lectura los cuadros y gráficos.

Se manejan los conceptos de estado, entidad federativa, provincia, comunidad autónoma, gobierno subcentral, entidad subnacional y gobierno subnacional de manera indistinta, en estudios de mayor especificidad sobre descentralización de competencias políticas y administrativas quizá observen significados diferentes, sin embargo, tales distinciones no son necesarias para el desarrollo de la presente investigación.

¿Qué elementos se tomaron en cuenta para la elaboración de los indicadores? Existe toda una teoría respecto al tema de los indicadores de la actuación del sector público y su clasificación,⁷ obviamente la respuesta a la pregunta descrita viene dada por lo que se pretende medir, y en un segundo término, por los recursos disponibles para la medición, que vienen dados por la calidad de la información disponible o potencialmente asequible.

Es necesario mencionarlo: La elaboración de un sistema de indicadores no debe quedar fuera del análisis costo-beneficio. Es decir, de nada vale el imaginar un sistema de indicadores tan completo y complejo pero que represente un alto costo económico en su elaboración, o que la información que se genere sea del tipo continuo desde el punto de vista estadístico, y con ello se dificulte la comparación.

⁷ Pueden verse los siguientes trabajos: BEHN, R. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*, pp. 586-606. Así como HATRY, H. (1999). *Performance measurement: Getting results*. Washington, D.C.: The Urban Institute Press, por mencionar algunos textos introductorios.

Por lo que hay tres elementos claves para tomar en cuenta al momento de la elaboración de indicadores: El primero, es que la variable dependa de un gobierno estatal, el segundo, es que la misma variable cuente con información para los 31 Estados, ya que ello facilita la comparación, y el tercero, que la variable sea publicada de manera periódica a través del tiempo, ya que ello facilita la medición de la evaluación de las políticas tomadas.

Por ejemplo: En México coexisten dos tipos de propiedad de la tierra: la privada y la ejidal, para los efectos de la libertad económica un indicador sobre las políticas que están realizando los Estados para la promoción de la propiedad privada sería la piedra angular de la tesis, sin embargo, no existen datos para todos los Estados, ni estos se publican con cierta periodicidad por lo que vuelve imposible su incorporación, por el momento.

De tal manera, que hubo que distinguir entre lo deseable, lo probable y lo posible. Los indicadores que se presentan en esta investigación cumplen con los requisitos de que están compuestos en su mayoría por datos disponibles, oficiales, públicos y además con publicación periódica. Sin embargo, ello no menoscaba la intención de enriquecer con el tiempo el índice propuesto, cuando haya más información disponible con las características deseables para la incorporación al indicador. A final de cuentas, la metodología ya está dada, y solo sería necesario introducir una mayor cantidad de insumos.

Una de las cuestiones que justifican de manera sólida el utilizar conceptos e indicadores elaborados por otro grupo de investigadores es que se limita la posibilidad de elaborar y manejar datos para la conveniencia del autor. Es decir, se presentan restricciones a la elaboración de la investigación con el objetivo de obtener algún resultado deseado de antemano. Proporciona pues, una mayor objetividad al ejercicio académico que se expone.

También es cierto que en la investigación se presentan diversos argumentos teóricos y estadísticos a favor de la descentralización de la política económica y el fomento de la libertad económica, los estudios de caso están dados para otros países y no para México. Aunque esto es verdad, también lo es que la economía mexicana tiene más similitudes con la economía de otros países en comparación con sus diferencias, la economía actualmente tiende a la homogenización de prácticas. Se reconoce que los ejercicios de correlación y determinación de la libertad económica y

la realidad mexicana también son necesarios, ello no impide el trabajar en la construcción del índice de libertad económica y en el posterior diseño de políticas al respecto, ya que se tiene un fuerte respaldo teórico y estadístico internacional al respecto.

En el capítulo uno, se optó por un recuento de lo que las teorías más importantes del sector público sostienen sobre el federalismo y la descentralización de la política económica, la otra opción era realizar un recuento exhaustivo sobre las investigaciones estadísticas relativas a la determinación entre libertad económica y crecimiento. No se ha escogido lo segundo debido a que es preferible mostrar claramente los argumentos de las teorías económicas a favor de la descentralización de la política económica y la libertad económica en lugar de algunas digresiones estadísticas que tienen el inconveniente de que solamente tienen validez temporal y están sujetas a ciertas restricciones teóricas en la forma de supuestos. Estos inconvenientes no los muestran las argumentaciones teóricas a favor de la descentralización de la política económica, ya que estas han sido construidas con el correr de los años, y con el mismo correr de los años es como cambiarían sus conclusiones. Además, con el constructo económico se pueden realizar y explicar posteriormente todo tipo de análisis estadísticos, mientras que lo inverso es bastante menos probable.

El capítulo dos realiza un breve recorrido histórico por el federalismo fiscal mexicano desde el inicio del México Independiente, se hacen pausas para exponer los puntos más representativos de las convenciones nacionales fiscales así como la Convención Nacional Hacendaria del presente siglo, por último, se tratan los puntos más importantes de la reforma fiscal del año 2008, que es el año para el cual los indicadores están realizados.

En el capítulo tercero se realiza un recuento de las principales metodologías de medición de la libertad económica en los Estados Unidos de América, Canadá y España. Se escogieron tales países por la innegable relación comercial y económica en algunos casos e histórico-política en otros. Es importante destacar, que el estudio presentado toma principalmente la metodología del estudio español, por considerarla más adecuada a la realidad mexicana y porque la información disponible permite realizar el trabajo de la manera mencionada.

En el capítulo cuarto, se presentan los indicadores de libertad económica de cada uno de los 31 Estados de México, también se hace una exposición de cada uno de los componentes del índice y los resultados parciales. La información se presenta en tablas por resultados y por orden alfabético, así como de manera gráfica con la finalidad de facilitar la lectura de los resultados. Una cuestión que se agrega es que se presentan de manera bastante resumida (se buscó que el resumen no excediera de un folio) las políticas económicas realizadas por cada Estado y que tuvieron impacto en la determinación de la libertad económica. La estructura de las monografías es similar con el objetivo de facilitar la comparación.

Merece la pena destacar que la gran mayoría de políticas públicas de los Estados conservan una alta convergencia debido a que están definidas principalmente por la Federación, por lo que en los informes solamente se incluye la parte de cada Estado que a juicio del autor haga diferencia en el índice de libertad económica.

Para lograr tal propósito, se tomaron en cuenta, en su gran mayoría, cada uno de los informes de gobierno ofrecidos por el gobernador de cada Estado durante el año 2009.

Asimismo, los datos fueron extraídos principalmente de los anuarios estadísticos de cada Estado elaborados por el INEGI, así como de publicaciones de la misma dependencia. Es importante mencionar, que todos los datos de población fueron tomados de proyecciones estadísticas del CONAPO, ya que no existen censos para el 2008.

Además, en la bibliografía se consideró como mejor alternativa el citar cada uno de los anuarios estadísticos de los Estados, producidos por el INEGI, ya que la misma dependencia tiene otra publicación que engloba de manera resumida las cifras de todos los Estados, y al lector que buscase las fuentes primarias de información, le podría generar confusión.

Al final del documento, se presentan las conclusiones y/o recomendaciones, seguidas por un apéndice estadístico conformado por información utilizada para la elaboración de los índices de libertad económica.

1. LA TEORÍA ECONÓMICA DEL FEDERALISMO.

1.1. Sobre el concepto de federalismo.

Habitualmente, la teoría de la hacienda pública se ha enfocado básicamente a los aspectos fiscales del sector público de manera unitaria, sin embargo, la mayoría de los países no opera bajo ese esquema, es muy general la situación donde un gobierno central, delega derechos y obligaciones a otros gobiernos de carácter subcentral, cuyos efectos interesan principalmente a los residentes de su demarcación territorial, participando de esta manera, en un proceso de descentralización fiscal.

Ello implica, que los distintos niveles subcentrales de gobierno participan en la provisión de bienes públicos de diversa manera, motivados por la heterogeneidad que presenta cada una de las regiones que componen el gobierno central, ya que cada región posee marcadas diferencias entre los aspectos culturales de la gente, así como cada población de cada nivel subcentral vive en distintas condiciones geográficas.

Ricardo Uvalle¹ menciona que el federalismo es concebido como el producto de un arreglo o pacto entre entidades subcentrales para la formación de un poder de nivel superior, y las competencias para cada estado se asignan normalmente *a priori*.

Por su parte, Trujillo² menciona que puede haber un gobierno federal pero con bajos niveles de descentralización, o bien, puede haber un gobierno central con la mayoría de sus programas descentralizados. Esta diferencia es fundamental para los desarrollos de la teoría de la elección pública.

Del mismo modo, Cruz Covarrubias³ destaca que entre las características más sobresalientes del federalismo, se pueden destacar las siguientes:

- a) Un territorio propio, constituido como una unidad por la suma de los territorios de los estados miembros.
- b) Una población con derechos y obligaciones en relación con la entidad local. Esa población de los estados miembros, tomada en su conjunto, forma la población del estado federal. En relación con el estado federal los pobladores

¹ UVALLE, R. (2005). *Descentralización y Federalismo*, México: IEFM.

² TRUJILLO, L. P. (2008) "Transferencias gubernamentales y gasto local" en *Gestión y Política Pública*, Vol. 17, núm. 2, México: Centro de Investigación y Docencia Económicas, A. C.

³ CRUZ, A. (2004). *Federalismo Fiscal Mexicano*, México: Porrúa.

del estado miembro también tienen derechos y obligaciones específicas con respecto a éste.

- c) Una sola soberanía: El poder supremo es el estado federal. Los estados miembros participan del poder, pero sólo dentro de los ámbitos y espacios de su circunscripción y en las materias y cualidades que la Constitución les atribuye.
- d) Un gobierno, para el caso de México, en los tres niveles: El Federal, el Estatal y Municipal, con sus facultades delimitadas por la Constitución General.
- e) La personalidad del estado federal es única.
- f) El estado miembro de la federación, goza de autonomía local, que permite determinar su régimen interno, en armonía con la Constitución General.
- g) Los estados deben de contar con los recursos económicos propios para satisfacer sus necesidades.
- h) En México, el Estado Federal posee dos tipos de normas, las que rigen todo el territorio, que son elaboradas por el Congreso de la Unión y las que rigen a los Estados miembros creadas por sus congresos locales.
- i) La forma federal permite establecer un equilibrio de los poderes constitucionales, e imposibilita que surja un poder omnipotente.
- j) La base de la división territorial de los estados miembros la constituye el municipio.

El mismo autor, menciona que los objetivos del federalismo son los siguientes:

- a) Formar una unión más perfecta, equilibrando los derechos de los estados con las necesidades de un gobierno central.
- b) Respetar los derechos fundamentales del hombre, haciendo así la justicia.
- c) Garantizar la paz interna, puesto que el gobierno federal debía proteger a los Estados miembros de las invasiones extranjeras y de los conflictos dentro del país.
- d) Proteger la libertad, estableciendo un capítulo de garantías otorgadas sobre esta materia.
- e) Otorgar al gobierno federal atribuciones en materia económica, financiera y comercial para garantizar el bienestar general.

También es necesario mencionar, que los temas que aborda la teoría económica del federalismo fiscal se refieren más al ámbito normativo que al positivo. En efecto, muchas de las decisiones políticas en esta materia, son justificadas y racionalizadas a

posteriori, pero no se usan para su análisis positivo. Según Antonio Bustos⁴, ello no es en sí un defecto, pero si una de las grandes limitaciones de esta teoría.

1.2. La teoría ortodoxa del federalismo y la teoría de la elección pública.

Normalmente, el fenómeno del federalismo fiscal ha sido abordado desde dos construcciones metodológicas distintas: La teoría ortodoxa del federalismo, desarrollada a mediados del Siglo XX, y la teoría de la elección pública o colectiva, desarrollada algunos años después. Ambas construcciones teóricas poseen ciertas convergencias y divergencias naturales, son opuestas en algunas cosas y se complementan en algunas otras. La principal diferencia estriba en los supuestos y en el enfoque utilizado, que necesariamente genera algunas conclusiones distintas. En años recientes, ha surgido en el mundo académico la teoría del federalismo de segunda generación (proveniente de la teoría ortodoxa), así como el enfoque de la economía política del federalismo fiscal, ambas pueden explicar distintos aspectos de la libertad económica, inclusive ambas están a favor de la competencia fiscal, sin embargo, para el tema concreto de la libertad económica, se ajusta mejor el paradigma puro de la elección colectiva ya que busca limitar el “Leviatán”.

La teoría ortodoxa es originada principalmente por Richard Musgrave. Wallace Oates continúa la obra del profesor Musgrave buscando adecuarla a las realidades contemporáneas. Por su parte, la teoría de la elección pública es originada principalmente por James M. Buchanan, los desarrollos teóricos sucesivos de la elección pública no se despegan de manera troncal de los postulados y conclusiones de Buchanan, por lo que en la presente se utilizan los argumentos teóricos del principal constructor de la teoría de la elección pública.

En cuanto a su punto de partida, la teoría ortodoxa del federalismo supone que el sector público es intrínsecamente bueno y mantiene continuamente alineados sus objetivos con los de la sociedad, mientras que la teoría de la elección colectiva asume que el sector público está compuesto por personas con funciones de utilidad individuales y que no necesariamente coinciden con la función de utilidad social, supone también que el sector público es un Leviatán que continuamente busca maximizar la diferencia entre los ingresos fiscales y los gastos derivados de la provisión de bienes públicos. Al respecto, la teoría de la elección colectiva mantiene

⁴ BUSTOS, A. (2007). *Lecciones de Hacienda Pública*, Madrid: Colex.

sus líneas de investigación sobre el diseño de restricciones legales o de mercado a los posibles abusos del sector público.

En cuanto a sus conclusiones, *grosso modo*, la teoría ortodoxa concluye que es eficiente que las políticas orientadas a la estabilización económica y a la distribución de recursos recaigan en los gobiernos centrales, mientras que se establece que las políticas orientadas a la asignación de recursos deben ser de los gobiernos locales. Por su parte, aunque la teoría de la elección colectiva no está precisamente en contra de las conclusiones de la teoría ortodoxa, si establece claramente que los mencionados no son justificaciones puntuales para impulsar el federalismo político. En este caso, para la teoría de la elección pública el federalismo es una limitante efectiva al Leviatán, y a posibles abusos de los sectores públicos, tanto del gobierno central como del subcentral. Ambas toman como fondo de análisis la teoría microeconómica marshaliana y ambas están de acuerdo con la teoría de la justicia de Rawls que básicamente establece que la inequidad es justa solamente cuando es para el beneficio de cada ciudadano. Por ello, es necesaria la exposición de las dos construcciones teóricas, como una forma de explicar por qué se usa como marco teórico para la presente investigación la teoría de la elección colectiva. En una exposición contrastada de teorías, es factible apreciar las ventajas que presenta la teoría de la elección colectiva para la elaboración de un índice de libertad económica.

1.2.1. La teoría ortodoxa del federalismo fiscal.

En las Ciencias Sociales, no es habitual hablar de consensos ni de conclusiones generalmente aceptadas, sin embargo, dentro del cuerpo teórico de la teoría ortodoxa, es posible destacar algunas líneas convergentes entre los estudiosos del federalismo fiscal, estas líneas están enfocadas a las funciones de un gobierno central y uno subcentral en un régimen federalizado.

Los argumentos teóricos que rodean el tema del federalismo han sido sujetos de investigación tanto por economistas como por analistas de políticas públicas. En el campo de la Economía, este análisis ha sido iniciado por los trabajos de Tiebout⁵, Musgrave⁶ y Wallace Oates⁷. El federalismo fiscal ha sido muy promovido bajo la premisa de que impulsa el desempeño económico vía el incremento en la eficiencia de

⁵ TIEBOUT, C. M. (1956). "A pure theory of local expenditures" *The Journal of Political Economy*, vol. 64, núm. 5, Chicago: The University of Chicago.

⁶ MUSGRAVE, R. A. (1969). *Teoría de la Hacienda Pública*, Madrid: Aguilar.

⁷ OATES, W. (1977). *Federalismo Fiscal*, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

la provisión de servicios públicos. Algunos investigadores, sin embargo, argumentan que el federalismo fiscal puede impactar de manera negativa el desempeño económico cuando las entidades federativas tienen una política de gasto sin control, que a la larga afecta de manera negativa la política fiscal federal. De esta manera, se puede dificultar la estabilidad macroeconómica por el gasto público de las entidades federativas.

Es por ello, que en los párrafos subsecuentes, se ilustrarán de manera concreta algunas opiniones respecto a los efectos del federalismo. La primera opinión de la teoría ortodoxa sobre las funciones del gobierno central y gobiernos subcentrales, es sin duda la de Wallace Oates (basada en los trabajos de Richard Musgrave), que argumenta que la descentralización fiscal tiene un impacto importante en el crecimiento económico producto de la eficiencia en la provisión de bienes públicos, ello debido a que los gobiernos de las entidades federativas están más en sintonía con las necesidades locales de los ciudadanos, por lo cual, tienen mayor capacidad que el gobierno federal para la provisión necesaria de bienes públicos y el cobro de impuestos requeridos.

Después de esta investigación realizada por Oates, numerosos investigadores buscaron realizar un estudio de correlación entre el nivel de descentralización fiscal y el nivel de crecimiento económico, entre ellos se encuentran Kim⁸, Davodi⁹ y Desai¹⁰. Algunos de estos estudios han realizado análisis de datos en panel, mientras que otros han realizado estudios de caso para cada país en especial.

Otro argumento a favor del federalismo menciona que este puede incrementar el crecimiento económico de un país a través de un incremento en su nivel de gobernabilidad, al respecto, hay un grueso de literatura que afirma lo anterior, entre la que se puede contar la desarrollada por Inman¹¹, que afirma que el federalismo fiscal motiva un incremento en la participación política que usualmente conduce hacia un mejor nivel de rendición de cuentas, y por ende, una mejora en el comportamiento del sector público, con las consecuencias naturales en el crecimiento económico. Es decir, al realizarse la provisión de bienes públicos en una demarcación territorial más

⁸ KIM, S. (1995). *Fiscal Decentralization, Fiscal Structure, and Economic Performance: Three Empirical Studies*, Universidad de Maryland: Tesis Doctoral.

⁹ DAVODI, H. D. *et al.* (1995). *Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States*, Banco Mundial: mimeo.

¹⁰ DESAI, R. *et al.* (2003). "Fiscal Federalism and Regional Growth: Evidence from the Russian Federation in the 1990s", *World Bank Working Paper*, núm. 3138, mimeo.

¹¹ INMAN, R. (1997). "Rethinking Federalism", *Journal of Economic Perspective*, núm. 11, mimeo.

cercana a la gente, la misma población puede participar activamente en las funciones de la provisión de los bienes, por lo que en teoría, el margen de error para una mala asignación de recursos se hace más pequeño.

En cuanto al nivel de corrupción del gobierno, que también tiene que ver con la competitividad económica y con el crecimiento, por un lado se argumenta que el federalismo cuenta con menor nivel de corrupción producto de esta misma rendición de cuentas y participación activa de la ciudadanía. Por otra parte, llega a argumentarse que el federalismo fiscal tiene una correlación positiva con el nivel de corrupción y desempeño en el sector público debido a que se infiere que en niveles subcentrales de gestión pública, hay una calidad de capital humano de menor calidad, por lo que pueden generarse este tipo de problemas que afectan el bienestar social.

El federalismo fiscal promueve el desempeño económico, Fukasaku. K. et al.¹² Afirman que la descentralización fiscal estimula el crecimiento económico vía la alineación de actividades del gobierno central y los gobiernos subcentrales, que permiten reducir costos operacionales y de información en la provisión de servicios y bienes públicos, pero para ello, hay un elemento añadido sin el cual los efectos de este argumento serían totalmente distintos: Es precisa la disciplina fiscal de los gobiernos subcentrales.

En la teoría económica ortodoxa, hay consenso sobre los grandes objetivos del sector público en su participación en la economía, estos son tres: La estabilización económica, la distribución de recursos y la asignación de recursos. Esos objetivos son los que sirven de base para la construcción teórica de la teoría económica ortodoxa del federalismo.

Dicha teoría mantiene cierta aceptación sobre las funciones económicas que deben recaer sobre el gobierno central y las cuestiones económicas que deben recaer sobre los gobiernos subcentrales. Es eficiente que las políticas orientadas a la estabilización económica y a la distribución de recursos recaigan en los gobiernos centrales, mientras que se establece que las políticas orientadas a la asignación de recursos deben ser de los gobiernos locales, con cierta concurrencia del gobierno central (los grados de esta concurrencia hacen las distintas teorías del federalismo económico).

¹² FUKASAKU, K. et al. (1998). *Democracy, Decentralization and Deficits in Latin America*, París: OECD.

A continuación, se pretende aportar elementos de discusión, recolectados de estudios de diversos investigadores en la materia, con la finalidad de ordenar esta rama de la teoría económica del federalismo fiscal y lograr su contraste con la teoría de la elección pública.

1.2.1.1. El modelo de Tiebout.

En el principio de su afamado ensayo¹³, Tiebout hace una distinción sobre el modelo de Musgrave-Samuelson relativo a la provisión de bienes públicos. Menciona que mientras estos economistas suponen que a nivel central, las preferencias de las personas están dadas, y que el gobierno debe adecuarse a ellas de la mejor manera, a nivel local los ciudadanos pueden elegir el nivel de provisión de bienes públicos que mejor se empate a sus necesidades y preferencias.

Sostiene que es necesario considerar la decisión de un residente de una cierta localidad sobre la posibilidad de emigrar a otra localidad. ¿Qué elementos considera? Menciona que si tiene hijos, probablemente tenga inclinación por irse a una localidad donde haya un mayor gasto en educación, o bien, pudiera irse a una localidad donde haya un curso municipal de golf, si es amante de este deporte. La disponibilidad y calidad de este tipo de bienes, así como algunos otros como playas, parques, seguridad pública, carreteras y facilidades de estacionamiento pueden determinar la decisión de moverse o no. Es decir, de *votar con los pies* marchándose a un lugar o no hacerlo, obviamente los aspectos no económicos también son importantes, pero Tiebout no los menciona en su modelo, aunque hace referencia a los mismos.

De esa manera, el consumidor-votante estará en el lugar que mejor se adapte a las preferencias.

Los supuestos que maneja Tiebout son los siguientes:

1. Hay perfecta movilidad entre los ciudadanos-votantes, y estos tienen toda la posibilidad de moverse a la localidad que mejor satisfaga sus preferencias.
2. Tienen conocimiento de los ingresos y gastos de cada localidad y reaccionan a estas diferencias.

¹³ TIEBOUT, C. M. (1956). "A pure theory of local expenditures", *The Journal of Political Economy*, vol. 64, núm. 5, October, Chicago: The University of Chicago Press.

3. Hay un gran número de localidades donde se puede escoger vivir.
4. No son consideradas restricciones de empleo.
5. Los servicios públicos provistos no tienen externalidades positivas ni negativas sobre las localidades circundantes.
6. Hay un factor fijo.
7. Las localidades que operan en un sub-óptimo de provisión de bienes públicos buscan atraer nuevos residentes, mientras que las que están en su punto óptimo buscan permanecer en esos puntos.

Conclusiones: El Modelo de Tiebout, basado en el “tómalo o déjalo” indica que en el largo plazo, los ciudadanos tienden a residir en las localidades que les ofrecen una mejor combinación de impuestos y servicios sociales.

Los supuestos en los que el modelo se basa, han sido clasificados por diversos investigadores¹⁴ como poco realistas, sin embargo, las conclusiones generales del modelo tienen cierto grado de coherencia lógica y fueron punto de partida para los desarrollos futuros sobre la hacienda pública federal. La teoría de la elección pública en algunos momentos utiliza este modelo para poder explicar mejor sus postulados en cuanto a federalismo fiscal.

1.2.1.2. El modelo de Oates.

El profesor norteamericano Wallace Oates es famoso por sus estudios y compendios sobre federalismo fiscal, en uno de sus principales ensayos,¹⁵ realiza una extensión del modelo de Richard Musgrave (1959) a una hacienda pública descentralizada. En sus conclusiones, de manera principal, menciona su acuerdo con Musgrave sobre los tres objetivos básicos sobre intervención del sector público en la economía: Estabilización (Stabilization Branch), distribución (Distribution Branch) y asignación de recursos (Allocation Branch). Además, menciona que es eficiente que la estabilización y distribución recaigan principalmente en el gobierno central, mientras que en la distribución pueden concurrir ambos niveles de gobierno, tanto el nivel central como el subcentral.

En su documento, menciona lo siguiente:

¹⁴ ROSEN, H. S. (2002). *Hacienda Pública*, Madrid: Ed. Mc Graw-Hill. Y ALBI, E. et al. (2000). *Economía Pública*, Tomo I, Madrid: Ariel.

¹⁵ OATES, W. (1991). *Studies in Fiscal Federalism*, EE. UU: Ed. Edwar Elgar.

“The central thesis of this paper is that, in a federal system, the Distribution and Stabilization branches of the public fiscal department must perform their functions primarily at the central government level. In contrast, in the Allocation Branch, local government, as well as the central government, has important responsibilities in the provision of needed public goods and services”.¹⁶

En el mismo texto, menciona la importancia de que el objetivo estabilización recaiga en el nivel de gobierno central debido a que un uso efectivo de la política fiscal por parte de los gobiernos subcentrales está seriamente limitado por la apertura de la economía subcentral, ello debido a que no es totalmente factible que los beneficios de cualquier política fiscal expansiva implementada por un gobierno subcentral recaigan en los residentes de esa demarcación, por otra parte, los gobiernos subcentrales tienen incentivos a endeudarse afectando con ello la estabilidad económica del gobierno central.

Como argumentos a favor de un gobierno centralizado menciona los siguientes:

En cuanto al problema de la estabilización, sugiere que una forma de gobierno centralizada o unitaria, es la adecuada para llevar a buen puerto este objetivo de política económica debido a que si los agentes subcentrales de gobierno fueran soberanos en su política fiscal y monetaria, tendrían fuertes incentivos a sacar ventajas de sus posiciones de independencia, logrando resultados catastróficos para las economías subcentrales componentes del gobierno central. En cuanto a la política fiscal, si las entidades subcentrales tuvieran facultades totales para la realización de la política fiscal, probablemente tuvieran incentivos a reducir sus tipos impositivos para las empresas, por lo que este proceso, al hacerse generalizado, tendría un efecto negativo sobre el nivel de recaudación de todas las entidades subcentrales, y los únicos que ganarían con este fenómeno serían las empresas, que pagarían impuestos bajos, y la consecuencia natural a nivel gobierno subcentral sería la poca calidad de bienes públicos provistos por el gobierno subcentral, así como servicios públicos de mala calidad. Además, si los niveles subcentrales de gobierno fueran totalmente soberanos en cuanto a su política monetaria, tendrían fuertes incentivos a “monetizar” sus deudas y sus pagos, con lo que se afectaría severamente la estabilidad económica de los territorios componentes de las regiones centrales.

¹⁶ OATES, W. (1991). Op. Cit.

Es necesario citar al autor cuando menciona que “El uso de las políticas keynesianas de financiación con déficit presupuestario para estimular a las economías locales implica un coste para los residentes, coste que está en gran medida ausente en esas políticas a un nivel nacional. El coste proviene de la naturaleza de la deuda del gobierno local. Dentro de una economía nacional existirá normalmente un alto grado de movilidad del capital financiero; la deuda emitida en una comunidad se mantiene generalmente en buena parte por residentes de otras comunidades. Esto significa, como Alvin Hansen y Harvey Perloff han destacado, que el uso de la deuda pública por un gobierno local tenderá a sobrecargar a la comunidad con una deuda externa”.¹⁷

Por último, mencionar que en entidades subcentrales con un profuso intercambio comercial, el efecto multiplicador keynesiano de una hipotética política fiscal expansiva es demasiado pequeño, ya que varios de los bienes y servicios que se pudieran comprar derivado de una política de esta naturaleza se podrían comprar en entidades subcentrales vecinas. Por ejemplo, supóngase la existencia de una entidad federativa (A) que está al lado de otra que tiene playa (B). Si por ejemplo A impulsa una política fiscal expansiva, probablemente la gente gaste su dinero en vacaciones en la playa y no en bienes y servicios producidos en A, por lo que la ganadora de esta política sería B, que obtendría ingresos provenientes de los turistas de A, mientras que los costos fiscales directos son para A y los costos fiscales indirectos serían para todo el país.

En cuanto al objetivo distribución, Oates menciona como argumento para que recaiga en el sector central la imposibilidad económica para que los gobiernos subcentrales se hagan cargo de esta rama. Oates sostiene que en un estado fuertemente descentralizado, los gobiernos subcentrales no deberían realizar políticas de distribución de los recursos debido a las ineficiencias económicas que esto acarrearía. Por ejemplo, si una entidad federativa busca realizar un agresivo programa de distribución del ingreso entre los habitantes de su demarcación territorial, en principio, pudiera pensarse que sería atractivo para personas de bajos recursos de alguna entidad federativa cercana mudarse a la entidad que implemente el generoso programa de distribución del ingreso, con ello, la carga fiscal de los programas se acrecentaría para la sociedad, una consecuencia económica lógica sería que las personas de alto ingreso que sufragan el programa (suponiendo impuestos sobre la renta progresivos) pensarán mudarse a otros lugares donde su tipo impositivo sea más

¹⁷ OATES, W. (1977). *Federalismo Fiscal*, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, p. 20.

bajo. El resultado natural es una demarcación territorial con abundancia de personas de ingreso bajo que terminarían derrumbando el programa de distribución del ingreso. Inclusive, si el votante mediano tiene preferencias y está totalmente dispuesto a sufragar un programa agresivo de distribución del ingreso, ello no garantizaría el éxito del programa; suponiendo que en una entidad federativa las personas de alto ingreso (votante mediano) estén totalmente de acuerdo en pagar un programa social de distribución de recursos, ello no evitaría que hubiera personas de alto ingreso que pudieran mudarse a regiones cercanas, no pagar el programa, y disfrutar de las externalidades positivas de una política de esta naturaleza, tampoco evitaría la migración profusa (suponiendo costes nulos de movilidad) de personas de bajo ingreso. Es decir, un programa de distribución del ingreso sufragado totalmente por un gobierno subcentral, y financieramente distinto a los programas de otras entidades federativas, bajo el modelo de Oates, no tiene ninguna viabilidad financiera en el largo plazo.

Por último, Oates menciona que solamente para un cierto tipo de bienes y servicios es conveniente que estos sean provistos por un sector público altamente centralizado y el argumento subyacente es el de las economías de escala; en el ejemplo que Oates manifiesta, que es sobre la decisión de construir una plataforma de misiles, probablemente por el alto costo que esto significa, si cada entidad federativa tuviera que construir su propia plataforma de misiles el resultado sería que ninguna lo haría, con lo que habría una producción sub-óptima del bien, por otra parte, si el gobierno central asume el costo total de la construcción de una plataforma de misiles, con una sola plataforma se podría proveer seguridad espacial a todas las Entidades Federativas; este es el ejemplo clásico de la conveniencia de la provisión de bienes públicos por parte del gobierno central.

Como se ha mencionado, la función asignación de recursos es un objetivo concurrente. Es decir, tanto el gobierno central como los gobiernos subcentrales pueden participar en alcanzar este objetivo, los grados de su participación definen las teorías ortodoxas del federalismo, y ya se ha mostrado en el ejemplo de los misiles una situación clara de la conveniencia de la provisión de bienes públicos por parte del gobierno central ¿Entonces el gobierno central deberá hacerse cargo de los tres objetivos básicos? Según Oates esto no debería ser así, ya que el se muestra como un convencido de la federalización para mejorar la asignación de recursos.

Menciona, que el defecto básico de una forma unitaria de gobierno es su probable insensibilidad a la diversidad de preferencias entre los residentes en las distintas comunidades.

En la línea argumentativa citada arriba, es necesario mencionar que en países con regiones claramente diferentes (como el caso de México) es bastante probable que las preferencias de los ciudadanos no sean uniformes y que demanden un nivel distinto de provisión de bienes públicos, si un gobierno central proporciona a toda su demarcación territorial el mismo tipo de bien y al mismo nivel, probablemente esté creando ineficiencias ya que la provisión de los bienes no se ajuste a las preferencias de los ciudadanos, es por ello, que algunos bienes públicos deben ser provistos por los gobiernos subcentrales, ya que son los más cercanos al lugar de consumo de los bienes, y por ello pueden minimizar las ineficiencias que pudieran resultar de la atención a las demandas de bienes públicos.

En adición, Oates aporta a la teoría ortodoxa del federalismo el llamado “Teorema de la Descentralización” que indica lo siguiente: *“Para un bien público –cuyo consumo está definido para subconjuntos geográficos del total de la población y cuyos costes de provisión de cada nivel de output del bien en cada jurisdicción son los mismos para el gobierno central o los respectivos gobiernos locales- será siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales provean los niveles de output Pareto-eficientes a sus respectivas jurisdicciones que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme de output para todas las jurisdicciones”*¹⁸. Este teorema, a grandes rasgos, indica que en ausencia de ahorros de costos por la provisión centralizada de un bien, y de efectos externos interjurisdiccionales, el nivel de bienestar será siempre al menos tan alto, y habitualmente más alto, si los niveles de consumo del bien que son eficientes en el sentido de Pareto se proveen en cada jurisdicción, en vez de proveerse cualquier nivel uniforme y único de consumo para todas las jurisdicciones. De tal modo, que el teorema establece, en ausencia de otros tipos de beneficios compensadores por el control centralizado, una presunción a favor de la hacienda descentralizada.¹⁹ Por lo que solamente, según este modelo, es aceptable una provisión de bienes de manera centralizada si existen economías de escala, o ahorro de costes en su provisión.

¹⁸ OATES, W. (1977). *Op. Cit.* p. 59.

¹⁹ *Ibíd.* p. 81.

En cuanto a la determinación del tamaño óptimo de la jurisdicción, Oates muestra el siguiente gráfico:

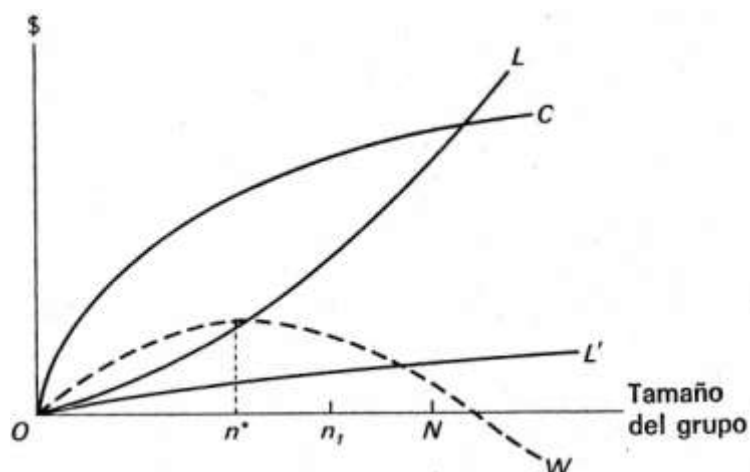


Gráfico tomado de OATES, (1977). *Op. Cit.* p.

En la ilustración anterior, el tramo OC indica los ahorros agregados de coste a consecuencia del creciente número de individuos que consumen conjuntamente un bien determinado. OC mide también verticalmente el incremento de la variable del bienestar que quedaría hipotéticamente disponible para los individuos como resultado de poder adquirir unidades del bien al precio reducido que es posible para el consumo conjunto. Por su parte, el tramo OL mide el coste de bienestar en términos de la reducción del excedente del consumidor que el individuo sufre como resultado de lo que puede ser par él un nivel de consumo del bien, distinto del deseado. Hay razones para argumentar que esta magnitud tiende a incrementarse con el incremento en la magnitud de “n”, que es cuando aumenta el tamaño del grupo. La curva OW representa el incremento neto (restando beneficios de costes) para cada tamaño de grupo. Donde la distancia entre OC y OL es máxima, se tiene entonces el punto óptimo del tamaño de este grupo.

1.2.1.3. Transferencias condicionadas y transferencias no condicionadas.

La mayoría de las transferencias que el gobierno central realiza a entidades subcentrales se dividen en dos tipos: las transferencias no condicionadas y las transferencias condicionadas. En México, las transferencias no condicionadas son las participaciones federales, mientras que las transferencias condicionadas son las aportaciones federales, estas tienen objetivos muy puntuales de gasto: reducir la pobreza, elevar el nivel educativo, mejorar los niveles de seguridad, etc.

Las transferencias financieras que los gobiernos subcentrales reciben de los gobiernos centrales no tienen todas las mismas características, unas están destinadas a fines concretos, como puede ser el combate a la pobreza, el apoyo para seguridad pública, o la atención de servicios de salud, mientras que otras transferencias pueden ser utilizadas libremente por los gobiernos subcentrales para atender principalmente cuestiones que el gobierno subcentral considere adecuadas.

En concordancia con las teoría de Oates, las transferencias no condicionadas obedecen a ciertos objetivos de política económica, mientras que las transferencias no condicionadas son las ideales para otros objetivos, a continuación se detalla esta distinción de transferencias.

CLAFISIFICACIÓN TEÓRICA DE LAS TRANSFERENCIAS INTERGUBERNAMENTALES			
Condicionadas	Generales		
	Específicas Se dividen en:	No compensatorias	
		Compensatorias Se dividen en:	Acotadas
			Sin límite
No condicionadas	Participación en Ingresos		
	Perecuatorias Se dividen en:	Igualadoras de capacidad	
		Igualadoras de previsión Se dividen en:	Relacionadas con el esfuerzo fiscal.
			No relacionadas con el esfuerzo fiscal.
FUENTE: C. MONASTERIO Y J. SUÁREZ, Manual de Hacienda Autonómica y local, p. 36, citado en: BUSTOS, A. (2007). <i>Curso básico de Hacienda Pública</i> , Madrid: Colex. p. 257.			

Normalmente, las transferencias financieras que el sector central otorga a los sectores subcentrales pueden ser condicionadas o no condicionadas, una transferencia condicionada establece con cierto rigor los criterios y objetivos de gasto que se buscarán con la transferencia (por ejemplo, para hacer carreteras, escuelas, déficit de seguridad, etc.) mientras que las transferencias no condicionadas son utilizadas libremente por el agente subcentral que las recibe.

A su vez, las transferencias condicionadas se dividen en generales y específicas, continuando con el ejemplo de las carreteras, una transferencia condicionada general

podría establecer que el recurso asignado se destinará a carreteras, mientras que la asignación específica establece exactamente qué tipo de carretera se deberá hacer, los recorridos de la misma, etc.

Por su parte, las transferencias condicionadas específicas se dividen a su vez en compensatorias o no compensatorias. Una transferencia condicionada no compensatoria es la sola asignación de recursos para tal proyecto –continuamos con el ejemplo de la carretera- mientras que una transferencia condicionada compensatoria normalmente es basada sobre un porcentaje de aportación por parte del ente subcentral para el proyecto de gasto público. En el ejemplo que nos ocupa, una transferencia condicionada específica compensatoria establecería que por cada peso que ponga el ente subcentral para el proyecto carretero, el gobierno central aportaría otro peso. Estas transferencias se dividen a su vez en acotadas o sin límite, una transferencia condicionada específica compensatoria acotada otorgada por el ente subcentral pondría un peso por cada peso que ponga la entidad subcentral para financiar cierto proyecto carretero, hasta el límite, supongamos de 1 millón de pesos. Una transferencia de este tipo sin límite no establecería ningún parámetro para detener el flujo de recursos a las entidades subcentrales.

Por su parte, las transferencias no condicionadas, se dividen en participaciones de ingresos y transferencias no condicionadas perecuatorias o de igualación. Las participaciones de ingresos tienen como objetivo otorgar transferencias de recursos a las entidades federativas de los distintos impuestos federales, normalmente están ligados a la capacidad de recaudación de los entes subcentrales. Una ventaja de esta modalidad es que si el ente central tiene mayor capacidad –digamos debido a las economías de escala- de recaudar recursos que los gobiernos subcentrales, estos se convierten en receptores de los ingresos recaudados por los gobiernos centrales. Por su parte, las transferencias perecuatorias o de igualación pueden no guardar relación con los recursos recaudados por las entidades subcentrales y sus finalidades son principalmente contribuir a algún tipo de igualación entre los entes subcentrales.

Una vez mencionado, grosso modo, las distintas formas y conceptos de las transferencias gubernamentales, es inevitable que surja la pregunta: ¿Qué tipo de transferencias son las mejores para las entidades subcentrales?

Con la finalidad de dar respuesta a esta pregunta, se puede afirmar que la teoría ortodoxa converge sobre los resultados de las transferencias condicionadas o no

condicionadas, y por ello, se pueden citar los argumentos esgrimidos por distintos investigadores. Wallace Oates²⁰ menciona que “las transferencias compensatorias pueden ser necesarias algunas veces para reducir las ineficacias que resultan de los efectos externos interjurisdiccionales, y que las transferencias no condicionadas pueden servir para mantener la equidad horizontal (entre entes subcentrales) y para prevenir las distorsiones deseadas en la distribución de la renta real dentro de un sistema federal”. También menciona que las transferencias condicionadas pueden ser útiles para la consecución de un fin concreto.

Richard Musgrave hace un ejercicio de comparación entre las transferencias condicionadas y no condicionadas y presenta sus principales conclusiones en el siguiente cuadro:

OBJETIVOS DE POLÍTICA ECONÓMICA POR TIPO DE TRANSFERENCIA			
Objetivo de la subvención	Compensatoria	Condicionada	Redistributiva
1.- Hacer que los ingresos procedentes de fuentes impositivas centrales estén a disposición de los gobiernos estatales y locales.	NO	NO	NO
2.- Reducir las desigualdades en la renta per cápita entre los estados.	NO	NO	SI
3.- Incrementar el nivel general de servicios públicos, estatales y locales.	SI	NO	OPCIONAL
4.- Igualar los términos en los que los gobiernos estatales y locales pueden proveer todos los servicios públicos.	SI	SI	OPCIONAL
5.- Incrementar el nivel de provisión de los servicios públicos concretos.	SI	NO	OPCIONAL
6.- Igualar los términos de provisión de los servicios públicos concretos.	SI	SI	OPCIONAL
7.- Corregir la difusión de beneficios	SI	SI	NO
FUENTE: MUSGRAVE, R. et al. (1992). <i>Hacienda Pública: Teoría y Aplicada</i> , México: Mc Graw-Hill, p. 584.			

En el caso del tipo de transferencias, Musgrave las divide en generales y condicionadas, a su vez, las generales las divide en compensatorias y no compensatorias.

²⁰ OATES, W. (1977). *Op. Cit.* p. 119.

Las transferencias no compensatorias, son explicadas de la siguiente manera:

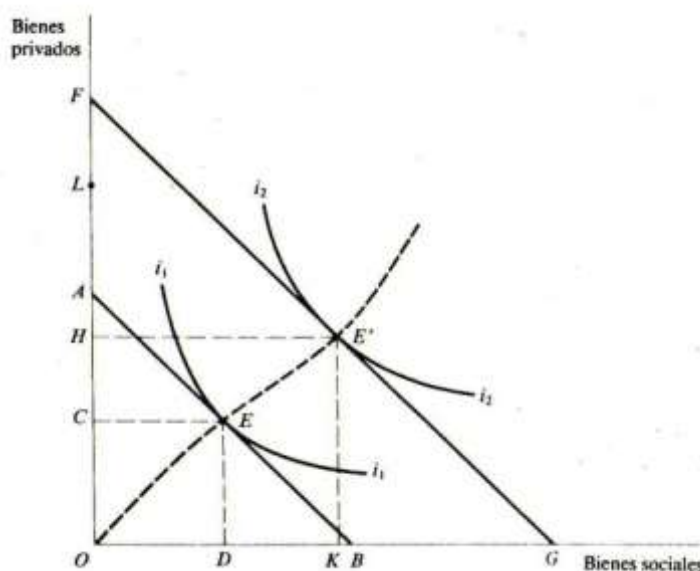


Gráfico tomado de MUSGRAVE, et al. (1992). *Op. Cit.* p. 579.

En el cuadro ilustrado, se pueden describir las siguientes situaciones:

La línea horizontal muestra los bienes públicos o de provisión subcentral, mientras que la línea vertical muestra los bienes privados, las rectas diagonales son las restricciones presupuestarias antes (AB) y después de la transferencia (FG), mientras que las curvas convexas al origen son las curvas de indiferencia. Los puntos de tangencia de las curvas de indiferencia y las restricciones presupuestarias muestran el equilibrio social en la preferencia de bienes públicos y bienes privados.

En este caso, prevalece el efecto renta producto de la transferencia general no compensatoria (participaciones federales para el caso de México). Es decir, la inyección líquida de recursos a las entidades subcentrales tiene como conclusión que hay un aumento del gasto público menor que el monto de la transferencia, el diferencial sería destinado a una disminución de impuestos, por lo que hay un aumento en el gasto privado.

La cantidad pagada de impuestos desciende del segmento CA a HA, como el uso de la subvención no está restringido de ninguna forma, puede utilizarse para disminuir los impuestos a los ciudadanos y funcionaría como una subvención general al ingreso de los ciudadanos.

En cuanto a las transferencias compensatorias, se muestra el siguiente cuadro

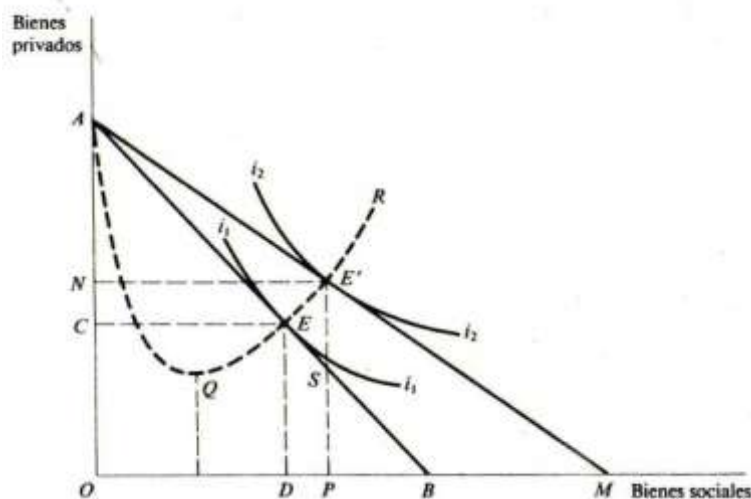


Gráfico tomado de MUSGRAVE, et al. (1992). *Op. Cit.* p. 580.

En el cuadro enunciado, se puede ver que además del efecto renta producto de la transferencia, hay un efecto sustitución que permite el abaratamiento de la relación bienes privados/bienes públicos que permitirá que haya una mayor cantidad de bienes públicos, Richard Musgrave lo expone de la siguiente manera: “la figura muestra que en este ejemplo tanto el consumo de bienes privados como el de bienes sociales ha aumentado, esto no tiene por que ser necesariamente así. A diferencia de las subvenciones no compensatorias, en las cuales sólo se produce un efecto renta, aquí se produce además un efecto sustitución. Como el precio de los bienes sociales ha descendido en relación al de los bienes privados, el consumo de bienes privados puede descender. El efecto sustitución negativo puede pesar más que el efecto renta positivo. En la figura mostrada, la curva de trazos AQR muestra la senda a lo largo de la cual el equilibrio (E) se moverá a medida que descienda el precio de los bienes sociales, existiendo un desplazamiento desde A hasta R, causado por aumentos en las tasas de compensación. Hasta Q, el resultado es un descenso en la compra de bienes privados, y por encima de Q, el resultado es un descenso en la compra de bienes, incrementándose todo el tiempo la compra de bienes sociales. En una situación en la que tanto E como E' estuvieran a la izquierda de Q, no se produciría filtración alguna del dinero de la subvención, sino que los votantes apoyarían de hecho el esfuerzo del gobierno votando un incremento de impuestos”²¹.

²¹ MUSGRAVE, R. et al. (1995). *Op. Cit.* p. 581.

Por su parte, Albi, et al.²² Con un análisis gráfico similar, comenta que “una transferencia condicional no compensatoria solo será más efectiva para aumentar el gasto público en un bien concreto que una transferencia condicional cuando la elasticidad renta de la demanda comunitaria de ese gasto es muy baja, y consecuentemente la del consumo privado es muy alta. En otro caso, las transferencias condicionales o incondicionales son equivalentes”.

Además, menciona que si el objetivo es estimular un gasto público concreto, lo correcto sería que la transferencia fuera condicional y compensatoria. Si por otro lado, es aumentar el bienestar de la jurisdicción, en general, las transferencias incondicionales serán preferibles.

Por último, Stiglitz²³ menciona que “las subvenciones equivalentes son más *incentivantes* (sic) que las subvenciones incondicionadas, pero no así la de que las subvenciones no equivalentes para fines específicos producen los mismos efectos que un aumento de la renta privada en una cuantía fija; la evidencia empírica parece indicar que las subvenciones condicionadas a ser utilizadas con un fin concreto sí influyen en los presupuestos del Estado. Producen un efecto que se ha denominado “efecto papel matamoscas””.

1.2.2. La teoría de la elección pública o colectiva.

1.2.2.1. Principales diferencias con la teoría ortodoxa.

La teoría de la elección pública no es un conjunto de herramientas, ni una metodología, ni un conjunto de instrumentos de aplicación concreta a una realidad política. Buchanan la define como “una perspectiva acerca de la política que surge de una extensión y aplicación de las herramientas y métodos de los economistas a la toma de decisiones públicas o colectivas”,²⁴ también es conocida como “la economía de la política”.

²² ALBI, E. et al. (2000). *Op. Cit.* p. 196.

²³ STIGLITZ, J. (2000). *La economía del sector público*, Barcelona: Antoni Bosch, pp. 668-669.

²⁴ BUCHANAN, J. M. (1990). *Ensayos de Economía Política*, México: Alianza Editorial Mexicana, p. 26

James Buchanan distingue al menos dos tipos de perspectivas de la Hacienda Pública: la que considera al sector público como un individuo (teoría ortodoxa), y la que considera al mismo como un “ente monolítico maximizador (sic) de utilidad”.²⁵

Es decir, el gobierno considerado como un individuo tendrá el comportamiento similar al de un dictador benevolente, con un funcionamiento bastante parecido al de un individuo que teóricamente buscará la mejora al bienestar social, en este esquema los tributos se imponen de tal manera que minimicen las respuestas negativas de los individuos.

En un cuerpo teórico construido bajo el primer paradigma, el bienestar económico provisto por los impuestos solamente puede ser medido *ex –post*. Por lo que este bienestar puede no ser el mismo que el anticipado, y en el proceso de ejecución de una política de recaudación, se pueden originar diferencias entre lo programado y lo efectivamente conseguido.

Por otra parte, en cuanto a los egresos fiscales, también es posible que la situación descrita en el párrafo anterior se repita, solo que en este caso se puede maximizar el error debido a la fallida concepción de lo que es “el interés público” que puede no coincidir el concepto idealizado por el gobierno con el que posee cada individuo.

Puesto de esta manera, el gobierno conceptualizado como un Leviatán rebasa al paradigma anterior de la economía ortodoxa debido a que otorga una perspectiva más realista para el análisis de la construcción de estrategias fiscales.

Esta construcción teórica, se aleja del punto de partida de que el gobierno busca el bienestar de sus gobernados y pasa a una situación donde busca maximizar su propia utilidad, la cual está conceptualizada, *grosso modo*, como el excedente fiscal producido de la diferencia entre ingresos y gastos fiscales. Bajo este paradigma teórico, ese excedente causa utilidad a los políticos y/o burócratas que se apropian del mismo bajo la figura de una mejor situación en su trabajo.

En concordancia con los argumentos de W. Niskanen²⁶ (el argumento es válido tanto para burócratas como para políticos) el gobernante puede buscar maximizar la

²⁵ BUCHANAN, J. M. y FLOWERS M. R. (1980). *Introducción a la Ciencia de la Hacienda Pública*, Madrid: Editorial de Derecho Financiero, p. 148

utilidad producida por el excedente fiscal porque (asumiendo que en cualquier país del S. XXI es imposible la transferencia directa de recursos públicos a cuentas bancarias privadas) le puede causar una mejora a sus condiciones de trabajo, influencia y proyección política o estatus social, por mencionar algunos.

En palabras de Buchanan y Flowers²⁷ rara vez los gobiernos se comportan como un monstruo Leviatán, sin embargo, esta perspectiva de la Hacienda Pública es más realista que la del “gobierno monolítico” en el objetivo de explicar los vaivenes de los procesos presupuestarios. Otra de las utilidades de la concepción de un gobierno al estilo de la teoría de la elección pública, es resaltar la importancia de las normas, de restricciones constitucionales al monstruo Leviatán²⁸.

Con el razonamiento anterior expuesto, como ya se ha mencionado, la teoría de la elección pública busca elaborar un entramado teórico congruente que articule las relaciones económicas mediante una perspectiva política.

1.2.2.2. Las funciones del sector público para la teoría de la elección pública.

- i) *Una economía sin gobierno contra una economía totalmente estatizada.*

Como se ha mencionado, la escuela de la elección pública analiza al gobierno desde la perspectiva de análisis de cualquier agente que busca maximizar su utilidad, para esta escuela la concepción orgánica o unitaria del gobierno es obsoleta. Al respecto, Buchanan y Flowers²⁹ argumentan: “*Contemplamos al gobierno de forma diferente cuando comenzamos por considerarlo no como un ser orgánico y unitario que actúa independientemente de sus ciudadanos, sino como un medio a través del cual los ciudadanos pueden realizar decisiones colectivamente*”.

Es muy importante mencionar que la actividad económica del gobierno puede beneficiar la actividad económica general, deteriorarla o dejarla sin efecto, todo dependerá de la estructura y magnitud de la misma.

²⁶ NISKANEN, W. A. (1971). *Bureaucracy and representative government*, Chicago: Aldine.

²⁷ BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit.*, p. 151.

²⁸ BUCHANAN, J. M. (1987). *Economía Política Constitucional*, Valladolid: Conferencia pronunciada el 2-XII-1987 en la Universidad de Valladolid, mimeo.

²⁹ BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit.*, p. 31.

Una manera de entender cuáles son las tesis de la elección pública sobre el gobierno y su participación en la economía son el confrontar los dos casos extremos de organización económica: El totalmente estatizado contra el totalmente enfocado al mercado.

En una economía con ausencia total del gobierno, se terminará imponiendo la “soberanía del consumidor” en el sentido de que los recursos tenderán a orientarse a los lugares donde son mejor apreciados, habrá una especialización de funciones que mejorará la cantidad de bienes disponibles en el mercado, se intercambiará una gran cantidad de bienes y servicios y los individuos con mejor capacidad de ofertar bienes y servicios que resuelvan de mejor manera las necesidades sociales tendrán un ingreso monetario mayor.

En este esquema, se detectan como ventajas económicas y políticas el que habría un sistema de intercambio libre y una gran eficiencia económica producto de la apropiación individual de los errores y aciertos de las acciones personales.

Entre los riesgos detectados, los más importantes son los siguientes:

- No existe garantía de que una economía de mercado corrija diferencias iniciales en la dotación de factores.
- Pueden producirse monopolios ante la regulación deficiente.
- Puede haber fuertes desequilibrios en los mercados que afecten al bienestar de la población.
- Surgimiento de micro-externalidades negativas.

En cuanto a la otra cara de la moneda, y llevando el razonamiento al extremo opuesto, una economía estatizada tiene como característica básica que todas las decisiones se toman de manera colectiva. Algunos de sus inconvenientes es que los productos de esas elecciones no satisfacen completamente a los individuos componentes de la colectividad.

Si una economía totalmente colectivizada no cuenta con opciones de división de los bienes y servicios provistos, ni ofrece a los ciudadanos la posibilidad del intercambio, probablemente provoque serias ineficiencias en los intentos de maximizar la utilidad de los individuos. Una economía de este tipo solamente es preferida por

aquellos que priorizan totalmente la igualdad por encima de cualquier otra condición social como las libertades o la equidad.

James Buchanan insiste en que los procesos de toma de decisión modernos o post-keynesianos generan una forma de financiamiento deficitario casi permanente.

En cuanto a la deuda pública, el mencionado autor afirma que el comportamiento del gobierno no es distinto del comportamiento de cualquier otro agente económico. Es decir, una vez que se contrata deuda se sacrifica consumo futuro por consumo presente. También menciona que el *“financiamiento de los gastos gubernamentales corrientes mediante endeudamiento equivale a devorar el valor del capital nacional”*.³⁰

Según los argumentos teóricos del autor, una sociedad se encuentra en la misma posición económica independientemente de si la deuda pública se ha contraído con nacionales o extranjeros.

También es bastante punzante al resaltar la importancia de una estructura constitucional que permita el equilibrio en las finanzas públicas, sus argumentos teóricos mencionan que *“el problema no es la irresponsabilidad de los dirigentes políticos, tanto en las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno. El problema es que las reglas del juego son tales que la prudencia y responsabilidades fiscales se encuentran más allá de los límites de lo políticamente realizable. Los contribuyentes disfrutan los beneficios del gasto público, no disfrutan con el pago de impuestos. La política del déficit es tan sencilla como esto”*.³¹

ii) *Bienes y servicios colectivos.*

En este caso, y recordando lo escrito líneas arriba, en principio es bastante preferible optar por un sistema económico donde el libre intercambio y la divisibilidad de bienes sea la norma, sin embargo, hay algunas condiciones donde dadas las características del mercado, es imposible que se consiga una mejora en la utilidad de las personas sin la intervención del sector público. A continuación, se narran de manera general algunas condiciones que ponen de manifiesto la importancia del sector público:

³⁰ BUCHANAN, J. M. (1990). *Op. Cit.*, p. 15.

³¹ *Ibíd.*, p. 25.

Es eficiente la intervención del sector público en la provisión de bienes públicos y en la regulación de la actividad económica, principalmente en el caso de los monopolios naturales. La cara opuesta de la regulación es la adecuada desregulación de la actividad económica que permita a los individuos en total libertad intercambiar sus bienes y servicios en los distintos mercados

Para Buchanan y Flowers³² un bien público cuenta con al menos dos características: Su indivisibilidad y la condición de no exclusión.

Por indivisibilidad se refieren a que no es factible asignar el bien a los consumidores que puedan pagar por el mismo de manera privada. Es decir, una vez construido o provisto, todos los ciudadanos que quieran consumir el bien lo podrán hacer, Stiglitz³³ menciona a esta característica como el coste marginal cero de la provisión del bien.

En cuanto a la característica de no exclusión, esta tiene que ver con la imposibilidad de sustraer de su disfrute a quien no pague por el bien, por ejemplo, una estación de radio no puede excluir de escuchar su programación a nadie que tenga las posibilidades de comprar un aparato de radio y sintonizar su frecuencia.

Bajo estas condiciones, un individuo no tiene ningún incentivo para participar en el financiamiento de un bien público por lo que no existirían recursos para la provisión de los mismos. Ante esta situación la comunidad como un todo tendría una disminución de su bienestar ya que hay bienes públicos que son claramente necesarios para la vida en sociedad; la defensa nacional y la seguridad interna son al menos dos ejemplos de bienes públicos necesarios.

En este escenario es donde entra el gobierno; ante la imposibilidad de dividir el bien y ante la imposibilidad de excluir a los que no pagan del disfrute del mismo, la alternativa sin duda es la existencia de un organismo que obligue a todos los ciudadanos al costeo del bien o servicio para su posterior provisión, el sector público tiene así su principal función, surgida al tamiz de un análisis puramente económico.

³² BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit.*

³³ STIGLITZ, J. (2000). *Op. Cit.* Para dicho autor, las características de un bien público son su ausencia de rivalidad y su coste marginal cero en la provisión.

Otros ejemplos de bienes públicos puros pueden ser la estabilidad monetaria, el cuidado del medio ambiente y la regulación económica cuando sea el caso.

Dentro de los bienes que normalmente son financiados por el sector público, es posible distinguir al menos los siguientes: bienes públicos puros, bienes semi-colectivos y servicios privados proporcionados públicamente.

En cuanto a los bienes semi-colectivos, es preciso mencionar que en base al análisis económico, es el tipo de bienes que soportan todo el entramado teórico del federalismo fiscal. Es decir, son bienes que potencialmente pueden ser consumidos por todos los individuos de una sociedad, pero que en los hechos solamente benefician a una parte de la misma, ello principalmente debido a una razón geográfica, esta condición de los bienes origina que existan los diversos entramados de participaciones fiscales en aras de proveer regionalmente los distintos bienes públicos.

iii) Los cimientos colectivos de las disposiciones hacendarias.

Para Buchanan, es claro el funcionamiento el flujo circular de la renta de la macroeconomía y la contabilidad social, sin embargo, este autor menciona la obligada perspectiva política para tener más claro todo este conjunto de relaciones que en última instancia determinan una gran parte de las variables económicas fundamentales.

A pesar de los incentivos del Leviatán mencionados líneas arriba, un gobierno de estas características no necesariamente tiene por qué imponer tasas tributarias más altas que un “gobierno monolítico”, ni su excedente tributario tiene por qué implicar un retroceso en el crecimiento económico. Ya que en teoría es lógico suponer que el excedente fiscal se incrementaría si la economía crece, entre otras cosas, el excedente fiscal se incrementaría como consecuencia del incremento de la base tributaria.

Según la teoría de la elección pública³⁴, el crecimiento económico no siempre tiene que venir aparejado con un incremento en la tasa imponible, ni con un incremento en el gasto público, es a partir de la combinación de estas dos variables donde el sector público buscará maximizar el excedente fiscal.

³⁴ BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit.*

Nótese que se ha llegado una vez más a la afirmación que dentro del proceso presupuestal, los políticos y burócratas en tanto personas buscarán maximizar su utilidad, los ciudadanos como elementos externos al sistema también buscarán hacer lo mismo, la interrelación entre intereses de personas dentro del gobierno y de personas fuera del gobierno, constituyen en última instancia la política fiscal a emplearse. Huelga decir que una gran mayoría de las veces, en sistemas fiscales diseñados de manera deficiente, los intereses de los ciudadanos no coinciden con los intereses de los gobernantes.

iv) *La eficiencia económica y la neutralidad fiscal.*

Buchanan y Flowers³⁵ definen la neutralidad de un sistema fiscal ideal como “*aquel sistema que proporciona bienes y servicios públicos “eficientemente”*”. Al mismo tiempo subrayan que más de un mismo sistema fiscal puede hacer lo anterior.

Los autores citados mencionan que un sistema neutral no es aquel que ejerce nula influencia sobre el comportamiento de los individuos, en lugar de eso, mencionan que un sistema neutral es “parejo” para todos los consumidores. Es decir, proporciona los mismos estímulos relativos, ya sean estos negativos o positivos, para todos los consumidores de una economía.

¿Y qué es la eficiencia para la teoría de la elección pública? Los mismos autores ofrecen la respuesta: La eficiencia en el sistema fiscal se dará cuando “*las tasas marginales de sustitución de bienes y servicios de consumo deben ser iguales a las tasas marginales de sustitución entre bienes y servicios de producción*”.³⁶

En otras palabras, una ineficiencia económica puede originarse cuando el sector público provee un bien cuyos habitantes, bajo esquemas de mercado, no han deseado ni provisión, ni mucho menos, financiar su coste.

Continuando con las líneas argumentativas de los autores citados, Knut Wicksell fue el primero que detectó esta situación, e inclusive propuso que una manera de evitar este tipo de ineficiencias es el buscar diversas alternativas para costear un bien

³⁵ *Ibíd.* p. 91.

³⁶ BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit* p. 92.

público, si nadie de los privados desea financiarlo, obviamente el proveer ese bien público es una acción ineficiente.

En relación a las ideas expuestas, Buchanan y Flowers mencionan que el sistema fiscal estadounidense no es eficiente ni neutral. En el caso de México no sería una aberración el suponer lo mismo, por ello, cobran importancia los indicadores relativos al tamaño del sector público, ya que es de suponerse, que ante un ente público no eficiente ni neutral, es deseable para el funcionamiento económico el que este ente sea de adecuadas dimensiones.

v) *La eficiencia del gasto federal.*

Como ya se ha mencionado, la eficiencia ideal del gasto tiene que ver con la neutralidad fiscal que consiste en que *“las elecciones individuales de los bienes y servicios colectivos fueran lo más próximas y análogas posible a las elecciones individuales de bienes y servicios privados en el funcionamiento de una economía de mercado”*³⁷ esto quiere decir, a grandes rasgos, que el coste marginal debe ser igual a los beneficios marginales del gasto público.

A “alto nivel” o agregado, tratar de realizar el ejercicio de costo marginal igual a beneficio marginal es complicado debido a lo complejo que resulta agregar ambos conceptos desde las preferencias individuales. Por ello basta con que se tome una decisión colectiva en condiciones máximas de racionalidad (esto es, máxima información posible sobre la decisión). Por lo que se podría decir que es eficiente el gasto nacional o federal si su magnitud y dirección es resultado de una elección colectiva realizada en condiciones de economía suficientes.

Por su parte, a un nivel menor, es más factible determinar los beneficios y beneficiarios concretos de un gasto público determinado. Por ejemplo, los beneficiarios de la construcción de un hospital en determinada colonia de una ciudad se pueden cuantificar con un margen de error muy reducido, tal como los gastos totales que se emplearían en su construcción. Al evaluar la eficiencia del gasto a un nivel menor o desagregado pueden encontrarse tres inconvenientes que es preciso sortear: La infravaloración de los costes, la sobrevaloración de los beneficios, y por último, problemas sobre las consecuencias distributivas del gasto público, este sesgo es la

³⁷ *Ibíd.*, p. 257.

mayoría de las veces el más importante a la hora de evaluar el gasto público ya que puede haber el caso en que un gasto no pase el análisis costo-beneficio pero aún así sea aprobado ya que satisface los intereses distributivos de quien aprueba el gasto, o viceversa.

Sorteando los sesgos descritos, es bastante factible aplicar la condición de maximización básica de la microeconomía en una decisión de gasto público a nivel menor.

1.2.2.3. El federalismo para la elección colectiva.

Para Brennan y Buchanan³⁸, la competencia fiscal entre los estados funciona. La siguiente cita es fundamental para entender el federalismo para la teoría de la elección pública: *“El federalismo es un medio de restringir constitucionalmente al Leviatán”*³⁹

En cuanto al federalismo y la relación entre gobiernos centrales y subcentrales, la teoría de la elección pública también asume que el individuo está sujeto a restricciones del gobierno del país donde vive y del gobierno subcentral de la entidad donde radica. Ambos niveles de gobierno pueden limitar su conducta y, del mismo modo, extraer ingresos vía tributos. Salvo en confederaciones de estados, donde hay una autoridad fiscal independiente y donde el individuo solamente se encuentra regulado por el gobierno subcentral quien a su vez traslada los ingresos tributarios al gobierno central, la situación descrita es la corriente en los estados federales.

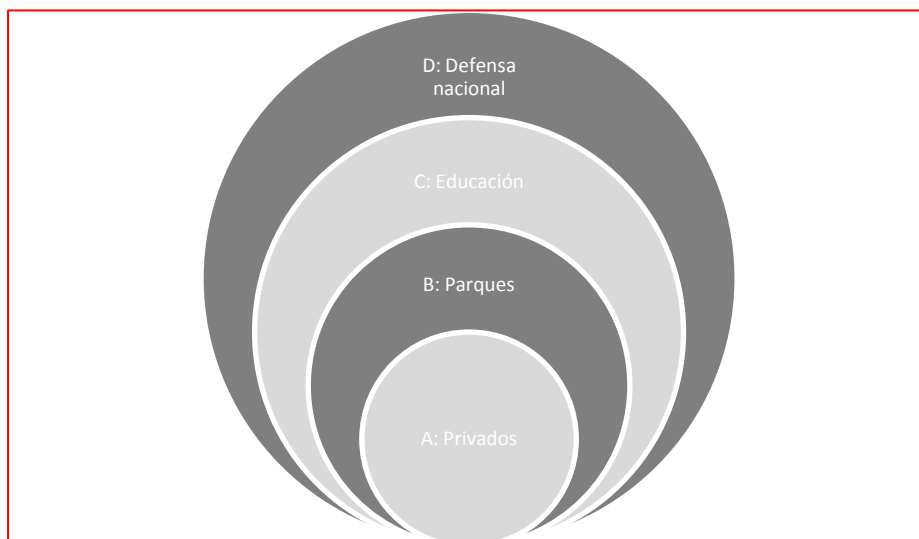
Del mismo modo, esta teoría reconoce que un sistema federal obedece a motivaciones no solamente económicas, sino políticas, sociales, históricas, etc. En cuanto a las motivaciones económicas, tiene bien definidos los supuestos del federalismo fiscal.

Inicia la teoría del federalismo con la sentencia de que la justificación de la existencia de los gobiernos (como ya se ha mencionado) es la provisión de bienes públicos. De ese punto de partida se establece que hay bienes provistos por el sector público que tienen la naturaleza de la indivisibilidad y la no exclusión solamente para ciertas demarcaciones territoriales, ese tipo de bienes deben ser provistos por el nivel de gobierno inmediato (en este caso el subcentral).

³⁸ BRENNAN, G. y BUCHANAN, J. M. (1987). *El poder fiscal*, Unión Editorial, Madrid, pp. 213-233.

³⁹ *Ibíd.* p. 214.

:



En el diagrama mostrado (diagrama de Venn) se tiene en el primer círculo los bienes que son totalmente divisibles, que además permiten apropiar todos los beneficios de manera individual y cuyos costes también pueden ser asignados individualmente, este es el tipo de bienes privados. Suponiendo como ejemplo la compra de un ordenador personal, es claro que el costo total del ordenador lo pagará el usuario final, y que los beneficios del uso del ordenador serán totalmente del usuario final. Después viene otro tipo de bienes: En el conjunto B cuyo ejemplo hipotético serían los parques vecinales, lo eficiente es que los usuarios de los parques se hagan cargo de su financiamiento, en esa misma tónica se va avanzando hacia conjuntos de bienes de mayor cobertura, hasta llegar a la defensa nacional. En el caso de la defensa nacional, como mencionan todas las corrientes económicas explicativas del federalismo, es imposible la exclusión y la divisibilidad; Los ciudadanos de Tijuana o de Mérida estarán igualmente protegidos por el Ejército Mexicano, aún si algún ciudadano no pagara los impuestos de la financiación de la defensa.

Por su parte, sería ineficiente que por ejemplo, para todo el conjunto de bienes de una sociedad que pertenezcan al conjunto B exista una organización que administre el financiamiento de cada bien de manera separada. La teoría de las economías de escala sugiere que una sola organización (el gobierno subcentral) puede ahorrar recursos sociales si al mismo tiempo se encarga de la administración y provisión de todos los bienes pertenecientes al conjunto B. Utilizando el mismo razonamiento, es preferible que un gobierno nacional realice el cobro de impuestos si tiene economías de escala al efectuar el procedimiento.

En la definición de estas fronteras es posible que se encuentren tres dificultades normalmente provistas por la burocracia que a su vez busca maximizar su propia función de utilidad: Uno, la infravaloración de los costes del proyecto. La segunda viene dada por la sobrevaloración de los beneficios. Sin embargo, la más grave ineficiencia se da al momento de dilucidar sobre el organismo que administrará el bien público, o bien, aprobar siquiera los límites de la provisión del bien.

Por lo tanto, es preciso reiterar la sentencia de que el federalismo es un límite al Leviatán, entre otras cosas, porque maximiza la libertad de elección al contar con posibilidades migratorias hacia otros Estados que satisfagan la cesta fiscal preferida por el ciudadano.

En concordancia con las teorías económicas del federalismo ya tratadas, la teoría de la elección pública también sugiere que fuertes impuestos estatales sobre la renta y sobre las ventas pueden (impuestos directos e indirectos) acarrear ineficiencias económicas y migraciones que hacen que dicha situación no sea sostenible en el largo plazo. Sugiere que lo mejor para las unidades gubernamentales locales (en el caso de México, los municipios) lo mejor es abocarse al cobro de impuestos sobre bienes inmóviles, cuyo mejor ejemplo de ello es la propiedad.

De tal suerte, que a nivel fiscal es deseable que exista una competencia entre los estados, los consumidores buscarán una cesta fiscal que mejor se adapte a sus preferencias privadas. Es razonable suponer que buscarán una cesta que combine relativamente bajas tasas impositivas y una buena cantidad y calidad de bienes públicos. Las empresas, cuyo objetivo final es la maximización de los beneficios, son todavía más sensibles a este contexto. Al contar con una mayor elasticidad fiscal y, al tener el capital una movilidad mayor al trabajo, las empresas continuamente están buscando incentivos fiscales por parte de los gobiernos, y no dudan en mudarse a otro Estado si los beneficios de esos incentivos merecen la pena.

i) Trato a las diferencias de capacidad fiscal entre distintas áreas.

Suponiendo que todas las entidades pertenecientes a la federación tuvieran una estructura económica, social y natural similar, no sería difícil trazar los límites de cada entidad federativa. Sin embargo, esto casi nunca sucede así, en los hechos las distintas regiones y entidades que componen un país muestran diferencias, en algunos

casos diferencias bastante fuertes, con ello es de suponer que la capacidad fiscal al interior de un país es distinta dependiendo de la zona geográfica donde se ubique la referencia. Ello implica no solamente que el esfuerzo fiscal (índice de Frank) es menor en entidades con ingreso más alto, sino que posiblemente si no existiera ninguna intervención del gobierno central, el nivel y calidad de los bienes públicos provistos en las diferentes entidades federativas también lo sea.

Ante esta discriminación que pueden sufrir las regiones relativamente más pobres debido a la alta emigración potencial que pudieran sufrir tanto por familias como por empresas, la elección pública se plantea las siguientes preguntas: ¿Hasta qué punto debe el gobierno central intervenir para mitigar estas discriminaciones fiscales? ¿Hasta dónde debe el gobierno central “igualar” la capacidad fiscal de las entidades? ¿Esta debe ser general o hacia sectores determinados? Al respecto, dicha teoría menciona que una de las finalidades del federalismo es la transferencia de ingresos de regiones con ingreso alto a regiones con ingreso bajo, entonces el gobierno central tiene incentivos a la intervención fiscal si busca la equidad fiscal entre las regiones. Pero no solamente bajo la condición de equidad es deseable la intervención del gobierno central, Buchanan y Flowers lo mencionan de inmejorable manera: *“En la medida en que las diferencias fiscales entre estados ha impulsado o está impulsando una asignación no económica de recursos dentro de la economía nacional, considerada espacialmente, existe un argumento a favor de la intervención del gobierno federal para igualar las capacidades, así como para compensar tales diferencias”*⁴⁰. Lo que lleva a la distinción entre el tipo de transferencias gubernamentales.

ii) Transferencias federales.

Para la teoría de la elección colectiva, las transferencias no son la única manera de influir en la equidad fiscal por parte del gobierno federal, también existen maneras de influir en la misma por el lado de los impuestos: Los impuestos complementarios, la deducibilidad impositiva, los créditos impositivos y la participación en los impuestos son solo algunos ejemplos. Sin embargo, como la teoría ortodoxa del federalismo fiscal trata con menor amplitud estos temas, solo se exponen las diferencias en lo referente a las transferencias. La teoría de la elección pública, a su vez, distingue dos tipos de transferencias federales: Las condicionadas y las incondicionadas o en

⁴⁰ BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit.* p. 613

bloque. Sobre esta clasificación, no hay gran diferencia con la que realiza la teoría ortodoxa.

Transferencias condicionadas: *“Una subvención condicionada se dirige específicamente a incentivar para los estados la expansión de la oferta de determinados servicios públicos. La recepción de estos fondos es condicionada a su utilización en la manera señalada. Por consiguiente, los estados reciben las subvenciones no para finalidades generales, sino para su utilización en la construcción de autopistas, promoción de la enseñanza o semejantes”*⁴¹.

Estas transferencias son importantes cuando a nivel federal se busca una provisión homogénea de ciertos servicios públicos, presenta además la ventaja de que esta provisión continúa a cargo de los gobiernos estatales o locales; buscan en este caso, y de conformidad con otras teorías del federalismo, el “equilibrio vertical”.

Transferencias no condicionadas: Son subvenciones que se hacen a las entidades y a los gobiernos locales y cuyos lineamientos de ejecución del gasto tienden a ser bastante laxos, solamente deben observar los ordenamientos contables, presupuestarios y de rendición de cuentas respectivos. Estas transferencias son asignadas en base a ciertos parámetros, que normalmente son el ingreso per cápita de las demarcaciones territoriales, el esfuerzo fiscal o algún otro indicado de orden social.

En el caso de las transferencias no condicionadas, para la teoría de la elección pública están contenidos en las mismas los principios de redistribución y de eficiencia simultáneamente. Además, para esta teoría no se alcanzan los mismos resultados si en lugar de asignar subvenciones se opta por la eliminación o reducción de las tasas tributarias ya que las subvenciones no condicionadas generalmente *“tienen la potencialidad de mejorar la eficiencia de la oferta de servicios públicos de los gobiernos estatales y locales”*⁴². La mejora citada viene en al menos dos vías: La primera es la derivada de la igualdad fiscal federal y la segunda viene si las subvenciones superan, al menos en parte, el gasto sub-óptimo presente en los servicios estatales y locales *“debido a que el temor a que emigre la base fiscal haga*

⁴¹ Ibid. p. 628

⁴² BUCHANAN, J. M. y FLOWERS, M. R. (1980). *Op. Cit.*, p. 631.

*que estime que los costos de los servicios públicos proporcionados por estos gobiernos superan a los auténticos costos sociales*⁴³.

Es necesario mencionar que las transferencias no condicionadas usan como factor de asignación el esfuerzo fiscal, es decir, si este es alto se obtienen mejores ingresos fiscales vía transferencias no condicionadas. Sin embargo, un alto esfuerzo fiscal en teoría fomentaría la emigración de de empresas y ciudadanos hacia otras entidades que tengan una presión fiscal menor. Al final deberá prevalecer la regla económica de costo-beneficio para tomar una decisión de emigración a otras latitudes.

A manera de síntesis, para la teoría de la elección pública, la principal diferencia al momento de tratar el federalismo estriba en que mientras la teoría ortodoxa solamente presenta argumentos económicos para la descentralización o desconcentración de la provisión de un bien público sin presentar argumentos claros a favor del federalismo político, la teoría de la elección pública si presenta argumentos contundentes a favor del federalismo fiscal ya que considera al mismo como una estrategia fundamental para detener al Leviatán, Brennan y Buchanan lo dicen de manera clara: *“No parece que haya ninguna razón por la que los bienes públicos, estrictamente locales, no deban ser suministrados por unidades gubernamentales supralocales, que, desde luego, podrían descentralizarse administrativamente, tal como dictan los límites relevantes de las externalidades. En otras palabras, la teoría convencional no ofrece las bases para deducir un límite superior al tamaño de las jurisdicciones políticas. No hay ningún análisis que demuestre la superioridad de una estructura política auténticamente federal frente a una estructura unitaria, estando esta última descentralizada administrativamente*”⁴⁴.

Otra diferencia sustancial viene dada por el enfoque del proceso fiscal en los estados, ya que la teoría de la elección pública se enfoca en el cálculo constitucional del contribuyente potencial y su relación en el proceso político con el Leviatán.

Asumiendo en primer lugar una economía federal donde haya libertad de comercio pero exista también una restricción legal en la movilidad de la fuerza de trabajo (migraciones entre estados prohibidas) los estados tienen incentivos a trasladar la carga fiscal a otras entidades y esto dependerá de las elasticidades de la oferta y la demanda de las mismas entidades federativas. En este caso, son menester

⁴³ *Ibíd.* p. 631.

⁴⁴ BRENNAN, G. y BUCHANAN, J. M. (1987). *Op. Cit.*, p. 220.

las restricciones legales a nivel central para evitar la exportación de la carga impositiva a otras entidades, ya que de lo contrario, todas las entidades buscarán exportar sus impuestos a otras economías, y quien no lo haga, terminará pagando con sus recursos los bienes públicos que se disfrutarán en otros lugares.

Por otra parte, en una economía con constitución federal, donde haya costo cero en cuanto a movilidad de un estado a otro y haya libre comercio de bienes y servicios privados es imposible que esta traslación suceda, por lo que en los hechos, liberar la posibilidad de migrar de una entidad a otra puede equiparar la restricción legal de trasladar los impuestos a otras entidades federativas. Es decir, la libertad migratoria y comercial entre distintas unidades gubernamentales actúa como un sustituto de las limitaciones fiscales explícitas.

En este caso, la mejor política pública es la implementación de las dos medidas: Libertad comercial y migratoria y limitaciones fiscales explícitas, ya que aunque haya libertad migratoria total y a coste cero (caso hipotético, modelo de Tiebout visto líneas arriba) es un supuesto bastante irreal el suponer que son homogéneas las regiones de una nación, siempre cabe la posibilidad de que una región presente ventajas absolutas, comparativas o competitivas y tenga la posibilidad de generar una renta de situación. Ante este supuesto, la entidad atractiva a la migración o al comercio tiene incentivos para imponer unas tasas impositivas más altas a los extranjeros en detrimento de las tasas impositivas para los ciudadanos de la región. Solamente una limitación legal o constitucional que prohíba este tipo de comportamiento puede solucionar la problemática presentada en el caso citado.

Se tiene pues, que para la teoría de la elección pública el federalismo ayuda a mitigar el Leviatán central y los leviatanes locales. Esta teoría promueve activamente el federalismo como una forma de contención al Leviatán, pero también hay que decirlo, esta promoción es hasta cierto punto ya que todas las facultades delegadas a las entidades federativas simplemente cambian los niveles de poder de exacción impositiva del estado federal a las entidades federativas. Para la teoría de la elección pública es deseable que ambas entidades (gobierno central y subcentral) cuenten con capacidades impositivas ya que en su interacción política terminan ofreciendo una canasta fiscal más favorable para el ciudadano.

Reiterar además, que aunque las economías de escala son un criterio para fijar los límites de tamaño de las entidades federativas, y que a diferencia de la teoría

ortodoxa del federalismo que sostiene que es el elemento fundamental para la defensa del federalismo, la teoría de la elección pública sostiene que el elemento más importante para determinar los límites del federalismo viene dado por la divisibilidad del bien a proveer, es decir, hasta dónde el bien provisto se comporta como bien público.

De esta manera, la teoría de la elección pública establece cuatro elementos que deben tenerse en cuenta al momento de fijar las jurisdicciones locales para la provisión de un bien público de la siguiente manera:

Primero: Los costes de movilidad entre una jurisdicción y otra pueden permitir que un diseño federal o de entidades locales no resulte eficiente ya que en el peor de los casos puede haber consumidores que si disfruten del bien público en cuestión pero que al momento de aportar el financiamiento del mismo se encuentren en otras entidades.

Segundo: La posibilidad de colusión entre entidades puede generar una ineficiencia económica ya que en caso de que sea factible la misma, las entidades no dudarán en coludirse incrementando su poder fiscal. Un gran número de entidades permitiría que los acuerdos de colusión se vuelvan más costosos de alcanzar.

Tercero: El alcance de lo público. Es eficiente para una entidad federativa proveer un bien hasta el punto en que ya no sea indivisible y tenga comportamiento de bien privado o semipúblico, caso en el cual participaría de manera parcial en su financiamiento.

Cuarto: Los costes de administración y organización son fundamentales para conseguir la eficiencia económica de las entidades federativas. Quizá no sea eficiente trazar dos entidades federativas con un costo de organización bastante alto, donde los beneficios de la misma no alcancen a superar a los costos.

¿Cómo se reparten las facultades fiscales en el federalismo de la teoría de la elección pública? Debido a que el individuo es más sensible a los impuestos y bienes y servicios públicos presentados por el nivel de gobierno más cercano a el, es razonable suponer que a nivel central se destinarán los impuestos que no afecten la cuantía de la base de contribuyentes provocada por la migración, tales como los impuestos sobre las ventas y los ingresos, mientras que a nivel local, son preferibles los gravámenes y

los servicios públicos que afecten la propiedad. De esta manera el individuo potencia la libertad de elección de las distintas canastas fiscales ofrecidas por las entidades federativas.

Tanto para el consumidor como para las empresas es importante buscar una combinación de impuestos y gasto público que maximice su utilidad. En tal sentido, la ciudadanía a través de los mecanismos electorales a su disposición, buscarían exportar la carga fiscal a otros gobiernos subcentrales y al mismo tiempo, buscar importar los beneficios fiscales de otros estados. Obviamente este proceso tiene sus restricciones naturales dadas por las elasticidades: *“Si la oferta extranjera (de otro estado) para el mercado nacional (para el estado de referencia) es relativamente inelástica mientras que la demanda interior es relativamente elástica en el establecimiento de un impuesto sobre tal bien sería soportado gran parte, si no exclusivamente, por los ciudadanos extranjeros en vez de los residentes en la jurisdicción donde se implanta el impuesto”*⁴⁵.

Es menester mencionar entonces que cada estado, independientemente de su motivación “natural” a maximizar el excedente de sus ingresos netos, tiene incentivos claros a ofrecer la cantidad de bienes públicos deseada al tiempo que buscaría ofrecer una cesta impositiva del agrado de los ciudadanos, de lo contrario, diferencias sustanciales entre estados que sobrepasen el costo de una posible movilidad industrial, ofrecerían incentivos suficientes para que la inversión productiva pase de un estado a otro. Esta situación pone como uno de los objetivos fundamentales del federalismo la competencia fiscal entre las entidades. A nivel nacional, la promoción de la competencia fiscal entre los entes subcentrales es uno de los objetivos fundamentales a conseguir.

En términos conclusivos para este apartado, el marco adecuado para la promoción de la competencia económica está compuesto entre otras cosas, por un porcentaje menor del gasto del gobierno en el total de la economía, una mayor descentralización de las facultades tributarias y de los gastos, una mayor homogeneidad entre las unidades subcentrales y la búsqueda de unidades subcentrales cada vez más pequeñas. Estos elementos aportan características importantes para la elaboración de un índice de libertad económica.

⁴⁵ BRENNAN, G. y BUCHANAN, J. M. (1987). *Op. Cit.*, p. 216.

1.2.2.4. La teoría de la burocracia.

Para la teoría de la elección pública, las instituciones democráticas deben ser diseñadas de tal manera que soporten el comportamiento más perverso del individuo, tal afirmación es la que sirve de base para explicar el comportamiento de la burocracia.

Hasta pasada la primera mitad del siglo XX, la teoría económica adolecía de una explicación consistente sobre el comportamiento de los burócratas, este siempre era analizado bajos los postulados del Derecho Público o Administrativo. Cuando la teoría económica irrumpe en el análisis del comportamiento de los trabajadores del sector público, propone una metodología de análisis completamente diferente a lo que se tenía, ya que parte de sus postulados contenían una alta dosis de realismo sobre el comportamiento del burócrata. Por ello es importante exponer, de manera breve, las principales conclusiones de la teoría de la elección pública en alusión a la burocracia.

Aunque Anthony Downs⁴⁶ ya había puesto los cimientos de lo que era la teoría económica de la democracia a finales de la década de los cincuenta del siglo pasado, no es hasta que William A. Niskanen⁴⁷ una década después articula de manera consistente un modelo del comportamiento del buró.

Las teorías políticas normalmente distinguen a los burócratas como seres totalmente eficientes, incorruptibles, con una tendencia total hacia el altruismo y a la búsqueda de la felicidad de los demás. Por su parte, la teoría de la burocracia sostiene que los burócratas son “gente común”, con las mismas ambiciones, defectos y virtudes de las personas a las que sirve. Los burócratas son entonces, ciudadanos promedio con la cualificación técnica y profesional para desempeñar tales encargos.

La teoría económica de la burocracia reconoce la importancia de la existencia de la misma para el proceso de la consolidación democrática, por lo que considera necesario trabajar en los controles y mecanismos de mercado que permitan la máxima eficiencia de la misma, teniendo en cuenta tanto el tamaño de la burocracia, como sus funciones.

⁴⁶ DOWNS, A. (1973). *Teoría económica de la democracia*, Madrid: Aguilar.

⁴⁷ NISKANEN, W. A. (1971). *Op. Cit.*

Al respecto, el propio profesor Niskanen reconoce que la burocracia siempre ha existido, desde las antiguas civilizaciones egipcias y sumerias ha habido gente que desempeña encargos públicos por lo que menciona que *“la burocracia es la forma característica de la administración pública. Con el crecimiento del gobierno en la mayoría de las naciones, se ha convertido en una de las principales instituciones de la vida moderna”*⁴⁸.

i) *Modelo económico de burocracia.*

Niskanen expone su modelo en 3 partes:

- a) Las características principales de los burós (conceptos y funciones).
- b) La naturaleza de las relaciones entre los burós y el resto de la sociedad.
- c) El maximand, o lo que busca maximizar el burócrata.

a) *Las características principales de los burós:*

Para Niskanen, los burós son *“organizaciones no lucrativas financiadas, al menos parcialmente, por una subvención o asignación periódica del gobierno”*⁴⁹ tienen las siguientes características:

- Sus propietarios y empleados no perciben la diferencia entre ingresos y costes como beneficios personales.
- La totalidad o parte de sus ingresos provienen de una fuente distinta a la venta de su producto.

Por lo que se puede notar que el concepto de buró de Niskanen excluye a las empresas públicas con funcionamiento total de mercado, como pudieran ser las que obtienen todos sus ingresos debido a la venta directa de su producto en el mercado, y se excluye a las empresas y negocios corporativos.

La principal característica del producto ofrecido por los burós es que se trata de bienes públicos, que por su propia naturaleza es difícil que sean ofrecidos por

⁴⁸ NISKANEN, W. A. (1980). *Cara y cruz de la burocracia*, Madrid: Espasa Calpe, S. A. p. 3.

⁴⁹ NISKANEN, W. A. (1980). *Op. Cit.*, p. 14.

empresas privadas. La utilidad social de este tipo de bienes es la justificación principal, de la existencia del gobierno, y con ello, de los burós. Otra característica usual en los productos ofrecidos por un buró pero que no es definitoria del mismo es el alto coste medio del producto ofrecido. En todo caso, la diferencia más importante entre el gobierno y el sector privado estriba en que los miembros del gobierno solo pueden cambiar de organización trasladándose, por lo que el costo de transferencia es el principal contraste entre una organización y otra.

Por su parte, para la teoría económica de la burocracia, el concepto de burócrata no tiene connotaciones ni negativas ni positivas, es simplemente una persona que trabaja a jornada completa en un buró que cuente con presupuesto independiente e identificable. Pueden ser profesionales (servicio profesional de carrera en México) o designados directamente por el ejecutivo electo. Los burócratas, como se ha mencionado, no son distintos en su constitución de valores y principios en relación a los ciudadanos no burócratas, pero si son distintos en cuanto a las cualificaciones profesionales que los hacen desempeñar su trabajo, que es el mismo caso al que se puede enfrentar el ejercicio de cualquier oficio o profesión. En este caso, el burócrata se desempeña en un diseño institucional que puede premiar o castigar ciertas conductas, cuando los incentivos son contrarios a los intereses de la sociedad, esta misma tiende a minusvalorar el trabajo de un burócrata, sin embargo, cuando los incentivos a los que se enfrenta un burócrata están alineados a las demandas de la sociedad, y este se conduce en base a los mismos, su función cuenta con el reconocimiento y el respeto social. En la misma línea de ideas, el concepto de burocracia hace referencia a un conjunto de burós y su relación con el exterior.

b) Los burós y su medio.

Los burós tienen al menos 3 relaciones de capital importancia para su funcionamiento: con su patrocinador o quien financia sus actividades, con sus proveedores de trabajos y factores de la producción y con el usuario final de los servicios provistos, de estas relaciones, la más compleja es la que se tiene con el patrocinador.

El patrocinador del buró es normalmente un político o alguien que ha llegado a ese puesto vía la elección popular, este asigna el presupuesto al buró sobre la base de los objetivos y los programas a realizar, la relación entre el político y el buró es de un

“monopolio bilateral”⁵⁰. Ni el buró ni el patrocinador tienen sustitutos cercanos que coadyuven al desempeño de sus funciones, por parte del buró, y asumiendo la definición del mismo dada líneas arriba, solamente el patrocinador puede financiar las actividades a realizar, mientras que por parte del patrocinador, solamente se puede apoyar en el buró para alcanzar las metas ofrecidas a los electores.

Una característica importante en la relación entre el buró y su patrocinador es que mientras en el sector privado una organización con fines de lucro ofrece un servicio o producto definido y divisible a un precio individual determinado, en la relación de un buró y patrocinador el buró ofrece un producto “output” a cambio de un presupuesto. Una dolencia de la relación descrita es que no hay total cuidado sobre la calidad del producto ofrecido, la variable principal que rige la relación entre el buró y el patrocinador es la cantidad de producto, no tanto su calidad. Obviamente esta situación va en detrimento del bienestar social, ya que muchas veces, los objetivos perseguidos por el buró, el patrocinador y la sociedad no están alineados, ya que cada uno de los participantes en la relación busca maximizar una función de utilidad distinta.

Para la teoría económica de la burocracia, los incentivos que tiene el patrocinador están enfocados a la siguiente elección, o en otros casos, al aumento de la reputación del puesto que desempeña con miras a continuar con su carrera política, y estos beneficios se relacionan de manera muy débil con los objetivos centrales de la organización. Además no cuenta con la información del objeto del buró al mismo nivel que el buró por lo que solamente se allega de información del objeto del buró vía el mismo buró, por lo que a pesar de que se mencionó que en la teoría tanto el patrocinador como el buró tienen una relación de monopolio bilateral, en la práctica el buró tiene un mayor poder dominante sobre el patrocinador. Esta situación hace que el patrocinador esté en una situación de pasividad ante el buró ya que no tiene la información para proponer cambios drásticos de objetivos o estrategias al buró, por lo que año con año, solamente hace cambios marginales al funcionamiento del buró a través de la vía más poderosa que tiene a su alcance: su financiamiento.

En cuanto a la relación entre el buró y sus proveedores de trabajo y factores de producción, y aunque no es una característica teórica de todos los burós, el buró generalmente presenta frecuentemente fuertes ventajas en cuanto a la contratación de trabajo y compra de insumos materiales. El buró puede utilizar su poder de mercado

⁵⁰ NISKANEN, W. A. (1980). *Op. Cit.*, p. 24.

para allegarse de recursos sociales a más bajo costo que en condiciones competitivas, por ejemplo, puede actuar como monopsonio al ser el único comprador de ciertos recursos humanos, tales como militares o expertos en seguridad nacional, enfermeras o hasta cierto punto en México, profesores normalistas, o bien, puede emitir disposiciones legales que faciliten la adquisición de recursos, como legislar una tarifa preferente por el uso del agua, la energía eléctrica, el servicio social de estudiantes de licenciatura, o ventajas fiscales, por mencionar algunas.

Finalmente, la relación entre el buró y el consumidor es establecida por la proporción del financiamiento del buró que proviene directamente del usuario, esto es, a mayor proporción de financiamiento por parte del consumidor, menor poder para el buró, y viceversa. Esto es porque si el consumidor aporta vía el mecanismo de los precios, el total o el grueso del financiamiento del buró, este tiene incentivos para investigar las preferencias del usuario y diseñar bienes y servicios públicos que mejor se adecúen a sus necesidades, o incurre en riesgo de perder el financiamiento. Por otra parte, si el buró no recibe directamente el financiamiento del usuario sino del patrocinador, no tiene incentivos en alinear su función de utilidad a la del consumidor.

ii) Resultados previsibles por la teoría económica para un modelo de burocracia.

Primero, los burós son normalmente demasiado grandes: Terminan necesitando un presupuesto mayor al que se requeriría si una organización privada hubiera provisto el mismo servicio público. Esto se debe principalmente a que el cuerpo legislativo que autoriza su presupuesto, como se ha comentado, no tiene una fuente alternativa que ofrezca el servicio del buró, también a que en el proceso de autorización del presupuesto tampoco hay lugar a enmiendas significativas, además de que grupos de población pueden presionar para que el buró ofrezca un bien o servicio en una medida mayor a la eficiente, y por último, a que posiblemente los integrantes del cuerpo legislativo son parte del grupo de alta demanda de los bienes y servicios del buró.

Segundo, en cuanto al comportamiento de la producción, tanto el producto como el presupuesto serán mayores si el buró tiene la capacidad de discriminar para allegarse de los insumos requeridos, por otra parte, también habrá una producción

mayor a la eficiente si la elasticidad ingreso de la demanda del producto tiende a infinito.

Por último, la distribución de los beneficios netos de la burocracia genera altos excedentes a la gente con demanda alta y a los factores de la producción utilizados por la burocracia. Es decir, se maximiza el excedente de manera extraordinaria para gente que relativamente contribuye de manera precaria a la financiación del bien y que al mismo tiempo genera una demanda exhaustiva del mismo, y viceversa. En estudios sobre política social una situación de este tipo tiene que ver con la equidad social, pero se aleja de la eficiencia económica.

iii) Medidas para aumentar la eficiencia de la burocracia.

Básicamente, son de 3 tipos: Las alternativas propias de mejora de la institución burocrática por sí misma, las alternativas de mercado, y las alternativas políticas.

Dentro de las alternativas burocráticas, existen propuestas enfocadas a una burocracia competitiva, a los mecanismos de control, la especialización y las economías de escala, incentivos para maximizar el beneficio social del buró, sistemas de recompensa a servidores públicos, análisis de sistemas y eficiencia, por mencionar algunos. Dentro de las alternativas de mercado, cabe destacar el subsidio de grupos de consumidores mediante cupones para que hagan uso de los servicios que mejor atiendan a sus necesidades, tanto públicos como privados. Por último, en cuanto a las alternativas políticas es una revisión de las mayorías y procedimientos de acción de los órganos colegiados que autorizan los presupuestos de los burós.

Para el tema que se quiere investigar en la presente, es útil mencionar que, suponiendo a los gobiernos de los estados como un buró, la competencia entre los gobiernos estatales para la provisión de mejores servicios con la finalidad de atraer una mayor cantidad de inversión es fundamental, lo mismo el subsidio de los bienes y servicios públicos al consumidor final, en detrimento de la financiación a las estructuras burocráticas.

1.2.3. Literatura reciente: la segunda generación del federalismo fiscal y el enfoque de la economía política.

Para Oates⁵¹, los últimos años se han distinguido por la aparición de nuevas vertientes que buscan estudiar de manera más realista el federalismo: una es la teoría del federalismo fiscal de segunda generación (FSG), y otra es el enfoque de la economía política del federalismo fiscal (EPFF).

El FSG tiene su motivación en las crisis observadas en ciertos países con esquemas federales fuertes (Argentina y Brasil), que bajo suaves restricciones presupuestarias, han sumido a todo el sistema federal en graves desequilibrios y quiebras fiscales.

Asimismo, complementa y extiende las teorías ortodoxas del federalismo (primera generación) ya vistas anteriormente, una de sus diferencias estriba en que mientras las teorías ortodoxas asumen un “gobierno ideal”, el FSG estudia los incentivos creados al interior de los sistemas políticos y las fallas reales en los procesos históricos de descentralización al interior de diversos países.

De manera breve, el FSG sostiene que si existen restricciones fiscales suaves para el comportamiento de las entidades federales, estas tendrán incentivos a gastar más de lo eficiente y terminarán en situaciones de apremio económico.

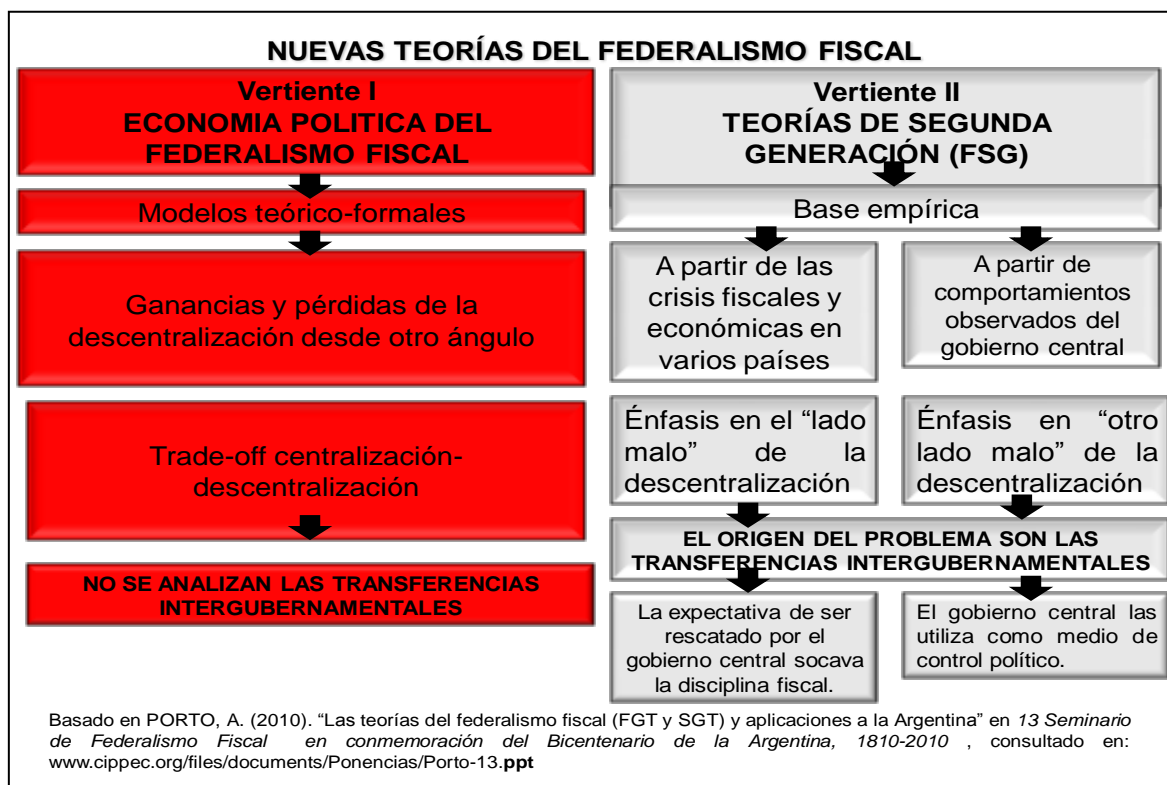
Además, otra gran conclusión del FSG es que las transferencias intergubernamentales pueden conducir a control político por parte de la federación mediante la dependencia fiscal que crearía con las entidades integrantes del pacto federal, ya que les resta independencia y autonomía.

Por su parte, la EPFF aunque comparte preocupaciones con el FSG respecto al comportamiento institucional y el análisis de los incentivos de los agentes, se aboca principalmente al estudio, mediante modelos económicos formales, de las estructuras legislativas y los procesos electorales con la finalidad de explicar y predecir los diferentes productos resultantes de distintos tipos de descentralización fiscal.

⁵¹ OATES, W. (2008): “On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions” en *National Tax Journal*, vol. LXI, núm. 2, pp. 313-334, consultado en: [http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/B7375E5B50FB988A85257483004935A2/\\$FILE/08-Art8.pdf](http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/B7375E5B50FB988A85257483004935A2/$FILE/08-Art8.pdf)

Además, la EPFF contraviene dos principios fundamentales del teorema de la descentralización de Oates: en primer lugar, no asume que el gobierno central busca maximizar en todos los casos el bienestar social, y en segundo, no asume la igualdad de los bienes y servicios provistos por los distintos sectores públicos, ya que estos son resultado de las estructuras políticas de cada localidad.

El siguiente cuadro muestra de manera concisa las principales conclusiones de ambas vertientes:



El término FSG se acuñó a finales de la década de los noventa del siglo pasado, a través de los investigadores Qian y Weingast,⁵² quienes mencionan que tal concepto está compuesto por diversas líneas de investigación, entre las cuales se cuenta la economía de la información, la organización industrial, la elección pública, y la teoría de contratos, entre otras.

Para Weingast⁵³ el FSG tiene la característica principal de que estudia las implicaciones de los incentivos creados en las instituciones fiscales de un país.

⁵² OATES, W. (2005): “Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism” en *International Tax and Public Finance*, 12, pp. 349-373, consultado en: <http://econweb.umd.edu/~oates/research/2ndGenerationFiscalFederalism.pdf>

⁵³ WEINGAST, B. R. (2006): “Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development” (Proyecto para discusión), consultado en: <http://politicalscience.stanford.edu/faculty/documents/Weingast-second%20generation%20fiscal%20federalism.pdf>

Asimismo, plantea la posibilidad de que cada entidad formante del pacto federal sostenga de una manera más amplia su esquema fiscal propio. Debido a las distorsiones económicas que pueden plantear las transferencias gubernamentales, el autor menciona que estas pueden ser útiles en el margen, con objetivos de igualdad.

Para Oates,⁵⁴ la segunda generación del federalismo fiscal, a grandes rasgos, se compone de los dos siguientes elementos:

- a) Asume que el proceso federal se da dentro de un proceso político y también contempla el comportamiento de los agentes inmiscuidos en el mismo, tiene en cuenta las diversas funciones de utilidad que institucionalmente se buscan maximizar en el proceso político federal, tanto de los agentes, como de los votantes.
- b) Asume información asimétrica en las relaciones entre las entidades federativas signatarias de los pactos federales, cuya situación puede acarrear ineficiencias en la ejecución de las políticas insertas en el proceso federal.

Para la teoría del FSG, como se ha comentado, uno de los conceptos más importantes es el de la “restricción presupuestaria blanda”, que viene dado cuando (en México) los presidentes municipales o gobernadores pueden creer que la Federación saldría a su rescate en cualquier necesidad financiera; la Federación tiene incentivos a actuar ya que los políticos que dirigen las entidades de los otros niveles de gobierno, pueden culpar a la misma en caso de que no llegue una adecuada provisión de bienes y servicios a la ciudadanía. Además, situaciones negativas en una entidad federativa pueden tener efectos negativos en otras entidades, por lo que el gobierno central tiene incentivos a no permitir un deterioro o escasez en la provisión de un bien o servicio de una entidad dada.

Para el cuerpo teórico en comento, el análisis de estas restricciones es fundamental, y busca los elementos de mejora al comportamiento fiscal de las entidades en las instituciones, el sistema político, la ausencia de un funcionamiento eficiente de mercados clave y las características históricas del gobierno.

Por ejemplo, bajo este constructo, un problema que puede llevar a estadios de ineficiencia el federalismo, dentro del análisis económico de las instituciones, es el

⁵⁴ OATES, W. (2005): *Op. Cit.* p. 356.

difuso establecimiento de límites entre federación y entidades; al no tener bien definido el espacio donde un nivel de gobierno debe proveer el bien o servicio, ni las facultades de cobro por su provisión, se crean diversas ineficiencias que además no permiten una adecuada rendición de cuentas sobre el ejercicio de los recursos.

Esta perspectiva teórica también utiliza el estudio institucional para poder analizar bajo el tamiz de la eficiencia económica la situación de las transferencias gubernamentales, ya que como se ha mencionado, este mecanismo puede acarrear dependencia y originar una situación de sometimiento político por parte de las entidades federativas en relación con el gobierno central.

Un último ejemplo se refiere al funcionamiento de mercados clave; en este caso, suponiendo un mercado financiero funcionando en términos de eficiencia, permitiría a los integrantes del pacto federal conseguir recursos de una manera menos costosa, disminuyendo el riesgo de una quiebra fiscal.

Por lo que para la teoría del FSG, un funcionamiento de mercados originado por su desarrollo y eficiencia, seguido por una atinada descentralización del sistema político, caracterizada por la competencia entre jurisdicciones, puede producir impedimentos al uso indebido de las facultades fiscales de las entidades componentes del pacto federal. En dado caso de que tales instituciones económicas no existan (situación natural en países en desarrollo), Oates⁵⁵ sugiere, entre otras, las siguientes medidas:

- Regular constitucional o legalmente los presupuestos y déficits de los Estados.
- Limitaciones en la emisión de deuda que reduzcan el financiamiento de proyectos de inversión, siendo específicos en cuanto a lo que proyectos de inversión signifique.
- Designar un marco jurídico claro en relación a las quiebras fiscales, así como a la gestión de las mismas.

En suma, la teoría del FSG se ha enfocado al tema de las restricciones presupuestarias (suaves y rígidas): de dónde vienen, cómo se originan y cuáles son las consecuencias para el sistema fiscal en general.⁵⁶

⁵⁵ OATES, W. (2005): *Op. Cit.* p. 363.

⁵⁶ OATES, W. (2008): *Op. Cit.* p. 321.

En contraste, el EPFF, como se ha mencionado, está más pendiente de los constructos relativos al estudio formal del federalismo, también tiene puesta su mira en el funcionamiento de legislaturas y del sistema político en general.

Existen diversos tipos de EPFF, sin embargo, todos mantienen líneas transversales que los unen: su búsqueda permanente en restringir la búsqueda de rentas (*rent-seeking*) y la rendición de cuentas de los sistemas federales.

Para este grupo de teorías, el gran dilema estriba entre elegir una alta centralización y obtener como ganancia una alta coordinación fiscal, o bien, elegir la descentralización y obtener como ganancia un mejor acoplamiento entre los bienes y servicios provistos, una mejor rendición de cuentas y límites efectivos a la búsqueda de rentas por parte de los políticos. Vale la pena destacar que para este grupo de teorías, la búsqueda de rentas es limitada si existe competencia fiscal entre jurisdicciones.

Concluyendo, tanto el EPFF como la teoría del FSG comparten ciertos componentes metodológicos como el estudio de los agentes individuales y su búsqueda de maximización de utilidad con sus propios objetivos de maximización, el uso de un marco de estudio compuesto por la información asimétrica, la organización industrial y la teoría de la firma, los contratos y el comportamiento estratégico estudiado a través de la teoría de juegos. Y son diferentes básicamente en su enfoque, ya que mientras la FSG se aboca a la observación directa de las instituciones y su historia, el EPFF prefiere utilizar los constructos realizados por otras ramas de la Economía y las Ciencias Sociales en general. Y al final, y de suma importancia, es necesario mencionar que tanto el EPFF como la teoría del FSG están a favor de la competencia entre jurisdicciones, sin embargo, la diferencia con la teoría de la elección pública, es que para la segunda es un elemento efectivo para la contención del Leviatán, que conllevaría incrementos en la libertad económica.

2.- EL PROCESO DE LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA EN MÉXICO.

La política económica de un país o una entidad federativa, como se ha mencionado, *grosso modo*, viene dada por las relaciones políticas entre las distintas instituciones de un país de cara a alcanzar ciertos objetivos económicos. Para el caso del México, y orientado a entender el objeto de la presente investigación, es menester realizar un recorrido histórico por las distintas etapas que ha tenido el federalismo mexicano, este recorrido es obligado, porque define y aclara las variables del índice de libertad económica, debido a que una parte que es pilar en los índices propuestos es que estos sean definidos por el accionar de las entidades federativas. Y en ese orden de ideas, se presenta a continuación un recuento sobre la relación y compartimento de competencias fiscales entre los Estados y la Federación, que indirectamente constituyen la magnitud de los índices propuestos.

2.1. Recuento histórico del federalismo fiscal mexicano.

Para Alicia Hernández,¹ el federalismo mexicano propiamente dicho comienza a cobrar relevancia a partir de la Constitución de 1824, también menciona que este proceso no ha sido uniforme, ya que a lo largo de la historia del México independiente, en sus casi 200 años, ha tenido fuertes oscilaciones ideológicas que han conseguido distintas estructuras federales a lo largo del tiempo.

Por otra parte, es preciso abundar en las divergencias en cuanto al inicio histórico de la descentralización fiscal mexicana; por un lado, Cruz² menciona que es en la Constitución de 1917 donde se establecen claramente las atribuciones fiscales de las Entidades Federativas, mientras que Hernández³ afirma que el Estado Federal Mexicano inicia desde la Constitución de 1824.

Aunque en el Derecho, desde la primera Carta Magna Mexicana se establece la intención de hacer de México un Estado Federal, es hasta la Constitución de 1917 donde se concretiza esta idea, ya que este ordenamiento abre las puertas para la realización de Convenciones Nacionales Fiscales, donde Entidades Federativas y Gobierno Federal, se plantean la discusión de las cuestiones de ingreso y gasto

¹ HERNÁNDEZ, A. (1996). "Las tensiones internas del federalismo mexicano" en Hernández A. *¿Hacia un nuevo federalismo?*, México: El Colegio de México.

² CRUZ, A. (2004). *Federalismo Fiscal Mexicano*, México: Porrúa.

³ HERNÁNDEZ, A. (1996). *Op. Cit.*

público. Además, Ayala⁴ plantea que no es posible documentar que en el siglo XIX haya habido algún proyecto de descentralización importante.

Sin embargo, las constantes luchas armadas y políticas sufridas por el país durante su historia independiente han motivado que el concepto y la visión del federalismo se modifiquen y se estén adaptando constantemente a las coyunturas históricas.

Por ello, puede mencionarse que el federalismo mexicano ha tenido como puntos álgidos en su evolución o desarrollo los procesos históricos de 1824, 1857, 1910, la década de los años sesenta del siglo pasado y la década de los noventa del mismo siglo. Es decir, etapas donde se discute el federalismo y el centralismo desde sus fundamentos filosóficos y se concluye con una nueva implementación del pacto federal.

En la época colonial no puede hablarse propiamente de un federalismo ya que la división territorial de la colonia estaba basada en reductos de poder de los encomendados cercanos a la realeza española. Además, durante tal época la descentralización de las decisiones se orientaba hacia el municipio, y no tanto hacia territorios o estructuras políticas superiores.

Las Constituciones de 1824, 1857 y 1917 coinciden en impulsar el federalismo como el sistema político adecuado para mantener el equilibrio y correlación de fuerzas políticas entre el centro del país y la periferia, las tres tienen ese punto como transversal, sin embargo, también tienen sus diferencias:

Para el año de 1824, por ejemplo, el Estado de México estaba compuesto, además de su territorio actual, por territorios de Hidalgo, Morelos y Guerrero, por lo que se desarticularía en los Estados citados hasta mediados del siglo XIX, por su parte, Nayarit se convierte en Estado a partir de la Constitución de 1917, mientras que en el segundo tercio del siglo XX, hace apenas algunos 40 años, se constituyeron los últimos Estados de nuestra geografía nacional: Baja California y Quintana Roo.

Además, la Constitución de 1824, catalogada por diversos estudiosos como “centralista” no distingue claramente si México sería una Federación de Estados o un

⁴ AYALA, J. (2003). *Instituciones para mejorar el desarrollo*, México: F.C.E.

Estado Confederado. No sería sino hasta la siguiente constitución, catalogada por la historia como la “Constitución Liberal” donde se establece específicamente que un poder federal será superior a los poderes de los Estados, y donde se establece, desde luego, que México sería un Estado Federal.

A grandes rasgos, la historia del federalismo postrevolucionario mexicano, contada desde un punto de vista gráfico, tiene que ver con una curva *platicúrtica*, con una baja centralización al principio, una alta centralización en el medio y una tendencia a la baja centralización al final. Es decir, en los albores del México postrevolucionario había una gran cantidad de competencias tributarias para las Entidades Federativas, con el paso del tiempo, debido a la alta concurrencia impositiva de las Entidades Federativas y la Federación, se transfirieron gran parte de las competencias tributarias de las Entidades a la Federación, bajo el argumento de la simplificación tributaria y la eliminación de las distorsiones fiscales que la concurrencia impositiva planteaba. Es necesario mostrar el siguiente cuadro para una mejor comprensión de la idea.

Cuadro 2.1. México: Evolución de los ingresos de las Entidades Federativas como porcentaje de los ingresos públicos, 1900-1997.	
Años	Porcentaje de ingresos propios
1900-1911	75%
1912-1925	61%
1926-1942	56%
1979	13%
1989	6%
1997	7%
FUENTE: CRUZ, A. (2004). <i>Op. Cit.</i> p. 95.	

En el cuadro anterior, se puede ilustrar que durante el México del Porfiriato y revolucionario, las Entidades Federativas se encontraban lejos de una sumisión económica central producto del desorden político y los vientos revolucionarios que se avecinaban en el país.

Los diversos liderazgos regionales, que permitían que inclusive cada Entidad Federativa acuñara su propia moneda⁵ hacían que la actividad económica de las regiones tuviera su propia dinámica independientemente de la dinámica nacional.

⁵ En Veracruz, inclusive una popular cafetería llegó a acuñar su propia moneda durante el período citado.

También se puede ver, que a partir de de la Constitución de 1917, donde según Cruz Covarrubias⁶ se establecen las bases y las distinciones tributarias entre Estados y Federación, la Federación empieza a tomar poder o soberanía tributaria en menoscabo de las competencias fiscales de las Entidades Federativas.

El período donde se fortalece el centralismo tributario es el comprendido entre las décadas medulares del siglo XX, producto de las reformas derivadas de la tercera Convención Nacional Fiscal, que se explicará más adelante, y cuyo objetivo era eliminar las distorsiones tributarias causadas por la concurrencia tributaria entre los Estados y la Federación.

En el último cuarto del siglo XX, las transformaciones internacionales en las estructuras económicas, políticas y sociales motivaron que en México también existiera una presión hacia el cambio rumbo a la descentralización fiscal, ello originó, que a partir de los años 80 del siglo pasado se alcanzara el punto álgido de la centralización fiscal con el llamado Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Sin embargo, a partir del inicio de la década de los noventa, con la descentralización de los programas educativos, comienza nueva tendencia hacia la descentralización de la política económica, que es donde actualmente se encuentra el país.

2.2. Las Convenciones Nacionales Fiscales.

Uno de los efectos de la Constitución de 1917, es que se mantuvieron diversas facultades impositivas de manera concurrente, por lo que se crearon grandes ineficiencias producto del “cruce” de tributaciones tanto federales como estatales, naturalmente, este tipo de situaciones no eran un incentivo ni para la producción, ni para el consumo, por lo que se empezaban a crear diversas distorsiones a los mercados que con el paso del tiempo agudizaron las desigualdades regionales. Por ello, apenas algunos años después de la promulgación de la Carta Magna, el Ejecutivo Federal lanzó una convocatoria para articular y organizar el sistema tributario, que ya comenzaba a mostrar alarmantes muestras de desorden.

a) Primera Convención Nacional Fiscal:

⁶ CRUZ, A. (2004). *Op. Cit.*

El 22 de julio de 1925, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público convocó a los gobernadores de los Estados a que enviaran a una persona en representación de su Entidad Federativa a la I Convención Nacional Fiscal, a celebrarse del 10 al 20 de agosto. Los acuerdos de la convención fueron:

- a) Delimitar las competencias locales y la competencia federal en materia de impuestos.
- b) El uso exclusivo de las autoridades locales de los impuestos sobre la propiedad raíz y sobre donaciones y sucesiones.
- c) La facultad exclusiva de la Federación para establecer impuestos sobre el comercio y la industria, participando los Estados en el rendimiento de dichos gravámenes.
- d) Determinar un Plan Nacional de Arbitrios para unificar el sistema fiscal en toda la República; y
- e) Crear un órgano independiente que se ocupara de estudiar las necesidades de la economía nacional y de proponer las medidas que deben adoptarse en materia fiscal en la República, así como de vigilar el cumplimiento del plan único de impuesto que se estableciera.⁷

En sus conclusiones, la convención estableció reunirse cada cuatro años. La principal propuesta se relacionó con reformas a los artículos 118 (relativo a las facultades de los Estados), 131 (relativo a las facultades de la Federación) y 74 (relativo a las funciones de la Cámara de Diputados) de la Carta Magna, pero por razones diversas, el Congreso no tocó estos temas hasta el final del sexenio del General Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940).

b) Segunda Convención Nacional Fiscal.

El 11 de mayo de 1932, se emitió la convocatoria a la II Convención Nacional Fiscal, a celebrarse del 10 de febrero al 11 de abril de 1933.

⁷ BARRERA, J. et al. (2004). *Temas Hacendarios*, México: U.N.A.M.

En dicha reunión se buscó abordar diversos temas que al final solo quedaron en recomendaciones: La confirmación de la facultad de las autoridades locales para gravar la propiedad raíz; elevar a rango constitucional la delimitación de las facultades impositivas de los tres niveles de gobierno y la propia existencia de la Convención Nacional Fiscal y, por último, dejar de considerar el impuesto establecido a la industria y al comercio como facultad privativa de la Federación.⁸

Los objetivos de la II Convención fueron:

- a) Revisión de las conclusiones de la I Convención Nacional Fiscal.
- b) La consideración del problema de delimitación de las jurisdicciones fiscales de la Federación, de los Estados y los Municipios.
- c) La determinación de las bases de unificación de los sistemas locales de tributación y de la coordinación de ellos con el sistema federal.
- d) El estudio y determinación de los medios más adecuados para la ejecución de las decisiones de las asambleas y constitución del órgano más capacitado para encargarse de ello.

Debido a que la convocatoria para esta convención se empató con el último año de gobierno del presidente Abelardo L. Rodríguez, no se tuvo el impacto esperado. Sin embargo, producto de los trabajos de esta convención, en 1942 se reformó la Carta Magna y se dio inicio a una política de distribución de ingresos entre la Federación y los Estados, pues se estableció que las Entidades Federativas debían participar de los impuestos especiales, exclusivos y federales; como eran los de energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina, cerillos y fósforos, aguamiel y explotación forestal.

⁸ CRUZ, A. (2004). *Op. Cit.* p. 129.

Cuadro 2.2. México: Evolución de las facultades tributarias exclusivas de la Federación.

1917	1934	1942
Comercio Exterior y Timbre.	Electricidad.	Recursos naturales del subsuelo y agua.
		Instituciones de crédito y sociedades de seguros.
		Servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación.
		Tabaco.
		Gasolina y derivados del petróleo.
		Cerillos y fósforos. Aguamiel y derivados.
		Explotación Forestal.
		Producción y consumo de cerveza.
FUENTE: CRUZ, A. (2004). <i>Op. Cit.</i> pp. 88-89.		

c) Tercera Convención Nacional Fiscal.

El 4 de octubre de 1947, el presidente Miguel Alemán convocó a la III Convención Nacional Fiscal, a celebrarse del 10 al 20 de noviembre del mismo año.

En esta convención, se convocó a un representante de los municipios de cada Estado, así como también se buscó la participación de la sociedad civil a través de las diversas asociaciones de contribuyentes.

Las conclusiones de la III Convención Nacional Fiscal fueron las siguientes:

- a) Trazar el esquema de un Plan Nacional de Arbitrios. Es decir, de un “verdadero” sistema nacional de distribuciones de todos los gastos públicos entre todos los contribuyentes.
- b) Planear la forma en que las entidades económicas obligatorias que existían en el país –Federación, Estados y Municipios- debían distribuirse, en relación con el costo de los servicios públicos a cada una encomendados y en relación también con su capacidad de control sobre los causantes respectivos, la facultad de establecer y administrar los impuestos dejando definitivamente establecido el principio de que el reconocimiento de la facultad o capacidad de

legislación o administración en materia tributaria no implicara, en forma alguna, el derecho de aprovechar privativamente los rendimientos de los gravámenes que se establecieran o recaudaran por cada autoridad.

- c) Determinar bases ciertas de colaboración entre las diversas autoridades fiscales y fórmulas asequibles de entendimiento entre ellas y los particulares que permitieran reducir al mínimo los gastos de recaudación y control de los impuestos para lograr, en esta forma, que su rendimiento se aprovechara hasta el máximo posible en la satisfacción de las necesidades colectivas.

Algunos autores⁹ mencionan que esta convención ha sido muy importante, porque sentó las bases para lo que dentro de casi 30 años sería el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ya que a partir de dicha convención se originaría la primera ley que regularía el pago de participaciones en ingresos federales a las Entidades Federativas (1948); la ley de coordinación fiscal entre la Federación y las Entidades Federativas (1953); y la creación de la Comisión Nacional de Arbitrios (1947), así como la primera ley del impuesto federal sobre ingresos mercantiles (1948).

2.3. La Reforma Hacendaria de 2008.

2.3.1. La Convención Nacional Hacendaria (CNH).

Ya no se organizaría una Convención Nacional Fiscal durante el resto del Siglo XX. Para el inicio del presente siglo, la complejidad del sistema fiscal mexicano producto de la pluralidad económica y política, así como de la dinámica de la transformación de las estructuras productivas realizada a finales del siglo XX exigía volver a negociar las “reglas del juego” federal. Y producto de esa situación, se planteó la Convención Nacional Hacendaria, con un nombre distinto debido a que los objetivos también los eran, ya que la CNH, además del tema de los ingresos públicos, también buscó discutir la manera en la que estos eran gastados, así como la transparencia y rendición de cuentas de los mismos. Otra sustancial diferencia, es que las primeras convenciones fiscales eran convocadas y promovidas por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que en la CNH, los promotores fueron principalmente los gobernadores, al interior de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), aunque en la convocatoria oficial, se haya

⁹ BARRERA, J. et al. (2004). p. 116.

establecido que los convocantes fueron el Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los Municipios.

Cuadro 2.3. Características de las etapas del federalismo en México.		
I (1910-1980)	II (1980-2000)	III (2000-x?)
Debilidad administrativa, financiera y política de las haciendas locales.	Fortalecimiento formal de atributos administrativos de las haciendas locales	Nuevo pacto federal
Fuerte dependencia de las haciendas locales del gobierno federal en todos los ámbitos.	Aumento de los recursos federales vía participaciones	Fortalecimiento del poder de los gobiernos locales en todos los ámbitos.
Bajos incentivos para mejorar las haciendas locales.	Discrecionalidad en la fijación de las participaciones.	Mejoría de la gestión y las capacidades de las haciendas locales.
Alta pasividad de las haciendas locales para innovar y negociar mejoras.	Nuevas reglas del juego y fórmulas para las transferencias de recursos.	Creciente iniciativa de los gobiernos locales.
Negociación asimétrica entre niveles de gobierno.	Creación y mejoría paulatinas del sistema de coordinación fiscal.	Negociación sujeta a reglas claras, equitativas y predecibles.
	Nuevos esquemas de negociación.	
FUENTE: AYALA, (2003). <i>Op. Cit.</i> p. 125.		

Es necesario mencionar, que la citada convención se destacó por su vasta convocatoria: Participaron en la preparación de la agenda de discusión y en la redacción de las conclusiones diversos representantes de partidos políticos y instituciones educativas. Además, organismos de la sociedad civil participaron en la convención como coadyuvantes del desarrollo de la misma.

Los propósitos, objetivos y alcances de la CNH, tomados de la “*Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los Trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria*”¹⁰ son los siguientes:

¹⁰ <http://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/DeclaratoriaNacion/declaratoria.pdf>

Propósitos y alcances:

- a) *La primera CNH reclama una reunión republicana, democrática y participativa para que representantes de los gobiernos federal, estatales y municipales, escuchando a la sociedad civil, definan, en función de los requerimientos del desarrollo nacional y una nueva visión de federalismo mexicano, cuales deben ser el ámbito competencial político-administrativo, las responsabilidades de gasto y las atribuciones y facultades impositivas que correspondan a cada uno de ellos.*
- b) *El propósito general de la Convención es coadyuvar a impulsar un desarrollo económico más dinámico y justo, definir las responsabilidades de gasto a partir de las necesidades básicas en materia social y de infraestructura de cada uno de los tres órdenes de gobierno, así como generar los recursos necesarios y suficientes dentro de un nuevo federalismo.*
- c) *Para ello, se determinarán cuáles son las potestades impositivas respecto a quién corresponde legislar, recaudar, administrar o recibir recursos de cada impuesto, estableciendo cuáles son las facultades concurrentes y las exclusivas. De igual manera, se revisarán el marco institucional, las normas jurídicas y políticas vigentes para operar el nuevo sistema.*
- d) *El conjunto de cambios citados, la Reforma Hacendaria, se realizará con el fin de promover el crecimiento económico, la justicia social, el equilibrio en el desarrollo regional, la estabilidad macroeconómica y la solidez en las finanzas en los tres órdenes de gobierno.*
- e) *Los resultados de la Convención se traducirán en tres diferentes tipos de propuestas: a) aquellas que vía un proceso administrativo o de coordinación entre los órdenes de gobierno apoyen a un mejor desempeño de las haciendas públicas federal, estatal y municipal, y b) aquellas que requerirán ser encauzadas como iniciativas legislativas ante el Honorable Congreso de la Unión o las legislaturas locales, según corresponda.*

Objetivos:

- a) *Producir y difundir diagnósticos de la situación actual de las haciendas públicas federal, estatales y municipales.*
- b) *Generar, con base en dicho diagnóstico, un proceso y un programa de reformas con visión de corto y mediano plazos.*
- c) *Lograr un nuevo federalismo hacendario integral, el cual deberá incluir el ingreso, el gasto, la deuda y el patrimonio públicos.*
- d) *Definir las responsabilidades de gasto que cada orden de gobierno debe asumir, a partir de su cercanía con las necesidades de los ciudadanos y su aptitud para resolverlas.*
- e) *Revisar las facultades tributarias y proponer quién legisla, quién administra y recauda, y quién recibe los frutos de las contribuciones.*
- f) *Lograr una mayor simplificación de la legislación y efectividad de la administración, modernizando los sistemas de ingresos y gastos en los tres órdenes de gobierno.*
- g) *Programar las reformas necesarias en las instituciones que operarán el nuevo sistema hacendario integral.*
- h) *Lograr mayor transparencia y armonización de la información hacendaria.*
- i) *Fortalecer los sistemas de rendición de cuentas, de supervisión y de control social ciudadano.*
- j) *Revisar el marco jurídico para generar un capítulo hacendario en la Constitución y una nueva Ley de Federalismo Hacendario, que den certidumbre a las relaciones entre los tres órdenes de gobierno.*
- k) *Proponer cambios en la legislación secundaria.*
- l) *Acordar un programa entre los tres órdenes de gobierno para simplificar administrativamente los procesos programáticos, presupuestales y fiscales, así como para promover el desarrollo y la modernización institucionales.*

2.3.2. Modificaciones básicas de la Reforma Hacendaria de 2008.

El 20 de junio de 2007, el Ejecutivo Federal remitió al H. Congreso de la Unión siete iniciativas que en conjunto comprendieron 14 ordenamientos jurídicos, que contemplaron modificaciones constitucionales, pasando por la legislación federal en materia de gasto público y normas de carácter tributario y de federalismo como el Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS), el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos (ISTUV), Impuesto al Activo (IMPAC), Código Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal, entre otras.

Las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión aprobaron los diversos ordenamientos los días 13 y 14 de septiembre respectivamente.

Reformas aprobadas¹¹:

- A) *Reforma constitucional en materia de gasto público.*
- B) *Reformas en materia tributaria y de coordinación fiscal.*

1. Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU).
2. Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE).
3. Impuesto a la gasolina y diesel.
4. Ley de Tenencia o Uso de Vehículos.
5. Miscelánea fiscal.
6. Código Fiscal de la Federación.
7. Impuesto sobre la Renta.
8. Impuesto al Valor Agregado.
9. Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
10. Y Ley Federal de Derechos en cuanto al régimen de Petróleos Mexicanos y en general.

C) *Reformas de gasto público en las leyes de:*

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
2. Orgánica de la Administración Pública Federal.

¹¹ NUÑO, J.A. (2007). “La Reforma Fiscal 2008 en las Finanzas Municipales” mimeo.

3. Ley de Coordinación Fiscal.
4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

En cuanto a la autorización por parte del Poder Legislativo, se autorizó la posibilidad de crear pasivos en los siguientes casos:

i) Endeudamiento del Gobierno Federal:

- Endeudamiento neto interno hasta por 220 mil millones de pesos, más los compromisos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
- Se autorizó el canje de deuda interna por externa hasta por un monto de 220 mil millones de pesos.
- Se autorizó un desendeudamiento externo mínimo de 500 millones de pesos.
- Contratación de deuda externa con organismos financieros internacionales por el monto en moneda nacional de 1500 millones de dólares.
- En cuanto a obligaciones financieras del ISSSTE, el Ejecutivo Federal podría registrar pasivos adicionales para el financiamiento que se derive del Decreto de la nueva Ley del ISSSTE (reformada en 2007).
- Respecto al endeudamiento del Gobierno del Distrito Federal, es necesario hacer notar que dada la situación política de esta entidad, que es la sede de los tres poderes de la unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Cámara de Diputados autoriza sus techos de endeudamiento, autorizando deuda de hasta por 1500 millones de pesos.
- Del mismo modo, se mantiene la obligación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de presentar informes trimestrales sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública, de requerimientos financieros del sector público y sobre eficiencia recaudatoria, que serían públicos en el portal web de la dependencia.

ii) Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU):

Busca combatir la evasión y elusiones fiscales, representa un gravamen respecto del Impuesto sobre la Renta total, solo se pagará cuando el contribuyente pague ISR por debajo de la tasa efectiva del 16.5%, en cuyo caso deberá pagar el IETU, pudiendo acreditar contra éste el ISR ya enterado. Sustituyó al Impuesto al Activo.

Según el Artículo 4 de esta ley, no se pagará el impuesto empresarial a tasa única por los siguientes ingresos: Los percibidos por la Federación, las Entidades Federativas, Los municipios, los órganos constitucionales autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal que, conforme al título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la Federación, estén considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta.

Su vigencia es a partir de enero de 2008, su objeto es la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y otorgamiento de uso o goce de bienes, los sujetos son todas las personas físicas o morales, su base es el total de ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones autorizadas efectivamente pagadas.

iii) Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo (LIDE).

Según el artículo segundo de la ley, no estarán obligados al pago del impuesto a los depósitos en efectivo: La Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las entidades de la administración pública paraestatal que, conforme al título III de la Ley del Impuesto sobre la Renta o la Ley de Ingresos de la Federación, estén considerados como no contribuyentes del impuesto sobre la renta. Así como las personas morales con fines no lucrativos.

Su vigencia es a partir del 1 de julio de 2008, se buscaba recaudar 2900 millones de pesos para ese año y su objeto son los depósitos en efectivo mensuales superiores a 25,000 pesos (cheques de caja), no incluyó depósitos para el pago de créditos con el sistema financiero.

Se acreditaría contra el ISR, contra el ISR retenido y para compensar las contribuciones federales a cargo del contribuyente. Por la naturaleza del impuesto, también busca combatir la evasión fiscal.

iv) Cuestiones inherentes al gasto público y participaciones a Estados y Municipios.

CONCEPTOS PARTICIPABLES A LOS ESTADOS 2007

CONCEPTO	PORCENTAJES
Fondo General de Participaciones	20% de la Recaudación Federal Participable (RFP)
Coordinación de Derechos	1% de la RFP
Bases Especiales de Tributación	80% de su recaudación en 1989
Fondo de Fomento Municipal	1% de la RFP
Participaciones directas de:	
Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos	100% de la recaudación de cada Entidad Federativa.
Impuesto sobre Automóviles Nuevos	100% de la recaudación de su Estado.
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.	20% de lo recaudado por bebidas alcohólicas y cervezas. 8% por tabacos labrados de la recaudación de cada Estado.
Reserva de Contingencia.	0.25% de la RFP.
Incentivos de la Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal	Dependerá de los anexos al Convenio de Colaboración que tengan formados cada uno de los Estados.

v) Reforma en materia de participaciones 2008.

Para tal año, se realizaron las siguientes reformas:

- Adecuaciones al concepto de recaudación federal participable.
- Nueva fórmula para la distribución del fondo general de participaciones.
- Creación del fondo de fiscalización.
- Instauración del fondo de compensación.
- Nueva fórmula para la distribución del fondo de fomento municipal.
- Establecimiento del fondo de extracción de hidrocarburos.
- Modificación al factor aplicado para el cálculo de la participación directa a municipios por los que se realice la salida de hidrocarburos.

vi) Adecuaciones al concepto de recaudación federal participable (2008).

INGRESOS QUE SE INCLUYERON:	INGRESOS QUE SE EXCLUYERON:
Recaudación de todos los impuestos federales. Porcentajes variables sobre el derecho ordinario sobre hidrocarburos. Derechos sobre minería	<ul style="list-style-type: none">• Devoluciones de los conceptos anteriores.• Derechos adicionales y extraordinarios sobre la extracción de petróleo.• Impuestos sobre Automóviles Nuevos y sobre Tenencia o Uso de Vehículos.• Participaciones directas del IEPS.• IEPS a la venta final de gasolinas y diesel.• Participación de rifas, sorteos y loterías.

Se estableció también distribuir el fondo general de participaciones (que es el 20% de la recaudación federal participable) de acuerdo a los siguientes factores:

- 60% de conformidad con el crecimiento del PIB de las entidades federativas.
- Incrementos en la recaudación de los impuestos y derechos locales (predial y agua) 30%.
- Nivel de recaudación de los impuestos y derechos locales. 10%

No hay que confundir las participaciones federales con las aportaciones federales, que consisten en ocho ramos y que sus criterios de destino son el rezago en los indicadores puntuales que se desean combatir: ejemplo analfabetismo, pobreza, etc. Las participaciones federales son de libre administración (transferencias no condicionadas), mientras que las aportaciones federales son recursos etiquetados y dirigidos, es decir, tienen que destinarse a ciertos programas de gasto (transferencias condicionadas).

2.4. Las participaciones federales.

Hasta 2007, los recursos que se asignaban al Fondo General de Participaciones (FGP), que son las transferencias no condicionadas, punto medular de la descentralización de la política económica en México se distribuían en base a la población y a los impuestos federales. Es decir, el 45.17% se otorgaban según la población de cada Entidad Federativa, el 45.17% se asignaba según el crecimiento de impuestos asignables (Impuesto sobre Tenencia de Vehículos y el Impuesto sobre

Automóviles Nuevos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios) y el restante 9.66% se distribuía en orden ascendente a las Entidades que les hubiera tocado un menor nivel de recursos producto de las dos primeras variables, o sea, se distribuía en proporción inversa.

No se incluían en la RFP los impuestos del 3% adicional sobre exportación de petróleo crudo, gas natural y sus derivados, ni del 2% de las demás exportaciones, tampoco los derechos adicionales como la extracción de petróleo.

De esa manera, el FGP también se adicionaba por marginales participaciones de la coordinación de derechos, las bases especiales de tributación y otras participaciones derivadas de convenios de administración, que en total, incrementan el FGP en un 1% o 2%.¹²

Según Ayala¹³, este mecanismo de asignación tenía al menos los siguientes inconvenientes:

- Suponía que hay homogeneidad en las regiones y en los costos de oferta de los servicios públicos. En otras palabras, no consideraba que los costos de provisión podían ser distintos entre los Estados y Municipios.
- La parte de la fórmula que revisaba los cambios positivos en la recaudación tributaria se sustentaba solo en la base especial de tributación y no incluía el potencial recaudatorio de los impuestos. Este planteamiento tendía a favorecer a los Estados más ricos que ampliaban su base tributaria.
- La información sobre la cual se basaba la fórmula era inadecuada. Por ejemplo, los Estados con mayor nivel de recaudación pudieron pugnar siempre por un incremento en el coeficiente del criterio recaudatorio, en tanto que los Estados más poblados buscaban subir ese coeficiente en el segundo criterio, el demográfico.
- Era poco probable que corrigiera externalidades, porque no se condicionaba el uso de los recursos.

¹² CEFP, (2006a). "Recaudación Federal Participable" *Serie Cuadernos de Finanzas Públicas*, 2006, México, núm. 7, septiembre.

¹³ AYALA, J. (2003). *Op. Cit.*

Por ello, en 2007 se modifica la integración del FGP para el año 2008 y sucesivos, quedando la fórmula de la siguiente manera:

$$P_{i,t} = P_{2007} + \Delta FGP_{07,t} (0.6 C1_{i,t} + 0.3 C2_{i,t} + 0.1 C3_{i,t})$$

Según esta fórmula, las participaciones que cada Entidad Federativa obtuvo para el año 2007 quedaron fijas en términos reales para los años sucesivos, y se adicionarían los elementos correspondientes a:

- 60% del crecimiento del PIB de las Entidades Federativas.
- 30% del incremento en los impuestos y derechos locales.
- 10% del nivel general de recaudación de impuestos y derechos locales.

De esta manera, el 60% del incremento se distribuye así:

$$C1_{i,t} = ((PIB_{i,t-1} / PIB_{i,t-2})^{n_i}) / (\sum_i (PIB_{i,t-1} / PIB_{i,t-2})^{n_i})$$

La formula anterior indica que la participación que le corresponda a cada Entidad Federativa estará en función del crecimiento que experimente su PIB de un año a otro, tomando como referencia la información proporcionada por el INEGI.

Por su parte, el 30% referente a los impuestos y derechos locales, se distribuye así:

$$C2_{i,t} = (\Delta IE_{i,t}^{n_i}) / \sum_i \Delta IE_{i,t}^{n_i}$$

Donde :

$$\Delta IE_{i,t} = \frac{1}{3} \sum_{j=1}^3 (IE_{i,t-j}) / (IE_{i,t-J-1})$$

Las fórmulas anteriores representan el promedio móvil de los últimos tres años de las tasas de recaudación de impuestos y derechos locales de la entidad, ponderados por la variable población. La información relativa a impuestos se deberá obtener de la última cuenta pública oficial. Por otra parte, la Ley de Coordinación Fiscal en sus modificaciones de 2007, estableció que la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales podría aprobar otros impuestos y derechos respecto de los cuales exista

información certera y verificable, atendiendo a criterios de equidad entre las Entidades Federativas.

Por último, el 10% de incremento del FGP se distribuye conforme a la fórmula siguiente:

$$C3 = IE_{i,t-1} n_i / \sum_i IE_{i,t-1} n_i$$

La formula expresa que el 10% dependerá del nivel general de recaudación que presente la Entidad con respecto al total de la recaudación de los impuestos y derechos locales, ponderada con la variable población.

Ejemplo práctico:

MÉXICO, EJEMPLO DE LA INTEGRACIÓN DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2008			
	2007	2008	Incremento
	pesos		
	A	B	C
Recaudación Federal Participable (RFP)	54.859.417.541	98.487.562.157	43.628.144.616
Fondo General de Participaciones (20% de la RFP)	10.971.883.508	19.697.512.431	8.725.628.923
DISTRIBUCIÓN DEL INCREMENTO EN PARTICIPACIONES			
60% Crecimiento del PIB			5.235.377.354
30% Recaudación agua y predial			2.617.688.677
10% Nivel de recaudación respecto al total			872.562.892
		TOTAL	8.725.628.923
FUENTE: Elaboración propia.			

Para el año 2008, el FGP se integró por dos elementos: la cantidad real del FGP que cada Entidad Federativa tuvo para el 2007 (esta cantidad quedó fija para los años sucesivos), y se adicionaron los incrementos anuales producto del PIB, recaudación local y nivel general de recaudación de la siguiente manera:

El cuadro anterior, muestra en su columna B el incremento para el año 2008 del FGP, que no es otro que el 20% de la Recaudación Federal Participable, este monto, descrito en la última fila de la segunda columna, se distribuye a partir del año 2008 de la siguiente manera.

MÉXICO, EJEMPLO DE LA DETERMINACIÓN DE LA PRIMERA PARTE DEL CRECIMIENTO DEL FGP, 2008.							
Entidad	PIB 2003	PIB 2004	Variación 2004/2003	Población 2007	PIB*Variación	Coeficientes de participación	Participación 1a. Parte
	1	2	(3=2/1)	4	(5=3*4)	6=(5/Σ5)	7=(6*5235377354)
A	67.258.415	72.541.875	1,078554631	1.365.874	1.473.170	0,121297406	635.037.691
B	189.528.354	201.785.965	1,064674286	3.857.965	4.107.476	0,338200133	1.770.605.320
C	28.562.214	31.587.896	1,105933034	985.741	1.090.164	0,089761557	469.935.623
D	29.874.854	32.874.587	1,100409964	857.497	943.598	0,077693708	406.755.880
E	185.125.784	201.875.417	1,09047704	4.154.785	4.530.698	0,373047219	1.953.042.964
		TOTAL			12.145.105		5.235.377.478
FUENTE: Elaboración propia.							
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.							

En el cuadro anterior, se puede ilustrar como se determina la primera parte de la adición al FGP para cada Entidad Federativa, en el ejemplo hipotético, hay solamente 5 entidades federativas, denominadas por letras del alfabeto.

En adición, la segunda parte se obtiene de la siguiente manera:

MEXICO, EJEMPLO DE LA DETERMINACIÓN DE LA SEGUNDA PARTE DEL FGP, 2008								
Entidades	Crecimientos IE			Media móvil	Población	Media móvil*Población	Coeficiente de participación	Participación
	2004/2003	2005/2004	2006/2005	IE	2007			
	1	2	3	4	5	6=(5*4)	7=(6/56)	8=(7*Participaciones
A	1,23	1,85	1,87	1,65	1.365.874	2.253.692	0,127336395	333327040,5
B	1,25	1,65	1,45	1,45	3.857.965	5.594.049	0,316070712	827374724,8
C	1,52	1,25	1,85	1,54	985.741	1.518.041	0,085771205	224522311,9
D	1,87	1,63	1,96	1,82	857.497	1.560.645	0,08817835	230823467,8
E	1,52	1,85	1,52	1,63	4.154.785	6.772.300	0,382643314	1001641070
					TOTAL	17.698.727	2617688677	2617688615
FUENTE: Elaboración propia.								
Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.								

FUENTE: Elaboración propia.

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.

Por último, se tiene:

MEXICO, EJEMPLO DE LA DETERMINACIÓN DE LA TERCERA PARTE DEL FGP, 2008					
Entidad	Recaudación Local	Población	Recaudación*Población	Coeficientes	Participación 3a parte.
	1	2	3=1*2	4=(3/53)	5=(4*Participaciones)
A	854.857.524	1.365.874	1,16763E+15	0,039382989	34.364.135,1
B	4.896.875.478	3.857.965	1,8892E+16	0,637208625	556.004.600,5
C	785.485.236	985.741	7,74285E+14	0,026115909	22.787.773,2
D	658.741.582	857.497	5,64869E+14	0,019052501	16.624.505,2
E	1.985.485.274	4.154.785	8,24926E+15	0,278239976	242.781.878,0
			TOTAL		872.562.892,0

FUENTE: Elaboración propia.

Nota: Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.

Para finalizar, el FGP para cada Entidad Federativa se obtiene sumando las cantidades obtenidas de los cuadros ilustrados, de la siguiente manera:

MEXICO, EJEMPLO HIPOTÉTICO DE LA DISTRIBUCIÓN DEL FGP PARA 2008					
Entidades	FGP 2007	Crecimiento FGP			FGP 2008
		1 Parte	2 Parte	3 Parte	
A	1.330.861.005	635.037.691	333.327.041	34.364.135	2.333.589.872
B	3.710.692.467	1.770.605.320	827.374.725	556.004.600	6.864.677.113
C	984.853.347	469.935.623	224.522.312	22.787.773	1.702.099.056
D	852.446.314	406.755.880	230.823.468	16.624.505	1.506.650.167
E	4.093.030.634	1.953.042.964	1.001.641.070	242.781.878	7.290.496.547

FUENTE: Elaboración propia

Nota. Los totales pueden no coincidir debido al redondeo.

López¹⁴ menciona que los principales cambios al mecanismo de asignación del FGP son los siguientes:

¹⁴ LOPEZ, A.I. (2008). "Efectos de la Nueva Distribución de Participaciones", en *INDETEC: Federalismo Hacendario*, volumen 152, México. p. 57.

- Existe la posibilidad de incluir nuevos impuestos o derechos dentro de la información de impuestos y derechos locales, puesto que ésta es una posibilidad que ofrece la Ley de Coordinación Fiscal.
- Hay posibilidades para que las Entidades Federativas implementen nuevos gravámenes y aprovechen las potestades tributarias locales, de manera que sus impuestos locales se incrementen.
- La interrelación entre los Estados y los Municipios es muy importante, puesto que es necesario realizar acciones conjuntas que les permitan generar una mayor recaudación de ingresos propios; asimismo, la colaboración entre ambos niveles de gobierno para generar estrategias necesarias para el crecimiento económico.
- Tendrán que revisarse los mecanismos que están implementando para atraer la inversión en su Entidad, lo cual espera tener impactos positivos para el crecimiento.
- Se deberá evaluar e implementar las medidas de administración tributaria necesarias para hacer eficiente la recaudación.
- Se deberá vincular el gasto público con acciones que permitan un mayor desarrollo económico y local.
- Se deberán reorientar los criterios de distribución de participaciones del Estado con los Municipios de manera que estos cuenten con los incentivos suficientes para conjuntar esfuerzos con la Entidad Federativa, ello adecuando la distribución para que guarde relación directa con la recaudación local, y
- Se deberán analizar las acciones que permitan acceder a una mejor recaudación del impuesto predial y los derechos del agua.

2.5 Aportaciones federales.

Las opciones para generar política económica por parte de una Entidad Federativa en México vienen dadas por las participaciones federales ya que se pueden utilizar esos recursos para que cada Entidad oriente su gasto hacia los objetivos de política económica deseados. Por su parte, dentro de las transferencias de recursos que realiza la Federación a los Estados se cuentan también las aportaciones federales, estas son subvenciones condicionadas, por lo que el margen que tiene un Estado para utilizarlas en su política económica es reducido. A continuación de manera breve se exponen las principales características de estas aportaciones como un todo, sin entrar al detalle ya que no son parte troncal del objeto de estudio.

Llamado formalmente *Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios*, este Ramo “surge de la integración de programas y recursos que anteriormente se ejercían a través de los Ramos 12, 25 y 25¹⁵, derivado de una serie de reformas y acciones con el objetivo de descentralizar las responsabilidades y los recursos humanos y materiales, cuyos antecedentes inmediatos a continuación se describen”.¹⁶

Uno de los primeros pasos para la creación de este ramo, es la eliminación en 1992 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y la creación de la Secretaría de Desarrollo Social, con ello, se ponían los pilares para la descentralización del gasto público, que se manifestaría de mayor manera dentro del próximo lustro.

Por otra parte, en cuanto al gasto en educación, en 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, entre el Ejecutivo Federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con ello, cada Entidad Federativa absorbía las responsabilidades educativas de sus demarcaciones. Actualmente prácticamente todas las Entidades Federativas de la República han hecho efectivo este acuerdo.

Derivado de ese acuerdo, para 1993 se crea el Ramo 25, denominado originalmente *Aportaciones para Educación Básica en los Estados* ya que la finalidad

¹⁵ Ramo 12 Salud, Ramo 25 Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos, Ramo 26 Solidaridad y Desarrollo Regional.

¹⁶ CEFEP, (2006). “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” *Serie Cuadernos de Finanzas Públicas*, 2006, México, núm. 9, septiembre

era dotar a las Entidades Federativas con los recursos necesarios para la descentralización educativa.

En cuanto al Ramo 26, este originalmente se llamaba “Solidaridad y Desarrollo Regional”, sin embargo con el cambio de poder político ocurrido en 1994 y con la crisis económica de los años 1994-1995, era imperante un cambio en el nombre del ramo y de las estrategias a seguir para la consecución de los objetivos del mismo. Es por ello, que cambia de nombre a “Superación de la Pobreza”, y su ejercicio se daba principalmente a través de dos fondos:

1. Fondos de Desarrollo Social Municipal: Enfocados principalmente a obras de infraestructura básica en lugares de pobreza: agua potable, alcantarillado, drenaje, etc. Además promovía proyectos productivos.
2. Fondo para el Desarrollo Regional y el Empleo: Los recursos se utilizaban para financiar la construcción de obras en proceso o proyectos de apoyo a grupos sociales conformados por mujeres en condiciones de pobreza, entre otros.

Los dos fondos referidos desaparecen para el ejercicio fiscal de 1998, donde se establece que el Ramo 26 “Superación de la Pobreza” cambia su nombre a “Desarrollo Social y Productivo en Regiones de Pobreza”, y se crean cuatro fondos, que de manera general, muestran sus características a continuación:

1. Fondo para el Desarrollo Productivo: Como su nombre lo indica, era una estrategia promotora del empleo y de los proyectos productivos con cierto énfasis a la mujer.
2. Fondo para Impulsar el Desarrollo Regional Sustentable: Para la planeación y desarrollo de proyectos regionales microrregionales.
3. Fondo para la Atención de Grupos Prioritarios: Para atender a grupos en condiciones de vulnerabilidad, pobreza o inequidad.
4. Fondo de Co-inversión Social y Desarrollo Comunitario: Para financiar proyectos productivos.

El Ramo 26 prevalece con el nombre de Desarrollo Regional y Productivo en Regiones de Pobreza hasta el ejercicio presupuestal de 1999; para el año 2000, desaparece con motivo de la integración paulatina de algunos fondos y recursos al

Ramo 33 surgidos en 1998; otros programas son asimilados al presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social.¹⁷

Un paso fundamental en la historia de la descentralización del gasto público en México (aunque no de la política económica) ocurrió en la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1998, donde se crea el llamado ramo 33, debido a que se reforma y adiciona el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, que se tradujo en la creación de la figura de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.

Cuadro 2.4. MEXICO, PRINCIPALES CAMBIOS A LA COMPOSICIÓN DEL RAMO 33.		
1998 (5 fondos)	1999 (7 fondos, se adicionan dos fondos)	2007 (8 fondos, se adiciona un fondo)
<ul style="list-style-type: none"> Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA). Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), que se divide en dos: <ol style="list-style-type: none"> Fondo para la Infraestructura Social Estatal, y Fondo para la Infraestructura Social Municipal. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. (FORTAMUNDF). Fondo de Aportaciones Múltiples. 	<ul style="list-style-type: none"> El Fondo de Aportaciones Múltiples se divide en tres: <ol style="list-style-type: none"> Fondo para la Asistencia Social (DIF). Fondo para Infraestructura Educativa Básica, y Fondo para Infraestructura Educativa Superior. <p>SE ADICIONAN DOS FONDOS AL RAMO 33:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), y Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal. 	<p>SE ADICIONA UN FONDO:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
<p>FUENTE: CEFP, (2006). "Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios" <i>Serie Cuadernos de Finanzas Públicas</i>, 2006, México, núm. 9, septiembre e IZQUIERDO, (2009). A.D. (2008). "EL FAFEF: Aspectos Determinantes de su Distribución", en <i>INDETEC: Federalismo Hacendario</i>, volumen 152, México.</p> <p>NOTA: El FAFEF inició realmente a funcionar en el año 2000 como Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), y ha tenido innumerables cambios, tanto en su clasificación dentro de los ramos, como en la formula para la distribución de los recursos.</p>		

¹⁷ CEFP. (2006). *Op. Cit.*

2.6. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).

El SNCF busca la uniformidad tributaria y evitar la doble tributación, para conseguirlo, las Entidades Federativas tuvieron que renunciar a diversas facultades tributarias, el siguiente cuadro muestra algunas:

Algunos impuestos a los que han renunciado las Entidades Federativas con la creación de la Ley de Coordinación Fiscal.	<ul style="list-style-type: none">• Sobre ingresos mercantiles.• Sobre enajenación de vehículos de motor.• Sobre capitales con garantía de inmuebles.• Sobre diversiones, espectáculos y aparatos fonoelectrónicos.• Sobre honorarios.• Sobre erogaciones turísticas.• Sobre bebidas alcohólicas.• Sobre sacrificio de ganado.• Sobre ejercicio de actividades mercantiles.• Sobre juegos permitidos.• Sobre anuncios.
FUENTE: CRUZ, (2004). <i>Op. Cit.</i> p. 96.	
NOTA: Estos son algunos de los impuestos a los que han renunciado establecer las Entidades Federativas en sus territorios para verse favorecidos con los recursos que les envía la Federación a través de los mecanismos que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Cabe señalar que estos impuestos varían con respecto a cada Entidad.	

2.6.1. El marco jurídico constitucional del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.

En el Artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece que *“Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental”*.¹⁸ Es precisamente, este artículo

¹⁸ Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultada en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

constitucional el que da sustento al federalismo mexicano, al señalar el tipo de gobierno que prevalecerá y las relaciones entre estados y gobierno federal.

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El sustento básico del federalismo mexicano reside en el Artículo 40 Constitucional, ya citado con anteriormente, que dicta la forma de gobierno del país.

El marco básico hacendario de la Constitución tiene su punto de partida en el Artículo 31, fracción IV, que plantea las obligaciones de los mexicanos de *“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”*.

Como ya se mencionó, en el Artículo 73, se enmarcan las facultades del Congreso de la Unión, en su fracción XXIX se establece la facultad de establecer contribuciones sobre:

1. Comercio exterior.
2. Aprovechamiento y explotación de los recursos naturales.
3. Instituciones de crédito y sociedades de seguros.
4. Servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación.
5. Especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza.

De los ingresos obtenidos por los gravámenes especiales, la participación a los Estados se realizará conforme a lo que establezca la ley secundaria federal, y sus legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios.

El Artículo 131 Constitucional señala la “facultad privativa de la Federación para gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional.”, y el Artículo 117 en sus fracciones IV a VI, prohíbe a los Estados gravar la circulación o el consumo de mercancías nacionales o extranjeras, de personas o de aduanas. Análogamente, el Artículo 118 Constitucional, Fracción I, les

prohíbe a los Estados, sin previa autorización del Congreso de la Unión, “Establecer derechos sobre importaciones o exportaciones”.

Así, se puede ver que la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos ofrece un despliegue preciso de las materias asignadas al Gobierno Federal, pero no a los Estados.

La Constitución también establece que tanto Estados como Municipios gozan de considerable autonomía, pero la mayoría de las actividades de gasto y recaudación están concentradas en la administración federal, y así lo señala el Artículo 73 en su fracción XXIX, en la que menciona que sólo el Congreso tiene la facultad de establecer contribuciones sobre ciertos bienes y servicios, aclarando que las Entidades Federativas participarán del rendimiento de estas contribuciones en la proporción que la ley secundaria federal determine; así como el Artículo 74 fracción IV en la que señala como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados la de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación.

2. 6. 2. Composición del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF).

Cuadro 2.5. Transferencias fiscales a las entidades federativas en México, 1980-1998
(porcentaje de la recaudación fiscal participable)

Año	Participaciones (no condicionadas)	Aportaciones (condicionadas)	Total
1980	17.27	--	17.27
1985	20.14	--	20.14
1990	20.34	--	20.34
1993	22.07	12.33	34.40
1994	23.27	13.90	37.17
1995	23.11	18.85	41.96
1996	24.58	16.34	40.92
1997	24.78	19.68	44.46
1998	24.90	26.79	51.69

FUENTE: SHCP, citado en AYALA, (2003), *Op. Cit.* p. 229.

El federalismo fiscal se ordena en un conjunto orgánico legalmente denominado El Sistema Nacional de coordinación Fiscal (SNCF).

En 1979, se constituyó el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), entrando en vigor de 1º de enero de 1980. En éste, se establecen el conjunto de disposiciones y órganos que regulan la cooperación entre la Federación y las Entidades Federativas, incluyendo el Distrito Federal, con la finalidad de lograr una óptima administración de los ingresos y vigilar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, así como evitar la múltiple tributación o “conurrencia tributaria” hacia una misma fuente impositiva.

Jurídicamente, el SNCF, se trata de un mecanismo formal del federalismo fiscal para introducir nuevos temas en la agenda legal y jurisdiccional. Entre ellos:

- La fundamentación jurídica para la aprobación técnica y legal por parte de los congresos locales con relación a los actos de concertación, convenio y/o contratación que celebra el Ejecutivo del Estado con otras personas jurídicas y representantes de otros gobiernos locales.

- La acreditación del punto de vista de los ayuntamientos como instancias gubernamentales autónomas reconocidas constitucionalmente, en la celebración de convenios Estado-Federación en materia tributaria y fiscal.

Los objetivos del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal son:

1. Armonizar el sistema tributario mediante la coordinación del sistema fiscal de la federación con las Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal.
2. Establecer y distribuir las participaciones que correspondan a sus haciendas públicas en los ingresos federales.
3. Fijar las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales.
4. Construir los órganos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y financiamiento.
5. Apoyar al sistema de transferencias mediante los fondos de aportaciones federales.¹⁹

El SNCF está a cargo del Ejecutivo, es aprobado por el Congreso y no emana de la Constitución directamente, y para poder llevar a cabo los objetivos de armonización entre Estados, Municipios y Gobierno federal es necesario un convenio de adhesión entre la Federación y los Estados.

¹⁹ LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, consultada en <http://www.sncf.gob.mx/sinacofi/Legislacion/lcf.aspx>.

3.- LA LIBERTAD ECONÓMICA Y SU MEDICIÓN EN ESPAÑA Y AMÉRICA DEL NORTE.

El primer capítulo mostró los elementos teóricos bajo los cuales está circunscrita la acción del gobierno estatal dentro de los parámetros de la eficiencia económica. El segundo capítulo buscó enumerar de manera somera, los principales procesos que ha tenido la descentralización de la política económica en México. Es decir, primero se limitó el objeto de estudio en la teoría económica, para después hacerlo en su realidad histórico-administrativa.

La libertad económica es un elemento que, como es sabido, es difícil de definir, y más aún, de medir. También es importante mencionar que distintos autores que han estudiado este concepto le observan características que pueden detonar el desarrollo económico, mientras que otros creen que puede incrementar el crecimiento económico, y algunos otros, creen que puede aumentar el bienestar social. En los tres casos, es notorio, que la libertad económica es positiva.

Este capítulo, busca narrar de manera breve, algunos ejercicios de medición de la libertad económica que en la academia de los principales socios económicos de México (EE. UU. y Canadá) se han realizado. Así como los estudios realizados por académicos de un país cercano y afín por cuestiones histórico-políticas, e institucionales. Es decir, España.

Para el caso de los Estados Unidos de América, se toma en cuenta como base del ejercicio de medición de la libertad económica al trabajo realizado por The Heritage Foundation y The Wall Street Journal. Para el Caso de Canadá, se toma en cuenta el proyecto realizado por The Fraser Institute, que también elabora un proyecto exclusivo para los tres países que componen la América del Norte, y para España, se toma en cuenta el proyecto elaborado por un grupo de investigadores españoles de la Universidad Complutense de Madrid.

3.1. La libertad económica en las Comunidades Autónomas de España.¹

Este trabajo ya mencionado, se aboca a la medición de dos componentes de la libertad económica, que a su vez han sido desagregados en otros componentes en los cuales se expone su propia medición. Se basa en los estudios realizados por el Fraser Institute y la Heritage Foundation. Es de suma importancia este estudio porque adecua la base de comparación de las economías nacionales a las subnacionales.

El estudio español, toma en cuenta dos pilares: La regulación y la dimensión del sector público. Para seleccionar las variables que dan pie al índice de regulación, los investigadores tomaron en cuenta sectores en los que se den simultáneamente dos circunstancias: En primer lugar, que las Comunidades Autónomas tengan competencia regulatoria, y en segundo lugar, que hayan hecho uso en la práctica de las mismas y que muestren diferencias tales que los agentes económicos hayan sido afectados de manera relevante por ellas.

Por su parte, para la elaboración del índice de dimensión del sector público, se han tomado en cuenta cinco variables principales que representan distintos aspectos fiscales del sector público.

El índice de libertad económica está dado por el promedio simple de los índices de regulación y el índice de dimensión del sector público. Su rango de valores va de 0 a 1, donde 1 es la máxima intromisión en los asuntos económicos por parte del sector público y 0 representa la mínima intervención. Dicho rango, resulta de “normalizar” estadísticamente los resultados obtenidos para cada indicador, para ello utilizan la siguiente fórmula:

$$I_{ij} = \frac{V_{ij} - \min(V_{1j}, V_{2j}, \dots, V_{15j})}{\max(V_{1j}, V_{2j}, \dots, V_{15j}) - \min(V_{1j}, V_{2j}, \dots, V_{15j})}$$

¹ CABRILLO, F. (2008). *Libertad económica en las Comunidades Autónomas*, Madrid: Universidad Complutense de Madrid-Marcial Pons.

Los aspectos que toma en cuenta este estudio para la elaboración del índice de regulación son los siguientes: Comercio, educación, medio ambiente, sanidad, movilidad y vivienda.

En cuanto al comercio, se busca hacer un análisis de los obstáculos a los que se enfrenta un empresario al momento de establecer un nuevo negocio, estas limitantes están dadas por cuestiones de dinero, tiempo y procedimientos burocráticos. Si estos son vastos, probablemente algunos empresarios no se incorporen regularmente a la actividad económica o permanezcan en la informalidad.

Referente a la educación, la variable busca hacer una comparativa de las distintas estructuras educativas de las C.A. por lo que se toman en cuenta los gastos por alumno, por centros, el flujo de alumnos de centros públicos y un ratio de profesores.

Con respecto al medio ambiente, se busca hacer un diagnóstico de las C.A. en cuanto a las normativas ambientales que poseen. Es conocido que las normas ambientales pueden tener efectos directos sobre la posibilidad de establecerse en determinados lugares por parte de las empresas.

La movilidad se toma en cuenta haciendo un ejercicio analítico sobre las posibilidades que tiene la fuerza de trabajo para desempeñar su labor en otras partes de la geografía española.

La sanidad es tomada en cuenta de una manera similar a la educación. Es decir, se busca hacer un diagnóstico estructural sobre las características del sector; si es predominantemente público o privado y los requerimientos mínimos para establecer unidades médicas del tipo oftalmológicas o farmacias.

El último factor que se toma en cuenta al momento de elaborar el índice de regulación es la vivienda, sobre este tema, se busca hacer una disección sobre las

viviendas libres y protegidas, donde más viviendas libres, representan una mayor libertad económica.

Es preciso mencionar, que el índice de regulación de las C.A. está definido por la propia estructura del federalismo español, que aunque similar en muchos aspectos a otros países de corte federal, no tiene por qué manifestar los mismos indicadores que por ejemplo, México.

Esta precisión es importante, porque en cuanto al indicador de dimensión del gasto público, este manifiesta más simetrías con otros países de corte federal, ya que la estructura fiscal (esto es, el mecanismo asignado a los gobiernos de entes subnacionales para obtener sus ingresos y tomar sus decisiones de gasto) no es tan diferente en el fondo, y solo muestra diferencias en la forma, que en este caso, viene definida por los porcentajes de cada ratio o indicador.

El índice de gasto público también tiene seis componentes, y metodológicamente se determina de la misma manera que el de regulación, los elementos que toma en cuenta son los siguientes: Gasto público, esfuerzo fiscal, deuda pública, asalariados del sector público, impuestos y transferencias y subsidios.

En cuanto al gasto público, se toma en cuenta el porcentaje derivado del ratio entre el gasto público y el total del PIB.

Referente al esfuerzo fiscal, se incorpora el índice de Frank, que a diferencia de la presión fiscal, utiliza la capacidad impositiva real de las personas, para así introducir la misma al índice de libertad económica.

En el rubro de la deuda pública, se toma en cuenta el indicador de deuda pública como porcentaje del PIB, que a efectos de potencializar inversiones, es un indicador muy referido por el sector privado.

Los asalariados del sector público son computados como indicativo del dinamismo económico de las C.A. y se obtienen como porcentaje de la población ocupada total. Como es lógico, solamente se utilizan en el diseño del índice los asalariados de las C.A. no del gobierno central, ni municipalidades.

En cuanto a los impuestos, las C.A. tienen competencia por ley de allegarse recursos mediante imposiciones de carácter subnacional. En el caso de España, destaca el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos de documentación.

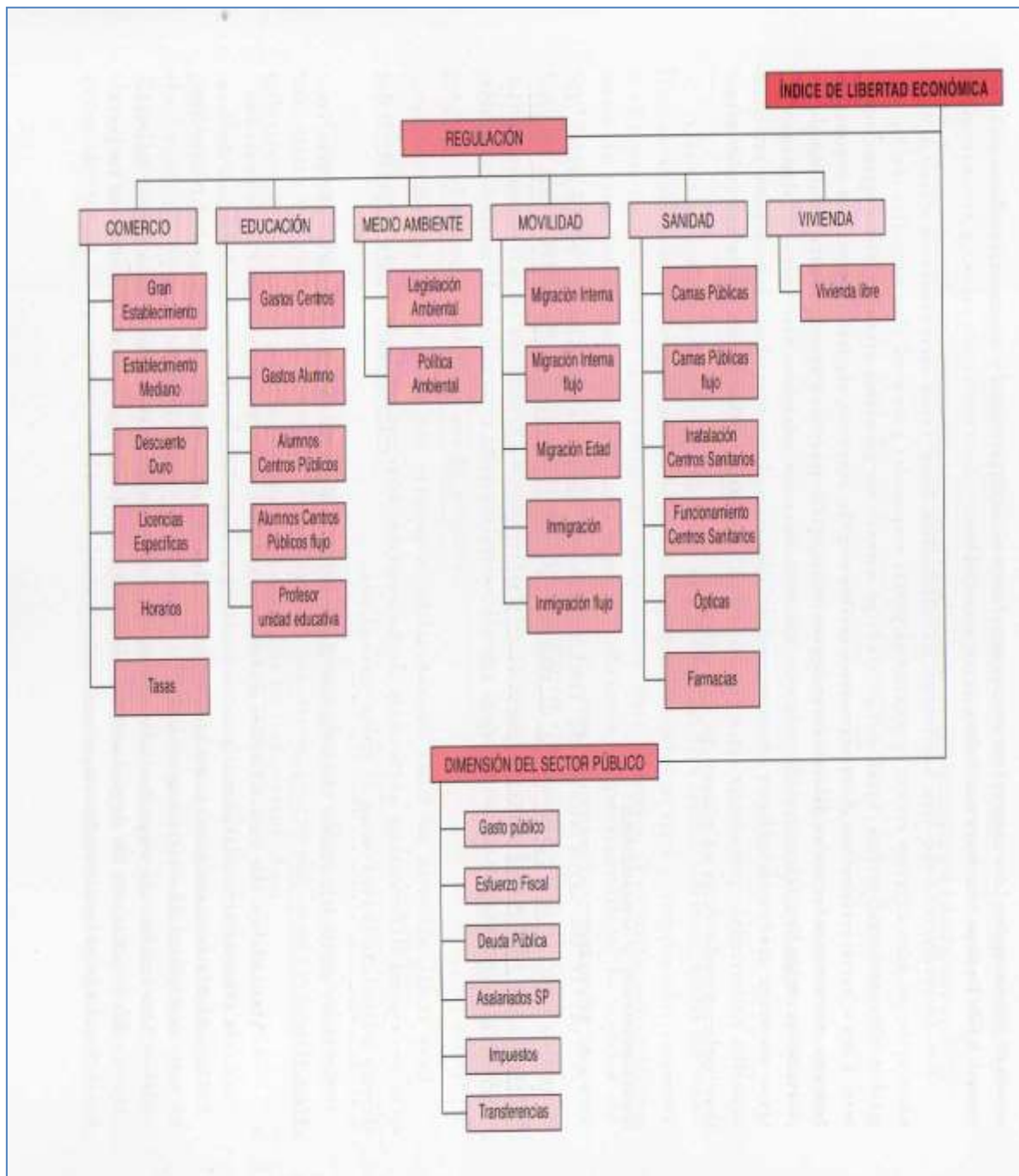
Por último, las transferencias y subsidios de cada C.A. se toman en cuenta como porcentaje del PIB, una elevada magnitud de transferencias describe una economía menos dinámica, ya que depende mayormente del sector público.

Para la obtención del indicador de regulación, como del sector público, se utiliza el promedio simple de los seis componentes de cada rubro, utilizando la siguiente fórmula:

$$IDSP_i = \frac{\sum_{j=1}^6 I_{ij}}{6}$$

De manera esquemática, el índice de libertad económica de las Comunidades Autónomas de España está bosquejado de la siguiente manera:

FUENTE: Tomado de CABRILLO, F. (2008). *Op. Cit.* p. 29.



Los resultados obtenidos en el ejercicio, se ilustran en el siguiente cuadro:

GRÁFICO 3.1.

LA LIBERTAD ECONÓMICA EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ESPAÑOLAS, 2008.			
CCAA	Índice de Regulación	Índice de Dimensión del Sector Público	Índice de Libertad Económica
Madrid	0,316	0,072	0,194
Baleares	0,387	0,185	0,286
Rioja	0,392	0,221	0,306
C. Valenciana	0,324	0,303	0,313
Canarias	0,377	0,301	0,339
Cataluña	0,429	0,300	0,364
Murcia	0,337	0,504	0,420
Castilla y León	0,452	0,410	0,431
Aragón	0,515	0,355	0,435
Cantabria	0,472	0,493	0,482
Asturias	0,520	0,492	0,506
Castilla-La Mancha	0,430	0,586	0,508
Galicia	0,489	0,599	0,544
Andalucía	0,508	0,651	0,579
Extremadura	0,532	0,876	0,704
Navarra	0,482	**	**
País Vasco	0,443	**	**
**NOTA: Navarra y País Vasco no se incluyen debido a sus características especiales de financiación.			
FUENTE: CABRILLO, F. (2008): <i>Op. Cit.</i> P. 15.			

3.2. El índice de libertad económica de The Heritage Foundation y The Wall Street Journal.²

La Fundación Heritage es un centro académico y de investigación cuya misión es formular y promover políticas basadas en los principios de la libre empresa, gobierno mínimo y libertad individual, entre otros. Se ubica en los Estados Unidos de América.

El Wall Street Journal es una publicación de liderazgo a nivel mundial en cuanto al tema de los negocios, inversiones y política económica. También se ubica en los Estados Unidos de América. Ambas instituciones, publican desde 1995, el *Índice de Libertad Económica*, la versión que se refiere en este estudio es la del año 2010.

² THE HERITAGE FOUNDATION-THE WALL STREET JOURNAL, (2010). *2010 Index of Economic Freedom*, Washington, D.C.

La publicación citada, grosso modo, menciona que se da la libertad económica cuando en una sociedad cada persona controla el fruto de su propio trabajo e iniciativa. Los individuos tienen el poder, de hecho, el derecho a decidir dónde vivir y trabajar, también tienen el derecho a la propiedad privada y a disponer de ella según les convenga, además, no existe coerción sobre las personas de ningún tipo más que la necesaria para la financiación de los bienes públicos y la seguridad de las personas y sus libertades.

De manera puntual, la definición es la siguiente: *“A comprehensive definition of economic freedom should encompass all liberties and rights of production, distribution, or consumption of goods and services. The highest form of economic freedom should provide an absolute right of property ownership; fully realized freedoms of movement for labor, capital, and goods; and an absolute absence of coercion or constrain of economic liberty beyond the extent necessary for citizens to protect and maintain liberty itself.”*³

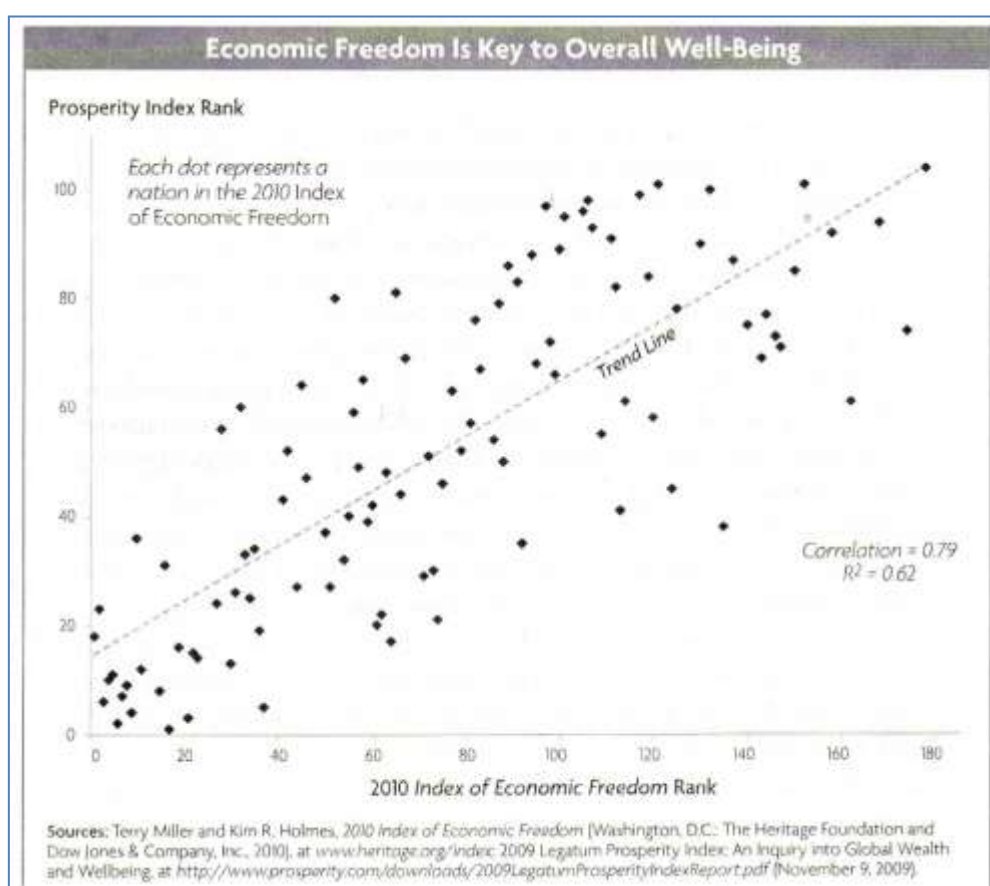
Menciona también que en una sociedad económicamente libre, el gobierno es caracterizado por su apertura a la sociedad y su transparencia en la toma de decisiones y ejecución del gasto.

En la sociedad, las personas pueden tener éxito o fracaso económico solamente por su mérito. Y es indebido que alguna persona se vea discriminada por cuestión de raza, origen étnico, sexo, preferencia sexual, política, relaciones familiares o políticas. En fin, por cualquier aspecto no relacionado al mérito individual. Las empresas, se deben desarrollar en un contexto de competencia perfecta, donde todas tienen la oportunidad de tener éxito o no tenerlo, dependiendo exclusivamente de las decisiones tomadas por los empresarios.

En conclusión, los pilares del índice de libertad económica presentado son el empoderamiento del individuo, la no discriminación y la apertura a la competencia.

³ Tomado de: THE HERITAGE FOUNDATION – THE WALL STREET JOURNAL, (2010). *Op. Cit.* p. 58.

Para el documento descrito, existe una clara relación entre la libertad económica y diversos indicadores económicos, políticos y sociales. Por ejemplo, se afirma que los países que tuvieron un incremento en su libertad económica en los recientes años han tenido una mejora en la disminución de sus niveles de pobreza en comparación con aquellos países que no lo hicieron. La relación más clara estadísticamente hablando es la compuesta por la libertad económica y el bienestar social, según se aprecia en el siguiente gráfico:



FUENTE: Tomado de THE HERITAGE FOUNDATION – THE WALL STREET JOURNAL, (2010). *Op. Cit.* p. 17.

También se afirma que países que consiguen en apariencia una mejora en los indicadores de libertad económica han llegado a mantener un ingreso promedio de hasta diez veces al de aquellos países que se ubican en el fondo de los indicadores. Se resalta también la relación positiva entre libertad económica e indicadores de salud, educación y seguridad.

Además, se sostiene que los países con indicadores positivos en la libertad económica crecen a una tasa más rápida que aquellos que cuentan con indicadores no tan favorables, se recuperan más rápido de choques económicos externos y son capaces de esparcir más rápidamente entre la población todos los beneficios del crecimiento económico. Según la publicación, es obvio que las economías más abiertas al mundo sean las que sufran de manera más rápida y fuerte las consecuencias de un efecto económico negativo internacional, pero también es obvio que su recuperación será más rápida, y con mayor vigor.

También es necesario destacar, que la investigación sostiene una nula relación entre los incentivos fiscales y el crecimiento económico, según se aprecia en el siguiente gráfico:



FUENTE: Tomado de THE HERITAGE FOUNDATION – THE WALL STREET JOURNAL, (2010). *Op. Cit.* p. 3.

Al final, la idea fundamental del Índice de Libertad Económica es que mientras más libre sea la economía, mejor será su desempeño en el largo plazo.

El estudio toma en cuenta diez aspectos para la formulación de su índice, los cuales son:

1.- Libertad de negocios: Tiene que ver con el derecho del individuo a establecer y operar un negocio sin la interferencia del Estado, ya que regulaciones onerosas y redundantes afectan los costos de las empresas, afectando su eficiencia y su futuro en el mercado. Esta libertad tiene que estar garantizada tanto al momento de la apertura, como de la operación, y en dado caso, del cierre del negocio.

Como indicador es una medida cuantitativa para medir la facilidad de empezar, operar y cerrar una empresa, representa la carga regulatoria, o bien, la eficiencia en la regulación del sector público. Toma en cuenta el número de procedimientos para abrir un negocio, los días que se requieren, el costo de apertura como porcentaje del ingreso per cápita, el capital mínimo, el número de procedimientos obligatorios para obtener una licencia, el costo y el tiempo, también toma en cuenta el tiempo para cerrar un negocio, la tasa de recuperación de cierre de un negocio, así como el costo de conseguir el cierre definitivo.

2.- Libertad de comercio: Refleja la factibilidad de los ciudadanos de un país para interactuar económicamente con ciudadanos fuera de sus fronteras geográficas, el Estado puede interferir en esta factibilidad estableciendo barreras arancelarias o no arancelarias, así como cuotas a la relación comercial de un país con otro.

Como indicador, es una medida que busca describir la magnitud de las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional.

3.- Libertad fiscal: Está referida a la posibilidad de un individuo o persona de poder disfrutar del producto de su trabajo, ya que el Estado tiene la posibilidad de realizar exacciones al mismo mediante los impuestos. Mientras mayores sean los impuestos, menor es la libertad económica ya que altas tasas impositivas reducen los incentivos tanto para las empresas como para las personas, de salir al mercado de factores y participar en el mismo.

Como indicador, busca medir la carga fiscal atribuible al gobierno, incluye los impuestos directos a las personas y los impuestos a los ingresos de las empresas y corporaciones, es medida en términos de PIB.

4.- Gasto del gobierno: Más allá del gasto del gobierno en los denominados bienes públicos, que es visto como una benéfica inversión social, un abundante gasto del gobierno puede desplazar la inversión privada, afectando la libertad económica.

Cuantitativamente, mide la participación del gobierno en la economía mediante su proporción en el PIB, contempla todo el gasto corriente del sector público, que incluye obviamente a las transferencias sin contraprestación.

5.- Libertad monetaria: Una sociedad libre necesita de una moneda estable y confiable ya que es utilizada como medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor, la mejor manera de que la moneda cuente con estas características es una baja inflación y un banco central autónomo que no permita intervenciones en el mercado de divisas.

Como indicador, combina la estabilidad de precios con una evaluación sobre el control de los mismos. Tanto la inflación como la intervención pública en el mercado para regular los precios afectan la libertad económica, por lo que la estabilidad de precios sin la intervención pública es el escenario ideal para la libertad económica.

6.- Libertad de inversión: Un ambiente de apertura a las inversiones provee oportunidades de inversión máximas e incentivos para expandir la actividad económica y la creación de empleos, un escenario donde los individuos y las empresas tengan la facilidad de invertir donde económicamente mejor les parezca incrementa la libertad económica, mientras que intervenciones del sector público o restricciones a las inversiones privadas causan deterioro a la misma.

Como indicador, en una economía libre no deben existir limitaciones al flujo de inversiones, las empresas y las personas deben tener la facilidad de mover sus recursos de un lugar a otro en términos de sus incentivos económicos. Para la elaboración del indicador se toman en cuenta elementos relativos a la propiedad privada, controles del tipo de cambio, la posibilidad de expropiación por parte del sector público sin la debida compensación, restricciones sectoriales a la inversión y a la eficiencia de las leyes que sancionan la inversión nacional y extranjera.

7.- Libertad financiera: La regulación al sistema financiero debe ser de tal manera que asegure la transparencia y honestidad del mismo, ir más allá puede menoscabar la libertad económica.

Cuantitativamente, busca medir la seguridad del sistema financiero, su independencia y la ausencia de competencia en el sistema financiero, que reduciría la libertad económica del lugar.

8.- Derechos de propiedad: La posibilidad de contar con propiedad privada y bienes económicos es la motivación más importante de las empresas y los trabajadores para incorporarse al mercado de factores, el aseguramiento del fruto del trabajo es garantía de libertad económica, también lo es el asegurar el cumplimiento de los contratos y evitar la discriminación en el mercado en todas sus formas, así como los privilegios.

Como indicador, mide la independencia de los jueces, la inexistencia de corrupción dentro del sistema judicial, la promoción y defensa de la propiedad privada por parte del Estado, y la facilidad para el cumplimiento de los contratos, entre otros.

9.- Ausencia de corrupción: La corrupción puede causar que falle la integridad del sistema, por lo que las regulaciones que el sector público imponga deben ser eficientes ya que hay suficiente evidencia estadística de que la ineficiente regulación solamente promueve la corrupción.

Cuantitativamente, se toman en cuenta los indicadores de Transparencia Internacional, ya que un país con corrupción, en materia económica, introduce incertidumbre e inseguridad a las relaciones económicas, entre otros problemas.

10.- Libertad de trabajo: La posibilidad de que el trabajador se desempeñe geográficamente en el lugar que quiera y trabaje el tiempo que desee es parte importante de la libertad económica, al respecto, en el fondo de toda regulación laboral debe existir la posibilidad de un intercambio libre, ya que está demostrado que mientras mayor libertad laboral, menor tasa de desempleo.

Como indicador, se busca evaluar la situación del mercado de trabajo mediante aspectos relativos al ratio entre el salario mínimo y el salario promedio, los obstáculos que pudiera haber para contratar trabajadores, la rigidez de horarios, la dificultad que presenta la liquidación de trabajadores y la cuantía de las indemnizaciones, entre otros.

3.3. El indicador del Instituto Fraser.⁴

El Instituto Fraser es un centro de pensamiento ubicado en Canadá, se distingue por ser la primera institución en medir la libertad económica, desde sus inicios contó con grandes economistas en el diseño y aplicación de las investigaciones, como Milton Friedman.

La publicación, menciona que para el año citado (con datos de 2008) por primera vez en muchos años la libertad económica en el mundo ha manifestado un ligero retroceso, y eso, lejos de ayudar a que el mundo salga de la recesión económica, prolongará durante más tiempo el desastre, hace una analogía con los sucesos históricos de la crisis de 1929. Para el proyecto, el camino a seguir es aumentar la libertad económica, con ello se saldría de la recesión de una manera más rápida y consistente, ya que si se opta por la otra opción, que sería dejar que el proceso político guíe a la recuperación económica, probablemente las instituciones políticas orienten los recursos hacia los sectores con mejor rentabilidad política, y no económica.

También es necesario poner la economía en manos de los verdaderos emprendedores, y no de aquellos capitalistas que solamente tienen cercanía con las instituciones políticas (crony capitalists). Los primeros sabrán orientar los recursos hacia los lugares donde estos se revalorizarán, incrementando el desarrollo económico, mientras que los segundos solamente buscarán canonjías y favores políticos con el fin de incrementar su riqueza personal.

La libertad económica que mide el Instituto Fraser está basada en cuatro pilares:

- La elección personal.
- El intercambio voluntario coordinado por los mercados,
- La libertad de entrada y competencia en los mercados, y
- La protección de las personas y sus bienes frente a las agresiones de terceros.

⁴ GWARTNEY, J. D. et al. (2010). *Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report*, consultado en: www.fraserinstitute.org

La metodología general de elaboración está basada en tres pilares: El primero estriba en que se utiliza información objetiva en la mayoría de los casos, recurriendo a información subjetiva o encuestas solamente en los casos imprescindibles, el segundo es que se toma en cuenta solamente información provista por fuentes externas del tipo Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial o el Foro Económico Mundial, y la tercera es mostrar transparencia en la transformación de datos crudos a indicadores, ilustrando toda la metodología utilizada.

Después, el índice se aboca a la medición de la libertad económica en cinco áreas: Tamaño del gobierno, estructura legal, seguridad y derechos de propiedad, acceso a una moneda sana o firme, libertad de comercio internacional y la regulación del crédito, el trabajo y los negocios. Lo anterior produce un índice compuesto de cuarenta y dos variables.

De manera esquemática, el índice de libertad económica del Instituto Fraser se compone de la siguiente manera:

1.- Tamaño del Estado: Gasto, impuestos y empresas.

- A. Gasto público general de consumo en porcentaje del consumo total.
- B. Transferencias y subsidios como porcentaje del PIB.
- C. Empresas e inversiones públicas.
- D. Tipo impositivo marginal máximo.
 - i. Impuesto sobre la renta.
 - ii. Impuesto sobre la renta y salarios.

2.- Estructura legal, seguridad y derechos de propiedad.

- A. Independencia judicial.
- B. Imparcialidad de los tribunales.
- C. Protección de los derechos de propiedad.
- D. Interferencia militar en el Estado de Derecho y el proceso político.

- E. Integridad del sistema jurídico.
- F. Cumplimiento legal de los contratos.
- G. Restricciones regulatorias a la venta de inmuebles.

3.- Acceso a una moneda sana o firme.

- A. Crecimiento del dinero.
- B. Desviación estándar de la inflación.
- C. Inflación del último año.
- D. Libertad para mantener cuentas bancarias en moneda extranjera.

4.- Libertad de comercio internacional.

- A. Impuesto sobre el comercio internacional.
 - i. Ingresos sobre impuestos sobre el comercio.
 - ii. Tasa arancelaria promedio.
 - iii. Desviación estándar de las tasas arancelarias.
- B. Barreras regulatorias al comercio.
 - i. Barreras no arancelarias.
 - ii. Coste de trámites al comercio internacional.
- C. Tamaño del sector comercial respecto a lo esperado.
- D. Tipos de cambio en el mercado negro.
- E. Controles del mercado internacional de capital.
 - i. Restricciones a la propiedad y la inversión extranjeras.
 - ii. Controles de capital.

5.- Regulación del crédito, el trabajo y los negocios.

- A. Regulación del crédito.
 - i. Propiedad de los bancos.
 - ii. Competencia de bancos extranjeros.
 - iii. Crédito al sector privado.
 - iv. Controles de tasas de interés.

B. Regulaciones del mercado de trabajo.

- i. Regulaciones de contratación y salario mínimo.
- ii. Regulaciones de contratación y despido.
- iii. Negociación colectiva centralizada.
- iv. Regulación de horas de trabajo.
- v. Coste legal de despido.
- vi. Servicio militar obligatorio.

C. Regulaciones de negocios.

- i. Control de precios.
- ii. Requisitos administrativos.
- iii. Costos burocráticos.
- iv. Empezar un negocio.
- v. Pagos fuera de mercado o sobornos.
- vi. Restricciones para obtención de licencias.
- vii. Costo de pagar impuestos.

Los resultados de los indicadores no se ponderan, ya que todos los aspectos con los que se mide la libertad económica son igualmente importantes, por lo que solamente se utilizan promedios simples. Los grandes aspectos a considerar, cualitativamente tienen que ver con los siguientes elementos:

Tamaño del Estado, gastos, impuestos y empresas: Si la asignación de los recursos sociales se hace vía el mecanismo político y no vía el mercado, se deteriora la libertad económica; la asignación de los recursos individuales y la riqueza individual debe ser resultado de la elección individual y no de la elección colectiva.

En cuanto a las empresas públicas, algunas veces estas operan bajo una protección jurídica que menoscaba su eficiencia por lo que muchas veces estas deben funcionar gracias a recursos que son detraídos de los ciudadanos vía los impuestos.

Una alta carga fiscal también afecta la libertad económica ya que se sustrae a los ciudadanos el fruto de su trabajo.

Estructura legal, seguridad y derechos de propiedad: Es necesario que las empresas y las personas tengan por seguro el cumplimiento de los contratos, ya que ello proporciona certidumbre al intercambio y la inversión, si las empresas no tuvieran esta certeza, se deterioraría el interés de invertir. Por su parte, el Estado debe ser el garante del cumplimiento de los contratos y debe también proteger la propiedad privada y el fruto del trabajo de los individuos y las empresas, esto es importante, porque no existirán incentivos al intercambio si no hay garantía de que se protegerán los resultados de los intercambios. Los datos se toman del Foro Económico Mundial, del proyecto Haciendo Negocios, del Banco Mundial y la Guía Internacional de Riesgo-País.

Acceso a una moneda firme o sana: El fenómeno monetario de la inflación afecta la actividad económica debido a que introduce incertidumbre sobre los precios y rendimientos futuros de los intercambios, ya que altera los precios relativos y los precios del cumplimiento de los contratos, por lo que afecta los derechos de propiedad y la libertad económica.

Por ello, es importante también que en una economía dada los ciudadanos puedan optar por elegir entre depositar sus valores y riqueza en la moneda nacional o extranjera que mejor se adapte a sus necesidades de consumo e inversión. Un sistema bancario honesto, transparente y autónomo es una vía excelente para alcanzar tales objetivos.

Libertad de comercio internacional: Prácticamente todos los países establecen restricciones arancelarias o no arancelarias al comercio internacional; tal práctica afecta su libertad económica. Actualmente, el desarrollo informático y tecnológico en general permite que exista un intercambio de bienes y servicios entre distintas fronteras nacionales con un mayor vigor, por lo que las barreras al intercambio comercial afectan la libertad económica ya que reducen la convertibilidad de las monedas.

Además, es preferible para la libertad económica un mercado de divisas sin intervención, que la moneda refleje su valor real en el mercado.

Regulación del crédito, el trabajo y los negocios: En general, las regulaciones no deben impedir el intercambio libre de bienes y servicios, ni la manifestación de las voluntades en los mercados, por lo que demerita la libertad económica la existencia de restricciones para participar en el mercado.

En el caso del trabajo, se debe permitir que el mercado establezca los salarios y las condiciones de contratación y despido, mientras que en el caso de los negocios en general, se deben eliminar las barreras ineficientes a la constitución de nuevas empresas en aras de una mejora en el crecimiento económico.

Al final, el Instituto Fraser llega a conclusiones estadísticas que promueven la búsqueda de la libertad económica, como las siguientes:

- Los países en el cuarto cuartil de libertad económica tienen en promedio un ingreso per cápita mayor a ocho veces el ingreso per cápita de los países en el primer cuartil.
- La esperanza de vida de los países en el cuarto cuartil de libertad económica supera en casi 20 años a la esperanza de vida de los habitantes de los países en el primer cuartil.
- Los países con mejor libertad económica tienen casi 3 veces menos corrupción que los países con menor libertad económica.
- Los países con mejor libertad económica tienen casi 3 veces más derechos políticos que los países en el fondo de la clasificación.

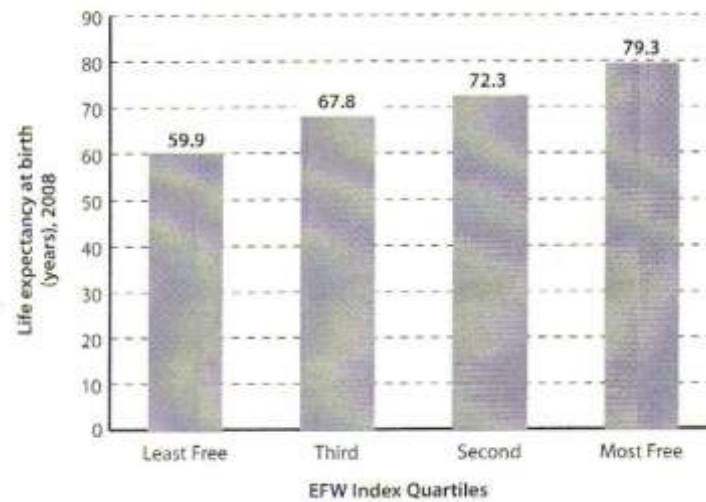
Gráficamente:



FUENTE: GWARTNEY, J. D. et al. (2010). *Op. Cit.* p. 17.

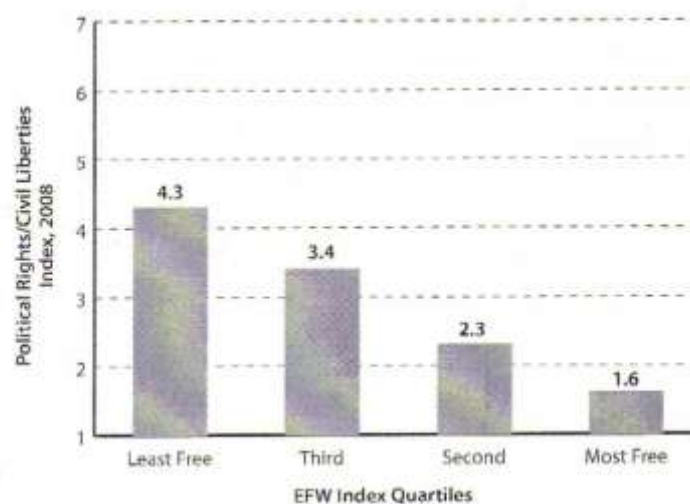
En dólares del 2005, el ingreso per cápita aumenta en la medida que aumenta la libertad económica.

En cuanto a la esperanza de vida, destacan los casi 80 años de vida de los países más libres.



FUENTE: GWARTNEY, J. D. et al. (2010). *Op. Cit.* p. 18.

Destaca también, la amplia mejoría de los derechos políticos en los países más libres. El rango de datos va de 1 a 7, donde 1 indica mejores derechos políticos y civiles.



FUENTE: GWARTNEY, J. D. et al. (2010). *Op. Cit.* p. 19.

3.3.1. La libertad económica para América del Norte del Instituto Fraser⁵.

Este proyecto del Instituto Fraser apenas tiene un poco más de un lustro, por lo que se encuentra en fase de desarrollo, es por ello que utiliza menos variables e indicadores que el índice general, aunque las conclusiones finales coinciden con el índice general en tanto que demuestran que la libertad económica es benéfica para las comunidades subcentrales.

De manera general, la investigación afirma que a nivel subnacional, un punto de incremento en la libertad económica reditúa en un crecimiento del ingreso per cápita en 4,848 dólares americanos para los Estados Unidos de América y de 3,706 dólares americanos para Canadá.

El proyecto emplea diez componentes en tres áreas: Tamaño del gobierno, recaudación e imposición fiscal discriminatoria y libertad del mercado de trabajo, deja fuera diversos indicadores que se usan para el índice general debido a la escasez de datos confiables.

Tamaño del gobierno: Hay solamente dos funciones del gobierno aceptables para los parámetros de la libertad económica: Protección de los individuos ante amenazas extranjeras e internas y la provisión de los bienes públicos. Cualquier función del gobierno que se mueva de esos dos pilares afecta de manera negativa la libertad económica. De manera concreta, toma en cuenta la presencia de un sistema de seguridad social privado, el gasto en transferencias y subsidios como porcentaje del PIB y el gasto del gobierno en general.

Recaudación e imposición fiscal discriminatoria: Toma en cuenta el total de impuestos como porcentaje del PIB, la tasa impositiva marginal al impuesto sobre la renta y el umbral de ingreso en el cual aplica y los impuestos directos e indirectos en general. La idea general que yace sobre estas variables es que tipos impositivos

⁵ ASHBY, N. J. et al. (2010). *Economic Freedom of North America 2010*, Canadá: the Fraser Institute.

marginales discriminatorios pueden afectar la disposición del trabajo y la inversión de participar en el mercado. Y en estos casos, generalmente tienden a ser los factores más productivos.

Libertad del mercado de trabajo: Restricciones legales al salario pueden afectar el vaciamiento de los mercados de trabajo debido a que las personas con menores productividades podrían quedar fuera del empleo remunerado, ya que un empresario eficiente no estaría dispuesto a pagar por un factor un precio por debajo de su productividad marginal.

También se toma en cuenta el porcentaje de empleados públicos en la economía en general, ello indica la porción de la economía que es guiada a través del proceso político o burocrático. También indica que el gobierno tiene como objetivo el proveer de bienes y servicios que normalmente pueden encontrarse en el mercado. Otro problema es que el gobierno se erige como monopolio de diversos bienes y servicios y desplaza a la producción privada en su provisión. Por último, sindicatos regulados de manera no eficiente también afectan la productividad del factor trabajo, y con ello, de la libertad económica.

Para el caso de México, también se elabora un estudio que apenas está, por así decirlo, en etapa germinal ya que en la publicación citada se muestra la segunda edición del mismo. Es un estudio de decena y media de folios que incorpora además de las variables citadas para los EE. UU. y Canadá, la variable de los derechos de propiedad, la cual se basa en estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad. El punto a desarrollar estriba en que los referidos aspectos del estudio del IMCO son subjetivos ya que son producto de encuestas. Es decir, todavía hay bastante por hacer y solamente se exhiben, por llamarlos así, bosquejos de los proyectos.

Además, se reconoce la ausencia de información no confiable, no periódica o en el peor de los casos, sesgada. Por último, concluye que: *"More rigorous econometric*

analysis is necessary to determine whether there is an economically significant relationship between economic freedom and income per capita in México”⁶

LIBERTAD ECONÓMICA DE ESTADOS Y PROVINCIAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ		
Estado o Provincia	Resultado	Ranking
Delaware	8,2	1
Tennessee	8,0	2
Texas	8,0	3
New Hampshire	7,8	4
South Dakota	7,8	5
Virginia	7,8	6
Alberta	7,7	7
Louisiana	7,6	8
Georgia	7,5	9
Nevada	7,5	10
North Carolina	7,5	11
Utah	7,5	12
Alabama	7,4	13
Colorado	7,4	14
Arizona	7,2	15
Florida	7,2	16
Kansas	7,2	17
Nebraska	7,2	18
Maryland	7,1	19
Missouri	7,1	20
Connecticut	7,0	21
Indiana	7,0	22
Iowa	7,0	23
Massachusetts	7,0	24
North Dakota	7,0	25
Oklahoma	7,0	26
South Carolina	7,0	27
Illinois	6,9	28
Wyoming	6,8	29
Idaho	6,7	30
Minnesota	6,7	31
Oregon	6,7	32
Kentucky	6,6	33
Mississippi	6,6	34
Pennsylvania	6,6	35
Arkansas	6,5	36
Washington	6,5	37
Wisconsin	6,5	38
Alaska	6,4	39
Montana	6,4	40
New Mexico	6,3	41
West Virginia	6,3	42
Hawaii	6,2	43
Michigan	6,2	44
New Jersey	6,2	45
California	6,1	46
Ohio	6,0	47
Vermont	6,0	48
British Columbia	5,9	49
Rhode Island	5,9	50
New York	5,8	51
Newfoundland	5,8	52
Ontario	5,8	53
Maine	5,6	54
New Brunswick	5,4	55
Saskatchewan	5,4	56
Manitoba	5,1	57
Nova Scotia	5,1	58
Prince Edward Island	5,0	59
Quebec	4,2	60
NOTA: En negritas las Provincias Canadienses, se tomaron solamente 10 de 13.		
FUENTE: ASHBY. N. J. et. al. (2010). <i>Op. Cit.</i> p.3.		

⁶ ASHBY, N. J. et al. (2010). *Op. Cit.* p. 94.

4.- RESULTADOS: EL ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS EN MÉXICO.

A manera de preámbulo, es necesario exponer de forma concreta, los procedimientos y conceptos que se utilizan para la elaboración del índice de libertad económica.

La metodología está tomada principalmente del trabajo dirigido por el Dr. Francisco Cabrillo, ya citado. Aunque los indicadores utilizados en algunos casos distan del trabajo mencionado debido a la naturaleza de la gestión económica de los Estados en México y a la disponibilidad de la información requerida.

Para Alfonso Novales¹ un índice o indicador permite comparar magnitudes, usualmente cantidades o precios, ya sea a lo largo del tiempo o a través de áreas geográficas diferentes. Para el autor citado existen los índices simples y los índices compuestos o mixtos.

Un índice simple viene determinado solamente por el cociente entre dos magnitudes de la misma variable. A pesar de su utilidad, en Economía no siempre se está buscando el desempeño de una variable con respecto de sí misma a través del tiempo; en una gran cantidad de ocasiones, se pretende encontrar la manera en que un conjunto de variables, de manera agregada, se comportan en periodos sucesivos, esta situación da origen a los números índices complejos o mixtos que están determinados por la inclusión de distintos indicadores (simples o compuestos) en su definición. Una característica de este tipo de índices es que los elementos que lo integran pueden participar en la elaboración del indicador de manera ponderada o sin ponderación. En algunas ocasiones, hay elementos objetivos para definir la ponderación de los componentes, mientras que cuando no existen estos elementos, las ponderaciones se realizan con criterios subjetivos, es decir, a juicio del investigador. Por ello, los indicadores propuestos en esta tesis carecen de ponderación (o se ponderan igual), esto con el objetivo de eliminar cualquier criterio

¹ NOVALES, A. (1997). *Estadística y Econometría*, Madrid: McGraw-Hill, pp. 79-119.

subjetivo. Los indicadores generalmente pueden expresarse en base 100 (porcentaje) o base 1 (unitaria); ejemplos de este tipo de índices son los utilizados para evaluar el incremento en una canasta de precios, como el índice de Laspeyres y el índice de Paasche.

El índice de libertad económica está compuesto por diez indicadores, que a su vez tienen sus propios determinantes, en algunos casos son determinantes compuestos, mientras que en algunos otros son determinantes simples.

Como ya se ha mencionado, hay tres elementos claves para tomar en cuenta al momento de la elaboración de indicadores: El primero es que la variable dependa de un gobierno estatal, el segundo es que la misma variable tenga información para los 31 Estados, ya que ello facilita la comparación, y el tercero es que la variable sea publicada de manera periódica a través del tiempo, ya que ello facilita la medición de la evaluación de las políticas tomadas.

En el caso del ejercicio propuesto en este documento, claramente es necesaria la realización de esquemas comparativos: diseñar una plataforma de producción de indicadores tan amplia que permita amplia libertad para el ejercicio de la gestión pública, pero tan articulada y homogénea que permita reconocer o castigar al gestor en comento.

Por supuesto que no es un ejercicio sencillo, y se corre el riesgo de que una vez realizándola, caiga en el anacronismo de manera inmediata. El evaluador debe tener cierta capacidad de predicción en los cambios en la gestión pública, realizando indicadores y modelos que se adapten y no cambien mucho en el tiempo, con la finalidad de facilitar también la evaluación periódica.

Una vez mencionado lo anterior ¿Cómo es posible comparar magnitudes distintas como la transparencia, la educación y la deuda pública? Se usa la siguiente fórmula:

$$\text{Valor índice} = \text{Valor } i - \text{Valor mínimo} / \text{Valor máximo} - \text{Valor mínimo}.$$

En algunos casos, fue necesario ajustar el valor del índice restando a su valor el numerario necesario para que todas las variables quedaran en el rango de 0 a 1, siendo 0 el máximo nivel de libertad económica y 1 el mínimo nivel.

Por definición, la posibilidad de encontrar observaciones atípicas es nula, ya que todas las muestras provienen de la misma población, que son los 31 Estados pertenecientes a los Estados Unidos Mexicanos.

4.1. Cálculo y resultados del índice de libertad económica.

El índice de libertad económica viene dado por el promedio simple del índice de regulación económica y el índice de dimensión del sector público, mediante la siguiente fórmula:

$$\text{ILE} = (\text{IRE} + \text{IDSP}) / 2$$

Donde:

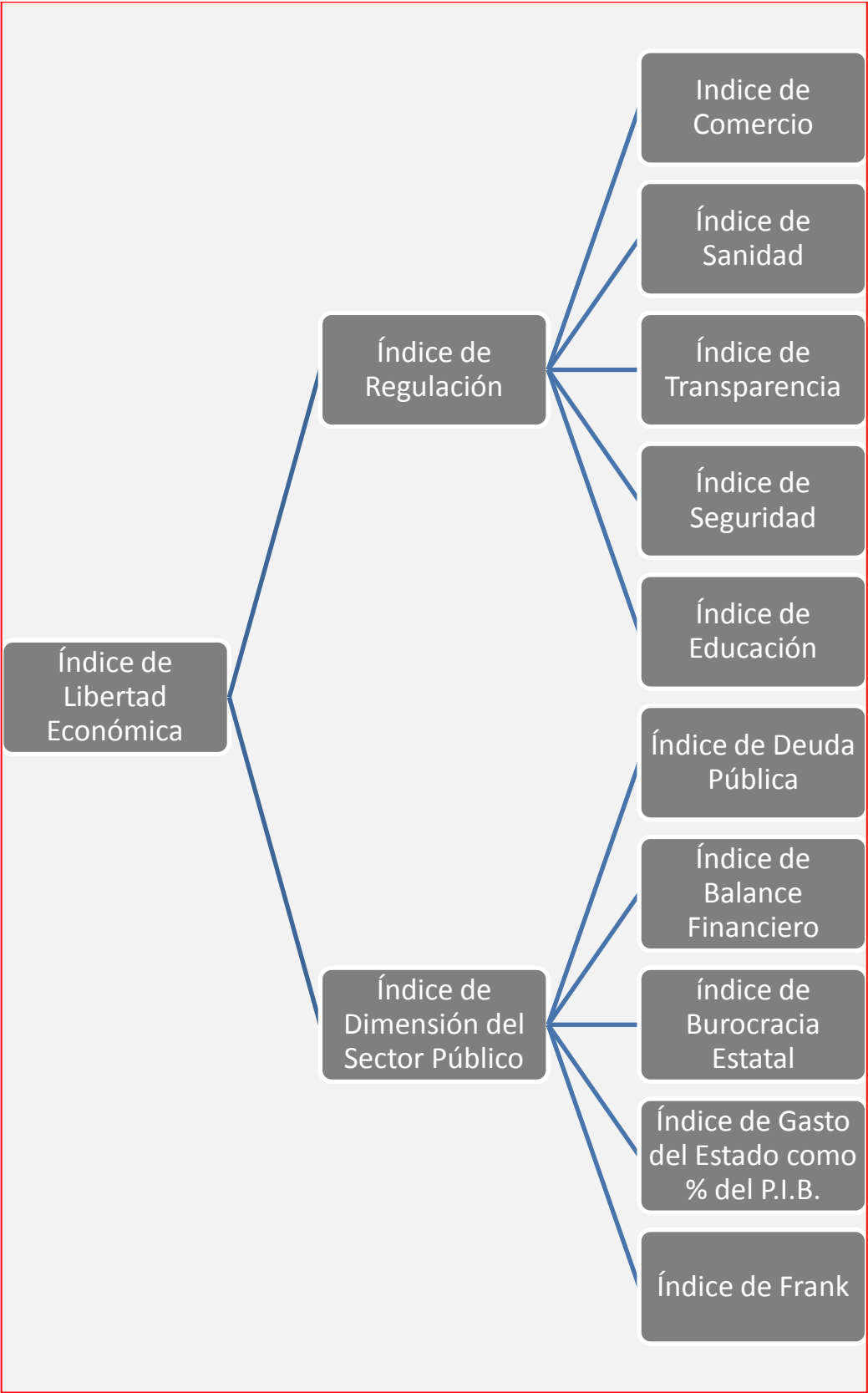
ILE = Índice de libertad económica.

IRE = Índice de regulación económica.

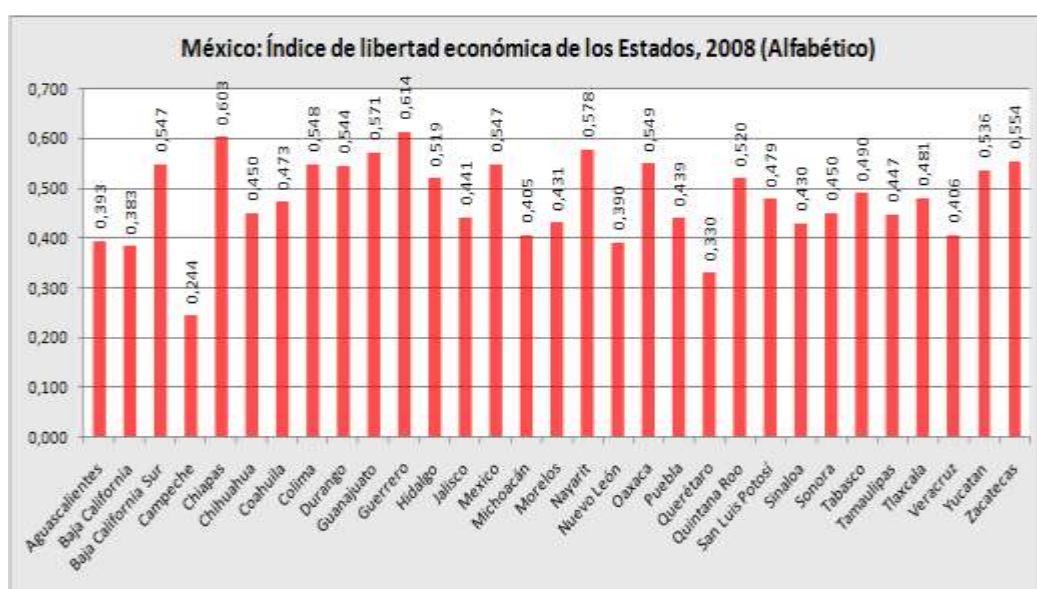
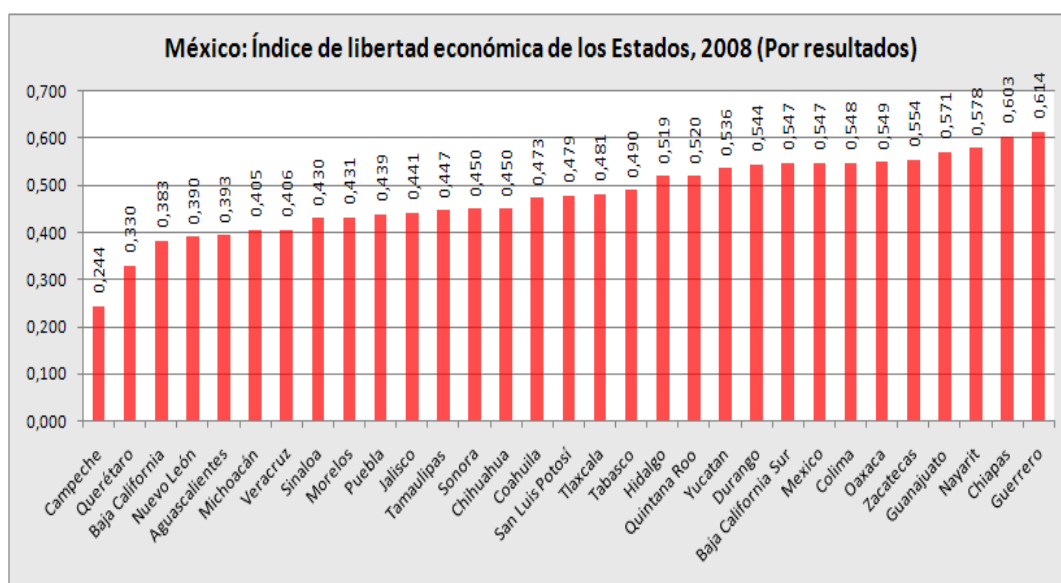
IDSP = Índice de dimensión del sector público.

Una justificación puntual de la inclusión de cada variable puede encontrarse en el apartado respectivo.

Esquema del índice de libertad económica.



Resultados de manera gráfica.



Tablas de resultados.

MÉXICO: ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS, 2008 (Por resultados)				
	Estado	Índice de regulación	Índice de dimensión del sector público	Media aritmética (índice de libertad económica)
1	Campeche	0,409	0,078	0,244
2	Querétaro	0,438	0,222	0,330
3	Baja California	0,544	0,222	0,383
4	Nuevo León	0,654	0,126	0,390
5	Aguascalientes	0,562	0,224	0,393
6	Michoacán	0,520	0,291	0,405
7	Veracruz	0,544	0,268	0,406
8	Sinaloa	0,621	0,238	0,430
9	Morelos	0,606	0,255	0,431
10	Puebla	0,616	0,262	0,439
11	Jalisco	0,573	0,309	0,441
12	Tamaulipas	0,719	0,175	0,447
13	Sonora	0,663	0,237	0,450
14	Chihuahua	0,586	0,314	0,450
15	Coahuila	0,689	0,256	0,473
16	San Luis Potosí	0,704	0,253	0,479
17	Tlaxcala	0,602	0,360	0,481
18	Tabasco	0,687	0,293	0,490
19	Hidalgo	0,734	0,305	0,519
20	Quintana Roo	0,646	0,393	0,520
21	Yucatan	0,786	0,286	0,536
22	Durango	0,656	0,433	0,544
23	Baja California Sur	0,675	0,419	0,547
24	Mexico	0,578	0,517	0,547
25	Colima	0,655	0,441	0,548
26	Oaxaca	0,737	0,362	0,549
27	Zacatecas	0,627	0,481	0,554
28	Guanajuato	0,691	0,452	0,571
29	Nayarit	0,603	0,554	0,578
30	Chiapas	0,685	0,521	0,603
31	Guerrero	0,719	0,510	0,614

MÉXICO: ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA DE LOS ESTADOS, 2008 (Alfabético)				
	Estado	Índice de regulación	Índice de dimensión del sector público	Media aritmética (Índice de libertad económica)
1	Aguascalientes	0,562	0,224	0,393
2	Baja California	0,544	0,222	0,383
3	Baja California Sur	0,675	0,419	0,547
4	Campeche	0,409	0,078	0,244
5	Chiapas	0,685	0,521	0,603
6	Chihuahua	0,586	0,314	0,450
7	Coahuila	0,689	0,256	0,473
8	Colima	0,655	0,441	0,548
9	Durango	0,656	0,433	0,544
10	Guanajuato	0,691	0,452	0,571
11	Guerrero	0,719	0,510	0,614
12	Hidalgo	0,734	0,305	0,519
13	Jalisco	0,573	0,309	0,441
14	Mexico	0,578	0,517	0,547
15	Michoacán	0,520	0,291	0,405
16	Morelos	0,606	0,255	0,431
17	Nayarit	0,603	0,554	0,578
18	Nuevo León	0,654	0,126	0,390
19	Oaxaca	0,737	0,362	0,549
20	Puebla	0,616	0,262	0,439
21	Querétaro	0,438	0,222	0,330
22	Quintana Roo	0,646	0,393	0,520
23	San Luis Potosí	0,704	0,253	0,479
24	Sinaloa	0,621	0,238	0,430
25	Sonora	0,663	0,237	0,450
26	Tabasco	0,687	0,293	0,490
27	Tamaulipas	0,719	0,175	0,447
28	Tlaxcala	0,602	0,360	0,481
29	Veracruz	0,544	0,268	0,406
30	Yucatan	0,786	0,286	0,536
31	Zacatecas	0,627	0,481	0,554

4.2. Cálculo y resultados del índice de regulación económica.

El índice de regulación económica está determinado por el promedio simple de 5 variables: Los índices de comercio, educación, sanidad, transparencia y seguridad.

Se reconoce la importancia de todos los componentes del índice, por lo que estos no están ponderados en la elaboración del indicador, lo que agregaría objetividad a los resultados finales.

La fórmula empleada es:

$$\text{IRE} = (\text{IC} + \text{IE} + \text{IS} + \text{IT} + \text{ISEG}) / 5$$

Donde:

IRE = Índice de regulación económica.

IC = Índice de comercio.

IE = Índice de educación.

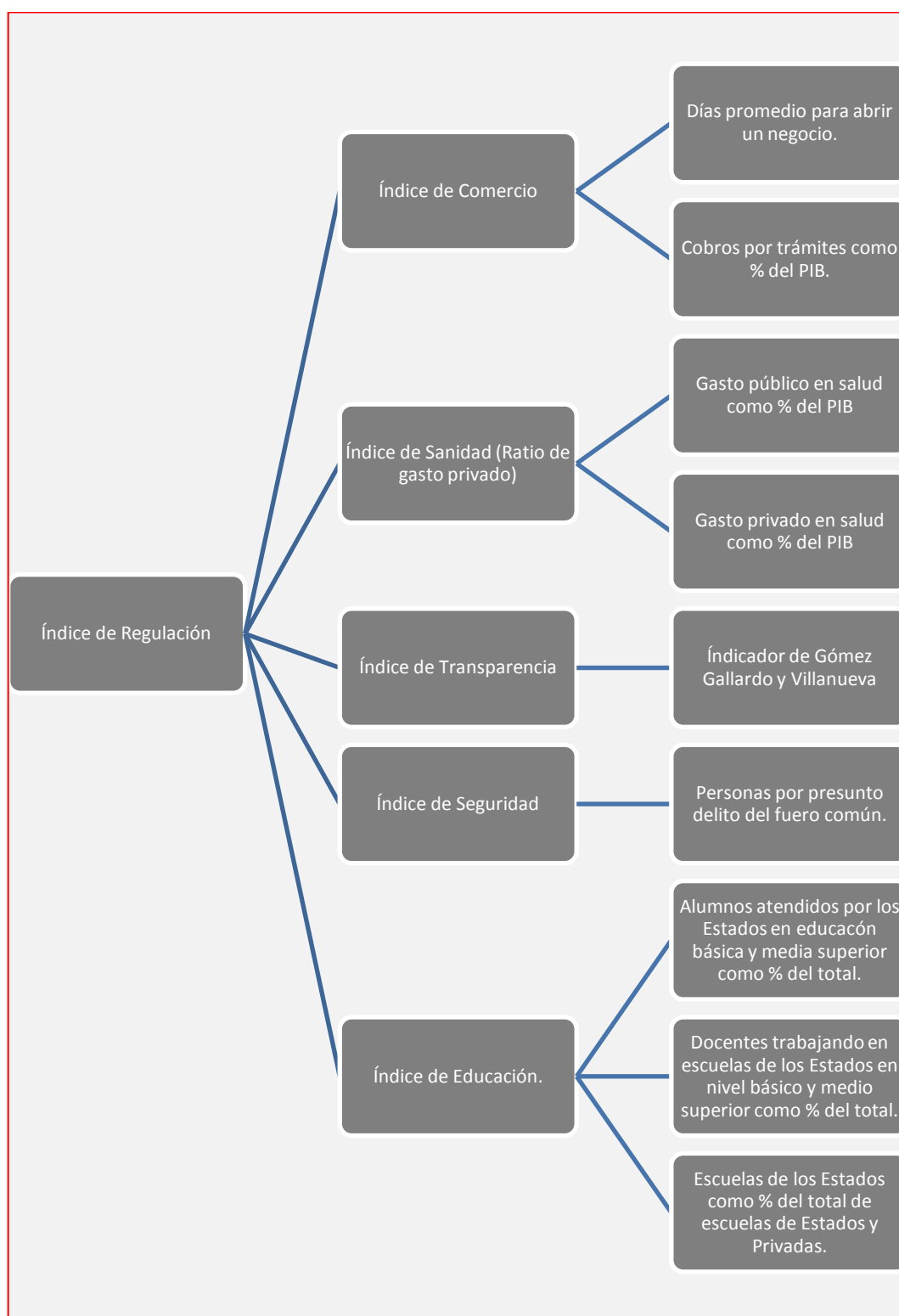
IS = Índice de sanidad.

ISEG = Índice de seguridad.

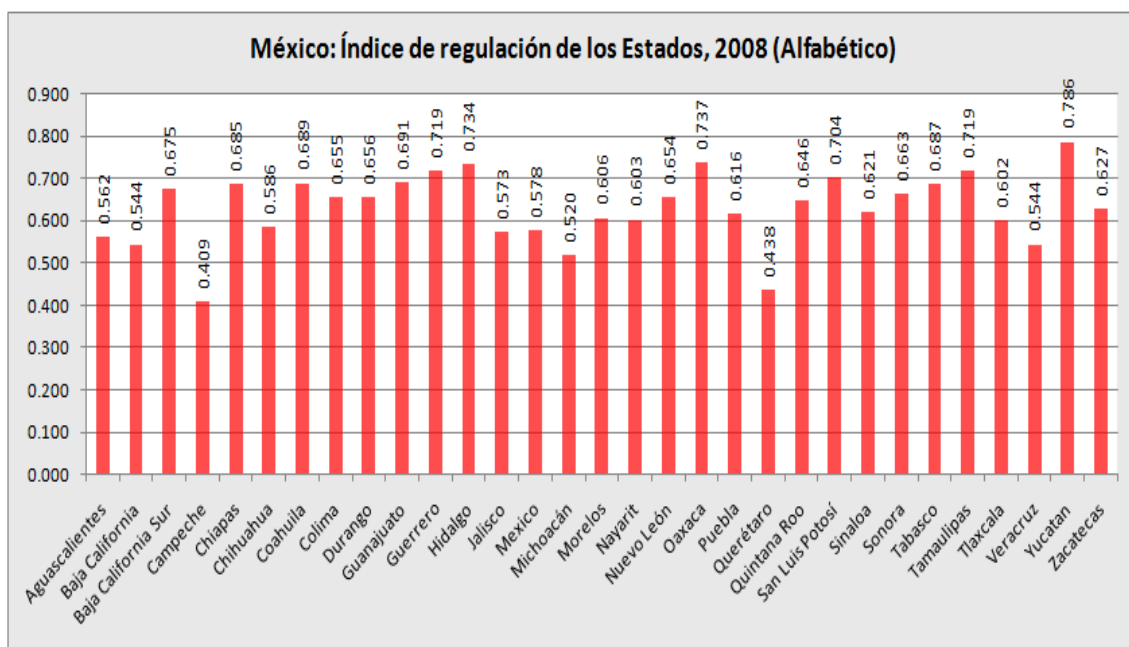
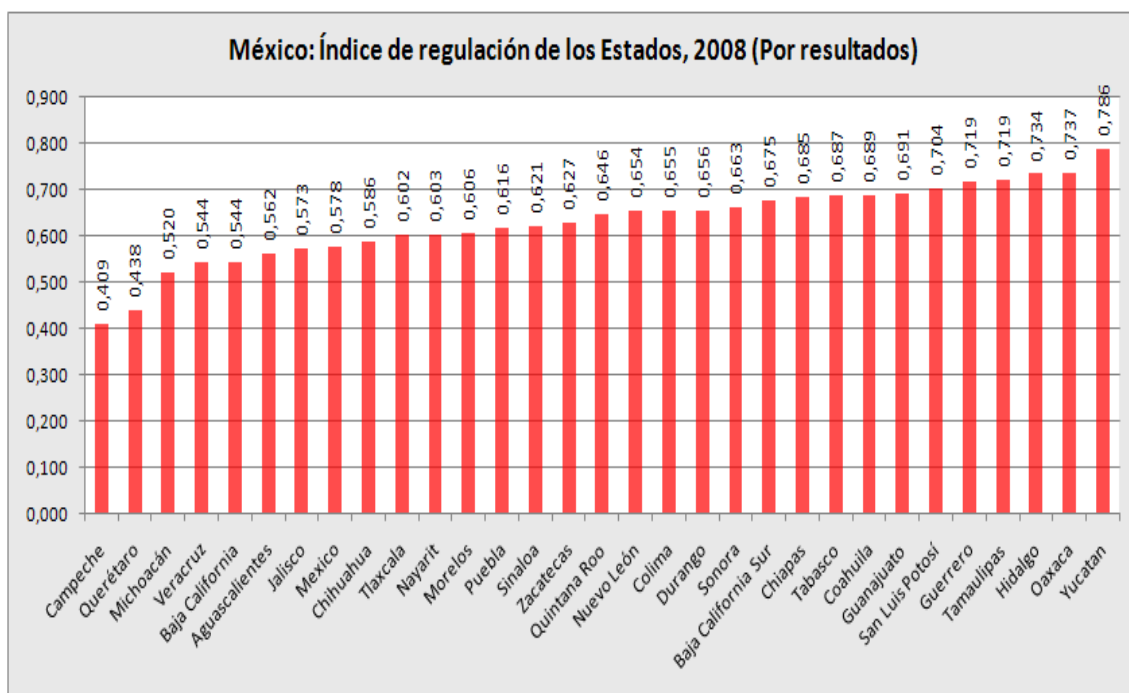
IT = Índice de transparencia.

De manera esquemática, se presenta lo siguiente:

Esquema del índice de regulación.



Resultados presentados de manera gráfica:



Tablas de resultados.

MÉXICO: ÍNDICE DE REGULACIÓN (Por resultados)							
	Estado	Comercio	Educación	Sanidad	Transparencia	Seguridad	Índice de Regulación
1	Campeche	0,106	0,892	1,000	0,048	0,000	0,409
2	Querétaro	0,139	0,000	0,666	0,546	0,838	0,438
3	Michoacán	0,406	0,859	0,000	0,495	0,838	0,520
4	Veracruz	0,228	0,931	0,708	0,000	0,852	0,544
5	Baja California	0,356	0,589	0,439	0,336	1,000	0,544
6	Aguascalientes	0,083	0,810	0,725	0,275	0,917	0,562
7	Jalisco	0,406	0,796	0,619	0,208	0,835	0,573
8	Mexico	0,344	0,810	0,355	0,455	0,922	0,578
9	Chihuahua	0,544	0,580	0,756	0,112	0,939	0,586
10	Tlaxcala	0,317	0,839	0,749	0,494	0,610	0,602
11	Nayarit	0,167	0,918	0,768	0,407	0,754	0,603
12	Morelos	0,622	0,690	0,695	0,061	0,964	0,606
13	Puebla	0,411	0,588	0,499	0,745	0,839	0,616
14	Sinaloa	0,344	0,897	0,745	0,283	0,837	0,621
15	Zacatecas	0,361	0,976	0,591	0,376	0,830	0,627
16	Quintana Roo	0,417	0,771	0,683	0,396	0,964	0,646
17	Nuevo León	0,078	0,475	0,804	1,000	0,915	0,654
18	Colima	0,256	0,889	0,842	0,378	0,913	0,655
19	Durango	0,261	0,781	0,825	0,518	0,892	0,656
20	Sonora	0,511	0,824	0,799	0,284	0,896	0,663
21	Baja California Sur	0,078	0,805	0,901	0,611	0,982	0,675
22	Chiapas	0,622	0,886	0,640	0,601	0,677	0,685
23	Tabasco	0,450	0,953	0,987	0,100	0,943	0,687
24	Coahuila	0,306	0,762	0,895	0,564	0,918	0,689
25	Guanajuato	0,322	0,824	0,709	0,687	0,912	0,691
26	San Luis Potosí	0,278	0,910	0,724	0,664	0,942	0,704
27	Guerrero	0,272	0,997	0,779	0,751	0,795	0,719
28	Tamaulipas	0,233	0,844	0,877	0,706	0,936	0,719
29	Hidalgo	0,611	0,892	0,658	0,600	0,908	0,734
30	Oaxaca	0,439	0,998	0,753	0,671	0,823	0,737
31	Yucatan	0,583	0,818	0,958	0,604	0,969	0,786

MÉXICO: ÍNDICE DE REGULACIÓN (Alfabético)							
	Estado	Comercio	Educación	Sanidad	Transparencia	Seguridad	Índice de Regulación
1	Aguascalientes	0,083	0,810	0,725	0,275	0,917	0,562
2	Baja California	0,356	0,589	0,439	0,336	1,000	0,544
3	Baja California Sur	0,078	0,805	0,901	0,611	0,982	0,675
4	Campeche	0,106	0,892	1,000	0,048	0,000	0,409
5	Chiapas	0,622	0,886	0,640	0,601	0,677	0,685
6	Chihuahua	0,544	0,580	0,756	0,112	0,939	0,586
7	Coahuila	0,306	0,762	0,895	0,564	0,918	0,689
8	Colima	0,256	0,889	0,842	0,378	0,913	0,655
9	Durango	0,261	0,781	0,825	0,518	0,892	0,656
10	Guanajuato	0,322	0,824	0,709	0,687	0,912	0,691
11	Guerrero	0,272	0,997	0,779	0,751	0,795	0,719
12	Hidalgo	0,611	0,892	0,658	0,600	0,908	0,734
13	Jalisco	0,406	0,796	0,619	0,208	0,835	0,573
14	Mexico	0,344	0,810	0,355	0,455	0,922	0,578
15	Michoacán	0,406	0,859	0,000	0,495	0,838	0,520
16	Morelos	0,622	0,690	0,695	0,061	0,964	0,606
17	Nayarit	0,167	0,918	0,768	0,407	0,754	0,603
18	Nuevo León	0,078	0,475	0,804	1,000	0,915	0,654
19	Oaxaca	0,439	0,998	0,753	0,671	0,823	0,737
20	Puebla	0,411	0,588	0,499	0,745	0,839	0,616
21	Querétaro	0,139	0,000	0,666	0,546	0,838	0,438
22	Quintana Roo	0,417	0,771	0,683	0,396	0,964	0,646
23	San Luis Potosí	0,278	0,910	0,724	0,664	0,942	0,704
24	Sinaloa	0,344	0,897	0,745	0,283	0,837	0,621
25	Sonora	0,511	0,824	0,799	0,284	0,896	0,663
26	Tabasco	0,450	0,953	0,987	0,100	0,943	0,687
27	Tamaulipas	0,233	0,844	0,877	0,706	0,936	0,719
28	Tlaxcala	0,317	0,839	0,749	0,494	0,610	0,602
29	Veracruz	0,228	0,931	0,708	0,000	0,852	0,544
30	Yucatan	0,583	0,818	0,958	0,604	0,969	0,786
31	Zacatecas	0,361	0,976	0,591	0,376	0,830	0,627

4.3. Cálculo y resultados del índice de dimensión del sector público.

El índice de dimensión del sector público está definido por la media simple de 5 variables: Deuda pública, balance fiscal, burocracia estatal, gasto del Estado como porcentaje el P.I.B. e índice de Frank o esfuerzo fiscal.

La fórmula empleada es:

$$\text{IDSP} = (\text{IDP} + \text{IBF} + \text{IBE} + \text{GEPIB} + \text{IEF}) / 5$$

Donde:

IDSP = Índice de dimensión del sector público.

IDP = Índice de deuda pública.

IBF = Índice de balance financiero.

IBE = Índice de burocracia estatal.

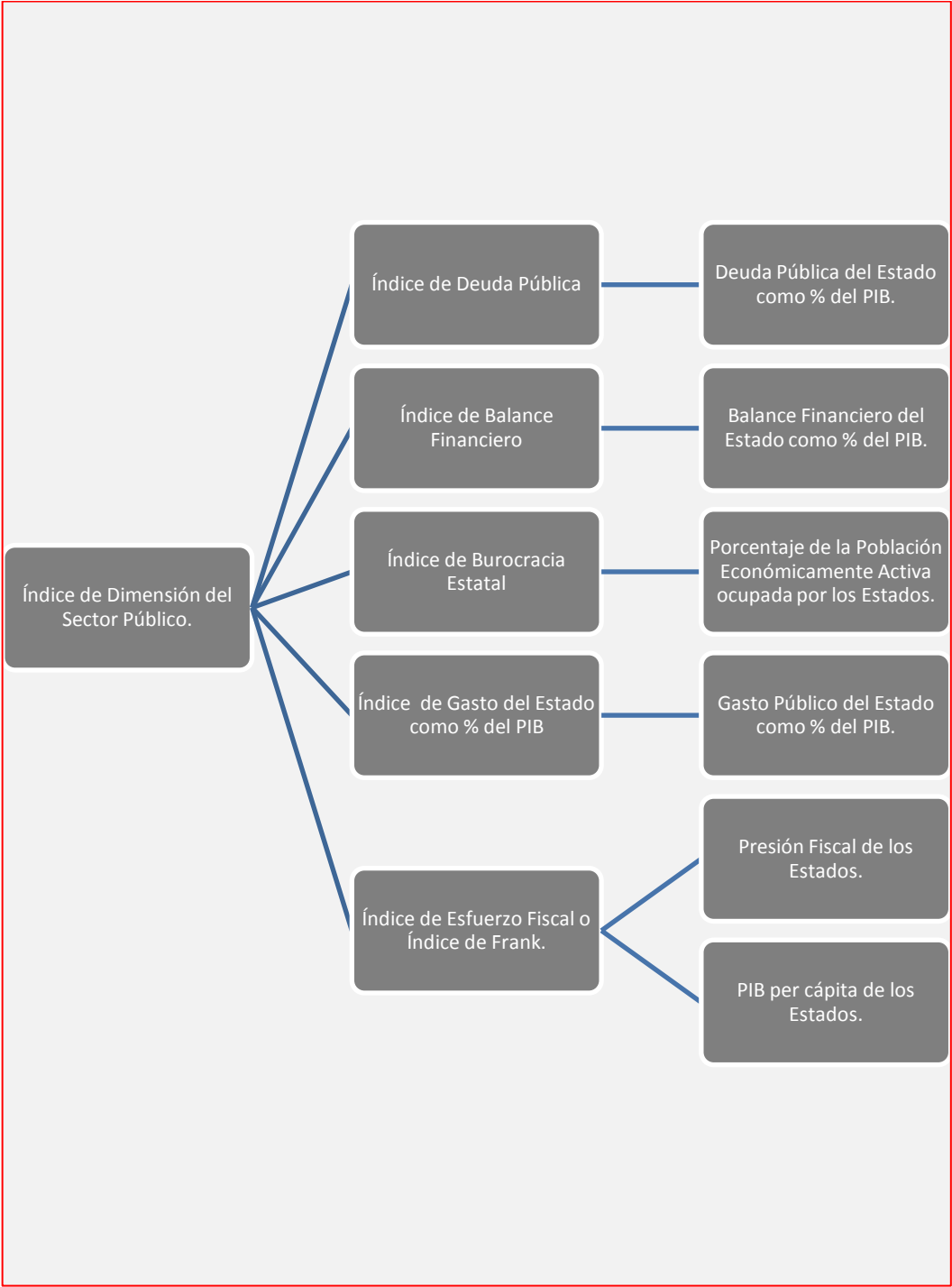
GEPIB = Índice de gasto del Estado como porcentaje del P.I.B.

IEF = Índice de Frank.

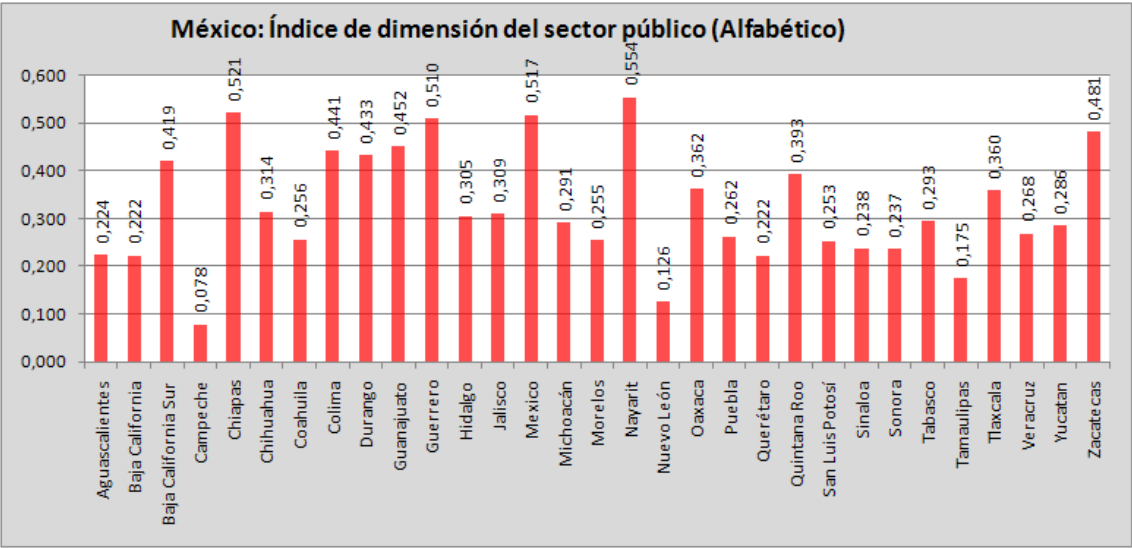
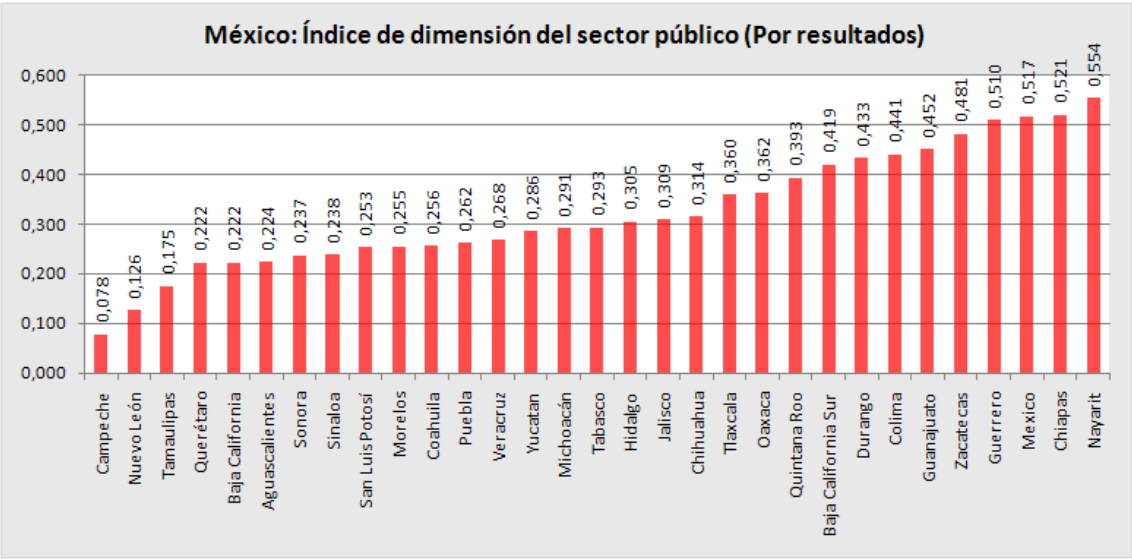
En el caso del índice de Frank, se toma como referencia debido a que es un mejor indicador que la presión fiscal, ya que esta no contempla la capacidad tributaria de la población. Además se hace un ajuste para medirla en términos de 100 pesos, que es la medida aproximada a los 2 salarios mínimos diarios, que a su vez, son umbral de diversas mediciones de pobreza o marginación social en el país.

Al final, el índice busca reflejar la participación del Estado en la economía, y también busca ofrecer de manera cuantitativa el total de los recursos económicos de la sociedad que se asignan bajo los ciclos políticos.

De manera esquemática, el índice presenta la siguiente estructura:



De manera gráfica, los resultados son los siguientes:



Los resultados en tablas:

MÉXICO: ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (Por resultados)							
	Estado	Deuda Pública	Balance Financiero	Burocracia Estatal	Gasto del Estado como % del PIB	Esfuerzo Fiscal	Índice de Dimensión del Sector Público
1	Campeche	0,003	0,304	0,085	0,000	0,000	0,078
2	Nuevo León	0,087	0,222	0,002	0,145	0,176	0,126
3	Tamaulipas	0,054	0,250	0,023	0,267	0,279	0,175
4	Querétaro	0,049	0,299	0,017	0,284	0,462	0,222
5	Baja California	0,087	0,286	0,000	0,265	0,473	0,222
6	Aguascalientes	0,174	0,251	0,020	0,371	0,306	0,224
7	Sonora	0,186	0,255	0,036	0,388	0,318	0,237
8	Sinaloa	0,073	0,304	0,089	0,413	0,313	0,238
9	San Luis Potosí	0,126	0,320	0,053	0,400	0,369	0,253
10	Morelos	0,241	0,041	0,031	0,502	0,462	0,255
11	Coahuila	0,012	0,615	0,253	0,274	0,126	0,256
12	Puebla	0,106	0,188	0,106	0,428	0,484	0,262
13	Veracruz	0,000	0,304	0,129	0,490	0,419	0,268
14	Yucatan	0,043	0,407	0,200	0,419	0,358	0,286
15	Michoacán	0,176	0,283	0,106	0,512	0,376	0,291
16	Tabasco	0,557	0,287	0,319	0,282	0,022	0,293
17	Hidalgo	0,096	0,304	0,015	0,519	0,591	0,305
18	Jalisco	0,075	0,535	0,316	0,293	0,327	0,309
19	Chihuahua	0,192	0,304	0,206	0,324	0,547	0,314
20	Tlaxcala	0,288	0,000	0,046	0,886	0,577	0,360
21	Oaxaca	0,001	0,304	0,061	1,000	0,442	0,362
22	Quintana Roo	0,442	0,639	0,031	0,400	0,454	0,393
23	Baja California Sur	0,285	0,705	0,053	0,468	0,585	0,419
24	Durango	0,276	0,662	0,395	0,444	0,387	0,433
25	Colima	1,000	0,267	0,069	0,529	0,340	0,441
26	Guanajuato	0,048	0,301	1,000	0,386	0,523	0,452
27	Zacatecas	0,049	0,892	0,048	0,833	0,584	0,481
28	Guerrero	0,272	0,461	0,092	0,793	0,929	0,510
29	Mexico	0,668	0,284	0,183	0,522	0,927	0,517
30	Chiapas	0,085	0,211	0,394	0,914	1	0,521
31	Nayarit	0,076	1,000	0,092	0,759	0,842	0,554

MÉXICO: ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO (Alfabético)							
	Estado	Deuda Pública	Balance Fiscal	Burocracia Estatal	Gasto del Estado como % del PIB	Esfuerzo Fiscal	Índice de Dimensión del Sector Público
1	Aguascalientes	0,174	0,251	0,020	0,371	0,306	0,224
2	Baja California	0,087	0,286	0,000	0,265	0,473	0,222
3	Baja California Sur	0,285	0,705	0,053	0,468	0,585	0,419
4	Campeche	0,003	0,304	0,085	0,000	0,000	0,078
5	Chiapas	0,085	0,211	0,394	0,914	1,000	0,521
6	Chihuahua	0,192	0,304	0,206	0,324	0,547	0,314
7	Coahuila	0,012	0,615	0,253	0,274	0,126	0,256
8	Colima	1,000	0,267	0,069	0,529	0,340	0,441
9	Durango	0,276	0,662	0,395	0,444	0,387	0,433
10	Guanajuato	0,048	0,301	1,000	0,386	0,523	0,452
11	Guerrero	0,272	0,461	0,092	0,793	0,929	0,510
12	Hidalgo	0,096	0,304	0,015	0,519	0,591	0,305
13	Jalisco	0,075	0,535	0,316	0,293	0,327	0,309
14	Mexico	0,668	0,284	0,183	0,522	0,927	0,517
15	Michoacán	0,176	0,283	0,106	0,512	0,376	0,291
16	Morelos	0,241	0,041	0,031	0,502	0,462	0,255
17	Nayarit	0,076	1,000	0,092	0,759	0,842	0,554
18	Nuevo León	0,087	0,222	0,002	0,145	0,176	0,126
19	Oaxaca	0,001	0,304	0,061	1,000	0,442	0,362
20	Puebla	0,106	0,188	0,106	0,428	0,484	0,262
21	Querétaro	0,049	0,299	0,017	0,284	0,462	0,222
22	Quintana Roo	0,442	0,639	0,031	0,400	0,454	0,393
23	San Luis Potosí	0,126	0,320	0,053	0,400	0,369	0,253
24	Sinaloa	0,073	0,304	0,089	0,413	0,313	0,238
25	Sonora	0,186	0,255	0,036	0,388	0,318	0,237
26	Tabasco	0,557	0,287	0,319	0,282	0,022	0,293
27	Tamaulipas	0,054	0,250	0,023	0,267	0,279	0,175
28	Tlaxcala	0,288	0,000	0,046	0,886	0,577	0,360
29	Veracruz	0,000	0,304	0,129	0,490	0,419	0,268
30	Yucatan	0,043	0,407	0,200	0,419	0,35831521	0,286
31	Zacatecas	0,049	0,892	0,048	0,833	0,584	0,481

4.4. Índice de comercio.

Para la obtención de este indicador, se ha recurrido a estadísticas del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), que a su vez, ha obtenido mediante su interrelación con el CEESP y el INEGI y ha publicado los datos en el estudio intitulado “Competitividad Estatal de México 2008”.

Aunque la naturaleza de los estudios sobre competitividad tiende a ofrecer resultados basados en encuestas, y que origina que muchas veces se pierda precisión en los resultados desde el levantamiento de las mismas, estos datos tomados del indicador IMCO son producto de la observación objetiva del comportamiento económico relevante. A su vez, el IMCO toma los datos del Centro de Estudios del Sector Privado.

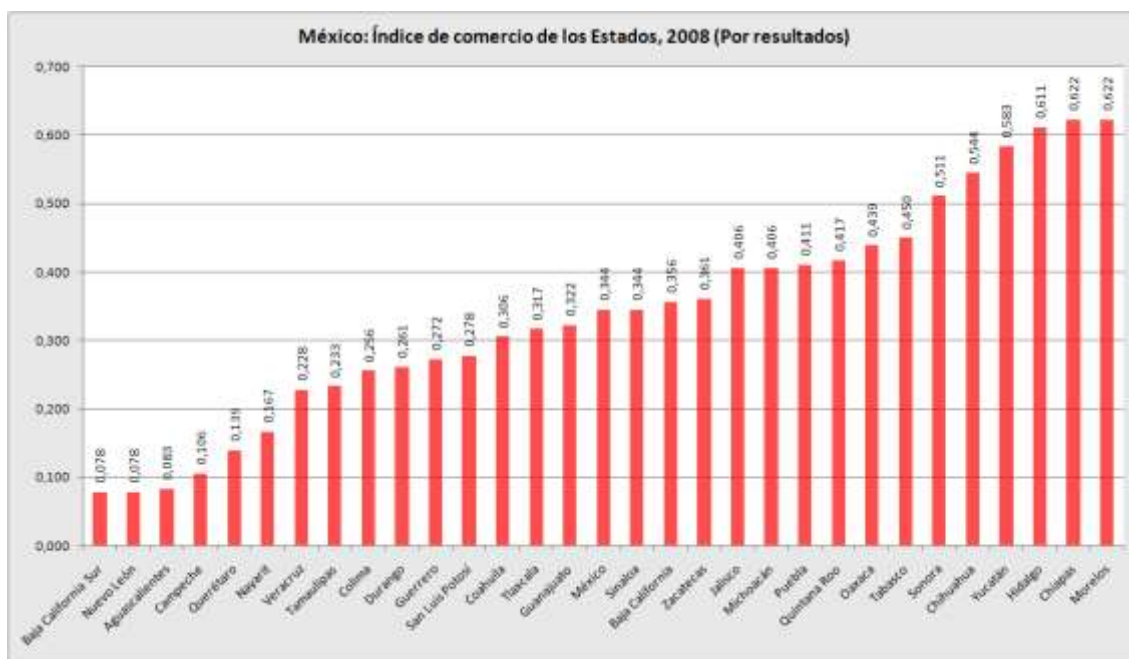
Este indicador es de suma importancia porque los Estados tienen una gran injerencia en la determinación de las políticas relativas a la apertura de nuevos negocios, también afecta de manera importante la libertad económica y el espíritu emprendedor de los empresarios.

Algunos Estados, en el afán de conseguir una mejora recaudatoria terminaron afectando la libertad de comercio porque hicieron más costosos los trámites para abrir un nuevo negocio, aunque estos sean más rápidos producto de la informatización de los procesos.

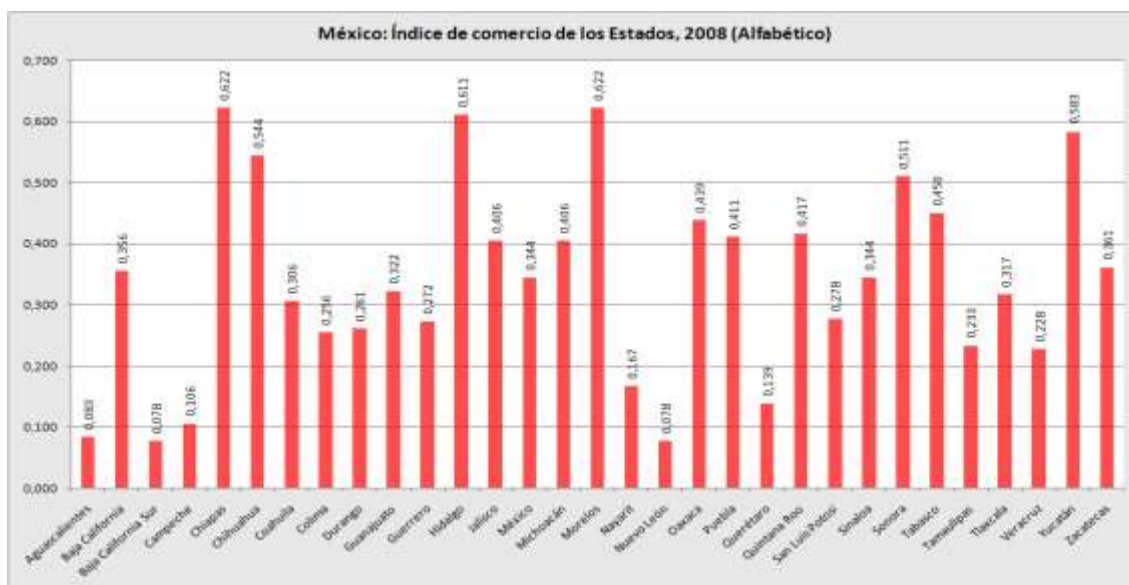
Para formar el índice, se tomaron las variables relativas a los días en promedio para iniciar un nuevo negocio en los Estados y el costo de los trámites impuestos por el Estado a las nuevas empresas, medido en términos de porcentaje del PIB. Se normalizaron las variables de tal manera que el 0 fuera el mejor valor y el 1 fuera el valor menos favorable. Después se obtuvo el promedio simple, sin ponderar, por lo que el índice de comercio está dado de la siguiente forma:

$$IC = (\text{Índ. de intervención pública} + \text{Índ. de rapidez en apertura de negocios})/2$$

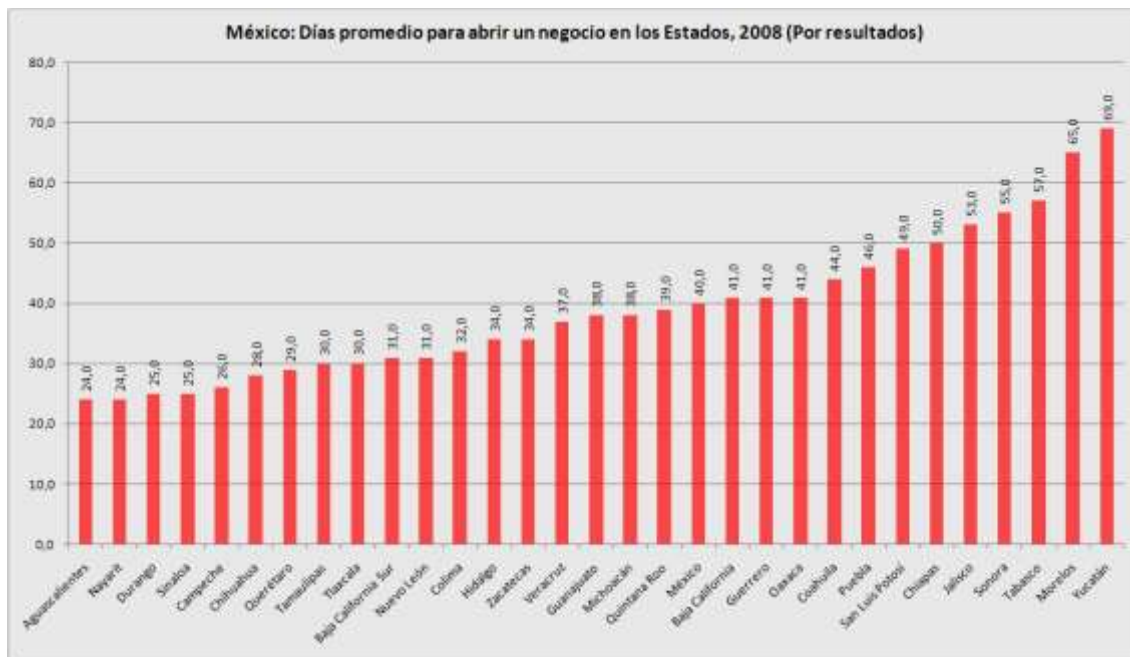
El gráfico de los resultados viene dado así:



Por orden alfabético:



i) *Días para abrir un nuevo negocio.*



Vale la pena destacar la amplia diferencia entre el Estado que menos días en promedio requiere para la apertura de un negocio (Aguascalientes) y la que requiere una mayor cantidad de tiempo para llevar a cabo todos los trámites (Yucatán) esta diferencia llega a ser hasta de 45 días. De tal manera, que el promedio estatal para abrir un nuevo negocio es de casi 39 días, que es un tiempo considerablemente mayor al empleado por los principales socios comerciales de México. La desviación estándar del indicador es de casi 12 días, por lo que se puede suponer que existen diferencias sustantivas entre las políticas públicas empleadas por un Estado en comparación con sus pares.

Las tablas de resultados ofrecen lo siguiente:

MÉXICO: ÍNDICE DE COMERCIO, 2008 (Por resultados)				
	Estado	Índice de intervención pública	Índice de rapidez en apertura de negocios	Índice de comercio
1	Baja California Sur	0.000	0.156	0.078
2	Nuevo León	0.000	0.156	0.078
3	Aguascalientes	0.167	0.000	0.083
4	Campeche	0.167	0.044	0.106
5	Querétaro	0.167	0.111	0.139
6	Nayarit	0.333	0.000	0.167
7	Veracruz	0.167	0.289	0.228
8	Tamaulipas	0.333	0.133	0.233
9	Colima	0.333	0.178	0.256
10	Durango	0.500	0.022	0.261
11	Guerrero	0.167	0.378	0.272
12	San Luis Potosí	0.000	0.556	0.278
13	Coahuila	0.167	0.444	0.306
14	Tlaxcala	0.500	0.133	0.317
15	Guanajuato	0.333	0.311	0.322
16	México	0.333	0.356	0.344
17	Sinaloa	0.667	0.022	0.344
18	Baja California	0.333	0.378	0.356
19	Zacatecas	0.500	0.222	0.361
20	Jalisco	0.167	0.644	0.406
21	Michoacán	0.500	0.311	0.406
22	Puebla	0.333	0.489	0.411
23	Quintana Roo	0.500	0.333	0.417
24	Oaxaca	0.500	0.378	0.439
25	Tabasco	0.167	0.733	0.450
26	Sonora	0.333	0.689	0.511
27	Chihuahua	1.000	0.089	0.544
28	Yucatán	0.167	1.000	0.583
29	Hidalgo	1.000	0.222	0.611
30	Chiapas	0.667	0.578	0.622
31	Morelos	0.333	0.911	0.622

FUENTE: Elaboración propia con datos de: IMCO. (2009). *Competitividad Estatal de México*, 2008. www.imco.org.mx

MÉXICO: ÍNDICE DE COMERCIO, 2008 (Alfabético)				
	Estado	Índice de intervención pública	Índice de rapidez en apertura de negocios	Índice de comercio
1	Aguascalientes	0.167	0.000	0.083
2	Baja California	0.333	0.378	0.356
3	Baja California Sur	0.000	0.156	0.078
4	Campeche	0.167	0.044	0.106
5	Chiapas	0.667	0.578	0.622
6	Chihuahua	1.000	0.089	0.544
7	Coahuila	0.167	0.444	0.306
8	Colima	0.333	0.178	0.256
9	Durango	0.500	0.022	0.261
10	Guanajuato	0.333	0.311	0.322
11	Guerrero	0.167	0.378	0.272
12	Hidalgo	1.000	0.222	0.611
13	Jalisco	0.167	0.644	0.406
14	México	0.333	0.356	0.344
15	Michoacán	0.500	0.311	0.406
16	Morelos	0.333	0.911	0.622
17	Nayarit	0.333	0.000	0.167
18	Nuevo León	0.000	0.156	0.078
19	Oaxaca	0.500	0.378	0.439
20	Puebla	0.333	0.489	0.411
21	Querétaro	0.167	0.111	0.139
22	Quintana Roo	0.500	0.333	0.417
23	San Luis Potosí	0.000	0.556	0.278
24	Sinaloa	0.667	0.022	0.344
25	Sonora	0.333	0.689	0.511
26	Tabasco	0.167	0.733	0.450
27	Tamaulipas	0.333	0.133	0.233
28	Tlaxcala	0.500	0.133	0.317
29	Veracruz	0.167	0.289	0.228
30	Yucatán	0.167	1.000	0.583
31	Zacatecas	0.500	0.222	0.361

FUENTE: Elaboración propia con datos de: IMCO. (2009). *Competitividad Estatal de México*, 2008. www.imco.org.mx

4.5. Indicador de transparencia.

El Derecho a la Información tiene que verse como un aspecto fundamental de la globalización económica y la prevalencia de las economías de mercado, también es uno de los derechos humanos más importantes establecidos a nivel mundial en los años recientes. Una prueba de ello, es que los países han puesto especial énfasis en reformas jurídicas de este tipo a partir del resurgimiento del liberalismo económico a finales de los años setenta. Por ejemplo, para inicios de los años noventa del siglo pasado, solamente 13 países en todo el mundo contaban con legislación precisa en cuanto al Derecho a la Información. Vale destacar que actualmente estas disposiciones son comunes en la gran mayoría de países democráticos.²

En Inglaterra, estas normativas apenas se establecieron en el año 2000, mediante la *Freedom Information Act*,³ merece la pena hacer mención sobre la relación que diversos gobiernos y académicos realizan entre el Derecho a la Información y la libertad económica, y no solamente con las libertades políticas y civiles.

La libertad de información (se denomina transparencia gubernamental en México) tiene que ver con el abanico de opciones de información, generalmente pública, a la que un ciudadano puede acceder, por lo que una mayor libertad de información significa que los ciudadanos tienen la opción de conocer una mayor cantidad de información pública generada, por su parte, una libertad de información nula significaría una opacidad total por parte del sector público. La libertad de información, entonces, es una regulación que se impone el Estado sobre sí mismo.

Teniendo en cuenta que en promedio, en el país, el sector público en sus distintos niveles gasta aproximadamente el 30% de la riqueza social; es fundamental que los agentes económicos sepan cuándo, por qué, para qué, quién, cómo y dónde se gastan esos fondos, ya que ello puede promover la eficiencia económica de los

² MENDEL, T. (2007): "Access to Information: The Existing State of Affairs Around The World" en Villanueva, E. (Coord.) *Derecho de la Información*, México: UNAM, pp. 3-12.

³ *Ibíd.* p. 5.

recursos, ya sea mediante el complemento de los recursos privados potenciando las economías de escala, o bien, vía la reconducción de los presupuestos públicos mediante procesos de elección colectiva. Y estas situaciones solamente serían posibles con niveles adecuados de libertad de información.

La transparencia gubernamental es un pilar de cualquier democracia liberal. En cuanto a la libertad económica, tiene importantes efectos, entre los que se pueden mencionar los siguientes:

1. Promueve la simetría de la información: Existe una vasta literatura que sostiene que la información asimétrica lleva los mercados a situaciones de ineficiencia económica. En el caso de la existencia de asimetrías en la información entre gobierno y agentes privados, estos tienen reducidas sus opciones de consumo e inversión, menoscabando su libertad económica.

Por ejemplo, si una empresa extranjera está buscando dónde establecerse, es obligatorio que conozca, si por ejemplo, el gobierno de una entidad le otorga ciertos subsidios o ventajas a empresas locales, cuáles son las disposiciones jurídicas internas tanto para contratar personal, como las licencias y costo de trámites por el suministro de servicios básicos como agua o energía eléctrica, o en el peor de los casos, la potencial empresa privada tiene todo el derecho a saber si el mismo sector público participa en ese mercado vía una empresa paraestatal, y si en dado caso así fuera, y la empresa privada todavía sienta que puede competir contra la empresa pública, tiene derecho a saber con toda claridad, cuales son los instrumentos tanto fiscales como jurídicos con los que eventualmente contaría la empresa del sector público para afrontar la competencia. Todo eso sería posible gracias a una adecuada transparencia gubernamental, si tal transparencia no existiera, habría un velo que no permitiría tomar decisiones privadas de manera eficiente, por lo que al reducirse las opciones de inversión, se reduce la libertad económica.

2. Es una medida efectiva contra la corrupción: La libertad de información permite que la sociedad se involucre de mejor manera en los procesos políticos, así como controlar posibles abusos de las autoridades. La corrupción

puede hacer que en un país la ley no se aplique de manera igual a toda la población, esta situación mina la libertad económica porque introduce incertidumbre en las instituciones económicas, ya que estas ofrecerán resultados no de conformidad con las reglas del mercado, sino debido a situaciones discrecionales de los involucrados en los actos de corrupción, que pueden ser tanto ciudadanos como gobiernos.

Un ejemplo sencillo: supóngase la existencia de colusión entre un funcionario y un agente privado para la provisión exclusiva de un insumo necesario para las labores administrativas de gobierno, como pudiera ser la papelería o el equipo de cómputo. En este caso, un acto de corrupción creó un monopolio de manera artificial, y el resultado es que el agente privado vendería a precios más altos los suministros debido a que tiene que obtener el remanente monetario necesario para pagar el favor al funcionario, creando un claro perjuicio patrimonial para el sector público. Sin embargo, también disminuye la libertad económica de la sociedad ya que este acto de corrupción excluye de la posibilidad de suministrar bienes o servicios al gobierno a todos aquellos que no participen en estas componendas, por lo que disminuyen sus posibles clientes, del mismo modo, sus opciones de participar en el mercado. La transparencia gubernamental, que establezca claramente los procedimientos de licitación de cualquier compra o concesión gubernamental, puede incrementar la libertad económica de la sociedad, al convertir a cualquier agente privado en potencial proveedor de bienes o servicios públicos, incrementando sus opciones de participar en el mercado. Estas dos situaciones descritas, hacen necesaria la inclusión de un índice de transparencia gubernamental para un país subdesarrollado, como el caso de México.

Además, no hay que olvidar que la corrupción afecta la eficiencia económica, la inversión y la productividad, disminuyendo el nivel de renta y los ritmos de crecimiento económico⁴, por lo que se obtienen beneficios adicionales de la transparencia gubernamental.

⁴ SALINAS, J. y SALINAS, M. del Mar. (2007). “Corrupción y actividad económica: una visión panorámica” en *Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública*, 1-2007, España: Instituto de Estudios Fiscales, consultado en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/hac_pub/180_Salinas.pdf

En los Estados Unidos Mexicanos, la transparencia y rendición de cuentas es apenas una cuestión reciente, que todavía no alcanza la década. Actualmente los 31 Estados cuentan con su ley de transparencia y acceso a la información pública, estas disposiciones elaboradas por los congresos locales, muestran sustantivas diferencias y una distinta actitud ante la transparencia y rendición de cuentas, ello es una actitud diferente ante la libertad de información, por lo que es un elemento a evaluar dentro de la política económica de una entidad.

Debido a que las leyes y los reglamentos de los 31 Estados no son iguales, una manera coherente de evaluar la transparencia y rendición de cuentas es definir elementos deseables para las regulaciones, y una vez realizado este ejercicio, diseccionar cuáles ordenamientos locales se ciñen a tal elemento deseable, y los que no se encuentran dentro de estos límites, establecer por cuánto se alejan. Este ejercicio elimina cualquier subjetividad, tan importante para este elemento donde es común su evaluación mediante juicios de valor.

Los profesores del Área de Derecho a la Información de la Universidad Nacional Autónoma de México, Perla Gómez Gallardo y Ernesto Villanueva⁵, han realizado un ejercicio de evaluación de las disposiciones de transparencia, se han basado para ello en las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo mejor de este ejercicio es que plantean una metodología muy clara y bastante aplicable para años sucesivos.

Evalúan las siguientes características de las leyes de transparencia de los Estados:

1. Sujetos obligados.
2. Definiciones e interpretación.
3. Cultura de la transparencia.
4. Información de oficio.
5. Límites al Derecho de Acceso a la Información.

⁵ GÓMEZ, P. y VILLANUEVA, E. (2007). Indicadores de Transparencia y reforma al artículo 6 constitucional, México: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y Libertad de Información-México, A.C., pp. 26-28.

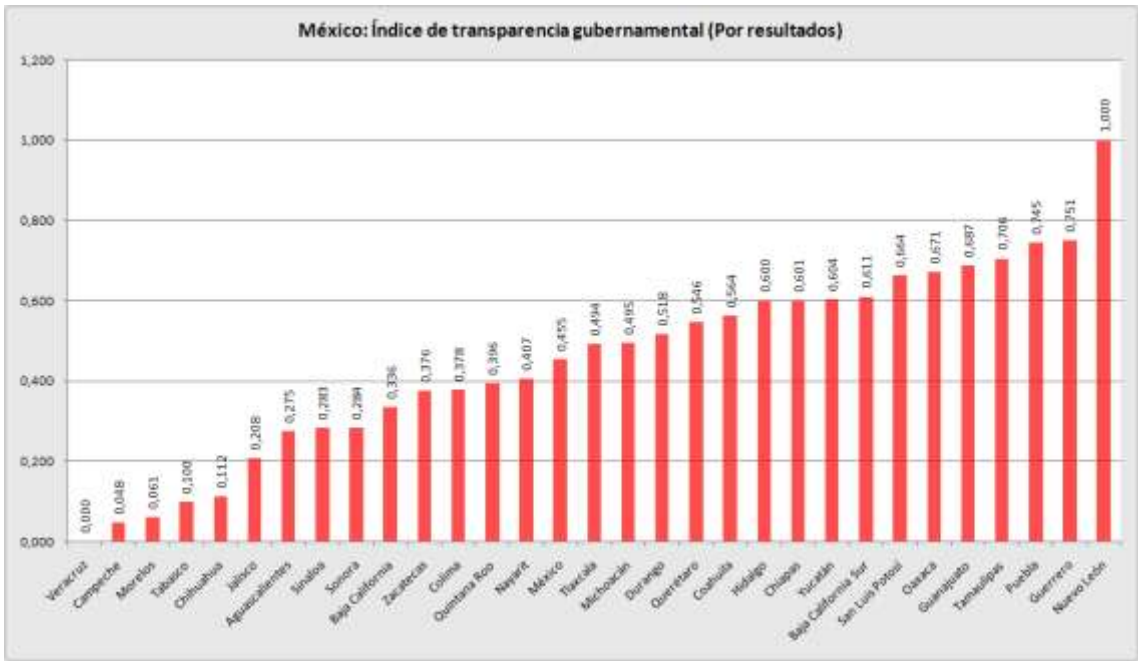
6. Versiones públicas.
7. Máxima publicidad.
8. Prueba de daño.
9. Gratuidad de la información.
10. Periodo de reserva.
11. Formas de solicitud de acceso a la información.
12. Habeas data.
13. Órgano garante.
14. Afirmativa ficta.
15. Vías de impugnación.
16. Formas de controlar la ley.
17. Ámbito temporal de validez.

A cada rubro le es asignada una calificación máxima de 10 puntos, por lo que la calificación total que un Estado puede alcanzar son 170 puntos. Estos son otorgados de conformidad con la calidad y cobertura de cada rubro. Por ejemplo, en el caso de la categoría sujetos obligados, si una ley de un Estado obliga a publicar su información solamente al sector central, mientras que otra regulación obliga a otro Estado no solamente a que el sector central publique su información, sino también al sector paraestatal, a asociaciones civiles que reciben recursos públicos, o en general, a todo agente que ejerza gasto público. Obviamente el segundo ordenamiento estará mejor calificado que el primero.

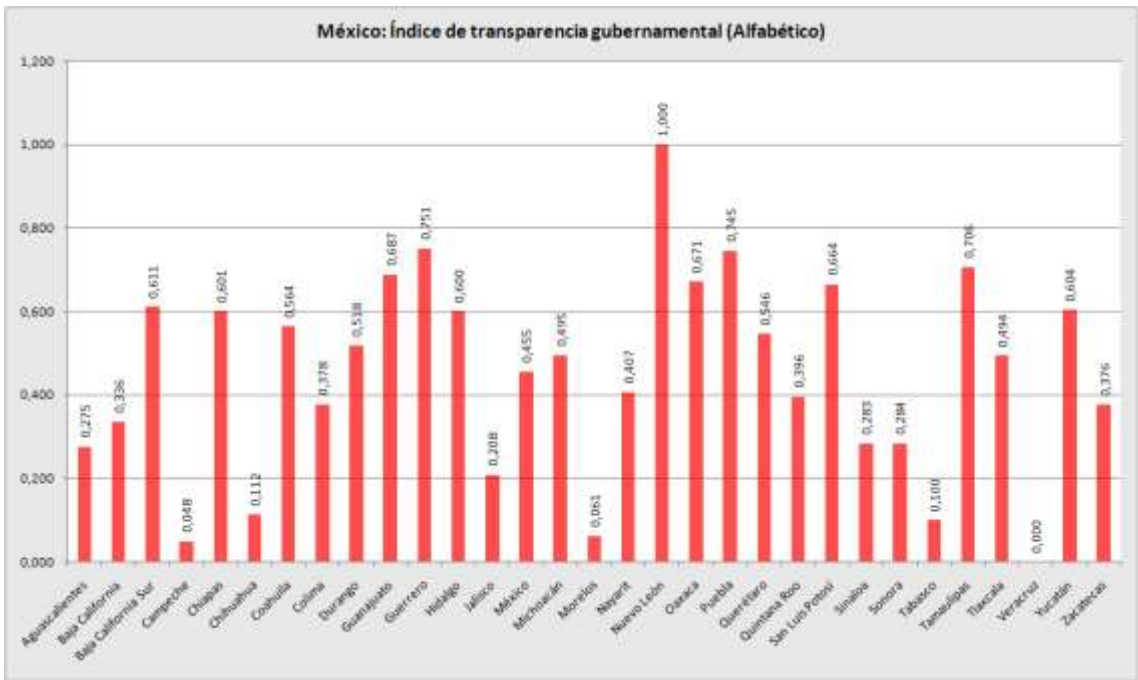
Al final, con el fin de homologar los indicadores, se ha normalizado la información de tal manera que 0 sea la mejor calificación, mientras que 1 será la menos favorable para la libertad económica.

En los resultados, el estado de Veracruz ha obtenido el mejor lugar en transparencia y rendición de cuentas, mientras que Nuevo León ha obtenido el último lugar de este ejercicio. Campeche, que obtiene el mejor puntaje en libertad económica, se ha situado en el segundo lugar.

Gráficamente, los resultados son:



Mientras que por orden alfabético, se tiene lo siguiente:



La información, por resultados, mediante cuadros es:

MÉXICO: INDICADOR DE TRANSPARENCIA (Por resultados)			
	Estado	Puntaje de transparencia	Índice
1	Veracruz	152,75	0,000
2	Campeche	147,63	0,048
3	Morelos	146,27	0,061
4	Tabasco	142,17	0,100
5	Chihuahua	140,85	0,112
6	Jalisco	130,70	0,208
7	Aguascalientes	123,61	0,275
8	Sinaloa	122,74	0,283
9	Sonora	122,62	0,284
10	Baja California	117,21	0,336
11	Zacatecas	112,90	0,376
12	Colima	112,75	0,378
13	Quintana Roo	110,83	0,396
14	Nayarit	109,68	0,407
15	México	104,53	0,455
16	Tlaxcala	100,46	0,494
17	Michoacán	100,30	0,495
18	Durango	97,87	0,518
19	Querétaro	94,89	0,546
20	Coahuila	93,02	0,564
21	Hidalgo	89,16	0,600
22	Chiapas	89,09	0,601
23	Yucatán	88,83	0,604
24	Baja California Sur	88,06	0,611
25	San Luis Potosí	82,44	0,664
26	Oaxaca	81,65	0,671
27	Guanajuato	79,94	0,687
28	Tamaulipas	78,00	0,706
29	Puebla	73,80	0,745
30	Guerrero	73,25	0,751
31	Nuevo León	46,84	1,000

FUENTE: Elaboración propia con datos de: GÓMEZ P. y VILLANUEVA E. (2007). *Indicadores de Transparencia y reforma al artículo 6 constitucional*, México: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y Libertad de Información-México, A.C., pp. 26-28.

De manera alfabética:

MÉXICO: INDICADOR DE TRANSPARENCIA (Alfabético)			
	Estado	Puntaje de transparencia	Índice
1	Aguascalientes	123,61	0,275
2	Baja California	117,21	0,336
3	Baja California Sur	88,06	0,611
4	Campeche	147,63	0,048
5	Chiapas	89,09	0,601
6	Chihuahua	140,85	0,112
7	Coahuila	93,02	0,564
8	Colima	112,75	0,378
9	Durango	97,87	0,518
10	Guanajuato	79,94	0,687
11	Guerrero	73,25	0,751
12	Hidalgo	89,16	0,600
13	Jalisco	130,70	0,208
14	México	104,53	0,455
15	Michoacán	100,30	0,495
16	Morelos	146,27	0,061
17	Nayarit	109,68	0,407
18	Nuevo León	46,84	1,000
19	Oaxaca	81,65	0,671
20	Puebla	73,80	0,745
21	Querétaro	94,89	0,546
22	Quintana Roo	110,83	0,396
23	San Luis Potosí	82,44	0,664
24	Sinaloa	122,74	0,283
25	Sonora	122,62	0,284
26	Tabasco	142,17	0,100
27	Tamaulipas	78,00	0,706
28	Tlaxcala	100,46	0,494
29	Veracruz	152,75	0,000
30	Yucatán	88,83	0,604
31	Zacatecas	112,90	0,376

FUENTE: Elaboración propia con datos de: GÓMEZ P. y VILLANUEVA E. (2007). *Indicadores de Transparencia y reforma al artículo 6 constitucional*, México: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y Libertad de Información-México, A.C., pp. 26-28.

4.6. Indicador de sanidad.

Si se habla de equidad social, la intervención del sector público en la sanidad permite que las personas incapacitadas, las sustraídas de la participación en el mercado del trabajo y no cuenten con ingresos presentes ni futuros, y en general, las que no se encuentren con la posibilidad de consumir bienes y servicios relativos a la salud reciban atención médica de calidad y en cantidad suficiente. Sin embargo, si se habla de eficiencia económica, la intervención del sector público en la sanidad también puede originar que personas que efectivamente pueden costear su atención médica (ya sea directamente o a través de un seguro médico privado) acudan a recibir la atención de los servicios públicos que están costeados con los impuestos totales de la sociedad, incluyendo los impuestos de quienes no hacen uso de los servicios públicos, e inclusive, en el caso de México, incluyendo los impuestos al consumo que la clase más desprotegida de la sociedad paga.

A nivel nacional, es decir, comprendiendo los tres niveles de gobierno (Federación, Estados y Municipios) se eroga más de un 15% del gasto público total en salud. A nivel Estado, el indicador va desde un 0,6% (Oaxaca) hasta casi una cuarta parte del gasto público total (Tabasco). En relación al PIB, el gasto público total en salud ronda el 3% del mismo, el gasto privado total es mayor ya que importa un 3,5% del PIB. En total, el gasto en salud representa el 6,5% de toda la producción anual. Estos indicadores soportan la inclusión del índice de sanidad en un índice de libertad económica estatal, ya que como se ve, la sanidad en México representa una parte importante de la economía.⁶

En principio, una mayor proporción del gasto privado en salud representa un superior nivel de libertad económica debido a que muestra que gran parte de ese rubro se desempeña bajo las reglas de mercado. De manera inversa, una gran proporción de gasto público significa que la sanidad en un Estado está sujeta a las reglas del ciclo político y burocrático. La idea general del indicador, entonces, es coadyuvar a que el individuo internalice, hasta lo posible, su consumo en salud.

⁶ SECRETARÍA DE SALUD. (2007). *Programa Nacional de Salud*, México, pp. 151-172, consultado en: http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf

El aspecto de la sanidad es fundamental para la libertad económica, el ejercicio realizado por investigadores de la UCM así lo indica, sin embargo, para el caso de México no se cuenta con información provista por los Estados de manera periódica ni totalmente confiable sobre la infraestructura privada en salud (como en España), por lo que una manera de afrontar el reto de lograr una comparación estatal en materia de sanidad puede estar definida por la utilización de variables que contemplen solamente el gasto en salud.

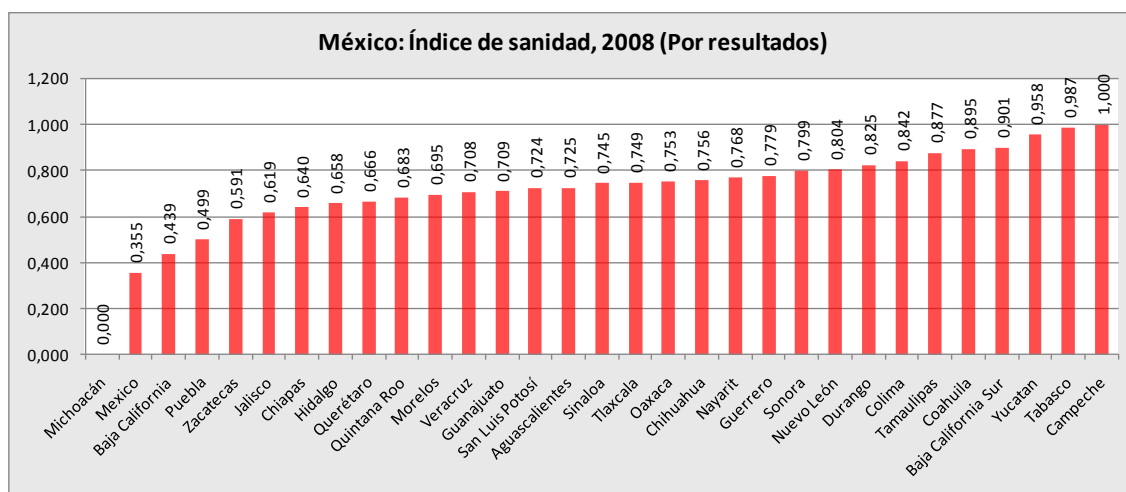
Se cuenta con información relativa al porcentaje del gasto privado en sanidad como porcentaje del PIB, al igual que con información referente al porcentaje del gasto público como porcentaje del PIB. Ambas variables por si solas no indican mucho, ni evaluándolas en el mismo ejercicio pero de manera separada. El gasto desembolsado por las familias en sí mismo no es un indicador de libertad económica, el gasto público tampoco lo es, ya que se puede gastar poco y mal. En un esquema donde las aseguradoras privadas participen en el sector sanidad, la competencia entre el sector público y privado puede conseguir una mejor atención médica a la población en beneficio del bienestar social. Por lo que el indicador que se plantea, supone que hay cobertura del sector privado vía las aseguradoras, este supuesto, aunque en principio puede parecer un tanto irreal, es bastante factible dentro de los márgenes de la política económica que un Estado tiene a su cargo, por lo que también puede servir de carril para conducir la política de sanidad hacia una mejor eficiencia. Además de ello, si no se supone un sector sanidad con cobertura de aseguradoras privadas, puede darse el caso de encontrarse con un Estado donde no haya ni cobertura del sector público ni las familias tengan el recurso en el bolsillo para hacer frente a eventualidades de salud, situación que lejos de incrementar la libertad económica, supone una disminución al bienestar social. En el mediano plazo, el Estado puede coadyuvar a la formación de una cultura que minimice el riesgo de una eventualidad de salud al mismo tiempo que puede elaborar programas o conseguir convenios con el sector privado para ampliar la cobertura de aseguradoras privadas.

A futuro, cuando haya más datos disponibles, se puede mejorar el indicador introduciendo el porcentaje de población cubierta mediante aseguradoras privadas. Aún así, el indicador es bastante útil como referente para la detección de rezagos de inversión privada en el sector salud. Mencionado lo anterior, el indicador que se plantea es el siguiente:

$$\text{Índice de sanidad} = \frac{(\text{Gasto privado en salud} / \text{Gasto público en salud})}{\text{como \% del PIB} / \text{como \% del PIB}}$$

Al final, los resultados se normalizan, utilizando los criterios ya citados en cuanto a los valores.

Gráfico por resultados:



Alfabético:

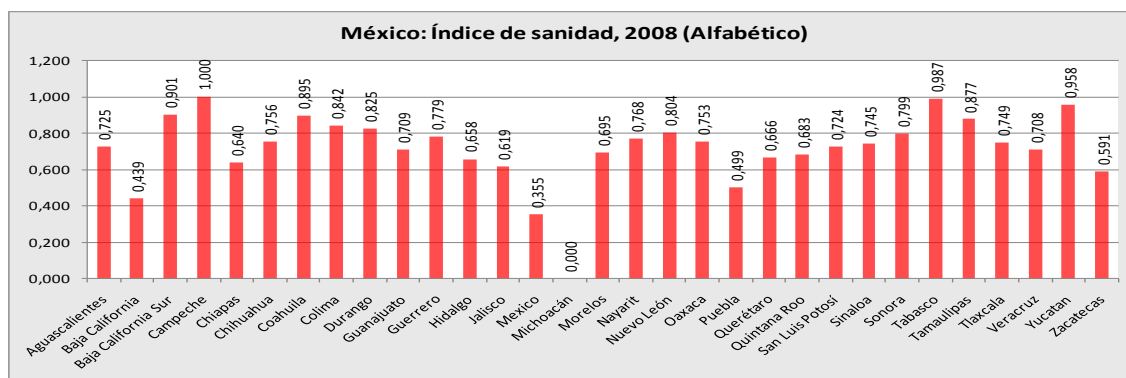


Tabla de resultados:

MÉXICO: ÍNDICE DE SANIDAD, 2008 (Por resultados)					
	Entidad Federativa	Gasto público en salud como % del PIB	Gasto privado en salud como % del PIB	Ratio de gasto privado	Índice de salud
1	Michoacán	3,5	11,4	3,26	0,000
2	México	2,5	5,6	2,24	0,355
3	Baja California	2,3	4,6	2,00	0,439
4	Puebla	2,9	5,3	1,83	0,499
5	Zacatecas	4,8	7,5	1,56	0,591
6	Jalisco	3,1	4,6	1,48	0,619
7	Chiapas	5,2	7,4	1,42	0,640
8	Hidalgo	4,3	5,9	1,37	0,658
9	Querétaro	2,3	3,1	1,35	0,666
10	Quintana Roo	2	2,6	1,30	0,683
11	Morelos	3,4	4,3	1,26	0,695
12	Veracruz	4,4	5,4	1,23	0,708
13	Guanajuato	3,1	3,8	1,23	0,709
14	San Luis Potosí	3,3	3,9	1,18	0,724
15	Aguascalientes	2,8	3,3	1,18	0,725
16	Sinaloa	4,1	4,6	1,12	0,745
17	Tlaxcala	4,5	5	1,11	0,749
18	Oaxaca	5,1	5,6	1,10	0,753
19	Chihuahua	2,2	2,4	1,09	0,756
20	Nayarit	5,5	5,8	1,05	0,768
21	Guerrero	4	4,1	1,03	0,779
22	Sonora	3,1	3	0,97	0,799
23	Nuevo León	2,1	2	0,95	0,804
24	Durango	3,7	3,3	0,89	0,825
25	Colima	4,5	3,8	0,84	0,842
26	Tamaulipas	3,1	2,3	0,74	0,877
27	Coahuila	2,6	1,8	0,69	0,895
28	Baja California Sur	4,3	2,9	0,67	0,901
29	Yucatán	4,7	2,4	0,51	0,958
30	Tabasco	8,2	3,5	0,43	0,987
31	Campeche	2,8	1,1	0,39	1,000

FUENTE: Elaboración propia con datos de: SECRETARÍA DE SALUD. (2007). *Programa Nacional de Salud*, México, pp. 151-172, consultado en: http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf

Tabla por orden alfabético:

MÉXICO: ÍNDICE DE SANIDAD, 2008 (Alfabético)					
	Entidad Federativa	Gasto público en salud como % del PIB	Gasto privado en salud como % del PIB	Ratio de gasto privado	Índice de salud
1	Aguascalientes	2,8	3,3	1,18	0,725
2	Baja California	2,3	4,6	2,00	0,439
3	Baja California Sur	4,3	2,9	0,67	0,901
4	Campeche	2,8	1,1	0,39	1,000
5	Chiapas	5,2	7,4	1,42	0,640
6	Chihuahua	2,2	2,4	1,09	0,756
7	Coahuila	2,6	1,8	0,69	0,895
8	Colima	4,5	3,8	0,84	0,842
9	Durango	3,7	3,3	0,89	0,825
10	Guanajuato	3,1	3,8	1,23	0,709
11	Guerrero	4	4,1	1,03	0,779
12	Hidalgo	4,3	5,9	1,37	0,658
13	Jalisco	3,1	4,6	1,48	0,619
14	Mexico	2,5	5,6	2,24	0,355
15	Michoacán	3,5	11,4	3,26	0,000
16	Morelos	3,4	4,3	1,26	0,695
17	Nayarit	5,5	5,8	1,05	0,768
18	Nuevo León	2,1	2	0,95	0,804
19	Oaxaca	5,1	5,6	1,10	0,753
20	Puebla	2,9	5,3	1,83	0,499
21	Querétaro	2,3	3,1	1,35	0,666
22	Quintana Roo	2	2,6	1,30	0,683
23	San Luis Potosí	3,3	3,9	1,18	0,724
24	Sinaloa	4,1	4,6	1,12	0,745
25	Sonora	3,1	3	0,97	0,799
26	Tabasco	8,2	3,5	0,43	0,987
27	Tamaulipas	3,1	2,3	0,74	0,877
28	Tlaxcala	4,5	5	1,11	0,749
29	Veracruz	4,4	5,4	1,23	0,708
30	Yucatan	4,7	2,4	0,51	0,958
31	Zacatecas	4,8	7,5	1,56	0,591

FUENTE: Elaboración propia con datos de: SECRETARÍA DE SALUD. (2007). *Programa Nacional de Salud*, México, pp. 151-172, consultado en: http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf

4.7. Índice de seguridad.

“El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno o cualquiera de sus miembros, es la propia protección”.

John Stuart Mill, *Sobre la libertad* (1859).

“Solo bajo la protección del magistrado civil podrá descansar tranquilamente durante el corto espacio de una noche el dueño de esa propiedad tan valiosa, adquirida con el trabajo de muchos años o quizá de sucesivas generaciones”.

Adam Smith, *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones* (1776).

A nivel privado, la inseguridad disminuye la libertad económica en al menos dos formas:

1. Establece un coste fijo a las empresas y familias, ya que estas tienen que soportar la carga financiera que implica la compra de equipos de seguridad, vigilancia, alarmas, etc. Estos recursos, en lugar de ser destinados a inversiones productivas por las empresas o al consumo de manera libre de algún bien por parte de las familias, se tienen que destinar de manera inexorable a la seguridad pública, mostrando una disminución de la libertad económica.
2. Introduce incertidumbre a la economía: Si no existe la certeza de apropiarse los rendimientos del trabajo, ya sea porque es imposible que la estructura judicial haga completamente realizable el cumplimiento de un contrato, o porque existe la posibilidad del robo o la destrucción de la propiedad privada, se introduce incertidumbre que las personas neutrales o adversas al riesgo buscarán enfrentar sustrayéndose de las actividades económicas, con ello disminuye la libertad económica de la población. Por otra parte, cuando existe plena certeza de la apropiación del fruto del trabajo, la protección de la propiedad y el cumplimiento de los contratos, se crea un ambiente favorable al intercambio, con lo que la libertad económica se incrementa.

Actualmente, la seguridad pública es un tema de suma relevancia en México, algunas Entidades Federativas llegan a gastar alrededor del 10% de sus presupuestos totales en este rubro de manera anual. En principio, puede fácilmente concluirse que en una Entidad con una seguridad pública aceptable podría destinarse un menor nivel de gasto a este objetivo, y los recursos excedentes pueden gastarse en otra prioridad, o bien, disminuir la carga fiscal, incrementando la libertad económica de los ciudadanos. Por lo que puede notarse que la inseguridad incrementa la exacción fiscal y distrae recursos sociales, tanto públicos como privados.

De manera aparte, El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado⁷ menciona que la inseguridad ha mermado el nivel de actividad económica en México por el importe de un 15% del PIB, de proseguir con el clima de inseguridad, podría desaparecer la correlación entre crecimiento económico y libertad económica. Y es que con el correr de los años, pudiera darse el caso de que el sector público podría estar realizando medidas adecuadas para el incremento de la libertad económica, y al mismo tiempo, la inseguridad estaría mermando el crecimiento económico, por lo que se podría pensar que las medidas tomadas no son las suficientes, o peor aún, que la libertad económica no tiene impactos sobre el nivel de crecimiento económico y meter ruido con la posibilidad de un cambio de rumbo o de incorporar de una manera mayor al sector público en la economía. El total de razones expuestas (centrales y marginales) hacen obligatorio que en un país como México incorpore el indicador de seguridad al índice de libertad económica.

En México, un delito, de acuerdo a su lugar de comisión, puede ser del fuero común o del fuero federal. Por ejemplo, todos los delitos que se cometen en el Estado de Veracruz son del fuero común, salvo aquellos que la Federación ha reservado para sí misma, que son del fuero federal y que tienen que ver, entre otros, los relacionados al narcotráfico, los cometidos en un aeropuerto, los cometidos por un servidor público o empleado federal en ejercicio de sus funciones y en general, todas aquellas situaciones descritas en el Código Penal Federal y en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.⁸

⁷ “Inseguridad cuesta el 15% del PIB: Centro de Estudios Económicos del Sector Privado”, nota consultada en: <http://www.cnnexpansion.com/economia/2010/05/09/inseguridad-cuesta-el-15-del-pib-ceesp>.

⁸ <http://info4.juridicas.unam.mx/juslab/leylab/171/51.htm>

Por su parte, los delitos del fuero común son aquellos sancionados por los códigos penales de cada uno de los Estados y tienen que ver con el fraude, daño en las cosas, robo, abuso de confianza, lesiones, delitos sexuales y homicidios, entre muchos otros. No se contempla ninguno de los delitos relacionados con el narcotráfico (delitos contra la salud, posesión de armas de fuego, etc.) debido a que son del fuero federal⁹ y su combate obedece de manera principal a la Federación. El tomar en cuenta en la elaboración del índice solamente los delitos del fuero común busca eliminar el sesgo hacia ciertas Entidades Federativas golpeadas de manera mayor por el narcotráfico. Además, los Estados están facultados para elaborar políticas públicas para la disminución de las tasas delictivas locales.

El índice de seguridad tiene como objetivo mostrar el entorno de confianza social; como ya se ha mencionado, un ambiente de seguridad amplifica la libertad económica en diversas maneras.

Normalmente, las tasas delictivas se elaboran en términos de cien mil habitantes, sin embargo, tal elaboración es buena principalmente para la comparación de incidencias delictivas por países. Cuando se compara la incidencia delictiva por municipios, o en lugares donde la gran mayoría de las poblaciones son menores a los cien mil habitantes, quizá sea mejor utilizar un índice de población por presunto delito, ya que esta forma de elaborar los datos facilita las comparaciones sin importar el tamaño poblacional de las comunidades.

Para calcular el índice de seguridad, se tomó en cuenta la población estimada para el año 2008 y el total de presuntos delitos por Estado. El producto obtenido relaciona el número de presuntos delitos por habitante, por lo que un presunto delito cada 500 habitantes (quizá la población de una manzana o cuadra) es mejor que un delito cada 50 habitantes (quizá la población de un condominio pequeño). Los resultados se normalizan de tal manera que 0 sea el mejor indicador y 1 sea el menos favorable para la libertad económica, se supone la misma gravedad del delito. Este índice pudiera complementarse relacionándolo con la efectividad de los juzgados, sin embargo, las agencias del ministerio público en diversos Estados tienden a mezclar en

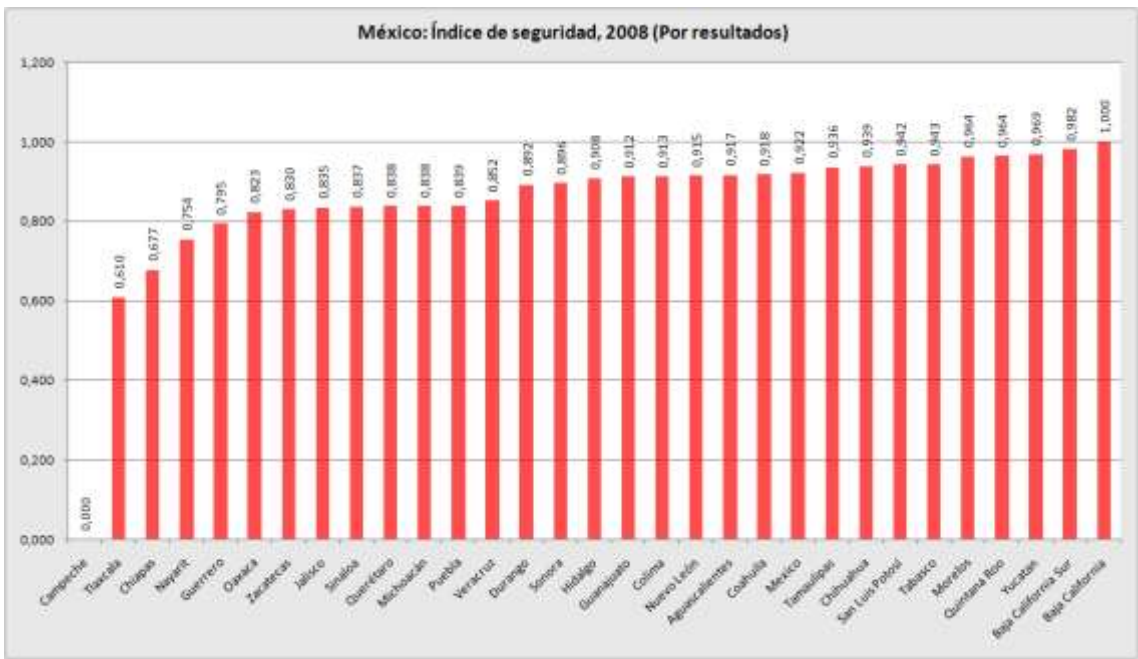
⁹ En términos del artículo 474 de la Ley General de Salud. <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/142.pdf>

sus anuarios estadísticos delitos de distintos años, por lo que se vuelve imposible la incorporación del criterio de efectividad para los 31 Estados. Siendo así, el índice está definido de la siguiente manera:

$$\text{Índice de seguridad} = \frac{\text{Población total}}{\text{Número de hechos presuntamente delictuosos (fuero común)}}.$$

Los resultados se han normalizado de tal manera que 0 es el indicador más favorable para la libertad económica, mientras que 1 es el menos favorable para tal fin. El mejor resultado de este índice lo ha obtenido Campeche, que también obtiene el mejor resultado en el índice de libertad económica, mientras que el resultado menos favorable ha sido para Baja California. Es necesario destacar la amplia diferencia que presenta este indicador, ya que entre el Estado mejor ubicado y el ubicado en una posición menos favorable hay un contraste de casi 25 veces más hechos presumiblemente delictuosos.

De manera gráfica, se tiene lo siguiente:



Por orden alfabético:

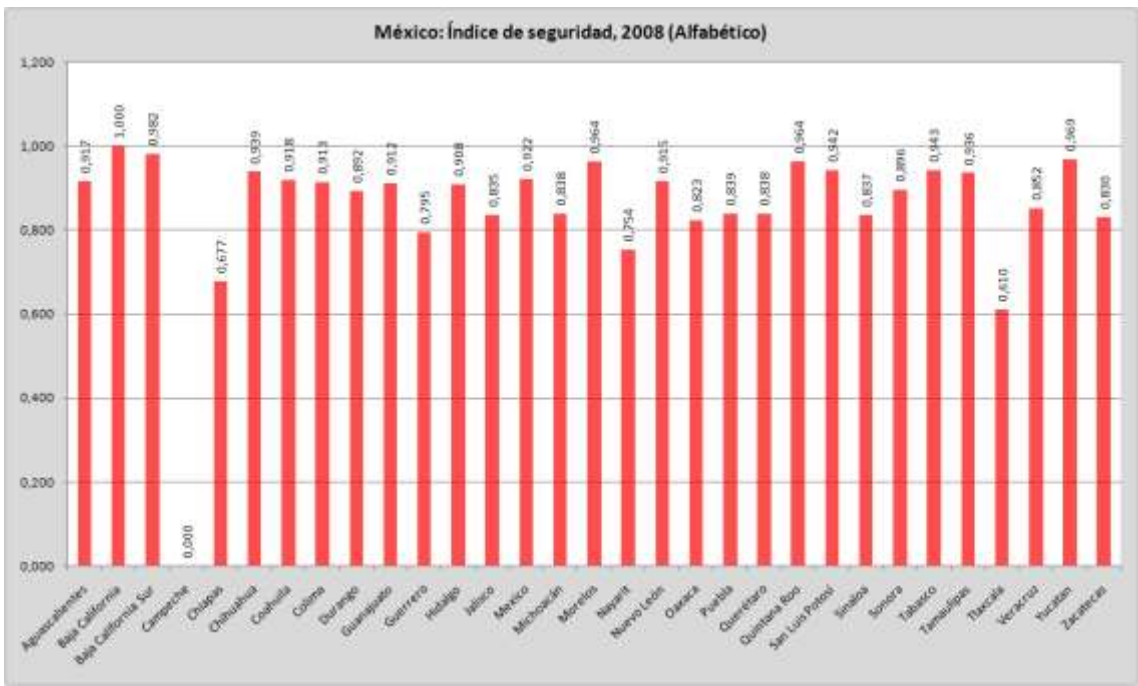


Tabla por resultados:

MÉXICO: ÍNDICE DE SEGURIDAD, 2008 (Por resultados)			
	Estado	Personas por presunto delito	Índice 2008
1	Campeche	504,3	0,000
2	Tlaxcala	208,6	0,610
3	Chiapas	175,6	0,677
4	Nayarit	138,4	0,754
5	Guerrero	118,7	0,795
6	Oaxaca	104,9	0,823
7	Zacatecas	101,5	0,830
8	Jalisco	99,3	0,835
9	Sinaloa	98,4	0,837
10	Querétaro	97,9	0,838
11	Michoacán	97,8	0,838
12	Puebla	97,4	0,839
13	Veracruz	91,1	0,852
14	Durango	71,6	0,892
15	Sonora	69,5	0,896
16	Hidalgo	63,8	0,908
17	Guanajuato	61,7	0,912
18	Colima	61,4	0,913
19	Nuevo León	60,2	0,915
20	Aguascalientes	59,5	0,917
21	Coahuila	59,0	0,918
22	Mexico	57,0	0,922
23	Tamaulipas	50,2	0,936
24	Chihuahua	49,0	0,939
25	San Luis Potosí	47,1	0,942
26	Tabasco	47,0	0,943
27	Morelos	36,8	0,964
28	Quintana Roo	36,5	0,964
29	Yucatan	34,2	0,969
30	Baja California Sur	28,0	0,982
31	Baja California	19,2	1,000

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173. Para población se utilizaron estimaciones del CONAPO, consultadas en http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=234

Tabla por orden alfabético:

MÉXICO: ÍNDICE DE SEGURIDAD, 2008 (Alfabético)			
	Estado	Personas por presunto delito	Índice 2008
1	Aguascalientes	59,5	0,917
2	Baja California	19,2	1,000
3	Baja California Sur	28,0	0,982
4	Campeche	504,3	0,000
5	Chiapas	175,6	0,677
6	Chihuahua	49,0	0,939
7	Coahuila	59,0	0,918
8	Colima	61,4	0,913
9	Durango	71,6	0,892
10	Guanajuato	61,7	0,912
11	Guerrero	118,7	0,795
12	Hidalgo	63,8	0,908
13	Jalisco	99,3	0,835
14	Mexico	57,0	0,922
15	Michoacán	97,8	0,838
16	Morelos	36,8	0,964
17	Nayarit	138,4	0,754
18	Nuevo León	60,2	0,915
19	Oaxaca	104,9	0,823
20	Puebla	97,4	0,839
21	Querétaro	97,9	0,838
22	Quintana Roo	36,5	0,964
23	San Luis Potosí	47,1	0,942
24	Sinaloa	98,4	0,837
25	Sonora	69,5	0,896
26	Tabasco	47,0	0,943
27	Tamaulipas	50,2	0,936
28	Tlaxcala	208,6	0,610
29	Veracruz	91,1	0,852
30	Yucatan	34,2	0,969
31	Zacatecas	101,5	0,830

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173. Para población se utilizaron estimaciones del CONAPO, consultadas en http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=234

4.8. Índice de educación.

En este caso, para elaborar los indicadores se tomaron como referencia los datos correspondientes a la educación básica y media superior, que comprende los primeros 12 años de instrucción escolar para alumnos de entre 6 y 18 años de edad, en promedio. Tal procedimiento obedeció principalmente a dos razones: Es la edad en la cual la educación podría considerarse un bien público y también debido a que el promedio educativo del país no rebasa los 12 años de instrucción.

Como ya se ha dicho, favorecer la participación del sector privado en la educación no significa alejar al sector público de su financiamiento, pero sí reflexionar sobre quién debe proveer este servicio a la población; un esquema donde el sector público participe en el financiamiento, pero se limite la libertad de elección a solamente optar por una escuela pública no es lo deseable desde el punto de vista económico, la competencia por los recursos fiscales puede mejorar el nivel educativo de una sociedad, y ampliar la libertad de elección de la población.

El índice de educación se define de la siguiente manera:

$$IE = (IA + ID + IESC)/3$$

Donde:

IE = Índice de educación.

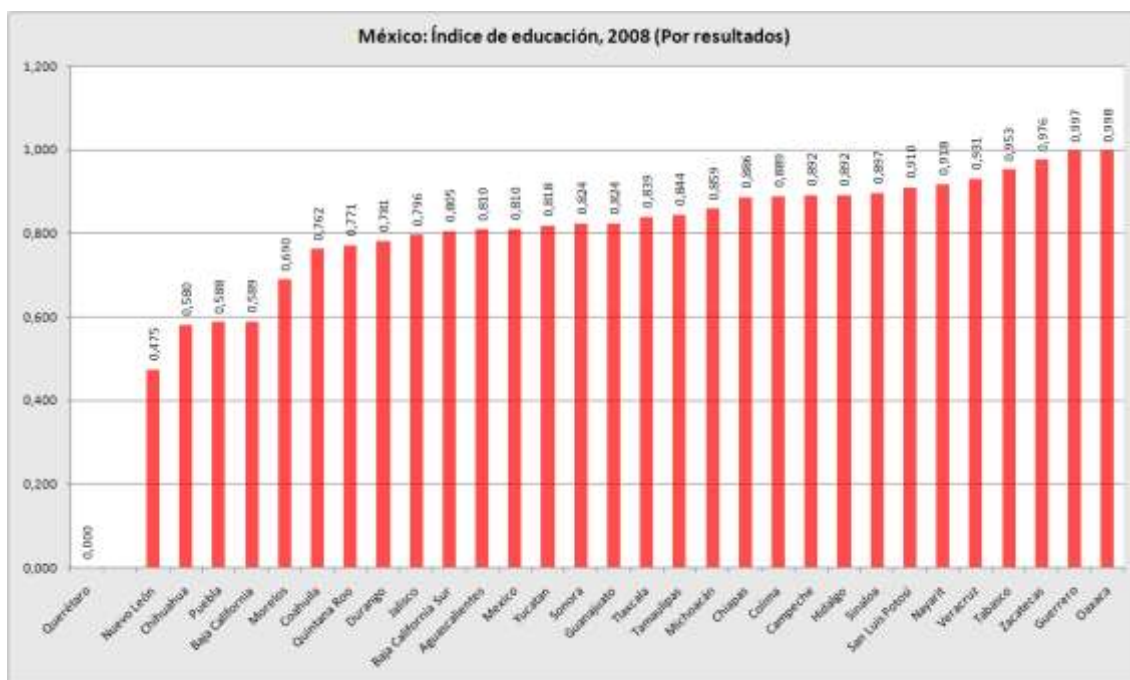
IA = Índice de alumnos atendidos por los Estados en educación básica y media superior como % del total.

ID = Docentes trabajando en escuelas de los Estados en nivel básico y medio superior como % del total.

IESC = Escuelas de los Estados como % del total de escuelas de Estados y privadas

Los resultados obtenidos son los siguientes:

Por resultados:



Alfabético:

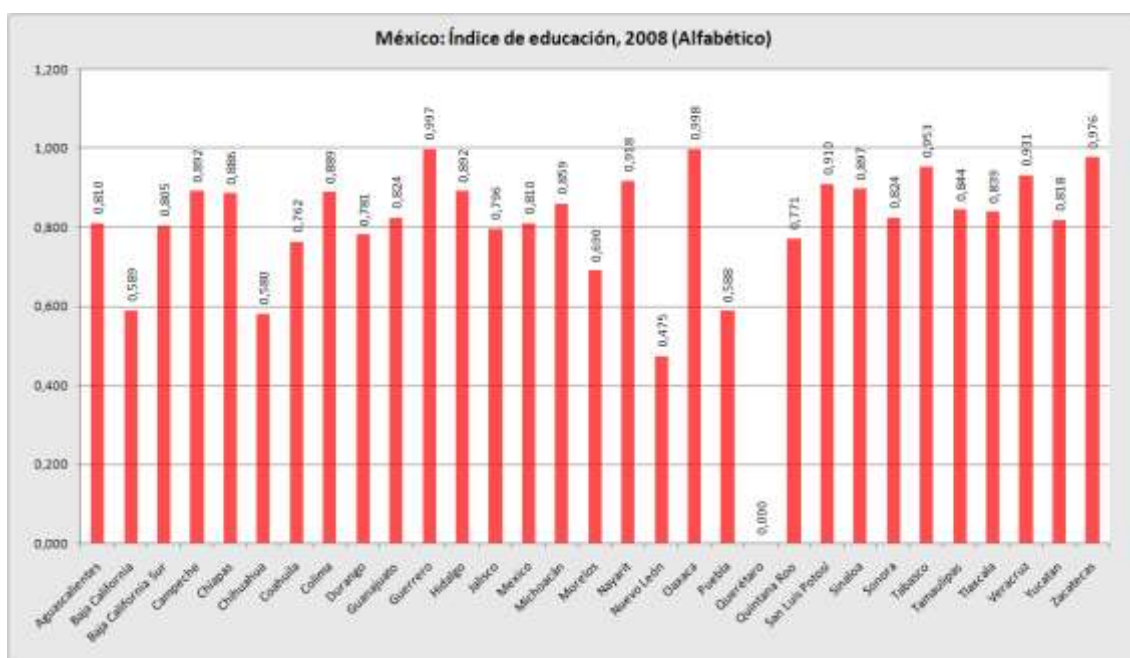


Tabla de resultados:

MÉXICO: ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, 2008 (Por resultados)					
	Estado	Índice de alumnos	Índice de profesores	Índice de escuelas	Índice de educación.
1	Querétaro	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Nuevo León	0,516	0,435	0,472	0,475
3	Chihuahua	0,631	0,551	0,559	0,580
4	Puebla	0,672	0,524	0,568	0,588
5	Baja California	0,677	0,624	0,467	0,589
6	Morelos	0,835	0,618	0,616	0,690
7	Coahuila	0,820	0,710	0,757	0,762
8	Quintana Roo	0,809	0,798	0,707	0,771
9	Durango	0,794	0,753	0,797	0,781
10	Jalisco	0,823	0,771	0,795	0,796
11	Baja California Sur	0,865	0,747	0,801	0,805
12	Aguascalientes	0,867	0,780	0,781	0,810
13	Mexico	0,877	0,815	0,739	0,810
14	Yucatan	0,867	0,809	0,777	0,818
15	Sonora	0,852	0,812	0,809	0,824
16	Guanajuato	0,856	0,761	0,856	0,824
17	Tlaxcala	0,910	0,834	0,774	0,839
18	Tamaulipas	0,884	0,820	0,829	0,844
19	Michoacán	0,855	0,829	0,894	0,859
20	Chiapas	0,921	0,834	0,903	0,886
21	Colima	0,925	0,887	0,854	0,889
22	Campeche	0,935	0,839	0,901	0,892
23	Hidalgo	0,912	0,868	0,895	0,892
24	Sinaloa	0,906	0,872	0,914	0,897
25	San Luis Potosí	0,917	0,891	0,923	0,910
26	Nayarit	0,945	0,912	0,898	0,918
27	Veracruz	0,943	0,902	0,948	0,931
28	Tabasco	0,962	0,943	0,955	0,953
29	Zacatecas	0,981	0,964	0,984	0,976
30	Guerrero	1,000	1,000	0,992	0,997
31	Oaxaca	0,994	0,999	1,000	0,998

****NOTA:** Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

Alfabético:

MÉXICO: ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, 2008 (Alfabético)					
	Estado	Índice de alumnos	Índice de profesores	Índice de escuelas	Índice de educación.
1	Aguascalientes	0,867	0,780	0,781	0,810
2	Baja California	0,677	0,624	0,467	0,589
3	Baja California Sur	0,865	0,747	0,801	0,805
4	Campeche	0,935	0,839	0,901	0,892
5	Chiapas	0,921	0,834	0,903	0,886
6	Chihuahua	0,631	0,551	0,559	0,580
7	Coahuila	0,820	0,710	0,757	0,762
8	Colima	0,925	0,887	0,854	0,889
9	Durango	0,794	0,753	0,797	0,781
10	Guanajuato	0,856	0,761	0,856	0,824
11	Guerrero	1,000	1,000	0,992	0,997
12	Hidalgo	0,912	0,868	0,895	0,892
13	Jalisco	0,823	0,771	0,795	0,796
14	Mexico	0,877	0,815	0,739	0,810
15	Michoacán	0,855	0,829	0,894	0,859
16	Morelos	0,835	0,618	0,616	0,690
17	Nayarit	0,945	0,912	0,898	0,918
18	Nuevo León	0,516	0,435	0,472	0,475
19	Oaxaca	0,994	0,999	1,000	0,998
20	Puebla	0,672	0,524	0,568	0,588
21	Querétaro	0,000	0,000	0,000	0,000
22	Quintana Roo	0,809	0,798	0,707	0,771
23	San Luis Potosí	0,917	0,891	0,923	0,910
24	Sinaloa	0,906	0,872	0,914	0,897
25	Sonora	0,852	0,812	0,809	0,824
26	Tabasco	0,962	0,943	0,955	0,953
27	Tamaulipas	0,884	0,820	0,829	0,844
28	Tlaxcala	0,910	0,834	0,774	0,839
29	Veracruz	0,943	0,902	0,948	0,931
30	Yucatan	0,867	0,809	0,777	0,818
31	Zacatecas	0,981	0,964	0,984	0,976
**NOTA: Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.					
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173					

4.9. Índice de deuda pública.

Respecto a la deuda pública de los Estados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 117, fracción VIII, menciona que los Estados no pueden, en ningún caso:

“Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional”.

“Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública”.¹⁰

El fragmento mostrado, aunque muestra restricciones financieras, establece cierto espacio para que los Estados tracen una política de deuda pública.

La deuda pública, bajo ciertas condiciones, puede ser un buen mecanismo para el financiamiento de proyectos de desarrollo que comprendan varios ejercicios fiscales, sin embargo, también menoscaba la libertad económica debido a que sustrae recursos de generaciones futuras para la aplicación o gasto de los flujos de efectivo por las generaciones que efectúan la acción de endeudarse. Además, al participar el sector público en los mercados financieros en la búsqueda de recursos monetarios frescos, desplaza las posibilidades de inversión privada vía el incremento de las tasas de interés.

Se tiene pues, que ante la ausencia de la posibilidad de privatizar bienes de propiedad pública, la deuda siempre acarrea gravámenes coercitivos ya que la obligación de pagar los intereses y amortización de la deuda normalmente se transforma en impuestos y altos precios públicos que deterioran la libertad económica.

¹⁰ <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

En este caso, si el sector público recurre a los mercados financieros para obtener recursos por la vía del endeudamiento, claramente incrementa su tamaño en relación con el resto de la economía. La deuda pública también disminuye la libertad económica, debido a que deteriora la cantidad de renta real disponible para las personas, ya sea para los períodos presentes, o bien, y con mayor frecuencia, para períodos futuros.

Para calcular este indicador, se tomaron los datos relativos a la deuda pública de los Estados y se relacionaron con el PIB, los datos finales se normalizaron de manera que 0 es el indicador más favorable, mientras que 1 es el indicador menos favorable para la libertad económica, de tal manera, que la fórmula empleada es la siguiente:

$$IDP = (Deuda\ pública\ de\ los\ Estados / PIB\ de\ los\ Estados) \times 100$$

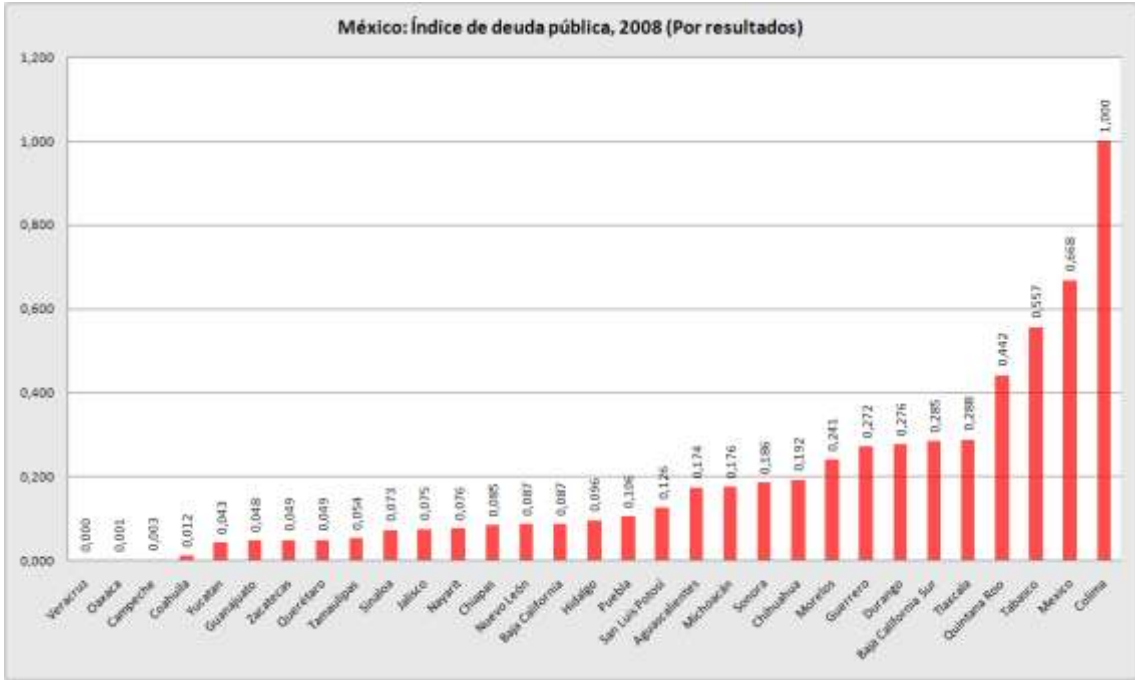
Como ya se ha mencionado, es importante la introducción de la deuda pública como porcentaje de la riqueza estatal para medir la libertad económica, ya que la deuda pública, en gran cantidad de ocasiones (sobre todo cuando los recursos se utilizan para consumo o gasto corriente y no para inversión productiva) disminuye las posibilidades económicas de una entidad en el largo plazo, restringiendo su libertad de elección.

En adición, reiterar que la deuda pública normalmente se origina con la finalidad de efectuar un mayor nivel de gasto público, lo que disminuye la libertad económica ya que el gobierno distribuye los recursos sociales de conformidad al ciclo político, es decir, de conformidad con la rentabilidad política que espere, y no a donde el mercado valora de mejor manera los recursos.

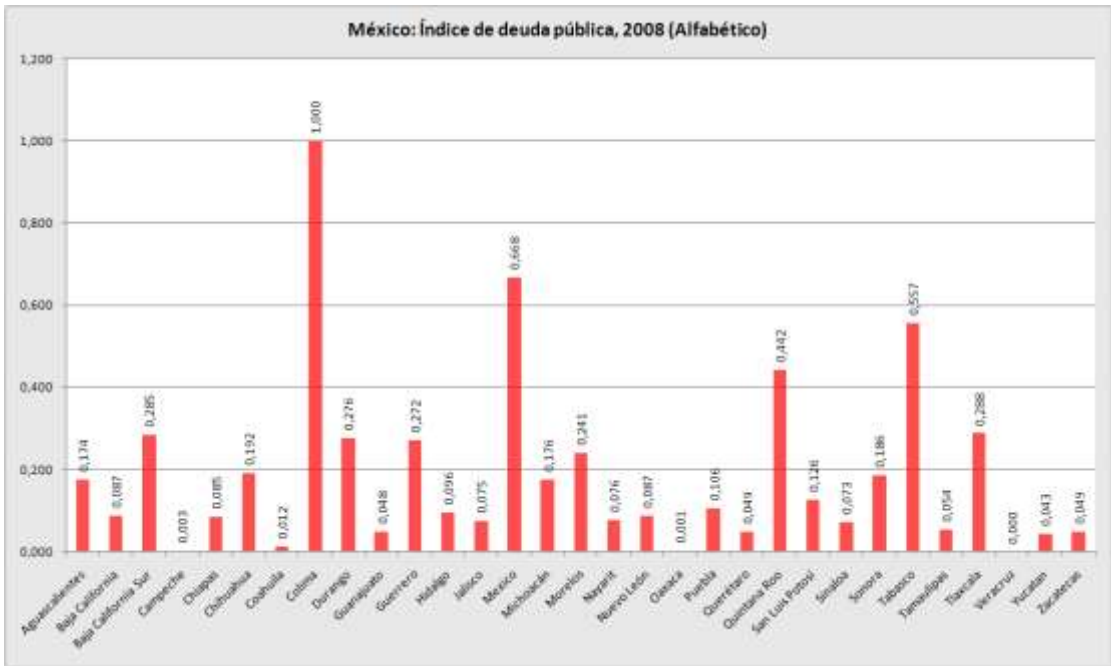
El Estado que mejores indicadores obtiene en este rubro es Veracruz, seguido muy de cerca por Oaxaca, que debido al redondeo a cuatro decimales, presenta el mismo indicador del Estado puntero.

A diferencia de las deudas públicas de los países, que recurrentemente alcanzan indicadores de varias veces su PIB, los Estados en México presentan indicadores relativamente modestos. Sin embargo, para la baja capacidad de ejercicio de recursos fiscales que presentan los Estados, en los últimos años la deuda pública se ha estado convirtiendo en una salida fácil para afrontar todo tipo de urgencias financieras.

La siguiente gráfica presenta los resultados:



Por orden alfabético, los resultados son los siguientes:



La información presentada en tabla, por resultados, es la siguiente:

MÉXICO: ÍNDICE DE DEUDA PÚBLICA, 2008 (Por resultados)			
	Entidad Federativa	Índice	% del PIB 2008
1	Veracruz	0,000	0,00
2	Oaxaca	0,001	0,00
3	Campeche	0,003	0,00
4	Coahuila	0,012	0,01
5	Yucatan	0,043	0,05
6	Guanajuato	0,048	0,06
7	Zacatecas	0,049	0,06
8	Querétaro	0,049	0,06
9	Tamaulipas	0,054	0,07
10	Sinaloa	0,073	0,09
11	Jalisco	0,075	0,09
12	Nayarit	0,076	0,09
13	Chiapas	0,085	0,10
14	Nuevo León	0,087	0,11
15	Baja California	0,087	0,11
16	Hidalgo	0,096	0,12
17	Puebla	0,106	0,13
18	San Luis Potosí	0,126	0,15
19	Aguascalientes	0,174	0,21
20	Michoacán	0,176	0,21
21	Sonora	0,186	0,23
22	Chihuahua	0,192	0,23
23	Morelos	0,241	0,29
24	Guerrero	0,272	0,33
25	Durango	0,276	0,34
26	Baja California Sur	0,285	0,35
27	Tlaxcala	0,288	0,35
28	Quintana Roo	0,442	0,54
29	Tabasco	0,557	0,68
30	Mexico	0,668	0,82
31	Colima	1,000	1,22

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288>

y con datos de INEGI consultados en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf

Mientras que por orden alfabético:

MÉXICO: ÍNDICE DE DEUDA PÚBLICA, 2008 (Alfabético)			
	Entidad Federativa	Índice	% del PIB 2008
1	Aguascalientes	0,174	0,21
2	Baja California	0,087	0,11
3	Baja California Sur	0,285	0,35
4	Campeche	0,003	0,00
5	Chiapas	0,085	0,10
6	Chihuahua	0,192	0,23
7	Coahuila	0,012	0,01
8	Colima	1,000	1,22
9	Durango	0,276	0,34
10	Guanajuato	0,048	0,06
11	Guerrero	0,272	0,33
12	Hidalgo	0,096	0,12
13	Jalisco	0,075	0,09
14	Mexico	0,668	0,82
15	Michoacán	0,176	0,21
16	Morelos	0,241	0,29
17	Nayarit	0,076	0,09
18	Nuevo León	0,087	0,11
19	Oaxaca	0,001	0,00
20	Puebla	0,106	0,13
21	Querétaro	0,049	0,06
22	Quintana Roo	0,442	0,54
23	San Luis Potosí	0,126	0,15
24	Sinaloa	0,073	0,09
25	Sonora	0,186	0,23
26	Tabasco	0,557	0,68
27	Tamaulipas	0,054	0,07
28	Tlaxcala	0,288	0,35
29	Veracruz	0,000	0,00
30	Yucatan	0,043	0,05
31	Zacatecas	0,049	0,06

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288> y con datos de INEGI consultados en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf

4.10. Índice de balance financiero.

Los déficits públicos recurrentes terminan llevando a cualquier economía a situaciones de crisis, que normalmente son el producto de la disminución en la acumulación de capital y la disminución en la producción, aunque de manera provisional y en situaciones concretas probablemente puedan ser efectivos para potenciar la demanda agregada. Junto con la deuda, son las dos principales medidas para el financiamiento del gasto público de los Estados.

Los déficits públicos son una de las preocupaciones más importantes de la política económica, ocupan lugares privilegiados en las campañas políticas y en las decisiones de unión económica de los países (Tratado de Maastricht), ya que pueden acarrear severos desequilibrios en las economías.

En un escenario donde no haya instituciones o regulaciones claras (los Estados tienen facultades para realizarlas) sobre la magnitud de los déficits fiscales, los políticos y burócratas tendrían incentivos en gastar más de lo eficiente, y una vez que esta situación de gasto se haya salido de control, podrían potenciar los desequilibrios en las finanzas públicas locales, ya sea mediante el recorte en el gasto principalmente dejando proyectos sin terminar, limitando la cobertura de los proyectos ya existentes, o mediante un incremento en los impuestos o los precios de los bienes públicos. Normalmente no se espera que se corrija un déficit público recortando los presupuestos para la nómina de burócratas, esto es un grave error que presenta la mayoría de déficits públicos.

En una situación donde impere la libertad económica, es difícil pensar que si el sector público realiza la función de provisión de bienes públicos, así como atender a los ciudadanos que mediante procesos de elección colectiva son percibidos como receptores de política social, el gobierno genere déficits fiscales, por lo que la introducción de este indicador puede coadyuvar a la medición de la libertad económica en México.

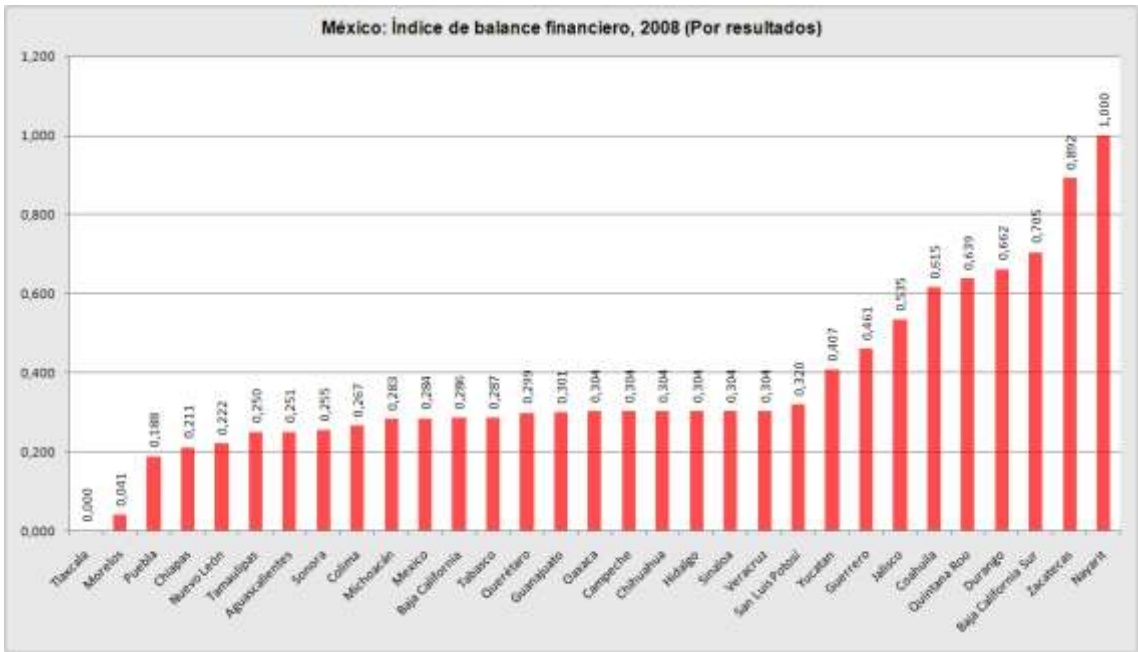
Para obtener este indicador, se tomaron en cuenta las variables de ingresos financieros, el monto de financiamiento que se haya tenido durante el año, los egresos y el monto de las amortizaciones de la deuda. Como ya se ha mencionado, en un régimen democrático, sin la adecuada construcción institucional pueden originarse importantes déficits fiscales producto de la preferencia por el corto plazo que es inherente al político común.

De tal manera, que el Índice de balance financiero queda definido de la siguiente manera:

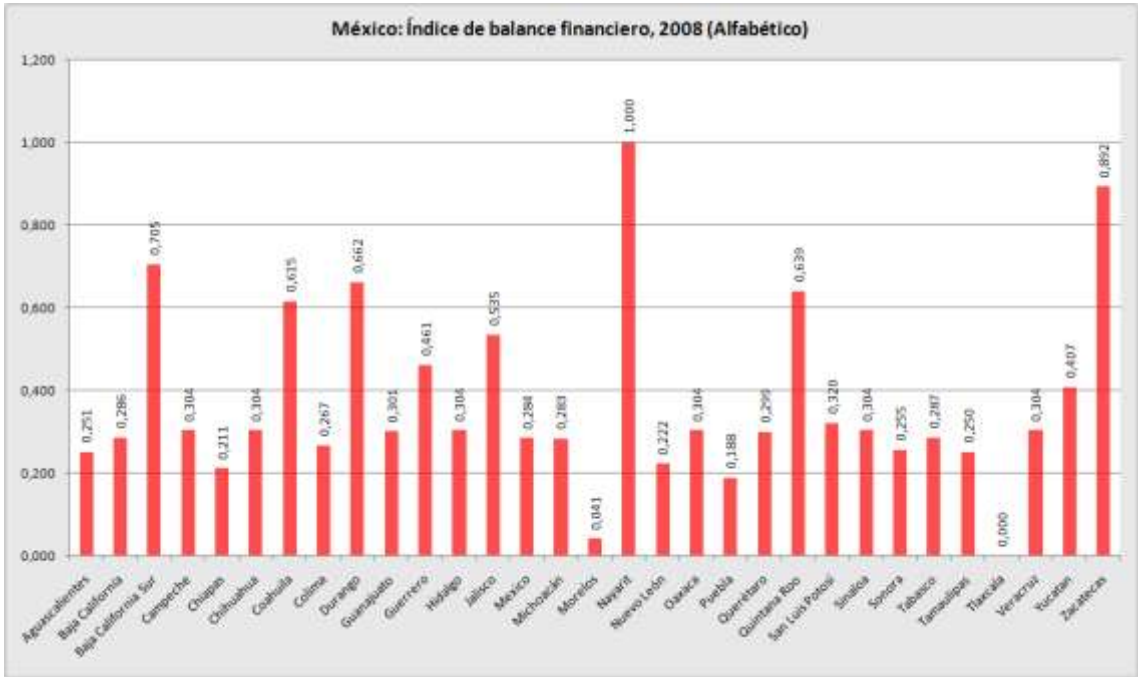
$$\text{IBF} (\text{Ingresos financieros} - \text{financiamiento} / \text{egresos} - \text{amortización}) / \text{PIB} \times 100$$

Es decir, al total de ingresos financieros producto de participaciones, aportaciones, impuestos locales, derechos, etc. le es restado el monto correspondiente al financiamiento, y de esta manera se obtienen los ingresos financieros netos, como es obvio, en caso de que el monto de financiamiento sea cero los ingresos financieros igualarán a los ingresos netos (se distinguen de los ingresos brutos debido a que para obtener tal indicador, se aplicaría la suma de ingresos y financiamiento). Por su parte, a los egresos financieros les es restado el importe a la amortización de la deuda, tanto de este año como de años anteriores. Este indicador ofrece de manera bastante clara y sin demasiadas consideraciones técnicas el comportamiento recaudatorio y de gasto para un ejercicio fiscal por parte de un Estado. Se ponderan de manera positiva los superávits fiscales debido a que en un futuro estas situaciones pueden traducirse en una disminución de impuestos si se asumen los objetivos del sector público como cumplidos. Es decir, no se contempla este escenario como la maximización de los ingresos del Leviatán y sí como una expectativa de incremento de la libertad económica. La otra cara de la moneda, el superávit por subejercicio, tiene que ver con la ineficiencia en la política del gasto y cuya consecuencia es la no consecución de los objetivos de política económica, este caso no será supuesto para los Estados en la construcción del índice.

Los resultados, exhibidos de manera gráfica, se muestran a continuación:



Por orden alfabético:



Exhibición de resultados mediante tabla:

MÉXICO: ÍNDICE DE BALANCE FINANCIERO, 2008 (Por resultados)			
	Estado	Índice	% del PIB 2008
1	Tlaxcala	0,000	0,34
2	Morelos	0,041	0,29
3	Puebla	0,188	0,13
4	Chiapas	0,211	0,10
5	Nuevo León	0,222	0,09
6	Tamaulipas	0,250	0,06
7	Aguascalientes	0,251	0,06
8	Sonora	0,255	0,05
9	Colima	0,267	0,04
10	Michoacán	0,283	0,02
11	Mexico	0,284	0,02
12	Baja California	0,286	0,02
13	Tabasco	0,287	0,02
14	Querétaro	0,299	0,01
15	Guanajuato	0,301	0,00
16	Oaxaca	0,304	0,00
17	Campeche	0,304	0,00
18	Chihuahua	0,304	0,00
19	Hidalgo	0,304	0,00
20	Sinaloa	0,304	0,00
21	Veracruz	0,304	0,00
22	San Luis Potosí	0,320	-0,02
23	Yucatan	0,407	-0,12
24	Guerrero	0,461	-0,18
25	Jalisco	0,535	-0,26
26	Coahuila	0,615	-0,35
27	Quintana Roo	0,639	-0,38
28	Durango	0,662	-0,40
29	Baja California Sur	0,705	-0,45
30	Zacatecas	0,892	-0,66
31	Nayarit	1,000	-0,78
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). <i>Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008</i> , consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288 y con datos de INEGI consultados en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00 15/03/2010 Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. <i>Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008</i> , consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf			

Por orden alfabético:

MÉXICO: ÍNDICE DE BALANCE FINANCIERO, 2008 (Alfabético)			
	Estado	Índice	% del PIB 2008
1	Aguascalientes	0,251	0,06
2	Baja California	0,286	0,02
3	Baja California Sur	0,705	-0,45
4	Campeche	0,304	0,00
5	Chiapas	0,211	0,10
6	Chihuahua	0,304	0,00
7	Coahuila	0,615	-0,35
8	Colima	0,267	0,04
9	Durango	0,662	-0,40
10	Guanajuato	0,301	0,00
11	Guerrero	0,461	-0,18
12	Hidalgo	0,304	0,00
13	Jalisco	0,535	-0,26
14	Mexico	0,284	0,02
15	Michoacán	0,283	0,02
16	Morelos	0,041	0,29
17	Nayarit	1,000	-0,78
18	Nuevo León	0,222	0,09
19	Oaxaca	0,304	0,00
20	Puebla	0,188	0,13
21	Querétaro	0,299	0,01
22	Quintana Roo	0,639	-0,38
23	San Luis Potosí	0,320	-0,02
24	Sinaloa	0,304	0,00
25	Sonora	0,255	0,05
26	Tabasco	0,287	0,02
27	Tamaulipas	0,250	0,06
28	Tlaxcala	0,000	0,34
29	Veracruz	0,304	0,00
30	Yucatan	0,407	-0,12
31	Zacatecas	0,892	-0,66

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288>

y con datos de INEGI consultados en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf

4.11. Índice de burocracia estatal.

En los modelos comunes de microeconomía, de manera simplificada, el punto de equilibrio en el mercado del trabajo se da cuando el salario real equivale a la productividad marginal del trabajo y a la desutilidad marginal del trabajo. En el sector privado, esta productividad referida es medible en la mayoría de los casos, sin embargo, en el sector público no lo es.

A pesar de los esfuerzos de las teorías económicas y de administración pública por establecer instrumentos y mecanismos para la medición de la productividad marginal de los burócratas, a la fecha, los resultados no han gozado de la aceptación general del mundo académico, por lo que se podría decir que en la actualidad no existe manera concreta y generalmente aceptada para medir la productividad marginal de un burócrata común. Ello establece, que hay bases para pensar que los salarios burocráticos están por debajo o por arriba de su productividad marginal, generando claras ineficiencias en la asignación de recursos sociales.

Además, una alta burocracia implica que una porción elevada de los empleos de una sociedad están sujetos a los ciclos políticos o burocráticos, lo que va en contra de lo establecido por la libertad económica.

En México, las estadísticas concluyen que es natural que de cada cien personas que trabajan en el territorio de los Estados, aproximadamente tres lo hacen para el gobierno estatal, además de los empleados que lo hacen para la Federación o los Municipios. Del mismo modo, casi un 30% del gasto público estatal está destinado al pago de la nómina, inclusive, hay dependencias, donde es natural que más de 2/3 partes de su presupuesto se destinen al pago de salarios, como es el caso de las secretarías de educación.

Por lo anteriormente expuesto, y de conformidad con estudios realizados en otras latitudes, es necesario incorporar, en la búsqueda de la libertad económica, un indicador que ofrezca cuenta de la burocracia estatal.

En algunos indicadores, INEGI integra las estadísticas de población económicamente activa (PEA) a partir de los “12 años y más”¹¹, mientras que en otros estudios, integra el concepto a partir de los “14 años y más”¹². Por su parte, los anuarios estadísticos de los Estados en su gran mayoría establecen como piso los 12 años. El indicador a continuación toma en cuenta a la población económicamente activa que además se encuentre ocupada, y de esa porción, contabiliza la que trabaja en los gobiernos estatales. La población económicamente activa ocupada ya es una variable que se ofrece en los anuarios estadísticos de los Estados, por lo que no hay que hacer ningún cálculo en su definición.

De tal manera, el indicador se compone de la siguiente forma:

$$\text{IEB} = (\text{Trabajadores de los gobiernos estatales} / \text{PEA ocupada}) \times 100$$

Este indicador busca medir la participación de la fuerza laboral en el gobierno del Estado. Obviamente, mientras más personas trabajen dentro del sector público estatal, la libertad económica de la entidad es menor, ya que el nivel de empleo puede no estar dado por las condiciones naturales del mercado, sino que puede ser influido por variables políticas o cíclicas.

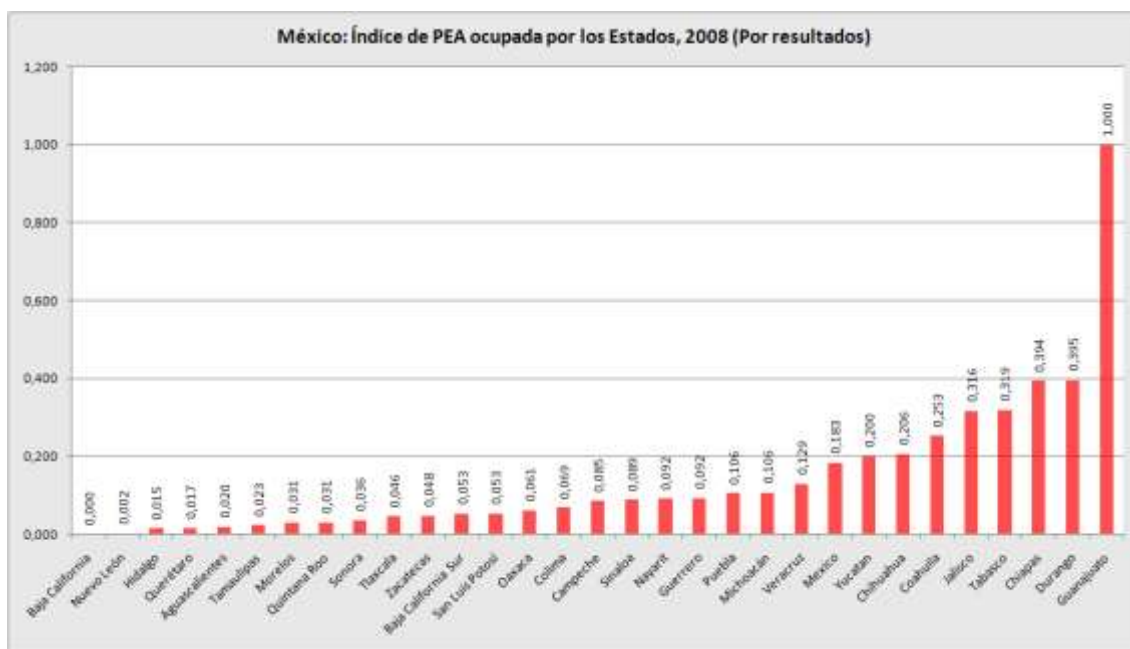
El indicador se normaliza, con el mismo procedimiento que los anteriores, y se transforma de tal manera que 0 sea el indicador más favorable para la libertad económica, y 1 sea el indicador con menores condiciones.

¹¹ <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/glogen/default.aspx?dg=s&s=est&c=11611>

¹² <http://dgcnesyp.inegi.org.mx/cgi-win/bdiecoy.exe/618?c=13031>

Los resultados, vistos de manera gráfica, se presentan a continuación:

Por resultados:



Por orden alfabético:

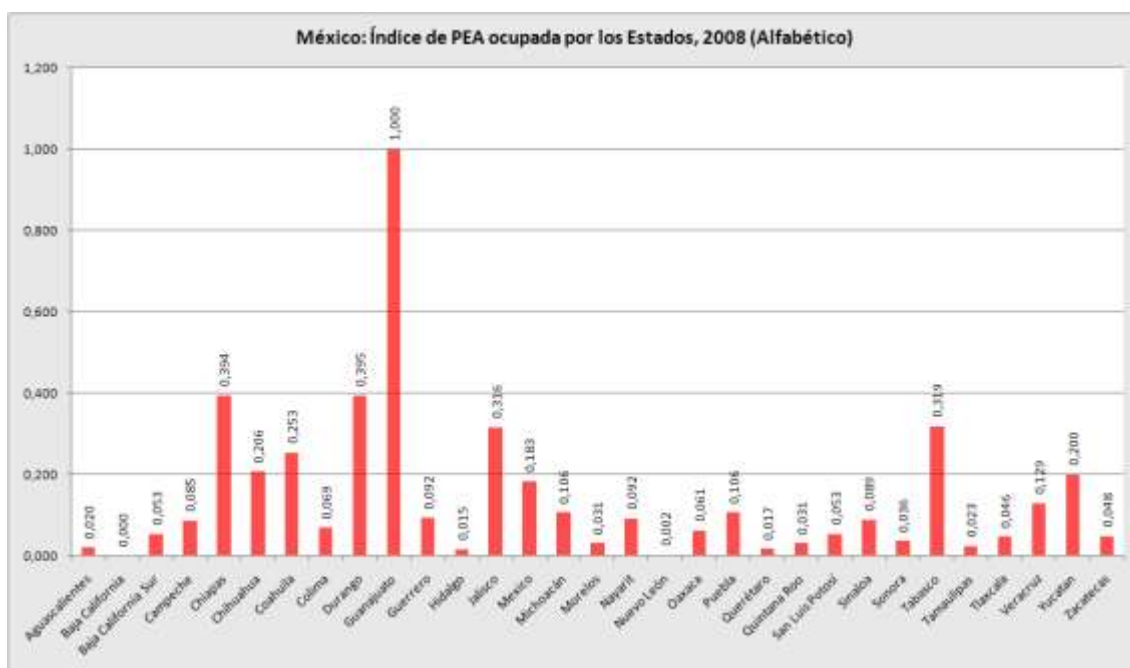


Tabla por resultados:

MÉXICO: ÍNDICE DE PEA OCUPADA POR EL SECTOR PÚBLICO DE LOS ESTADOS 2008 (Por resultados)			
	Estado	% de la PEA Ocupada	Índice 2008
1	Baja California	0,64	0,000
2	Nuevo León	0,67	0,002
3	Hidalgo	0,90	0,015
4	Querétaro	0,93	0,017
5	Aguascalientes	0,97	0,020
6	Tamaulipas	1,04	0,023
7	Morelos	1,16	0,031
8	Quintana Roo	1,16	0,031
9	Sonora	1,26	0,036
10	Tlaxcala	1,43	0,046
11	Zacatecas	1,45	0,048
12	Baja California Sur	1,54	0,053
13	San Luis Potosí	1,54	0,053
14	Oaxaca	1,68	0,061
15	Colima	1,81	0,069
16	Campeche	2,09	0,085
17	Sinaloa	2,15	0,089
18	Nayarit	2,20	0,092
19	Guerrero	2,21	0,092
20	Puebla	2,44	0,106
21	Michoacán	2,45	0,106
22	Veracruz	2,84	0,129
23	Mexico	3,76	0,183
24	Yucatan	4,04	0,200
25	Chihuahua	4,14	0,206
26	Coahuila	4,94	0,253
27	Jalisco	6,01	0,316
28	Tabasco	6,06	0,319
29	Chiapas	7,34	0,394
30	Durango	7,35	0,395
31	Guanajuato	17,01	1,000
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173			

Por orden alfabético:

MÉXICO: ÍNDICE DE PEA OCUPADA POR EL SECTOR PÚBLICO DE LOS ESTADOS 2008 (Alfabético)			
	Estado	% de la PEA Ocupada	Índice 2008
1	Aguascalientes	0,97	0,020
2	Baja California	0,64	0,000
3	Baja California Sur	1,54	0,053
4	Campeche	2,09	0,085
5	Chiapas	7,34	0,394
6	Chihuahua	4,14	0,206
7	Coahuila	4,94	0,253
8	Colima	1,81	0,069
9	Durango	7,35	0,395
10	Guanajuato	17,01	1,000
11	Guerrero	2,21	0,092
12	Hidalgo	0,90	0,015
13	Jalisco	6,01	0,316
14	Mexico	3,76	0,183
15	Michoacán	2,45	0,106
16	Morelos	1,16	0,031
17	Nayarit	2,20	0,092
18	Nuevo León	0,67	0,002
19	Oaxaca	1,68	0,061
20	Puebla	2,44	0,106
21	Querétaro	0,93	0,017
22	Quintana Roo	1,16	0,031
23	San Luis Potosí	1,54	0,053
24	Sinaloa	2,15	0,089
25	Sonora	1,26	0,036
26	Tabasco	6,06	0,319
27	Tamaulipas	1,04	0,023
28	Tlaxcala	1,43	0,046
29	Veracruz	2,84	0,129
30	Yucatan	4,04	0,200
31	Zacatecas	1,45	0,048
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173			

4.12. Índice de gasto del Estado como % del PIB.

Este indicador proporciona información acerca de la participación del sector público estatal en el total de la economía, para su determinación se tomaron en cuenta los egresos totales del Estado; es decir, su sector central y su sector paraestatal que, entre diversos órganos públicos, está compuesto por las empresas estatales. Por lo que si un Estado cuenta con una gran cantidad de empresas estatales, esta situación se verá reflejada en el indicador.

Un sector privado de gran tamaño es el reflejo de una economía vigorosa y eficiente. Mientras que en un país el tamaño de su sector público normalmente va de 25 a 60%, dependiendo de su constitución, en los Estados a estudiar el porcentaje es bastante menor. Aún así, hay estados como Oaxaca o Chiapas, cuyo gobierno tiene un peso muy fuerte en la economía.

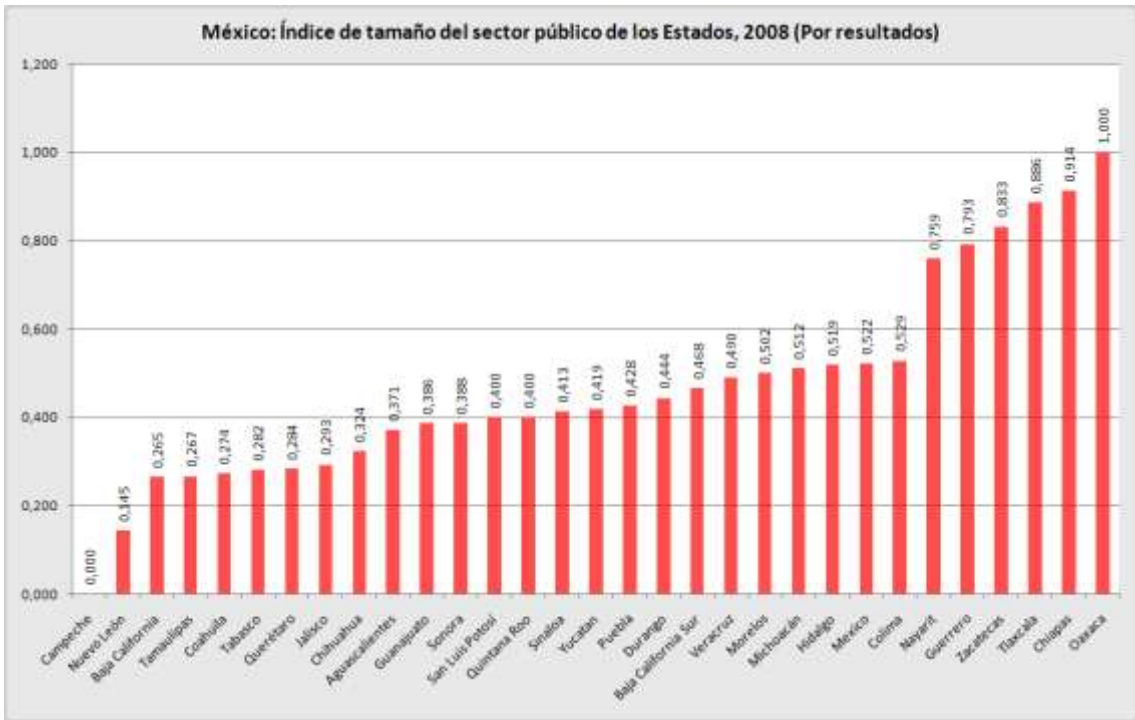
El indicador, entonces, está determinado por lo siguiente:

$$\text{IGEPIB} = (\text{Gasto público total} / \text{PIB}) \times 100$$

Los resultados se normalizan de tal manera que el 0 es el nivel más adecuado para la libertad económica y el 1 es el nivel menos adecuado para la misma.

Los resultados, presentados de manera gráfica, vienen a continuación:

Por resultados:



Alfabético:

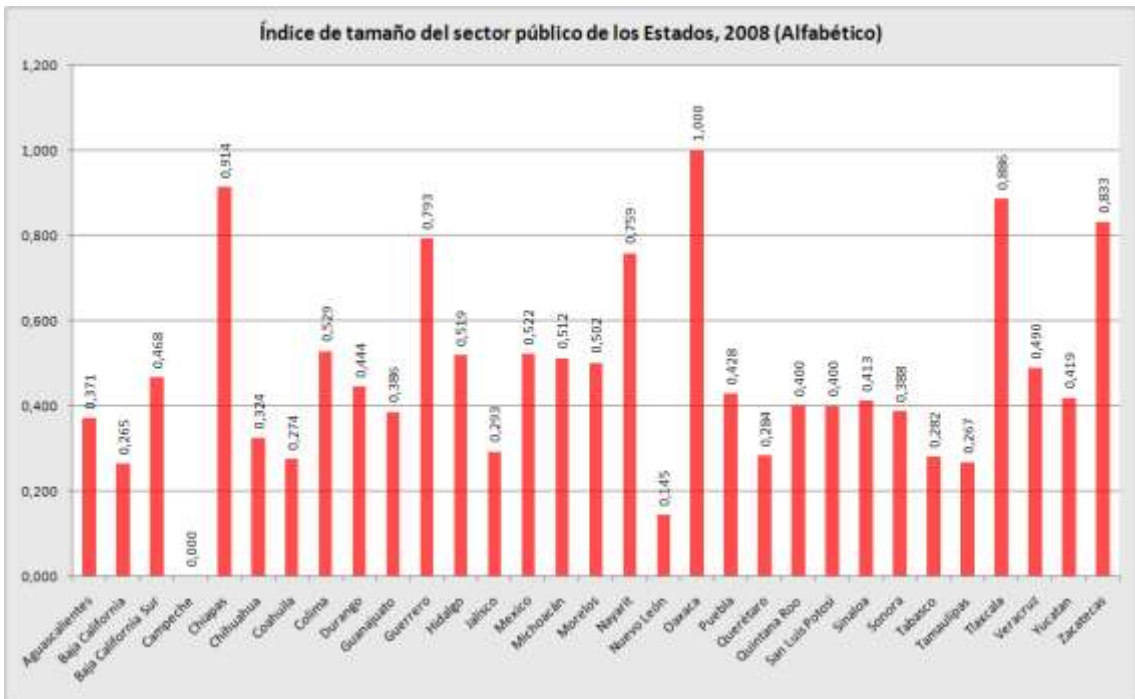


Tabla por resultados:

MÉXICO: GASTO PÚBLICO DE LOS ESTADOS 2008 (Por resultados)			
	Estado	% del PIB 2008	Índice 2008
1	Campeche	2,01	0,000
2	Nuevo León	5,40	0,145
3	Baja California	8,23	0,265
4	Tamaulipas	8,27	0,267
5	Coahuila	8,44	0,274
6	Tabasco	8,62	0,282
7	Querétaro	8,67	0,284
8	Jalisco	8,88	0,293
9	Chihuahua	9,60	0,324
10	Aguascalientes	10,71	0,371
11	Guanajuato	11,07	0,386
12	Sonora	11,09	0,388
13	San Luis Potosí	11,38	0,400
14	Quintana Roo	11,40	0,400
15	Sinaloa	11,68	0,413
16	Yucatan	11,84	0,419
17	Puebla	12,04	0,428
18	Durango	12,42	0,444
19	Baja California Sur	12,97	0,468
20	Veracruz	13,48	0,490
21	Morelos	13,77	0,502
22	Michoacán	14,02	0,512
23	Hidalgo	14,18	0,519
24	Mexico	14,24	0,522
25	Colima	14,40	0,529
26	Nayarit	19,80	0,759
27	Guerrero	20,60	0,793
28	Zacatecas	21,52	0,833
29	Tlaxcala	22,78	0,886
30	Chiapas	23,43	0,914
31	Oaxaca	25,45	1,000

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288> y con datos de INEGI consultados en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf

Tabla por orden alfabético:

MÉXICO: GASTO PÚBLICO DE LOS ESTADOS 2008 (Alfabético)			
	Estado	% del PIB 2008	Índice 2008
1	Aguascalientes	10,71	0,371
2	Baja California	8,23	0,265
3	Baja California Sur	12,97	0,468
4	Campeche	2,01	0,000
5	Chiapas	23,43	0,914
6	Chihuahua	9,60	0,324
7	Coahuila	8,44	0,274
8	Colima	14,40	0,529
9	Durango	12,42	0,444
10	Guanajuato	11,07	0,386
11	Guerrero	20,60	0,793
12	Hidalgo	14,18	0,519
13	Jalisco	8,88	0,293
14	Mexico	14,24	0,522
15	Michoacán	14,02	0,512
16	Morelos	13,77	0,502
17	Nayarit	19,80	0,759
18	Nuevo León	5,40	0,145
19	Oaxaca	25,45	1,000
20	Puebla	12,04	0,428
21	Querétaro	8,67	0,284
22	Quintana Roo	11,40	0,400
23	San Luis Potosí	11,38	0,400
24	Sinaloa	11,68	0,413
25	Sonora	11,09	0,388
26	Tabasco	8,62	0,282
27	Tamaulipas	8,27	0,267
28	Tlaxcala	22,78	0,886
29	Veracruz	13,48	0,490
30	Yucatan	11,84	0,419
31	Zacatecas	21,52	0,833

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288> y con datos de INEGI consultados en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/producto/s/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf

4.13. Índice de esfuerzo fiscal (I. de Frank).

Este indicador busca relacionar los tributos soportados y la capacidad impositiva teórica mediante el PIB per cápita, indica qué puntos básicos de impuestos (una centésima de un uno por ciento de presión fiscal) soporta cada dólar de ingreso. Por ejemplo, un país con una presión fiscal de 36 % y un ingreso per cápita de 18 mil euros tendrá una presión fiscal de $3600 / 18000 = 0,2$. O sea que un ciudadano soporta 0,2 puntos básicos de impuestos por cada euro de renta.

La presión fiscal, para este trabajo, se define como el cociente de los impuestos locales, directos e indirectos¹³ y el PIB, por su parte, el ingreso per cápita viene dado por la definición de PIB per cápita. A diferencia de países desarrollados donde la presión fiscal se mantiene en niveles más elevados que en países subdesarrollados, y donde el ingreso per cápita está medido en monedas con mayor fortaleza internacional (como el dólar o el euro). Para el caso de México, debido la baja presión fiscal de los Estados y a la debilidad financiera internacional del peso, si se calcula el índice de presión fiscal utilizando de manera rígida la fórmula empleada líneas arriba se obtendrían valores muy pequeños, donde inclusive, se utilizaría la notación científica. Por lo que una manera de sortear tal obstáculo, es utilizar para el cálculo del indicador, en lugar de un peso, cien pesos (8 dólares aproximadamente¹⁴), de esa manera se eliminan dos ceros del indicador final, sin perder rigurosidad académica.

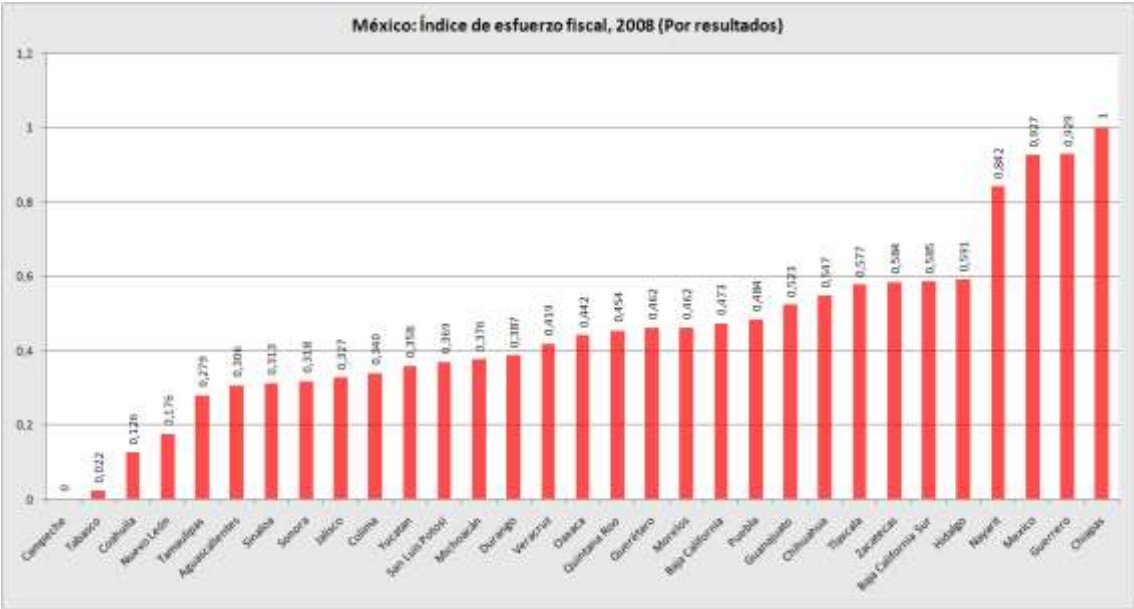
De tal manera, que el índice de esfuerzo fiscal queda definido de la siguiente manera:

$$\text{IEF} = (\text{Presión Fiscal} / \text{PIB per cápita})$$

¹³ Hay variaciones en cuanto a la consideración de los ingresos, hay medidas que solamente incluyen los impuestos directos y los indirectos, mientras que existen alternativas que contemplan también los derechos, aprovechamientos, etc.

¹⁴ Al tipo de cambio del 1 de agosto de 2010. Consultado en: www.banxico.gob.mx

Los resultados vienen dados por la siguiente gráfica:



Por orden alfabético:

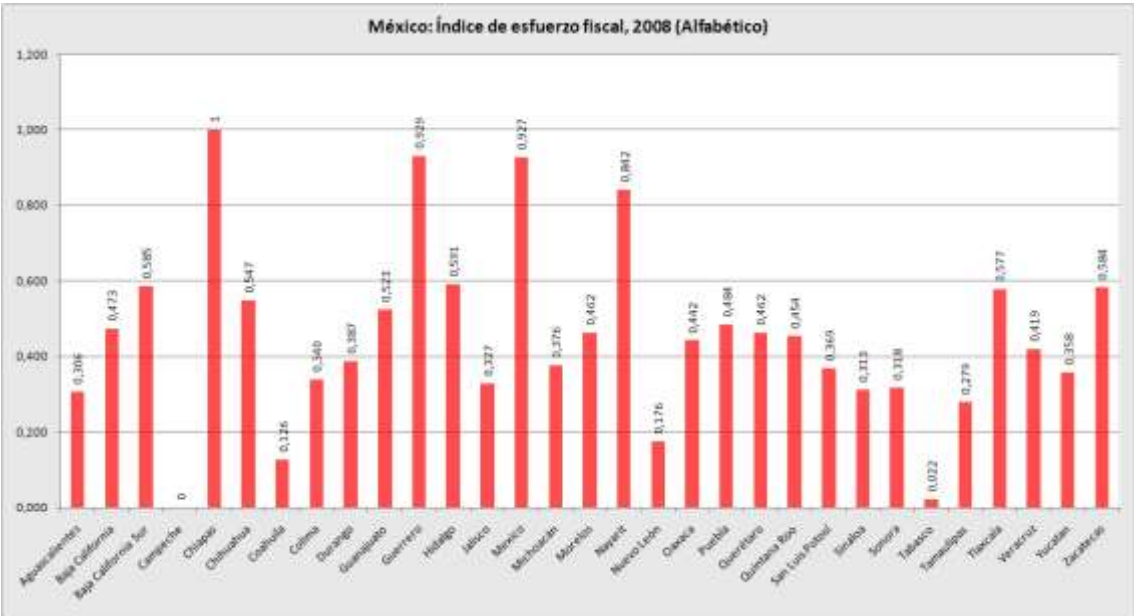


Tabla por resultados:

MÉXICO: ESFUERZO FISCAL E ÍNDICE, 2008 (Por resultados)			
	Estado	Esfuerzo fiscal** 2008	Índice
1	Campeche	0,001	0
2	Tabasco	0,003	0,022
3	Coahuila	0,011	0,126
4	Nuevo León	0,015	0,176
5	Tamaulipas	0,022	0,279
6	Aguascalientes	0,025	0,306
7	Sinaloa	0,025	0,313
8	Sonora	0,025	0,318
9	Jalisco	0,026	0,327
10	Colima	0,027	0,340
11	Yucatan	0,029	0,358
12	San Luis Potosí	0,029	0,369
13	Michoacán	0,030	0,376
14	Durango	0,031	0,387
15	Veracruz	0,033	0,419
16	Oaxaca	0,035	0,442
17	Quintana Roo	0,036	0,454
18	Querétaro	0,037	0,462
19	Morelos	0,037	0,462
20	Baja California	0,037	0,473
21	Puebla	0,038	0,484
22	Guanajuato	0,041	0,523
23	Chihuahua	0,043	0,547
24	Tlaxcala	0,045	0,577
25	Zacatecas	0,046	0,584
26	Baja California Sur	0,046	0,585
27	Hidalgo	0,046	0,591
28	Nayarit	0,066	0,842
29	Mexico	0,072	0,927
30	Guerrero	0,073	0,929
31	Chiapas	0,078	1
<p>** En este caso, un índice de esfuerzo fiscal de 0,025 indica que un ciudadano de un Estado soporta 0,025 puntos básicos de impuestos por cada cien pesos de ingreso per cápita.</p> <p>FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. 2010. <i>Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008</i>. y de http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288 y de: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00 15/03/2010</p>			

Por orden alfabético:

MÉXICO: ESFUERZO FISCAL E ÍNDICE, 2008 (Alfabético)			
	Estado	Esfuerzo fiscal** 2008	Índice
1	Aguascalientes	0,025	0,306
2	Baja California	0,037	0,473
3	Baja California Sur	0,046	0,585
4	Campeche	0,001	0
5	Chiapas	0,078	1
6	Chihuahua	0,043	0,547
7	Coahuila	0,011	0,126
8	Colima	0,027	0,340
9	Durango	0,031	0,387
10	Guanajuato	0,041	0,523
11	Guerrero	0,073	0,929
12	Hidalgo	0,046	0,591
13	Jalisco	0,026	0,327
14	Mexico	0,072	0,927
15	Michoacán	0,030	0,376
16	Morelos	0,037	0,462
17	Nayarit	0,066	0,842
18	Nuevo León	0,015	0,176
19	Oaxaca	0,035	0,442
20	Puebla	0,038	0,484
21	Querétaro	0,037	0,462
22	Quintana Roo	0,036	0,454
23	San Luis Potosí	0,029	0,369
24	Sinaloa	0,025	0,313
25	Sonora	0,025	0,318
26	Tabasco	0,003	0,022
27	Tamaulipas	0,022	0,279
28	Tlaxcala	0,045	0,577
29	Veracruz	0,033	0,419
30	Yucatan	0,029	0,358
31	Zacatecas	0,046	0,584

** En este caso, un índice de esfuerzo fiscal de 0,025 indica que un ciudadano de un Estado soporta 0,025 puntos básicos de impuestos por cada cien pesos de ingreso per cápita.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. 2010. *Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008*. y de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288> y de: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

4.14. Resultados por Estados.



4.14.1. Aguascalientes.

AGUASCALIENTES	
Población	1,124,288
Superficie (kilómetros cuadrados)	5,618
PIB per cápita (pesos corrientes)	107,694.0
Tasa de desempleo	4.9
Escolaridad promedio (años)	9.4
Unidades médicas por 10.000 hab	1.4
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.3



AGUASCALIENTES	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
5 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
6 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
6 DE 31	

a) Resumen de políticas.¹⁵

Este año estuvo marcado por la inversión en infraestructura como una medida para paliar los efectos negativos de la crisis económica y sanitaria, al respecto destacan los rubros de inversión en educación e infraestructura para la salud.

En cuanto a la regulación, destacan los operativos emprendidos de cara a la feria de San Marcos, de gran tradición en México y cuyo objetivo era verificar que los establecimientos expendedores de alimentos y bebidas se adecuaron a las normatividades locales y federales.

La política económica tuvo un nuevo rumbo en esta entidad debido a la promulgación de la Ley de Planeación, donde se establecen los objetivos y programas a realizarse por parte del gobierno del estado con la finalidad de conseguir un desarrollo económico de manera participativa.

Es preciso destacar el enlace que se buscó al tratar de coordinar la seguridad pública con la educación, ya que en este año se impulsaron 10 iniciativas de ley con la finalidad de mejorar la seguridad pública en la entidad mediante la reforma al sistema judicial de la entidad.

Sin embargo, se adolece de estrategias de vinculación con el sector privado, solamente se ha optado por la coordinación con el mismo vía donaciones o a través de su participación en programas concretos de política social en la entidad.

Este año, se detectó como oportunidad de mejora la disminución de los tiempos para abrir un negocio, con lo que se disminuyeron los costos para el registro de una

¹⁵ GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.aguascalientes.gob.mx/seplade/crie/prod/pdf/SeguimientoGubernamental/5to.%20Informe%20de%20Gobierno.pdf>

propiedad en un 3%, asimismo se buscó agilizar los trámites para disminuir los tiempos de la construcción.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la quinta posición nacional en el rubro producto de un indicador general de 0,393. Mantiene cierto equilibrio en el índice de regulación y de dimensión del sector público, donde se ubica en la sexta posición en ambas categorías.

Regulación: Se ubica en el sexto lugar nacional en el índice de regulación, debido a un puntaje de 0,562 puntos. Su principal ventaja viene dada por el índice de comercio, mientras que manifiesta espacio para la mejora en el índice de seguridad.

Comercio: En promedio son 24 días para abrir un negocio en la entidad, ello la empata con Nayarit en el primer lugar nacional. Se gasta un 2% del PIB por trámites y permisos, lo que posiciona a Aguascalientes como el tercer lugar nacional en el índice de comercio, con un total de 0,083 puntos.

Transparencia: Obtiene un índice de 0,275 producto de 123,61 puntos en la evaluación de sus regulaciones de transparencia, tales datos la posicionan en el séptimo lugar a nivel nacional.

Salud: Alcanza el décimo quinto lugar nacional en el índice de salud con un puntaje de 0,725. El ratio de gasto privado en salud es de 1,18 y su porcentaje de gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 3,3%.

Seguridad: 59,5 personas por presunto delito. Ello produce un indicador de seguridad de 0,917 y posiciona a la entidad en el vigésimo lugar nacional en el índice de seguridad.

Educación: Se ubica en el duodécimo lugar nacional en el índice de educación, producto de un indicador de 0,810 puntos. El principal rezago es observado en el índice de alumnos, con un indicador de 0,867, que es resultado de un porcentaje de alumnos en los planteles de la entidad de 87,61%.

Dimensión del sector público: Las proporciones de su gobierno estatal son reducidas, según indica su puntaje total de 0,224 y su sexto lugar nacional en el rubro. Presenta oportunidades de mejora en el índice de deuda pública, mientras que su principal ventaja está determinada por el índice de burocracia estatal.

Deuda pública: Medida en términos de su PIB, el porcentaje es de 0,21%, lo que le produce un indicador de 0,174 y le otorga el décimo noveno lugar nacional en el rubro.

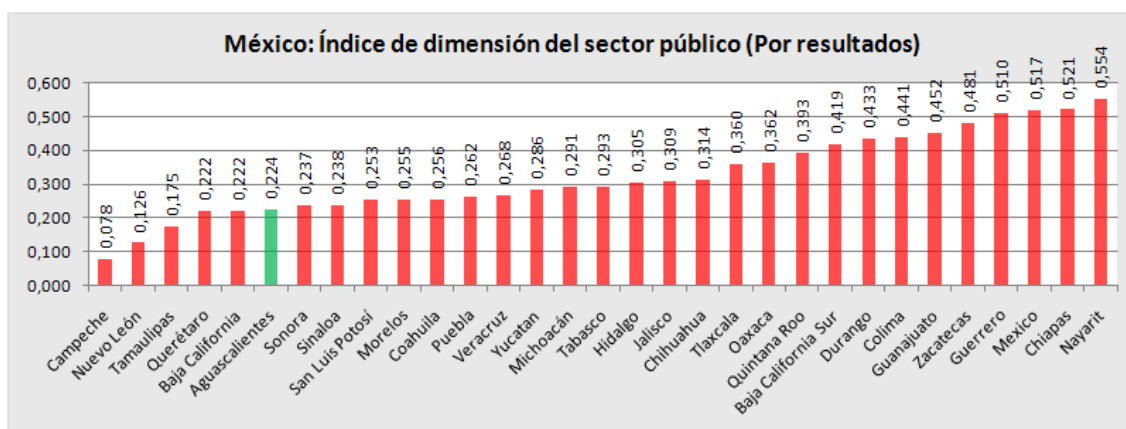
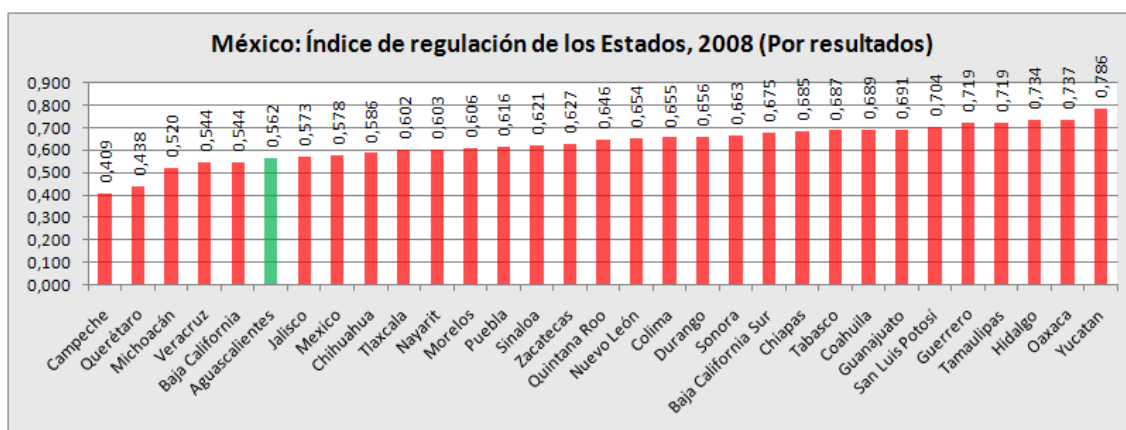
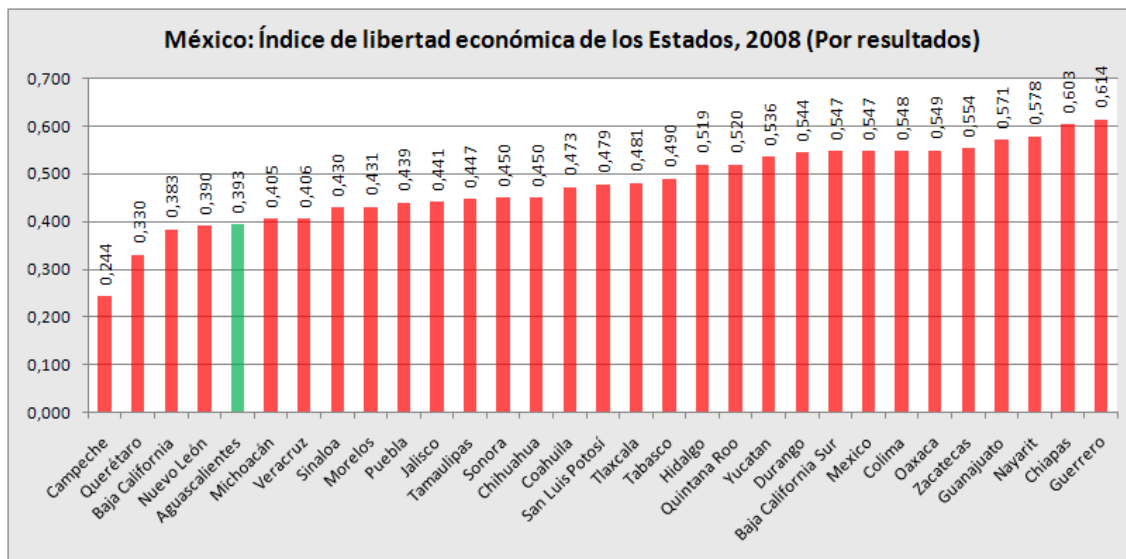
Balance financiero: Obtiene el séptimo lugar nacional en el índice de balance financiero producto de un superávit del 0,06% del PIB y un indicador general en el rubro de 0,251.

Burocracia estatal: El 0,97% de la población ocupada labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador de 0,020 y le otorga el quinto lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Representa el 10,71% de su PIB, lo que produce un indicador general de 0,371 el cual posiciona a la entidad en el décimo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Consigue el sexto lugar nacional en la materia debido a un índice de Frank de 0,025 y un indicador general de 0,306.

c) Resultados gráficos.



4.14.2. Baja California.

BAJA CALIFORNIA	
Población	3,079,363
Superficie (kilómetros cuadrados)	71,446
PIB per cápita (pesos corrientes)	107,219.9
Tasa de desempleo	2.8
Escolaridad promedio (años)	9.5
Unidades médicas por 10.000 ha	1.4
% de población de 5 años o más hablante de lengua	1.4



BAJA CALIFORNIA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
3 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
5 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
5 DE 31	

a) Resumen de políticas.¹⁶

Continúa en la tónica de otros Estados de detectar como principales obstáculos al crecimiento a la crisis financiera y sanitaria, por lo que durante ese año se tomaron medidas enfocadas a mitigar tales adversidades.

Durante el período, fueron de capital importancia los esfuerzos encaminados a la transformación del sistema de justicia penal, donde los programas se enfocaron a llevar juicios más rápidos buscando la economía de recursos, dicho programa tiene establecida su conclusión para el año 2010.

Se buscó atenuar el clima de inseguridad en la entidad mediante el cruce de programas en educación y salud por lo que se impartieron cursos y capacitación en el 90% de las escuelas de la entidad. La infraestructura pública en educación también fue parte importante de los programas de gobierno, como ejemplo se tiene la construcción de un nuevo campus universitario en la zona de la costa, adoleciendo de estrategias claras de vinculación con el sector privado, misma situación la del sector sanitario, donde los recursos se orientaron a la ampliación de la cobertura del Seguro Popular, se alcanzó una meta de 240 mil familias.

En cuanto a la promoción de la actividad económica, se tiene que esta se buscó vía el ofrecimiento de créditos a las pequeñas empresas, así como mediante la construcción y mejora de la infraestructura carretera, y parques industriales acorde a las necesidades de competitividad fronteriza, no se detectaron los incentivos regulatorios para el sector privado y no se tomaron medidas expresas para tal fin.

Referente a los ahorros y disminución de la democracia, se disminuyeron los salarios de la burocracia en un promedio de 10%, se buscó la mejora de procesos al alcanzar 101 proyectos certificados con la norma ISO 9001, también se buscó

¹⁶ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, (2009). *Segundo Informe de Labores*, consultado en: <http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/2informe/2informe.jsp>

aumentar la productividad del gobierno mediante la informatización de las actividades públicas, así como la digitalización de documentos públicos, por lo que en tal año se envió al Congreso local la iniciativa para la Ley de la Firma Electrónica, que buscó agilizar los trámites burocráticos y la coordinación interinstitucional. También destaca la actualización de 31 “Cartas Compromiso al Ciudadano”.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Alcanza la tercera posición general en el indicador producto de un puntaje de 0,383, lo que sugiere una libertad económica alta. Tanto en regulación como en dimensión del sector público se ubica en los primeros cinco lugares a nivel nacional.

Regulación: Su principal desventaja viene dada por el índice de seguridad, donde obtiene el trigésimo primer lugar, sin embargo, mantiene cierta ventaja en el índice de sanidad. Con un puntaje total de 0,544 puntos obtiene el quinto lugar nacional en el índice de regulación.

Comercio: En promedio son 41 días para abrir un negocio, sumadas al 0,3% del PIB que se gasta en trámites y servicios para abrir una nueva empresa, estos indicadores posicionan a la entidad en el lugar dieciocho del índice de comercio, con un indicador de 0,356.

Transparencia: Obtiene el décimo lugar nacional en el índice de transparencia al obtener 117,21 puntos en la revisión del marco regulatorio de la rendición de cuentas estatal, que se traduce en un indicador de 0,336.

Salud: La entidad manifiesta un indicador de salud con un puntaje de 0,439, que es producto de un gasto público como porcentaje del PIB del 2,3% que produce un ratio de gasto privado del 2,00.

Educación: Un 66,89% de los docentes trabajan en instituciones de la entidad, lo cual manifiesta el principal rezago en su indicador de educación. Por lo que se ha posicionado en el quinto lugar nacional con un puntaje de 0,589.

Dimensión del sector público: Su puntaje total de 0,222 indica que cuenta con un gobierno de tamaño reducido. Su principal ventaja está determinada por el índice de burocracia estatal, mientras que presenta oportunidades de mejora en el índice de esfuerzo fiscal.

Deuda pública: La deuda pública de la entidad alcanza el 0,11% de su PIB, por lo que obtiene un indicador de 0,087 que le otorga el décimo quinto lugar nacional en la material.

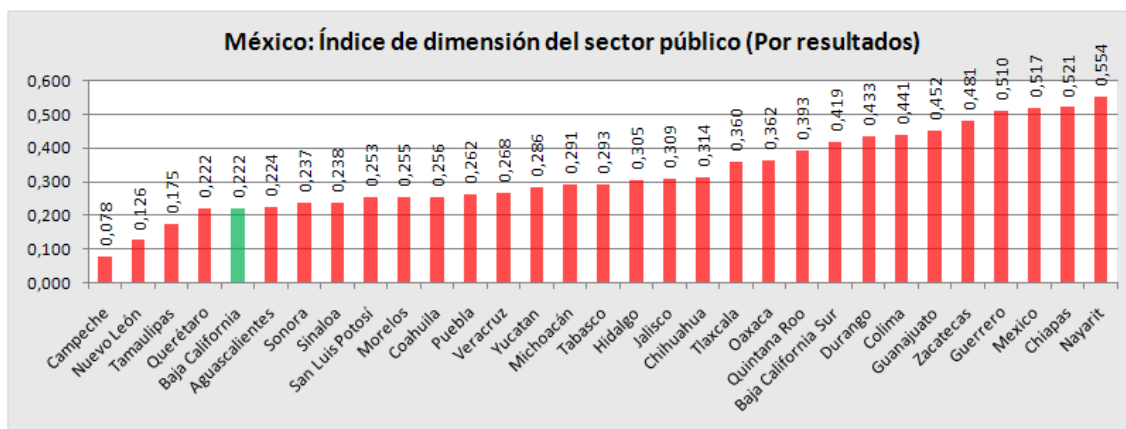
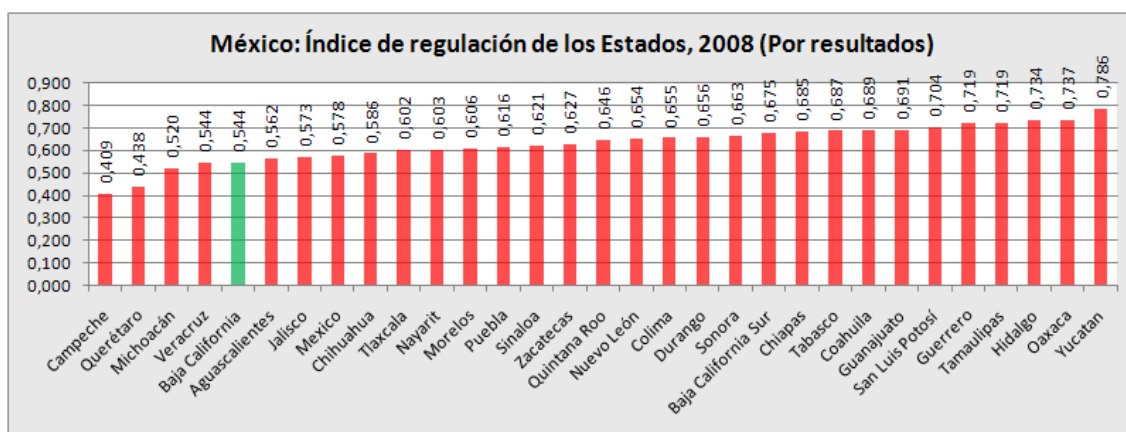
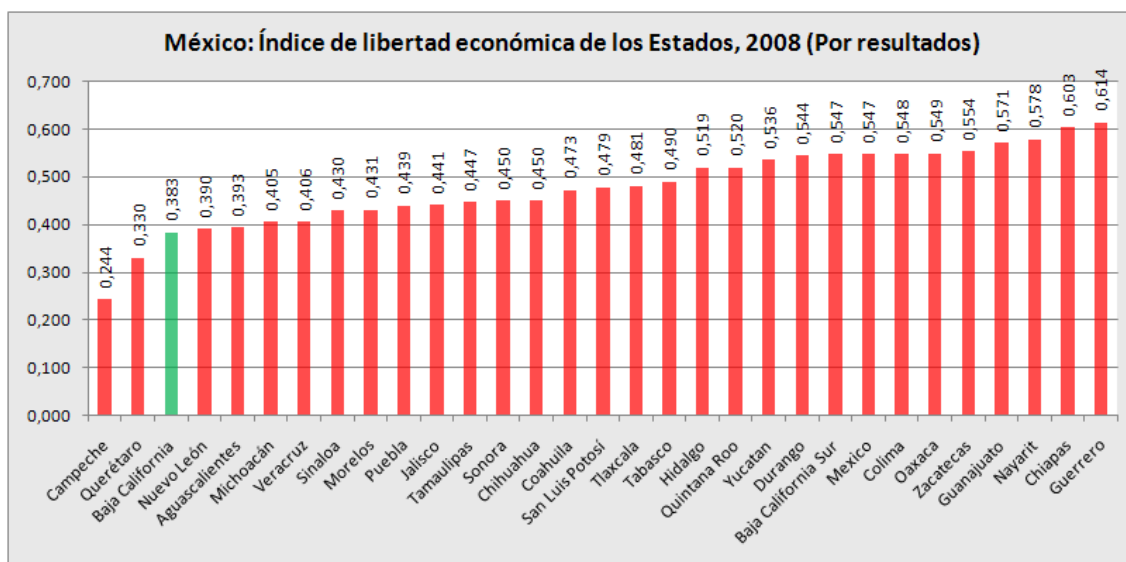
Balance financiero: Alcanza el duodécimo lugar nacional en el índice de balance financiero debido a un superávit del 0,02% como porcentaje de su PIB y un indicador general de 0,286.

Burocracia estatal: El 0,64% de la población ocupada trabaja en el sector público de la entidad, ello le produce un índice de 0,000 y le otorga el primer lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Las erogaciones totales del sector público de la entidad importan el 8,23% del PIB, lo que le produce un indicador de 0,265 y un tercer lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,037, lo cual es traducido en un puntaje de 0,473 que a su vez le otorga la vigésima posición nacional en la materia.

c) Resultados gráficos.



4.14.3. Baja California Sur.

BAJA CALIFORNIA SUR	
Población	551,525
Superficie (kilómetros cuadrados)	73,922
PIB per cápita (pesos corrientes)	122,210.9
Tasa de desempleo	2.8
Escolaridad promedio (años)	9.6
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.1
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	1.6



BAJA CALIFORNIA SUR	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
23 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
21 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
23 DE 31	

a) Resumen de políticas.¹⁷

Este año, el gobierno del Estado se abocó a la modernización de la administración pública local como principal medida de política pública, en ese sentido, se construyeron diversos edificios para las dependencias del gobierno local, se certificaron procesos de 4 dependencias locales, se aplicaron auditorías integrales a 12 dependencias de la administración pública local y se constituyó el Comité de Desarrollo Institucional, de conformidad con el ordenamiento denominado Ley de Desarrollo Institucional, promulgada en 2007.

En esa misma dinámica de modernización de la administración pública local se insertaron las políticas educativas, donde se evaluaron los programas educativos mediante acuerdos sociales, algunos con la incorporación del sector privado. Por su parte, el sector salud destacó básicamente por la ampliación de la cobertura del Seguro Popular.

Los programas de apoyo al empleo en el sector privado estuvieron marcados por la continuidad de los programas federales como la constitución de una bolsa de trabajo, capacitación para el empleo y becas. El Programa de Apoyo al Empleo atendió a 24,272 personas.

En cuanto a desarrollo económico, desde el inicio de la administración se decidió que el turismo fuera el detonante del bienestar de la población del Estado, de tal manera que las inversiones han estado destinadas a ese sector, merece la pena mencionar que se ejerció más de un millón de dólares en promocionar el Estado en el extranjero, y casi medio millón de dólares en promocionarlo a nivel nacional. En este rubro las alianzas con el sector privado vienen enfocadas al sector de la hotelería y la aviación comercial.

¹⁷ GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.bcs.gob.mx/informes-de-gobierno.html>

b) Libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la vigésimo tercera posición nacional en el rubro producto de un puntaje total de 0,547 el cual infiere una relativamente elevada participación del sector público en la economía. Su principal ventaja está determinada por el índice de regulación, mientras que presenta como área de oportunidad el índice de dimensión del sector público.

Regulación: Su principal ventaja está presentada en el índice de comercio, mientras que su principal área de mejora viene dada por el índice de seguridad, la participación del sector público en la economía es alta, ello se deduce de su puntaje de 0,675 y la vigésimo primera posición nacional alcanzada.

Comercio: Obtiene el primer lugar en el índice de comercio, ello es producto de los 31 días en promedio para abrir un nuevo negocio, así como del gasto por parte de las empresas de un 0,1% del PIB por concepto de trámites y servicios para la apertura de nuevos negocios.

Transparencia: Vigésimo cuarto lugar nacional producto de un indicador de 0,611, que ha sido obtenido mediante la obtención de 88,06 puntos en la revisión de su marco regulatorio.

Salud: Su indicador de salud es de 0,901. Esta cifra es resultado de un ratio de gasto privado en salud de 0,67 y un gasto privado en salud medido como porcentaje del PIB por un 2,9%. Alcanza la vigésimo octava posición nacional en el índice de salud.

Educación: Su principal rezago se ubica en el porcentaje de escuelas atendidas con cargo al presupuesto estatal, con un porcentaje de 80,11%. Debido a ello, se ubica en el décimo primer lugar del índice de educación, con un indicador de 0,805.

Dimensión del sector público: Mediante un puntaje de 0,419 obtiene el vigésimo tercer lugar nacional en la materia. Sus principales ventajas están definidas por los índices de balance financiero y burocracia estatal, mientras que observa como área de oportunidad el índice de deuda pública.

Deuda pública: Se ubica en la vigésimo sexta posición nacional en la materia, su deuda pública medida en términos del PIB es de 0,35% y el indicador en la materia es de 0,285.

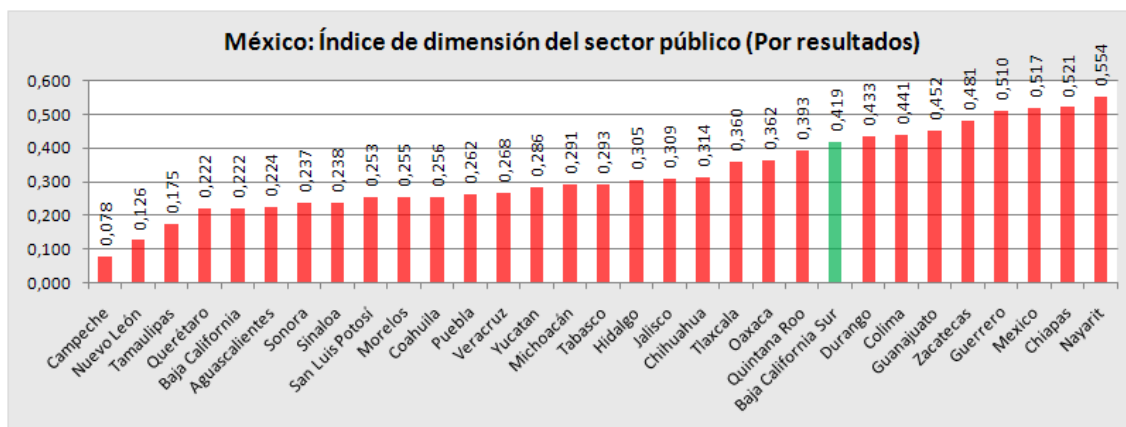
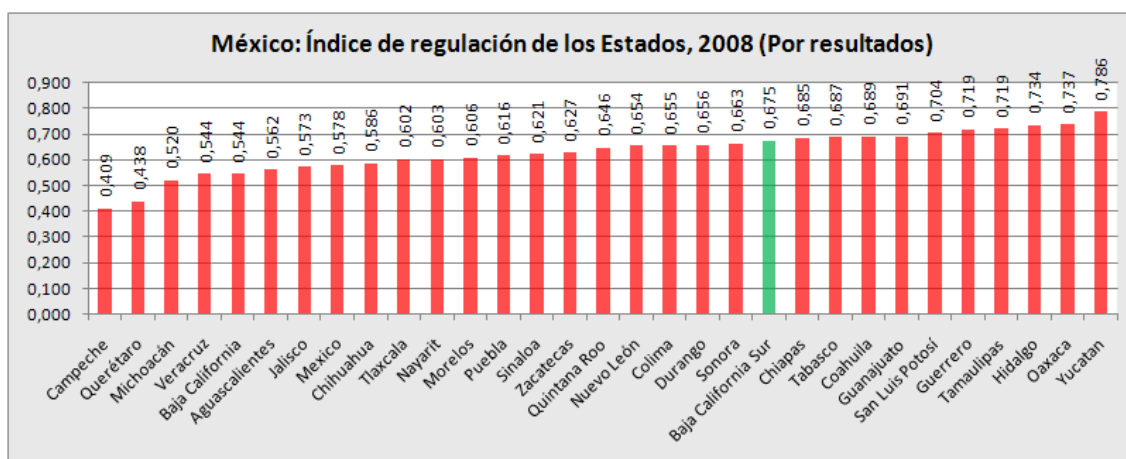
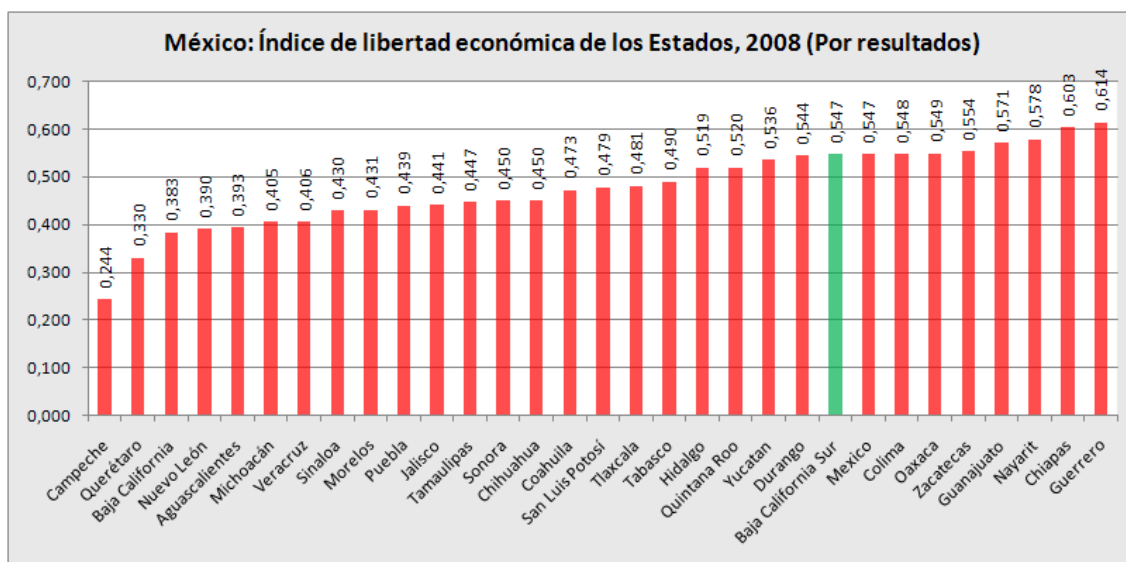
Balance financiero: Su déficit fiscal importa el 0,45% de su PIB, por lo que mediante un puntaje de 0,705 se posiciona en el vigésimo noveno lugar nacional en la materia.

Burocracia estatal: Obtiene el duodécimo lugar nacional en el índice de burocracia estatal ya que el 1,54% de la población ocupada lo hace para el sector público de la entidad, lo que le produce un índice general de 0,053.

Gasto público: Alcanza el décimo noveno lugar nacional producto de un índice de gasto público del 0,468. El gasto público de la entidad como porcentaje del PIB es del 12,97%.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el vigésimo sexto lugar nacional en el rubro como consecuencia de un índice de Frank de 0,046 y un indicador general en la materia de 0,585.

c) Resultados gráficos.



4.14.4. Campeche.

CAMPECHE	
Población	786,753
Superficie (kilómetros cuadrados)	57,924
PIB per cápita (pesos corrientes)	1,032,930.3
Tasa de desempleo	2.2
Escolaridad promedio (años)	8.6
Unidades médicas por 10.000 hab.	4.2
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	13.3



CAMPECHE	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
1 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
1 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
1 DE 31	

a) Resumen de políticas.¹⁸

La entidad puntera en la clasificación se distinguió por impulsar la difusión del crédito, de manera primaria para medianos productores y artesanos, y principalmente para mujeres con un porcentaje de colocación del 31% a través de diversos fondos tales como el Fondo de Impacto Social y el Fondo Campeche, por mencionar algunos. Además, se buscó asesorar a empresas para la obtención de créditos en la banca privada.

Debido al alto porcentaje de población de habla indígena, los programas educativos bilingües fueron parte fundamental de las políticas educativas, estos programas pueden ser escolarizados o no presenciales. Es importante mencionar que se buscaron convenios de ampliación presupuestal con el gobierno federal, principalmente, y en menor medida con organizaciones privadas que aportaron recursos para becas o materiales didácticos, como el caso del convenio con la empresa de telefonía de mayor participación de mercado que aportó 1250 computadoras para el beneficio de más de 8 mil alumnos. También es necesario mencionar el convenio con la Fundación Pablo García que aportó más de 5 mil becas, becas-crédito y créditos educativos para incrementar el nivel educativo de la entidad.

Ante la falta de unidades de salud fijas, se buscó mitigar esta escasez mediante 46 brigadas médicas móviles que beneficiaron a más de 900 comunidades, algunas de estas brigadas han sido certificadas con la norma "ISO 9001-2000" por lo que se garantiza la calidad de las atenciones provistas. No se informan convenios o coordinaciones de estrategias con el sector privado.

En cuanto a la seguridad pública, el Estado de Campeche se distinguió por la contratación de personal policial y la capacitación del mismo, la compra de 89 patrullas y la modernización, ampliación y construcción de nuevas oficinas del poder judicial. No se informan grandes estrategias para la modernización institucional del poder judicial.

¹⁸ GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.portal.camp.gob.mx/Informes%20de%20Gobierno/default.aspx>

En cuanto al aspecto de la administración pública, destaca la reforma a la Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Campeche, que contempla un incremento de 8 a 25 veces el salario mínimo general diario vigente en el concepto de cuota diaria de jubilación.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Obtiene el primer lugar en el indicador general, presenta las mejores puntuaciones en los parciales de regulación y dimensión del sector público, por lo que se puede decir que muestra una situación de libertad económica alta.

Regulación: La entidad presenta los mejores indicadores en regulación del país, su puntaje total es de 0,409. Sin embargo, en el índice de salud ha obtenido el trigésimo primer lugar, por lo que es un aspecto de oportunidad para mejorar.

Comercio: Producto de un gasto por parte de las empresas de 0,2% del PIB en el rubro de trámites y servicios por concepto de apertura de nuevos negocios, así como por un promedio de 26 días para la consecución de la misma, la entidad obtiene el cuarto lugar del índice de comercio, con un indicador de 0,106.

Transparencia: El segundo lugar nacional obtenido por la entidad en el índice de transparencia es producto de un indicador de 0,048 puntos, obtenidos por una calificación de su regulación en la materia por un total de 147,63 puntos.

Salud: Su ratio de gasto privado en salud es de 0,39, mientras que el gasto privado en salud medido como porcentaje del PIB alcanza el 1,1%, por lo que la entidad se posiciona en el trigésimo primer lugar nacional en el índice de salud.

Educación: Alcanza el vigésimo segundo lugar nacional en el índice de educación con un puntaje total de 0,892. Su principal rezago estriba en el porcentaje de alumnos atendidos por escuelas a cargo del presupuesto estatal con un total de 92,03%.

Dimensión del sector público: Se ubica en la primera posición nacional con un puntaje total de 0,078. Sus principales ventajas están determinadas por los índices de gasto público y esfuerzo fiscal, mientras que presenta oportunidades para mejora en el índice de balance financiero.

Deuda pública: Obtiene el tercer lugar nacional en el índice de deuda pública con un puntaje de 0,003.

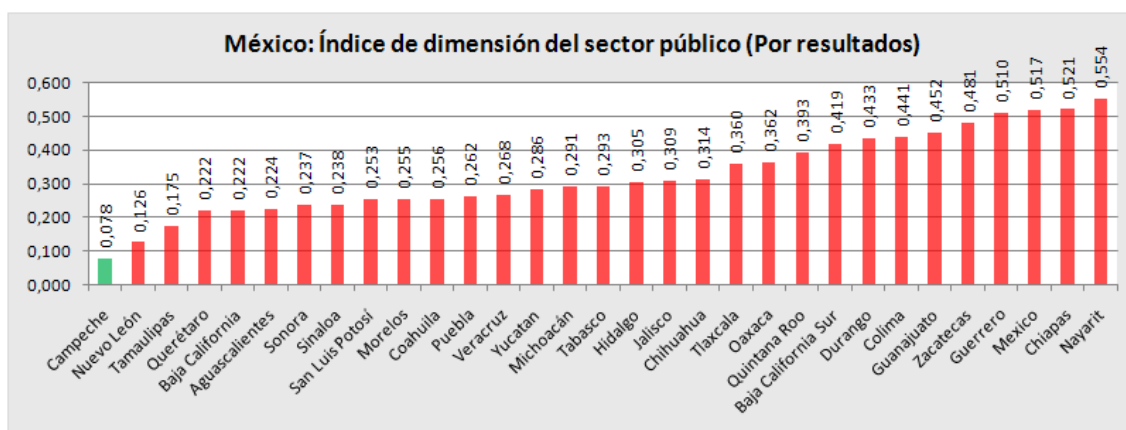
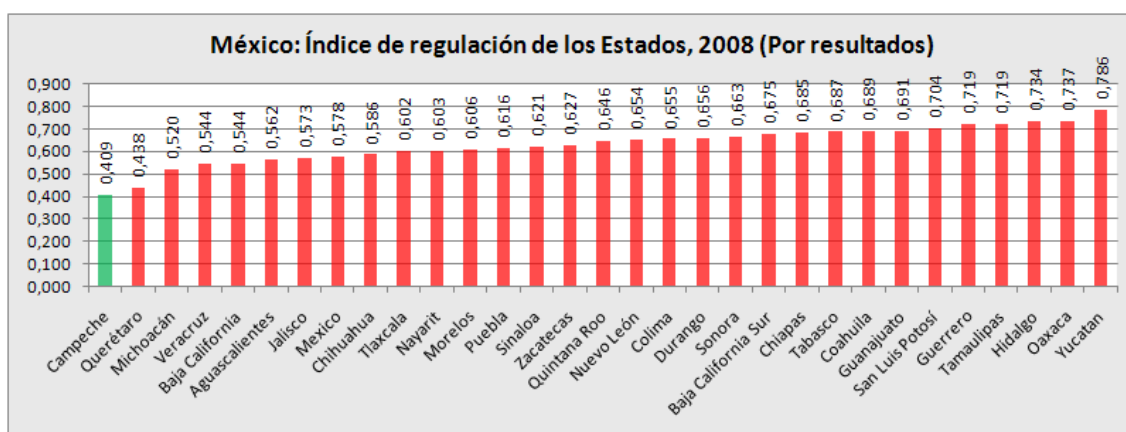
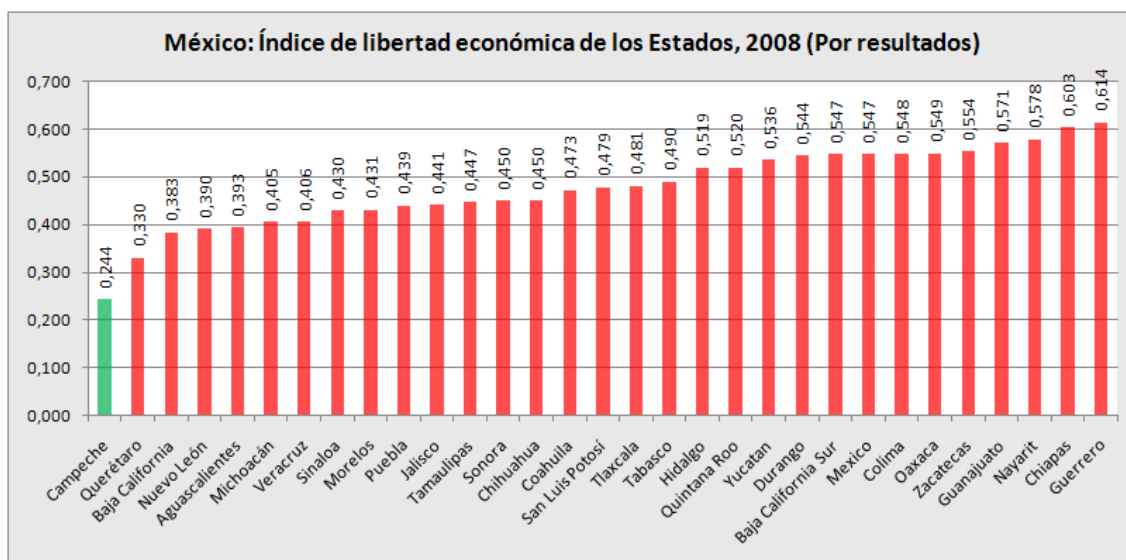
Balance financiero: Mantiene un balance en equilibrio, ello le proporciona un puntaje total de 0,304 y posiciona a la entidad en el décimo séptimo lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: Se ubica en la mediana nacional ya que el 2,09% de la población ocupada labora para el sector público de la entidad, lo que le produce un indicador general de 0,085.

Gasto público: Las erogaciones del sector público de la entidad representan el 2,01% del PIB, lo que es traducido a un indicador de 0,000 que le produce el primer lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,001, lo que se traduce en un indicador total en la materia de 0,000 y le vale para el primer lugar nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.5. Chiapas.

CHIAPAS	
Población	4,460,013
Superficie (kilómetros cuadrados)	73,289
PIB per cápita (pesos corrientes)	47,612.0
Tasa de desempleo	1.8
Escolaridad promedio (años)	11.9
Unidades médicas por 10.000 hab.	4
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	26.1



CHIAPAS	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
30 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
22 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
30 DE 31	

a) Resumen de políticas.¹⁹

En el rubro de educación, es importante mencionar la participación de la iniciativa privada en la materia, donde destaca la aportación económica de diferentes asociaciones civiles y empresas para la incorporación de 24,804 menores al nivel básico, que habían dejado sus estudios o no los habían iniciado, principalmente por el factor económico.

En cuanto a la salud, los esfuerzos estatales estuvieron dirigidos principalmente a medidas de prevención y de incremento a la infraestructura hospitalaria.

En cuanto a seguridad, se creó el Instituto de la Consejería Jurídica y de Asistencia Legal, el cual, entre las funciones más importantes, otorga atención, asistencia, orientación y el seguimiento jurídico que requiera la ciudadanía a través del programa Abogado del Pueblo, el cual a su vez, tiene la finalidad de brindar en forma gratuita, asesoría, orientación y seguimiento jurídico en las materias civil, familiar, penal a quienes no cuentan con los recursos económicos para pagar los honorarios de un abogado particular.

En el rubro de fortalecimiento al sector privado, es de suma relevancia mencionar la implementación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), del mismo modo, a través de las Ventanillas Únicas de Gestión Empresarial, los emprendedores y empresarios encuentran en un solo lugar, información de los requisitos para establecer empresas, en las que además de otorgan asesorías, y se gestionan los permisos y licencias ante dependencias federales, estatales, municipales y organismos privados, ahorrándole al empresario desplazamientos innecesarios; además, se proporcionan servicios que fomentan la generación de esquemas asociativos para organizar a los productores y hacerlos más competitivos.

¹⁹ GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, (2009). *Tercer Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.informe.chiapas.gob.mx/tercer-informe>

En cuanto a transparencia y mejora en la eficiencia del sector público, la administración pública local ha venido transitando de un modelo de control de la gestión reactivo-correctivo en el combate a la corrupción, a un modelo preventivo y con mayor participación de la sociedad; reorientándose hacia una cultura de prevención, autoevaluación y autocontrol de los entes públicos.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la trigésima posición nacional en el rubro producto de un indicador general de 0,603 que infiere que en la entidad el sector público mantiene una intervención relativamente grande en la economía. Su principal ventaja está definida por el índice de regulación, mientras que en el índice de dimensión del sector público se encuentra su principal área de oportunidad.

Regulación: Se ubica en la vigésimo segunda posición nacional en el índice de regulación como consecuencia de un indicador de 0,685. Su principal ventaja estriba en el índice de seguridad, mientras que manifiesta aspectos para la mejora en el índice de comercio.

Comercio: Chiapas obtiene el trigésimo lugar en el índice de comercio, producto de un indicador de 0,622. Ello es producto de un gasto por parte de las empresas por concepto trámites y servicios por apertura de un 0,5% del PIB, así como de los 50 días en promedio que se requieren para abrir un nuevo negocio.

Transparencia: Producto de los 89,09 puntos obtenidos por la revisión de su regulación, que le otorgan un indicador de transparencia de 0,601 puntos, obtiene el duodécimo lugar en el índice de transparencia.

Salud: Se ubica en el séptimo lugar nacional en el índice de salud producto de un puntaje de 0,640. Su ratio de gasto privado es de 1,42 que es resultado de un gasto privado como porcentaje del PIB de 7,4%.

Educación: Su principal rezago se ubica en el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal, con un porcentaje de 88,50%. Por lo que se ubica en el vigésimo lugar nacional en el índice de educación, con un puntaje de 0,903.

Dimensión del sector público: Obtiene el trigésimo lugar nacional en el rubro, producto de un puntaje de 0,521. Su principal ventaja está dada por el índice de balance financiero, mientras que presenta como área de desarrollo el índice de esfuerzo fiscal.

Deuda pública: Alcanza el décimo tercer lugar nacional en el rubro, su deuda pública medida en términos del PIB es del 0,10%, mientras que su indicador en la materia es de 0,085.

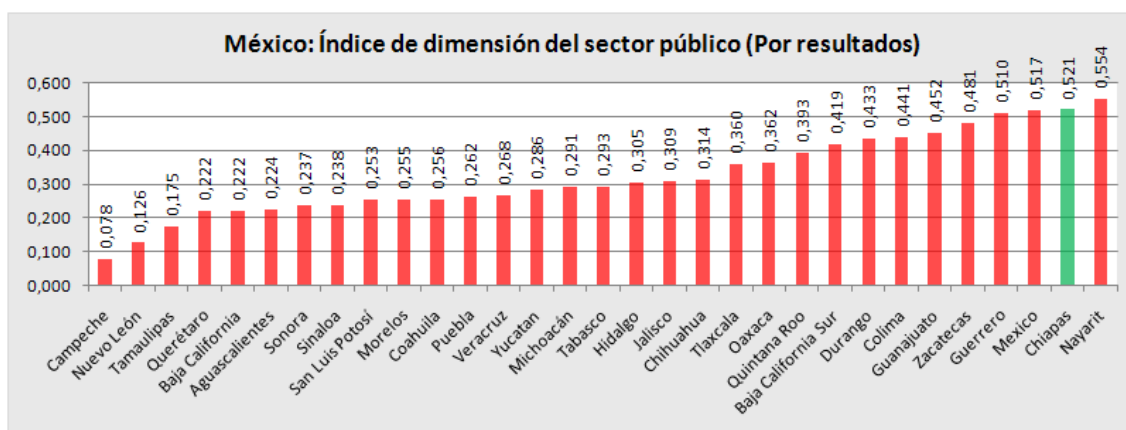
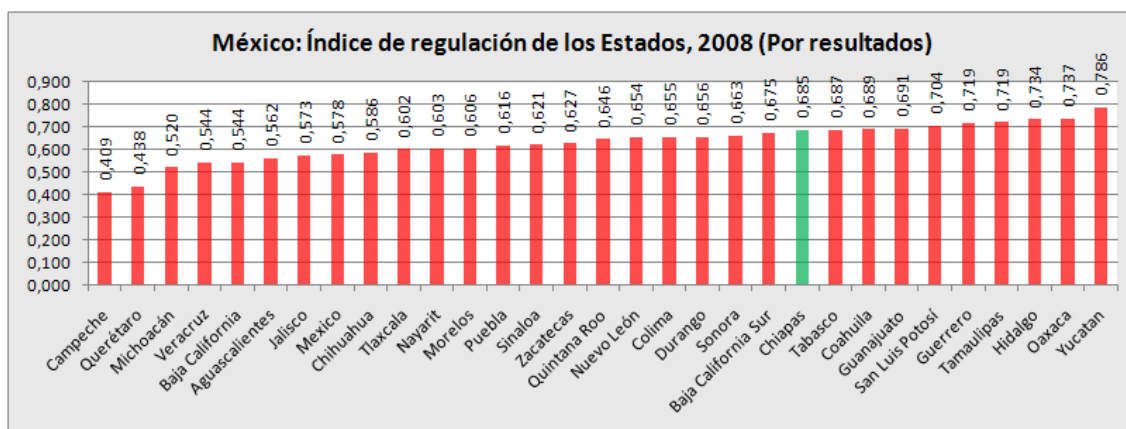
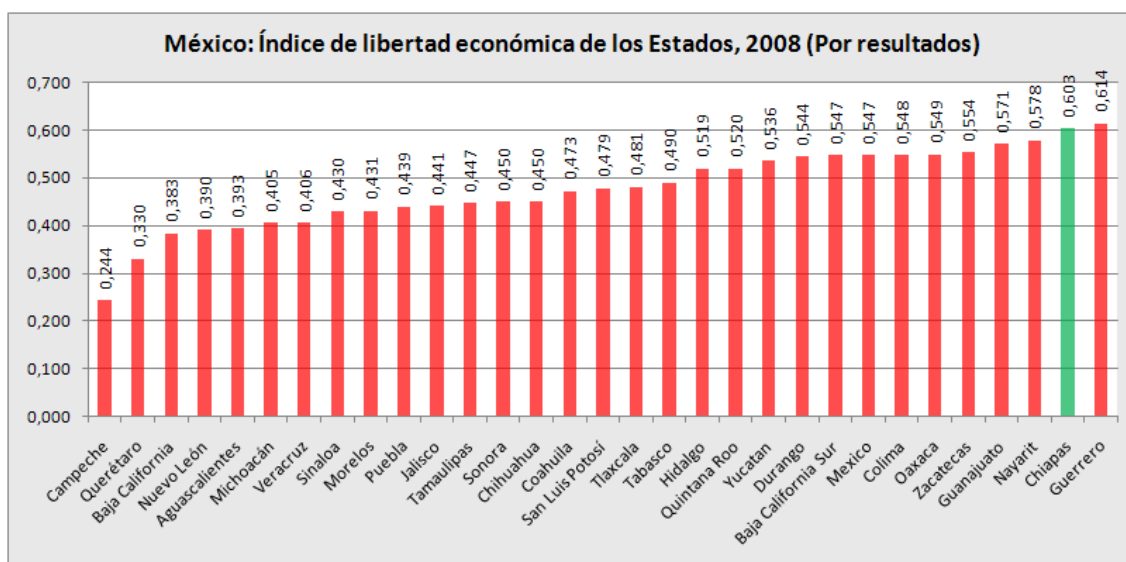
Balance financiero: Obtiene el cuarto lugar nacional en la materia debido a un superávit financiero del 0,10% de su PIB, el indicador conseguido es de 0,211 puntos.

Burocracia estatal: El 7,34% de la población ocupada trabaja para el sector público estatal, lo que le proporciona un indicador general de 0,394 y le otorga el vigésimo noveno lugar general en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Representa el 23,43% de su PIB, por lo que alcanza la trigésima posición en el índice de gasto público mediante un puntaje total de 0,914.

Esfuerzo fiscal: Obtiene la trigésimo primera posición en la materia como consecuencia de un índice de Frank de 0,078 y un puntaje general de 1,000.

c) Resultados gráficos.



4.14.6. Chihuahua.

CHIHUAHUA	
Población	3,359,934
Superficie (kilómetros cuadrados)	247,455
PIB per cápita (pesos corrientes)	109,243.8
Tasa de desempleo	4.2
Escolaridad promedio (años)	12.9
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.8
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	3.4



CHIHUAHUA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
14 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
9 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
19 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁰

En cuanto al rubro de la salud, una de las estrategias centrales del gobierno del Estado fue la de establecer una cobertura universal a todos sus habitantes, es por ello que se implementó un régimen estatal de protección social en salud, estos recursos son destinados primordialmente a la contratación de personal médico y paramédico, la prevención y promoción de la salud, la compra de medicamento e insumos, la conservación, mantenimiento, acreditación y gastos de operación de unidades médicas, entre otros rubros.

En educación, las principales políticas estuvieron destinadas a la vinculación de la educación superior con el sector privado. Además, se establecieron unidades académicas en la Sierra Tarahumara.

En cuanto a fomento del sector privado y la empresa, se incrementó en más de 90 por ciento la superficie destinada para uso industrial. Además, es importante destacar, que referente a la relación con el sector privado, la firma de convenios del gobierno con las cámaras empresariales de los diferentes sectores para la realización de eventos, seminarios, encuentros de negocios y conferencias, buscó elevar la competitividad y generar un óptimo ambiente de negocios. En el mismo rubro, derivado de una estrategia para la disminución del tiempo de apertura de negocios, se implementó una ventanilla única de gestión, donde se buscó la disminución del costo para la constitución de empresas, así como el sistema de apertura rápida de negocios, el cual en el período revisado, abrió su novena oficina, facilitando la apertura de 3 mil 400 empresas.

En cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, el gobierno del Estado llevó a cabo 104 auditorías en distintas dependencias y entidades de la administración pública estatal, verificando el cumplimiento de la normatividad en el manejo de

²⁰ GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: [http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/spe/uploads/Quinto_Informe\(1\).pdf](http://www.chihuahua.gob.mx/attach2/spe/uploads/Quinto_Informe(1).pdf)

recursos humanos, materiales y financieros y el apego a los programas y presupuestos aprobados.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Alcanza la décimo cuarta posición nacional en el rubro producto de un indicador general de 0,450 que infiere una intervención media en la actividad económica por parte del sector público en la entidad. Su índice de regulación presenta mejores números que los del tamaño del sector público.

Regulación: Se ubica en el noveno lugar nacional en el índice de regulación producto de un puntaje total de 0,586. Destaca en el rubro del índice de seguridad, mientras que observa espacio de mejora en el índice de comercio.

Comercio: Son en promedio 28 días para conseguir la apertura de un nuevo negocio en la entidad, además las empresas gastan un promedio de 0,7% del PIB por concepto de trámites y servicios. Estos indicadores producen un 0,544, que posiciona a la entidad en el vigésimo séptimo lugar en el índice de comercio.

Transparencia: Obtiene el quinto lugar nacional en el índice de transparencia, producto de la obtención de 140,58 puntos en la revisión de su marco regulatorio de la transparencia gubernamental, que a su vez se traducen en un indicador de 0,112 puntos.

Salud: Alcanza el décimo noveno lugar nacional en el índice de salud producto de un puntaje de 0,756. Su ratio de gasto privado en salud es de 1,09 mientras que su gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 2,4%.

Educación: Se ubica en el tercer lugar nacional en el índice de educación, con un índice de 0,580 puntos. Es necesario destacar que la entidad alcanza esta posición en gran medida a su porcentaje de alumnos atendidos por planteles de las entidades, que alcanza un porcentaje de 72,36%.

Dimensión del sector público: Se ubica en la décimo novena posición nacional en la materia, lo que indica un gobierno por debajo de la mediana. Su principal ventaja está definida por el índice de gasto público, mientras que presenta áreas de oportunidad en el índice de burocracia estatal. Su puntaje total es de 0,314.

Deuda pública: Vigésimo segundo lugar nacional en la materia, la deuda pública medida en términos del PIB importa un 0,23%, y el indicador en la materia es de 0,192.

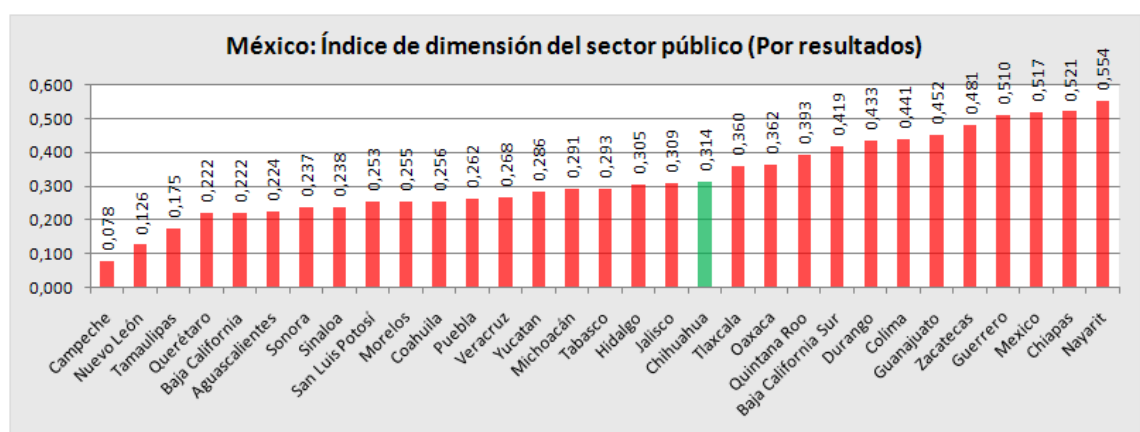
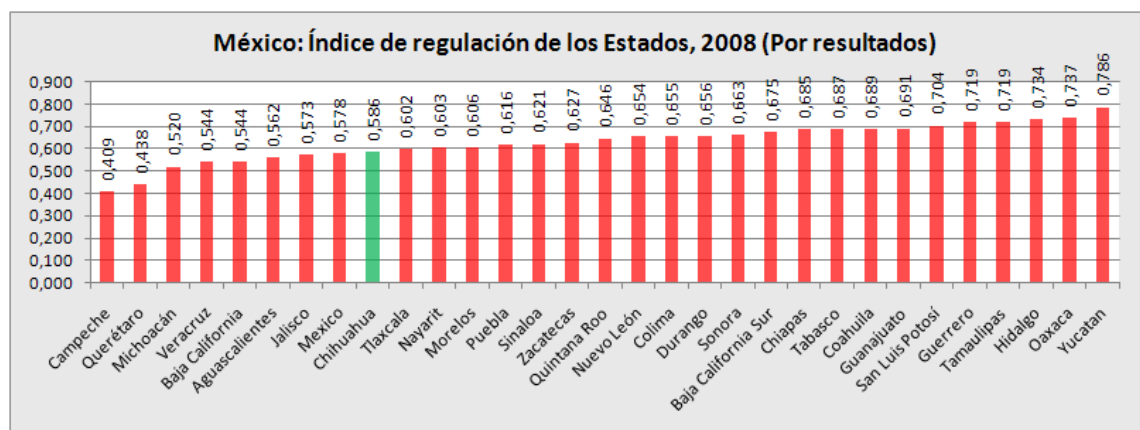
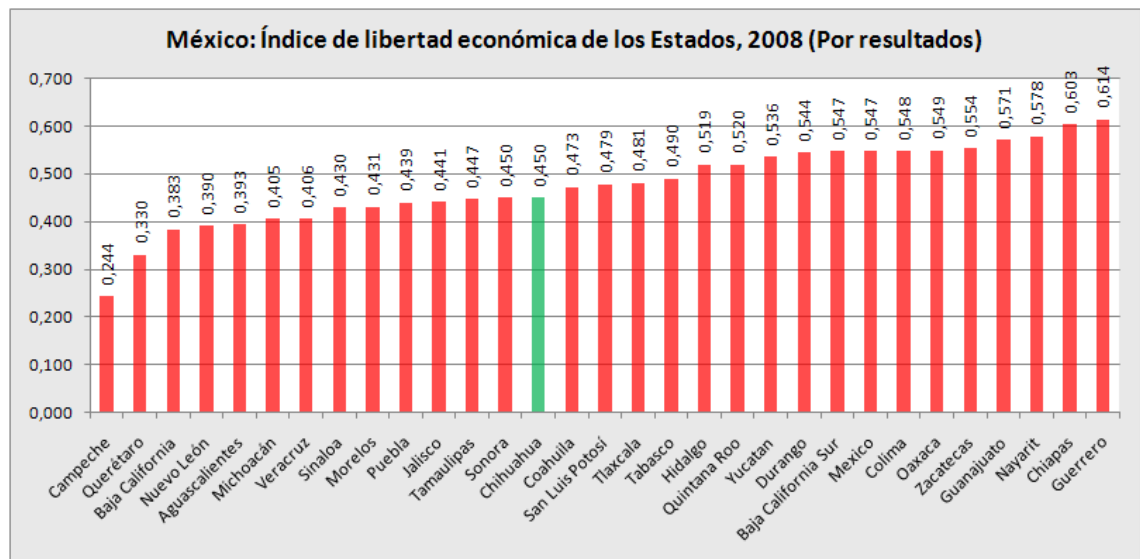
Balance financiero: Obtiene el décimo octavo lugar nacional en la materia producto de un puntaje de 0,304 y un balance financiero en equilibrio.

Burocracia estatal: El 4,14% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le proporciona un indicador general de 0,206 y le otorga el vigésimo quinto lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Representa el 9,60% de su PIB, lo que produce un indicador general de 0,324 que le otorga el noveno lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,043 y su puntaje general es de 0,547 lo cual le otorga el vigésimo tercer lugar nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.7. Coahuila.

COAHUILA	
Población	2,601,884
Superficie (kilómetros cuadrados)	151,563
PIB per cápita (pesos corrientes)	143,032.8
Tasa de desempleo	4.9
Escolaridad promedio (años)	5.4
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.6
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.3



COAHUILA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
15 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
24 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
11 DE 31	

a) Resumen de políticas.²¹

En materia de educación, la estrategia implementada por el gobierno del estado, ha sido encaminada a la revisión y elaboración de nuevos planes y programas educativos, así como a difundir y diversificar tanto la oferta como los servicios educativos para incrementar la cobertura. En este sentido, la participación del sector privado en la revisión y reforma de los programas educativos de los niveles medio superior y superior, ha facilitado la absorción laboral de los egresados de este segmento.

En el rubro de la salud, destaca en el informe el programa de *farmacias de la gente*, ya que es un programa que opera en un esquema de participación conjunta con la iniciativa privada, el cual permite abaratar el costo de medicamentos. Dicho programa opera con 233 farmacias las cuales ha atendido a un millón 409mil personas que han requerido 5 millones 196 mil medicamentos.

En cuanto a seguridad, se formuló la nueva Ley de Seguridad Pública y la Ley de la Fiscalía General del Estado. Además, se creó una defensoría jurídica integral, para garantizar que los particulares que no cuenten con los recursos económicos necesarios, puedan ser asesorados y representados gratuitamente ante las autoridades judiciales y/o administrativas.

En el rubro de fomento de nuevas inversiones, se continuó con la política de créditos y la elaboración de diagnósticos geográficos para la instalación de nuevas empresas.

En cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, se eliminó el presupuesto para remodelaciones de inmuebles, adquisición de vehículos, incremento de plazas, compras de mobiliario y equipo, entre otras.

²¹ GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.e-pages.dk/coahuilagobmx/41/fullpdf/full4b3a658bd208a.pdf>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Obtiene un indicador general de 0,473 que a su vez le produce la décimo quinta posición nacional en el rubro, por lo que se puede inferir una intervención media por parte del sector público en la economía. El índice de dimensión del sector público mantiene mejores números que el índice de regulación, donde se ubica en la parte baja de la tabla.

Regulación: Se ubica en la vigésimo cuarta posición nacional en el índice de regulación como consecuencia de un puntaje de 0,689. Su principal ventaja está determinada por el índice de educación, mientras que su área de mejora está definida por el índice de salud.

Comercio: Obtiene el décimo tercer lugar en el índice de comercio, con un indicador de 0,306. Ello es producto de 44 días en promedio para abrir un nuevo negocio en la entidad y un gasto en trámites y servicios de 0,2% del PIB que desembolsan las empresas nuevas por apertura.

Transparencia: Obtiene el vigésimo lugar en el índice de transparencia, producto de los 93,02 puntos obtenidos por la evaluación de su marco regulatorio en materia de transparencia, que a su vez se traducen en un indicador de 0,564.

Salud: Con un ratio de gasto privado en salud de 0,69 y un porcentaje del PIB de gasto privado en salud de 1,8%, esta entidad alcanza el vigésimo séptimo lugar nacional en el índice de salud.

Educación: Se ubica en el séptimo lugar nacional, producto de un indicador de 0,762. Su principal rezago se ubica en el índice de alumnos, que se ubica en 0,820 puntos producto de un porcentaje de 84,55%.

Dimensión del sector público: Su puntaje total es de 0,256, lo que posiciona a la entidad en el undécimo lugar nacional, lo que sugiere un tamaño de su gobierno cercano a la mediana. Su principal ventaja está determinada por el índice de esfuerzo fiscal, mientras que presenta áreas de mejora en los índices de balance financiero y burocracia estatal.

Deuda pública: Con una deuda pública del 0,01% de su PIB obtiene el cuarto lugar nacional en el índice de deuda pública y obtiene un indicador de 0,012.

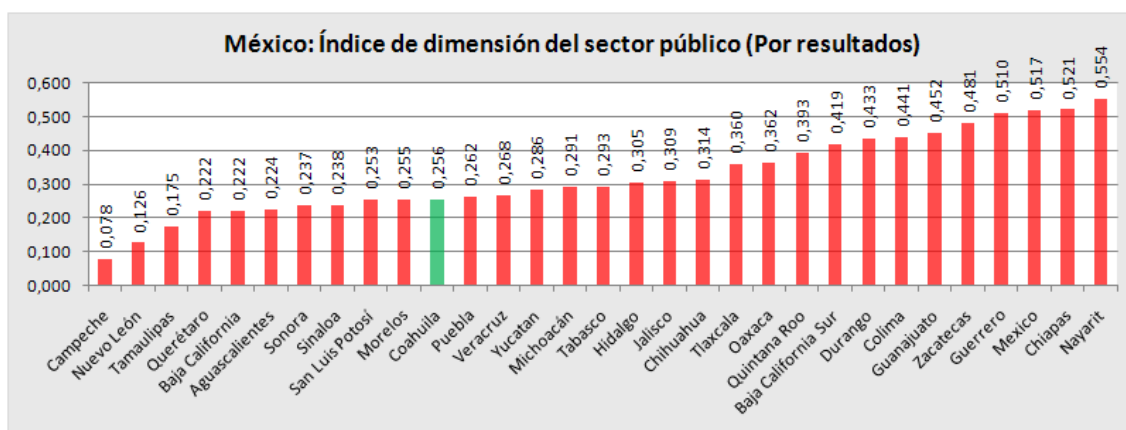
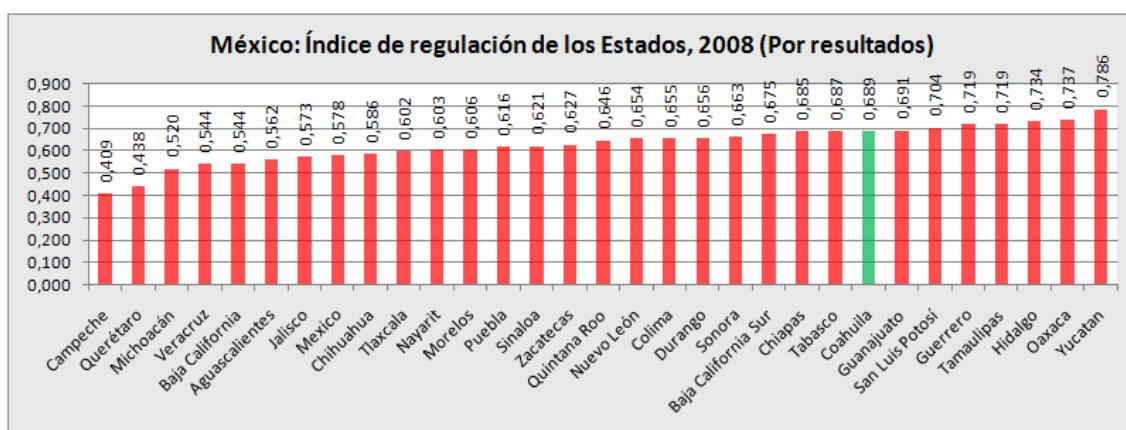
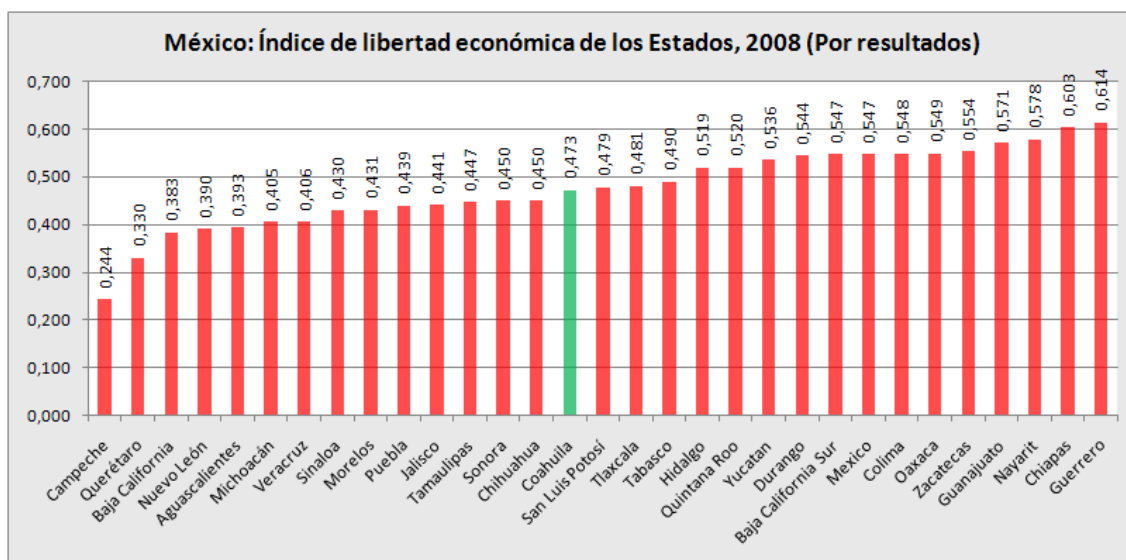
Balance financiero: Obtiene la vigésimo sexta posición nacional en el rubro producto de un déficit del 0,35% de su PIB y un puntaje total de 0,615.

Burocracia estatal: El 4,94% de la población ocupada en la entidad trabaja para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general en la materia de 0,253 y le otorga el vigésimo sexto lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: El total de las erogaciones del gobierno estatal representa el 8,44% del PIB de la entidad, lo que genera un indicador total de 0,274 y produce un quinto lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,011, lo que le produce el tercer lugar nacional en esfuerzo fiscal producto de un indicador general de 0,126.

c) Resultados gráficos.



4.14.8. Colima.

COLIMA	
Población	593,224
Superficie (kilómetros cuadrados)	5,625
PIB per cápita (pesos corrientes)	102,638.0
Tasa de desempleo	2.3
Escolaridad promedio (años)	5.2
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.1
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.6



COLIMA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
25 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
18 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
25 DE 31	

a) Resumen de políticas.²²

En cuanto al rubro de la mejora de la competitividad, el gobierno del Estado se abocó a la asesoría en trámites para el registro de marcas, la elaboración de manuales de procedimientos y talleres de reingeniería administrativa para pequeñas empresas, por lo que durante el año de estudio, se alcanzaron a registrar alrededor de un centenar de marcas y se impartieron 37 talleres de reingeniería administrativa. Continúa en la dinámica nacional de hacer de fideicomisos para la promoción de pequeñas empresas la estrategia clave para el crecimiento económico. Además, por ser el Estado de la playa de Manzanillo, entre otras de gran afluencia turística nacional, un importante proyecto fue la promoción de la marca Manzanillo y Colima en las ciudades de Guadalajara, Distrito Federal y el bajo mexicano en general, que es la población que potencialmente puede visitar estos sitios.

Referente a la modernización y consecución de la eficiencia en la administración pública, destaca la construcción del Sistema de Profesionalización y Evaluación del Desempeño y el catálogo de puestos. Además se formaron 252 contralores sociales, proporcionándoles los elementos técnicos necesarios para la supervisión de obra pública.

Debido a los rezagos educativos de la entidad, durante el 2008 se reforzaron los programas de alfabetización para adultos, por lo que se logró impactar de manera positiva a casi 10 mil personas, un gran porcentaje de esa cantidad consiguieron su certificado. Los demás programas educativos vienen bajo la batuta federal, por lo que no se informan programas relevantes de creación estatal ni se informan convenios con el sector privado.

²² GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.planeacion.gob.mx/informes/index.php?ninf=2009>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Mantiene una relativamente alta intervención del sector público en la economía, según se puede inferir por su puntaje total de 0,548 y su vigésimo quinta posición general en el rubro. Su principal ventaja está dada por el índice de regulación, mientras que en el índice de dimensión del sector público se encuentra su principal área de oportunidad.

Regulación: Se ubica en los niveles medios de regulación producto de un índice de 0,655 y un décimo octavo lugar general, su ventaja está dada por el índice de comercio, principalmente, mientras que su principal área de desarrollo está definida por su resultado en el índice de salud.

Comercio: Colima obtiene el noveno lugar en el índice de comercio, ello es producto de un indicador de 0,256, y el cual es resultado de los casi 32 días en promedio que se requieren para la apertura de un nuevo negocio, así como del gasto por parte de las empresas por concepto de trámites y servicios por un importe del 0,3% del PIB.

Transparencia: En su evaluación del marco regulatorio en materia de transparencia ha obtenido un puntaje de 112,75, que a su vez se traducen en un indicador de 0,378 puntos para darle el vigésimo segundo lugar nacional.

Salud: Con un ratio de gasto privado en salud que llega al 0,84, un gasto privado en salud medido como proporción del PIB que alcanza el 3,8 y un índice de salud de 0,842, la entidad alcanza el vigésimo quinto lugar nacional en el índice de salud.

Educación: Manifiesta un rezago similar en dos rubros. Por un lado, en el porcentaje de alumnos atendidos por escuelas a cargo del presupuesto estatal alcanza un total de 91,37%, mientras que el porcentaje de docentes que laboran en escuelas

con cargo al presupuesto estatal alcanza un porcentaje de 85,53%, por lo que obtiene el vigésimo primer lugar nacional en el índice de educación con un puntaje de 0,889.

Dimensión del sector público: Su gobierno es de relativamente grandes proporciones, según indica su puntaje de 0,441 y su vigésimo quinto lugar nacional en el rubro. Su principal ventaja está definida por el índice de balance financiero, mientras que presenta como área de oportunidad el índice de deuda pública.

Deuda pública: Alcanza el trigésimo primer lugar en el indicador de la materia, su deuda pública medida en términos de PIB es del 1,22%, su índice es de 1,000.

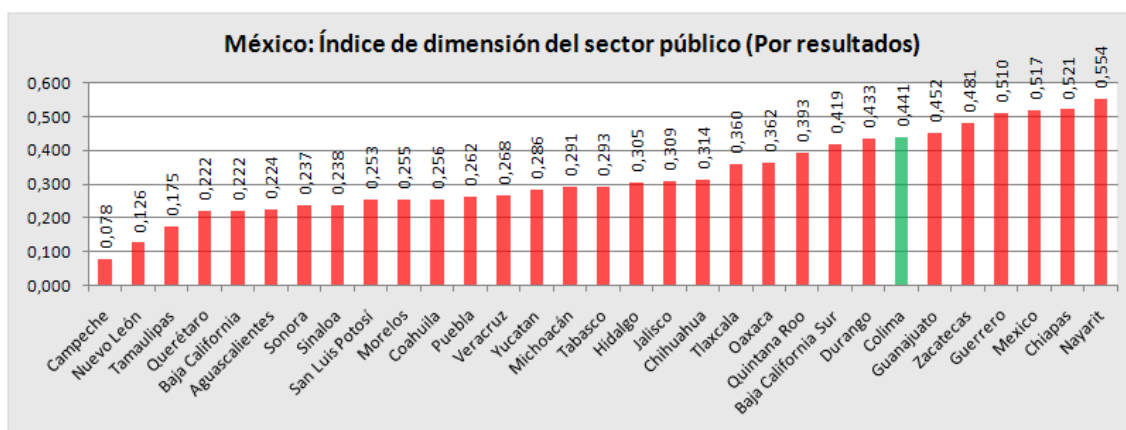
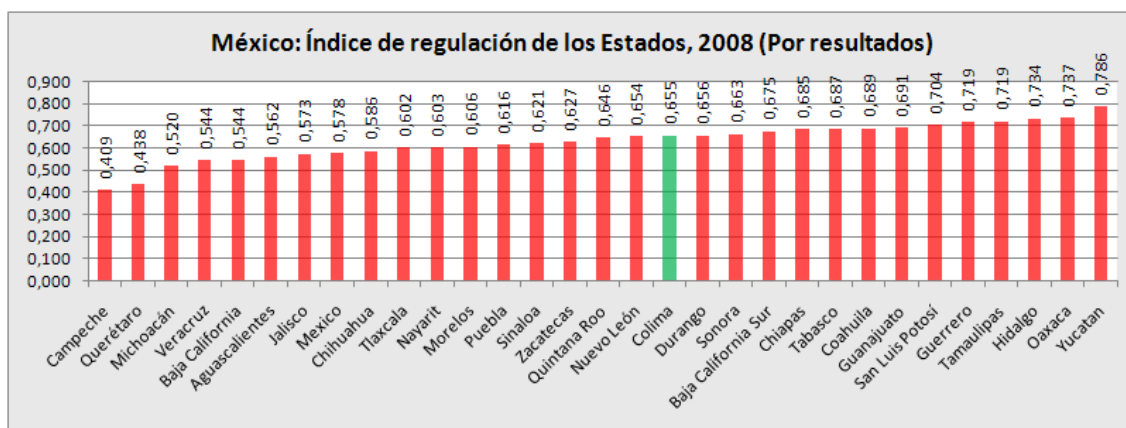
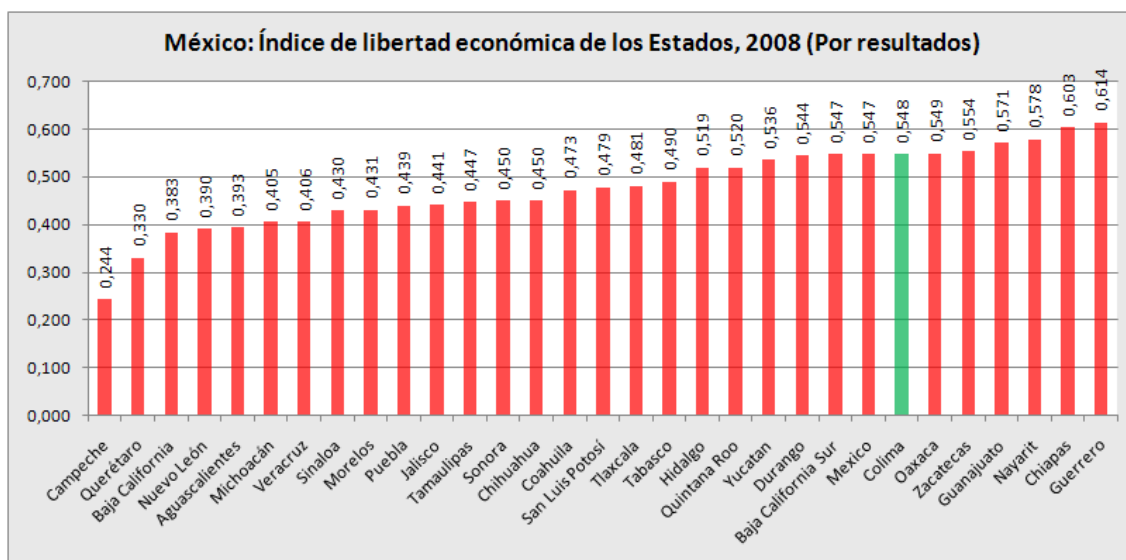
Balance financiero: Producto de un superávit financiero del 0,04% de su PIB le es asignado un indicador general de 0,267 puntos y obtiene el noveno lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: El 1,81% de la población ocupada en la entidad trabaja para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,069 y un décimo quinto lugar nacional en la materia.

Gasto público: Significa el 14,40% de su PIB, lo que le genera un indicador total de 0,529 que es, a su vez, factor para que la entidad alcance el vigésimo quinto lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Alcanza el décimo lugar nacional en el rubro como consecuencia de un índice de Frank de 0,027 y un indicador general de 0,340.

c) Resultados gráficos.



4.14.9. Durango.

DURANGO	
Población	1,544,614
Superficie (kilómetros cuadrados)	123,451
PIB per cápita (pesos corrientes)	91,512.8
Tasa de desempleo (%)	4
Escolaridad promedio (años)	8.6
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.5
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	2.1



DURANGO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
22 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
19 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
24 DE 31	

a) Resumen de políticas.²³

En el rubro de la educación, las políticas y estrategias fueron orientadas a la consecución de objetivos en la calidad, cobertura, actualización de los planes y programas educativos, el establecimiento de alianzas estratégicas y elevar la eficiencia terminal, así como la formación de cursos y talleres para la educación bilingüe (castellano-lengua indígena).

En cuanto al rubro de la salud, principalmente se llevaron a cabo los programas federales en la materia, por lo que la línea principal en la materia estuvo definida por la construcción de infraestructura para la salud.

En cuanto al desarrollo del sector privado, se otorgaron 289 concesiones mineras, con una superficie de 707 mil 898 hectáreas. Por último, la implementación de estrategias encaminadas a aminorar los tiempos en la apertura de nuevas empresas, facilitó el establecimiento e inicios de operación de apertura a 1.434 empresas.

En cuanto a las finanzas públicas, destaca que el Estado implementó medidas para ampliar sus ingresos fiscales, para su consecución, se pusieron en marcha varios proyectos en los que destacan el uso intensivo de las tecnologías y la banca electrónica, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, así como el fortalecimiento de las tareas de fiscalización y actualización de los padrones de contribuyentes.

En cuanto a la prevención y combate a la corrupción por parte de los servidores públicos, se destaca la firma de un acuerdo para implementar la herramienta INFOMEX, que es un instrumento electrónico el cual permite la construcción de una plataforma nacional de acceso a la información pública gubernamental, por lo que se

²³ GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.durango.gob.mx/site/descargas/cuartoInforme.pdf>

refuerza el rubro de la transparencia gubernamental y la rendición de cuentas sobre las actividades públicas.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la vigésimo segunda posición nacional en el rubro producto de un indicador general de 0,544, lo que infiere una relativamente elevada intervención pública en la economía de la entidad. Sus principales ventajas están dadas por el índice de regulación, mientras que presenta áreas de oportunidad en el índice de dimensión del sector público.

Regulación: Se ubica en la décimo novena posición nacional en el índice de regulación, con un puntaje de 0,656. Su principal ventaja está dada por el índice de educación, mientras que tiene como área para desarrollo el índice de sanidad. Su nivel de regulación es medio.

Comercio: Durango se ubica en el décimo lugar en el índice de comercio, producto de un indicador de 0,261. Ellos es el resultado del gasto por parte de las empresas por concepto de trámites y servicios para la apertura de un nuevo negocio por un monto del 0,4% del PIB y los 25 días en promedio que se requieren para abrir un nuevo negocio.

Transparencia: Obtiene el décimo octavo lugar nacional en el índice de transparencia, esta posición ha sido obtenida como consecuencia de un indicador de 0,518 puntos, que son producto de la evaluación de su marco regulatorio al sector público, y que contabilizó 97,87 puntos.

Salud: Obtiene el vigésimo cuarto lugar nacional en el índice de salud, producto de un indicador de 0,825 puntos. Su ratio de gasto privado en salud es de 0,89 y el gasto de la entidad en salud medido en términos de PIB es de 3,3%.

Educación: Se ubica en el noveno lugar nacional en el índice de educación, producto de un indicador de 0,781 puntos. El principal rezago se ubica en el porcentaje de escuelas a cargo del gobierno estatal, que llega al 79,80%.

Dimensión del sector público: Las dimensiones del gobierno en la entidad son superiores a la mediana nacional, según indica su puntaje total de 0,433 y su vigésimo cuarto lugar nacional en el rubro. Sus principales áreas de oportunidad vienen definidas por el índice de esfuerzo fiscal, mientras que para desarrollo cuenta con el índice de burocracia estatal.

Deuda pública: El vigésimo quinto lugar nacional en la materia que obtiene la entidad es producto de un indicador de 0,276 y una deuda pública medida en porcentaje de su PIB del 0.34%.

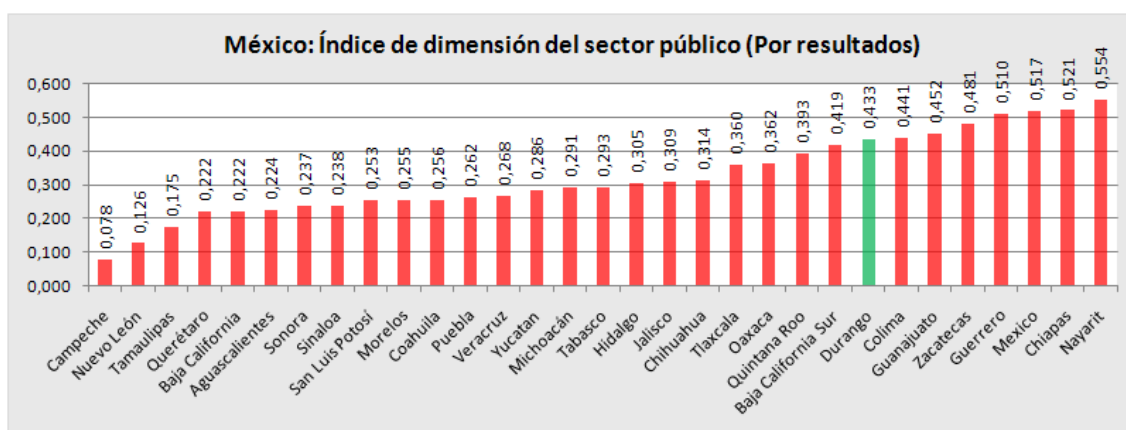
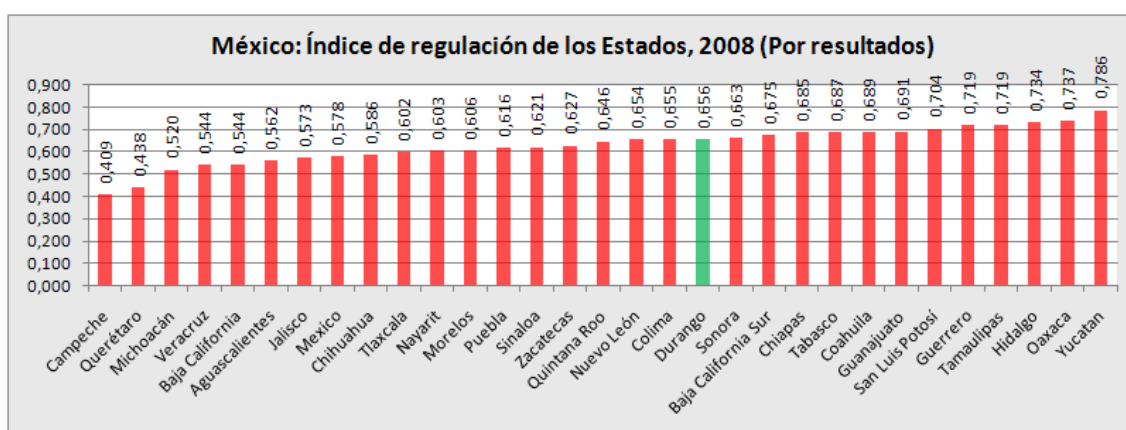
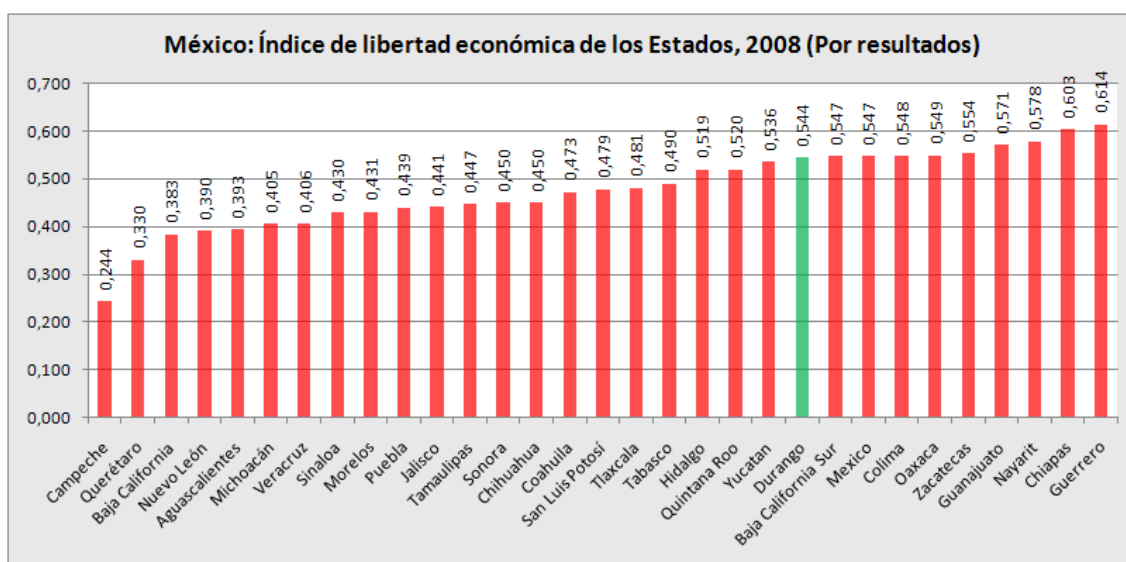
Balance financiero: Su déficit financiero alcanza el 0,40% del PIB, por lo que mediante un puntaje de 0,662 se posiciona en el vigésimo octavo lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal. El 7,35% de la población ocupada labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,395 y le otorga el trigésimo lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Significa el 12,42% de su PIB, lo que le produce un indicador general de 0,444 el cual posiciona a la entidad en el décimo octavo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Alcanza la décimo cuarta posición nacional en la materia producto de un indicador general de 0,387 que es producido por un índice de Frank de 0,031.

c) Resultados gráficos.



4.14.10. Guanajuato.

GUANAJUATO	
Población	5,020,800
Superficie (kilómetros cuadrados)	30,608
PIB per cápita (pesos corrientes)	85,146.4
Tasa de desempleo (%)	3.9
Escolaridad promedio (años)	7.8
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.7
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.2



GUANAJUATO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
28 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
25 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
26 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁴

En el rubro de la educación, los esfuerzos del gobierno del Estado se orientaron a la mejora de la cobertura educativa. Además, cabe destacar el establecimiento de convenios tanto para la mejora educativa como del desarrollo de proyectos de investigación y tecnológico, como resultado se establecieron 32 nuevos convenios, de los cuales 24 son internacionales, con instituciones educativas de América, Europa y Asia.

En el ámbito de la salud, la mayoría de los esfuerzos se enfocaron a la prevención de enfermedades, por lo que proliferan cursos y talleres de prevención de diversas patologías, que van desde las infecciosas, hasta la prevención de la drogadicción.

Referente al desarrollo del sector privado, además de los financiamientos regulares en los Estados, con la participación de los sectores productivo y educativo se creó un consejo de mejora regulatoria, el cual ha facilitado la apertura formal de 4 mil 483 empresas. La participación del sector privado en este rubro, ha sido mediante la creación de un consejo consultivo de innovación, el cual conforma una instancia de consulta y asesoría del gobierno del Estado. Asimismo se creó un observatorio de competitividad e innovación.

Por último, en cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, se fortalecieron los mecanismos de control y seguimiento del gasto bajo las premisas de austeridad y disciplina presupuestal. En este sentido, se realizaron 46 revisiones a diferentes partidas presupuestales. Por último se extendió el servicio civil de carrera, llegando a 36 dependencias y entidades participantes.

²⁴ GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, (2008). *Segundo Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.guanajuato.gob.mx/gestiones/oliva/2doinforme/pdf/intro.pdf>. Nota: Se toma este documento ya que el tercer informe se dio hasta marzo del 2010 y además su período es de 17 meses de gestión.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Debido a su puntaje general de 0,571, se infiere que el sector público de la entidad mantiene una intervención relativamente alta en la economía local. Mantiene un equilibrio a la baja tanto en el índice de regulación como de dimensión del sector público, donde obtiene el lugar veinticinco y veintiséis a nivel nacional, respectivamente. Su lugar general en el rubro es el veintiocho.

Regulación: Se ubica en la vigésimo quinta posición nacional en el índice de regulación como consecuencia de un puntaje de 0,691. Su principal ventaja estriba en el índice de salud, mientras que en el índice de seguridad encuentra su principal área de mejora.

Comercio: En Guanajuato se necesitan en promedio 38 días para la apertura de un nuevo negocio, ello aunado al gasto por parte de las empresas por concepto de trámites y servicios por un importe del 0,3% del PIB, ubican a la entidad en el décimo quinto lugar del índice de comercio, con un indicador de 0,322.

Transparencia: Ha obtenido el vigésimo séptimo lugar nacional en el índice de transparencia, producto de un resultado de 79,94 puntos en la evaluación del marco regulatorio que se ha traducido en un indicador de 0,687 puntos.

Salud: Su índice de salud se ubica en 0,709 puntos, que son consecuencia de un gasto privado en salud como porcentaje del PIB de 3,8% y un ratio de gasto privado en salud de 1,23. La posición alcanzada es la décimo tercera.

Educación: Se ubica en el décimo sexto lugar en el índice de educación producto de un total de 0,824 puntos. Su principal rezago está dado por el porcentaje de escuelas a cargo del gobierno estatal, que alcanza un porcentaje de 84,64%.

Dimensión del sector público: Obtiene un puntaje de 0,452 y el vigésimo sexto lugar nacional en el rubro, por lo que se puede decir que su gobierno mantiene proporciones superiores al de la mediana nacional. Su principal ventaja está definida por el índice de deuda pública, mientras que presenta área de oportunidad en el índice de burocracia estatal.

Deuda pública: Su indicador total es de 0,048 y le produce el sexto lugar nacional en el rubro. Su deuda pública como porcentaje del PIB es del 0,048.

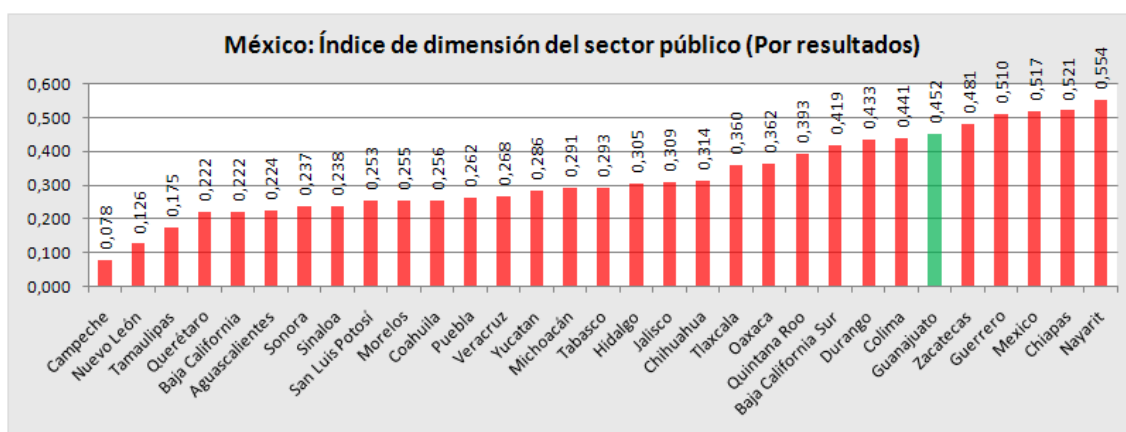
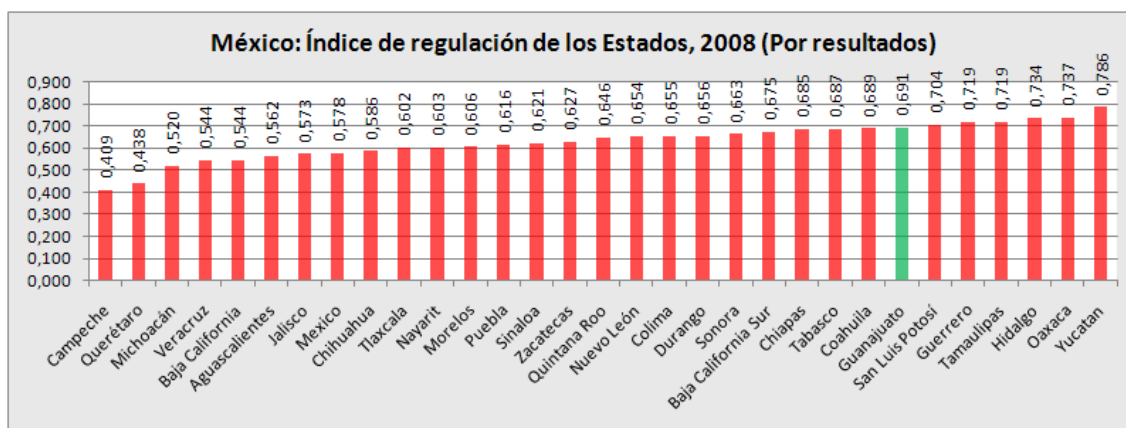
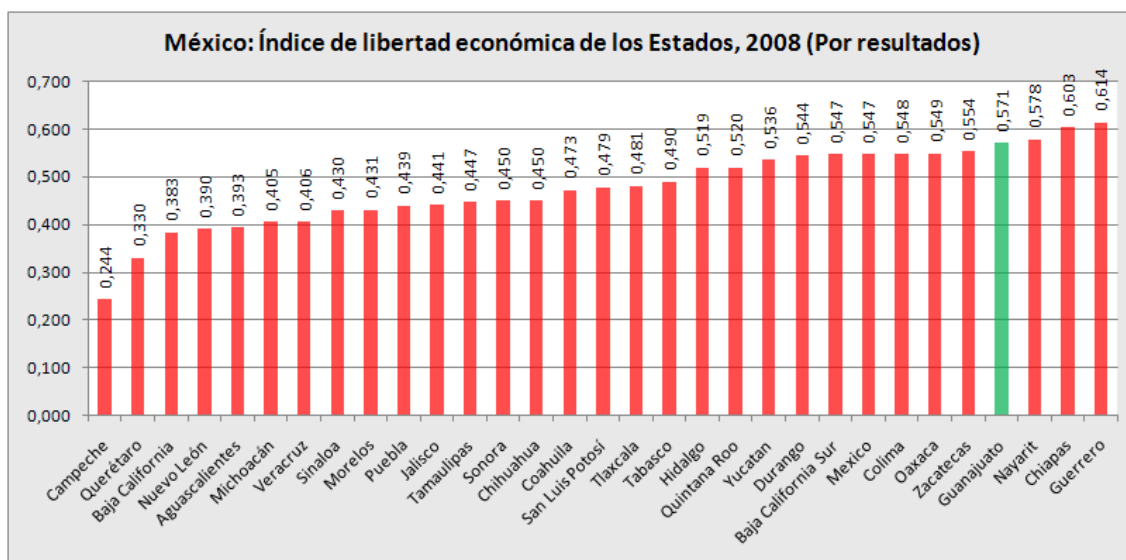
Balance financiero: Alcanza el décimo quinto lugar nacional en el rubro producto de un balance financiero en equilibrio y un indicador del 0,301.

Burocracia estatal: El 17,01% de la población ocupada labora para el sector público estatal, lo que le proporciona un puntaje total de 1,000 y posiciona a la entidad en el trigésimo primer lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: El total de las erogaciones del sector público de la entidad significan el 11,07% de su PIB, por lo que obtiene un indicador general de 0,386 y el undécimo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el vigésimo segundo lugar nacional en la materia como consecuencia de un índice de Frank de 0,041 y un puntaje general de 0,523.

c) Resultados gráficos.



4.14.11. Guerrero.

GUERRERO	
Población	3,145,656
Superficie (kilómetros cuadrados)	63,621
PIB per cápita (pesos corrientes)	53,630.5
Tasa de desempleo (%)	1.2
Escolaridad promedio (años)	7.5
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.7
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	14.2



GUERRERO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
31 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
27 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
28 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁵

En el rubro educativo, los esfuerzos del Estado estuvieron encaminados a mejorar la cobertura escolar, es de mencionarse la implementación de programas de educación a distancia cuyo objetivo fue beneficiar a las regiones marginadas. Es necesario indicar que en Instituto Tecnológico Superior de la Montaña, se implementó un centro de incubación de negocios bajo el modelo del Instituto Politécnico Nacional. Del mismo modo, la creación de infraestructura educativa concentró los presupuestos del ramo, y como muestra, basta mencionar la creación de la Ley General para la Infraestructura Física Educativa, que busca normar este tipo de instalaciones.

Algunas de las instituciones creadas para mejorar el tema de la seguridad como el Sistema Estatal de Seguridad Pública y El Comité Estatal para la Prevención Social del Delito, fueron creadas en ejercicios fiscales anteriores, es por ello que durante el año del informe se continuó con la implementación de las instituciones creadas. Del mismo modo, se trabajó en la evaluación y calificación de los servidores públicos del ramo, así como en la construcción de instalaciones policiales.

En cuanto al fortalecimiento del sector privado, vale la pena destacar que la inversión turística inmobiliaria privada, continúa representando un factor preponderante en el desarrollo económico del Estado; al respecto, es de mencionar que en 2008, se ejercieron 3 mil 168 millones 890 mil pesos, destinados, en su totalidad a proyectos inmobiliarios y comerciales en el puerto de Acapulco.

Por último, respecto a la mejora en la eficiencia del sector público, es de relevancia mencionar que se suscribieron diversos acuerdos con la Federación con el objetivo de mejorar la rendición de cuentas y la transparencia presupuestaria, del mismo modo, se crearon instituciones que normarán y revisarán los tabuladores salariales de los servidores públicos del Estado, por último, se hicieron revisiones administrativas de diversas dependencias y fondos con cargo al presupuesto estatal.

²⁵ GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.guerrero.gob.mx/?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Article=7621>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Obtiene la trigésimo primera posición nacional en el rubro producto de un puntaje general de 0,614, lo que infiere que en la entidad el sector público mantiene una elevada intervención en la economía. Su principal ventaja está definida por el índice de regulación, mientras que en el índice de dimensión del sector público se puede encontrar su área de oportunidad.

Regulación: Sus principales áreas de oportunidad para mejorar la regulación se encuentran en los índices de educación y transparencia, mientras que su principal ventaja se encuentra en el índice de seguridad. Se ubica en el vigésimo séptimo lugar en el índice de regulación con un indicador de 0,719.

Comercio: En Guerrero se toman en promedio 41 días para la apertura de un nuevo negocio, aunado al monto de 0,2% del PIB por concepto de trámites y servicios que las empresas locales gastan por su apertura, posicionan a la entidad en el décimo primer lugar en el índice de comercio, con un indicador de 0,272.

Transparencia: En su revisión del marco regulatorio en materia de transparencia ha obtenido 73,25 puntos, que a su vez se traducen en un indicador de transparencia de 0,751 puntos, que colocan a la entidad en el trigésimo lugar nacional.

Salud: Se ubica en la vigésimo primera posición nacional del índice de salud por su resultado de 0,779 puntos. Su ratio de gasto privado en salud alcanza el 1,03 y su gasto privado medido como porcentaje del PIB alcanza el 4,1%.

Educación: Se posiciona en el trigésimo lugar en el índice de educación con un puntaje de 0,997. Tal ubicación es producto principalmente de los indicadores de alumnos y docentes, que manifiestan porcentajes de 96,23% y 93,49% respectivamente.

Dimensión del sector público: Obtiene el vigésimo octavo lugar nacional en el rubro, con un puntaje de 0,510. Su principal ventaja está definida por el índice de burocracia estatal, mientras que su principal área de desarrollo es el índice de esfuerzo fiscal.

Deuda pública: Su lugar en el índice referido es el vigésimo cuarto, el cual es producto de una deuda pública en términos de su PIB del 0,33% y un indicador de 0,272.

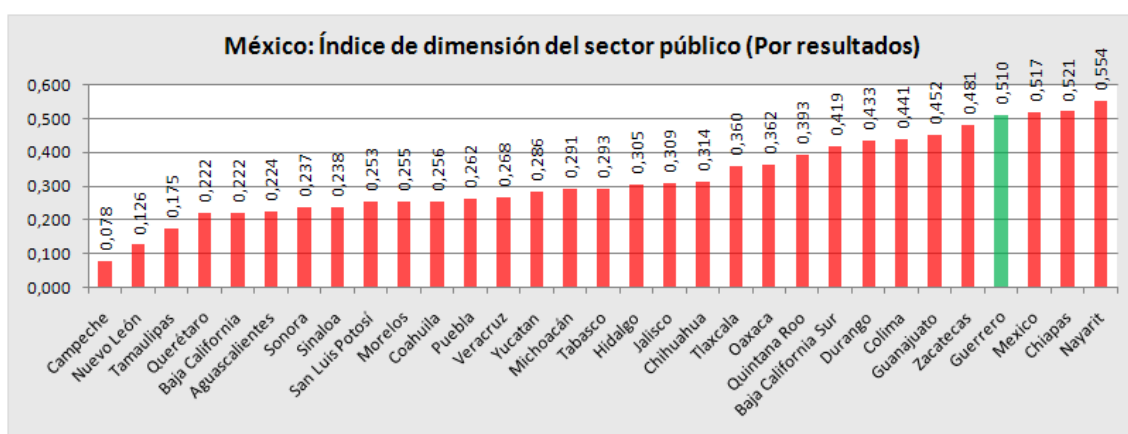
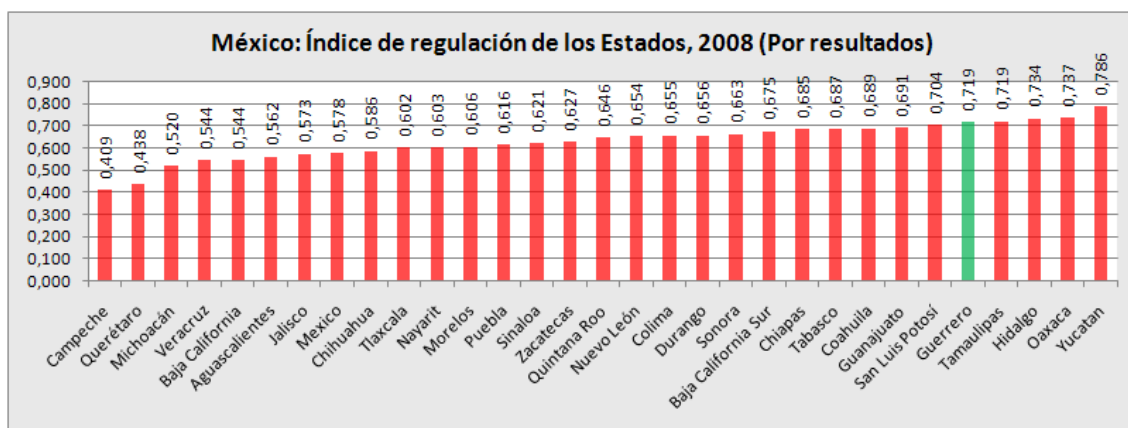
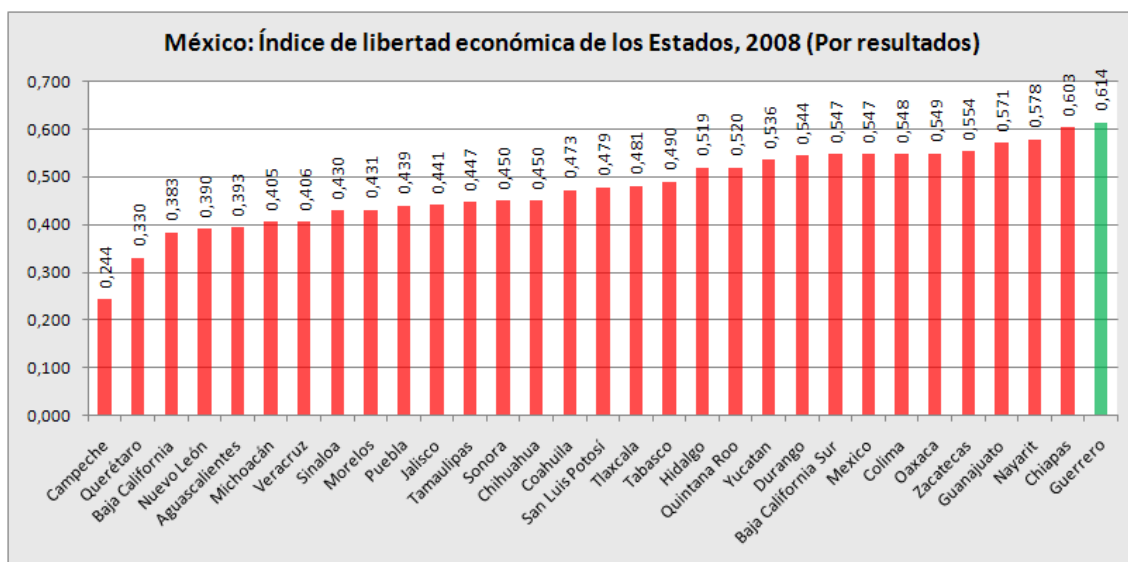
Balance financiero: Obtiene un déficit financiero del 0,18% del PIB, por lo que producto de un puntaje de 0,461 alcanza el vigésimo cuarto lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: El 2,21% de la población ocupada trabaja para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,092 y el décimo noveno lugar nacional en el rubro.

Gasto público: Significa un 20,60% de su PIB, por lo que alcanza el vigésimo séptimo lugar nacional en el índice de gasto público mediante un puntaje total de 0,793.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,073 y se traduce en un puntaje general de 0,929 que a su vez le otorga la trigésima posición nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.12. Hidalgo.

HIDALGO	
Población	2,409,162
Superficie (kilómetros cuadrados)	20,846
PIB per cápita (pesos corrientes)	74,796.5
Tasa de desempleo (%)	2.9
Escolaridad promedio (años)	8.0
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.6
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	15.5



HIDALGO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
19 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
29 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
17 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁶

Referente al tema de la educación, las estrategias estuvieron enfocadas a la implementación de los programas federales, por lo que a nivel local, destaca el seguimiento que se ha dado a la educación especial y la educación comunitaria. Como en otras entidades, se han firmado convenios con empresas para agilizar la colocación de los egresados de manera más eficiente.

En cuanto al tema de la salud, se reconoce la universalidad de la cobertura médica, sin embargo, se establece como reto el alcanzar la cobertura universal en atención médica de especialidad, por lo que los esfuerzos estuvieron encaminados en gran medida a la construcción de instalaciones hospitalarias, sin dejar de lado las actividades encaminadas a la prevención de riesgos sanitarios.

En el rubro de la promoción del sector privado, destaca la firma de diversos convenios con instancias federales y privadas para el fomento de las artesanías regionales, también se apoyó a 551 proyectos productivos compuestos por migrantes, indígenas, mujeres y artesanos en general. Además se emprendieron proyectos referentes a los diversos sectores de la economía, con su respectivo financiamiento, también se ofrecieron cursos tanto de capacitación laboral como empresarial.

Referente a la transparencia y rendición de cuentas, destaca el establecimiento de una página de internet que busca presentar en forma ordenada la información más relevante de las cerca de 60 dependencias y entidades con cargo al presupuesto estatal. Dentro de la estrategia de informatizar las gestiones públicas, también se estableció el Registro Único de Trámites y Servicios, donde se ponen a disposición de la ciudadanía todas las gestiones que pueden hacer ante las instancias de gobierno, así como sus procedimientos. Además, se continúa con las auditorías de ley y con la evaluación de los servidores públicos.

²⁶ GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: http://www.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/informes_gob/admon_actual/2009/4toinforme.swf

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Presenta una intervención media del sector público en la economía, según se puede inferir de su indicador total en el rubro de 0,519 y que le vale para la décimo novena posición nacional. Su principal ventaja viene determinada por el índice de dimensión del sector público, mientras que puede mejorar en el índice de regulación.

Regulación: Se ubica en el vigésimo noveno lugar nacional en el índice de regulación con un puntaje de 0,734. Su principal ventaja está dada por el índice de salud, mientras que su área de oportunidad está definida por el índice de comercio.

Comercio: Obtiene el vigésimo noveno lugar en el índice de comercio con un indicador de 0,611. Ello es producto de los 34 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio y un gasto por parte de las empresas por concepto de trámites y servicios por un monto del 0,7% del PIB.

Transparencia: Alcanza el vigésimo primer lugar nacional en el indicador de transparencia. La evaluación del marco regulatorio en la materia alcanza una puntuación de 89,16, que se traduce en un indicador de 0,600 puntos.

Salud: Su ratio de gasto privado es de 1,37, lo que es consecuencia de un gasto privado como porcentaje del PIB de 5,9%, lo que ubica a la entidad en el octavo lugar nacional en el índice de salud.

Educación: Obtiene el vigésimo tercer lugar nacional en el índice de educación producto de un puntaje de 0,892. Su principal rezago se encuentra en el rubro de docentes que laboran en escuelas a cargo del presupuesto estatal, con un porcentaje de 84,17%.

Dimensión del sector público: Su puntaje total de 0,305 posiciona a la entidad apenas debajo de la mediana nacional. Su principal ventaja está definida por el índice de burocracia estatal, mientras que presenta áreas de desarrollo en el índice de esfuerzo fiscal.

Deuda pública: Su deuda pública medida en términos del PIB es de 0,12%, lo que le produce un indicador en el rubro de 0,096 y le otorga el décimo sexto lugar en la materia.

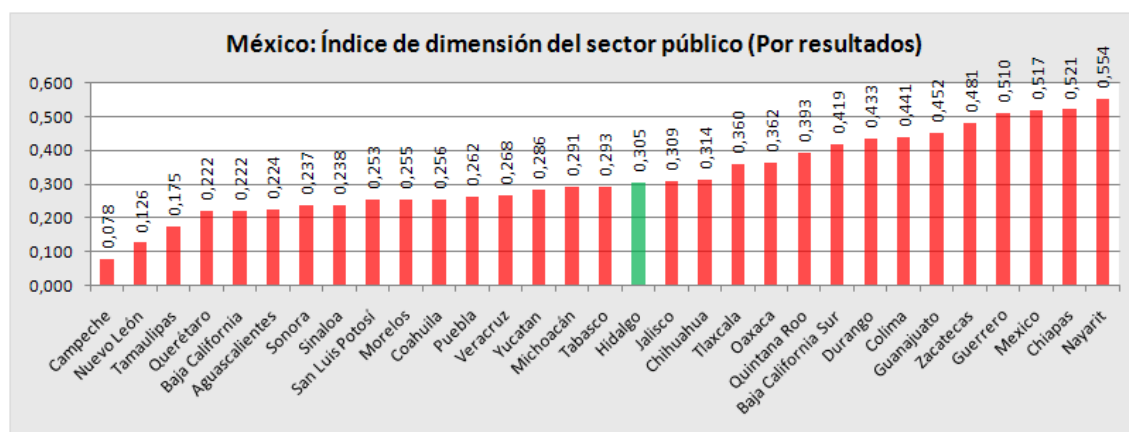
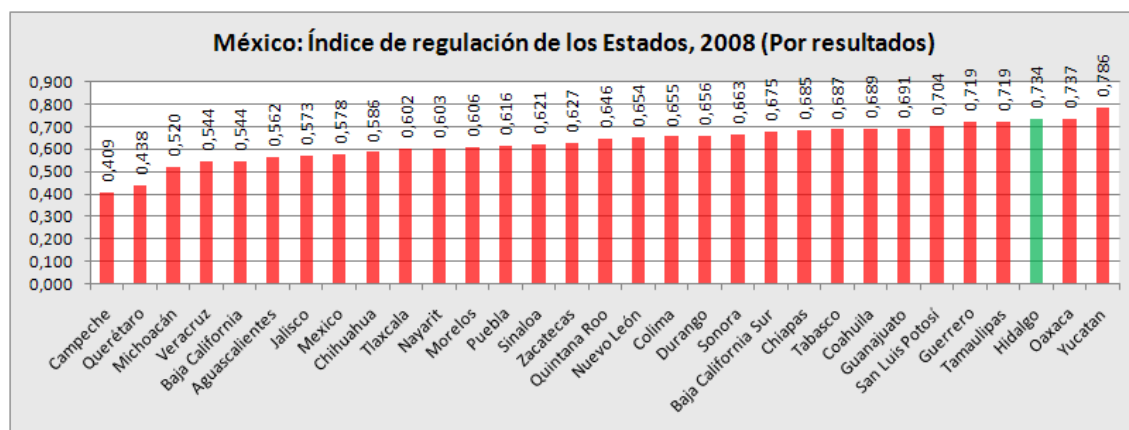
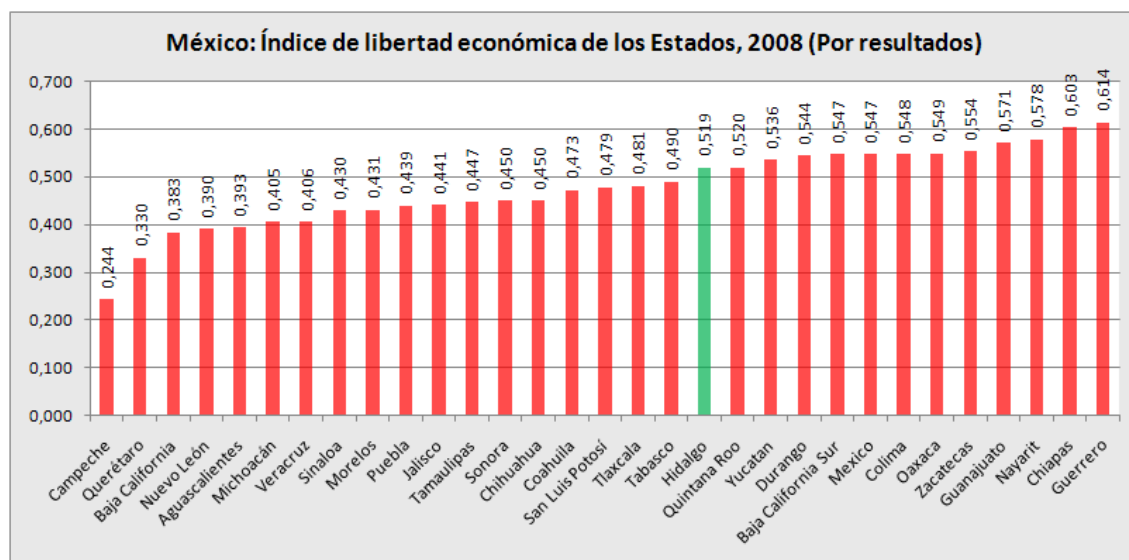
Balance financiero: Obtiene un balance financiero equilibrado y un puntaje total de 0,304. Lo que posiciona a la entidad en el décimo noveno lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: Su indicador general en la materia es de 0,015 puntos, por lo que obtiene el tercer lugar general en el rubro, ya que el 0,90% de la población ocupada trabaja para el sector público de la entidad.

Gasto público: Significa el 14,18% de su PIB, lo que le produce un indicador general de 0,519 y le otorga además el vigésimo tercer lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,046, lo cual es traducido en un puntaje general de 0,591 que le otorga el vigésimo séptimo lugar nacional en la materia.

c) Resultados gráficos.



4.14.13. Jalisco.

JALISCO	
Población	6,960,799
Superficie (kilómetros cuadrados)	78,599
PIB per cápita (pesos corrientes)	104,717.2
Tasa de desempleo (%)	3.1
Escolaridad promedio (años)	8.9
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.8
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.7



JALISCO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
11 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
7 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
18 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁷

En el ámbito educativo, las principales estrategias estuvieron dadas por el otorgamiento de becas y la firma de distintos convenios con el sector privado. Ello se desprende de la cifra de 25 mil 554 becas económicas otorgadas por parte del gobierno estatal y los 760 convenios que se firmaron entre las instituciones de educación superior y alguna empresa para incidir en el desarrollo regional.

En cuanto a salud, se buscaron estrategias preventivas, al mismo tiempo, se estableció la presencia de un hospital público en cada una de las doce regiones en que se compone la geografía estatal. No se detectó ningún convenio u estrategia eslabonada al sector privado.

Referente al desarrollo del sector productivo, además de los créditos para la apertura de nuevas empresas, se buscó incidir en la mejora regulatoria y el estímulo a micro y pequeñas empresas: Este subprograma se orientó al perfeccionamiento del marco normativo vinculado con la apertura y desarrollo de nuevos negocios.

En el tema de la eficiencia en el sector público, el gobierno del Estado de Jalisco desarrolló cursos de acción con el fin de que se atiendan oportunamente las demandas ciudadanas. Este programa se integra por subprogramas relativos a la transparencia institucional, el gobierno electrónico, la calidad y mejora de los sistemas de gestión pública y la planeación y evaluación para el desarrollo, entre otros.

Por último, se instrumentó un programa de desempeño de servidores públicos, donde se aplicaron encuestas de satisfacción ciudadana. Con este y otros mecanismos se evaluó el desempeño de 420 servidores públicos. En esta misma línea, se implementó un sistema de evaluación de las unidades de transparencia en 15 secretarías y 3 dependencias estatales.

²⁷ GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, (2009). *Segundo Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.informe.jalisco.gob.mx/?q=segundo-informe>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la undécima posición nacional en el rubro como consecuencia de un indicador de 0,441. Presenta ciertas ventajas en el índice de regulación, mientras que puede tener espacio para la mejora en el índice de dimensión del sector público.

Regulación: Su principal ventaja está determinada por el índice de transparencia, mientras que su espacio para la mejora lo provee el índice de comercio. Su puntaje total en el índice de regulación es de 0,573 y posiciona a la entidad en la séptima posición en regulación.

Comercio: Producto de un gasto por parte de las empresas para la apertura de un nuevo negocio por un importe del 0,2% del PIB, así como por los 53 días en promedio requeridos para la misma, posicionan a la entidad en el vigésimo lugar en el índice de comercio, con un indicador de 0,406.

Transparencia: Producto de un indicador de transparencia de 0,208 puntos, que es resultado de una calificación de 130,70 puntos en la evaluación de su marco regulatorio, se ha ubicado en el sexto lugar nacional.

Salud: Se ubica en el sexto lugar nacional en el índice de salud producto de un puntaje de 0,619, el cual ha sido resultado de un ratio de gasto privado de 1,48, el cual es consecuencia de un porcentaje del gasto privado como porcentaje del PIB de 4,6%.

Educación: Su principal rezago se ubica en el rubro de porcentaje de alumnos atendidos por parte del gobierno de la entidad, con un 84,80%. Tal indicador lo envía al décimo lugar nacional en el índice de educación, con un puntaje total de 0,796.

Dimensión del sector público: Obtiene el décimo octavo lugar nacional en la materia producto de un puntaje de 0,309, lo que indica que su sector público es de proporciones apenas debajo de la media. Su principal ventaja está definida por el índice de gasto público, mientras que presenta áreas de oportunidad en el índice de burocracia estatal.

Deuda pública: Alcanza el undécimo lugar nacional en el rubro producto de un indicador de 0,075 que es consecuencia de una deuda pública medida en términos de PIB del 0,09%.

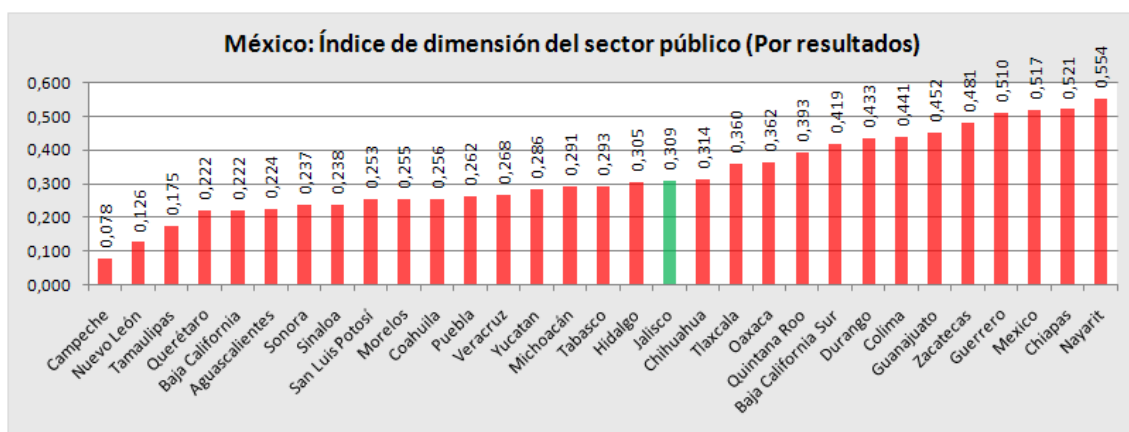
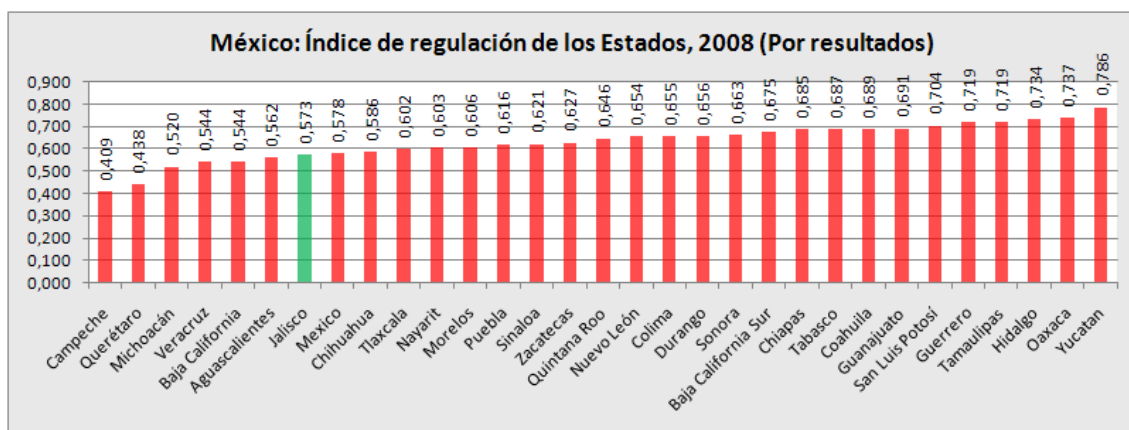
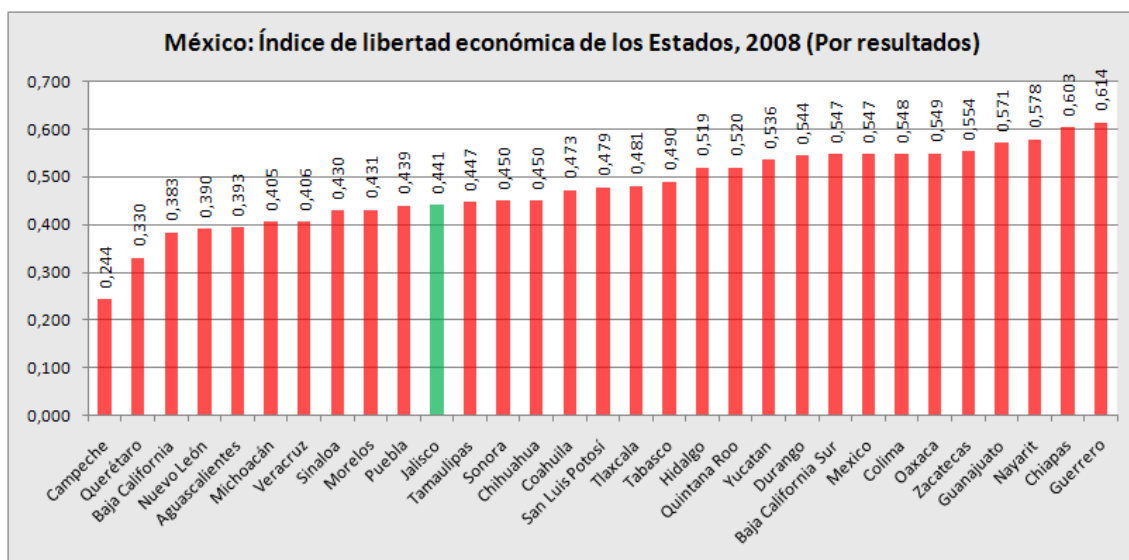
Balance financiero: Su déficit financiero alcanza el 0,26% de su PIB, por lo que obtiene un puntaje total de 0,535 y se posiciona en el vigésimo quinto lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: El 6.01% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le proporciona un puntaje total de 0,316 y le otorga el vigésimo séptimo lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: El sector público de la entidad gastó en el año 2008 el equivalente al 8,88% de su PIB, lo que le ha producido un indicador general de 0,293 por el cual alcanza el octavo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,026, lo que es traducido en un indicador general de 0,327 y posiciona a la entidad en el noveno lugar nacional en la materia.

c) Resultados gráficos.



4.14.14. México.

MÉXICO	
Población	14,638,436
Superficie (kilómetros cuadrados)	22,357
PIB per cápita (pesos corrientes)	71,000.4
Tasa de desempleo (%)	4.3
Escolaridad promedio (años)	9.3
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.3
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	2.6



MÉXICO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
24 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
8 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
29 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁸

En el informe presentado se reconocen los impactos negativos al crecimiento económico que tuvieron las crisis económica, sanitaria y de seguridad pública. Por lo que las políticas emprendidas estuvieron objetivadas a sortear tales obstáculos.

En cuanto al rubro de la salud, destaca la mención de que el Estado de México está pasando por una transición epidemiológica ya que en la actualidad las enfermedades son del tipo crónico degenerativa en menoscabo de las enfermedades infecciosas, que requieren menos tiempo y menos recursos para su atención; debido al incremento en los costos y tiempos citados, por parte del sector público se contrataron casi 10 mil médicos que se adicionarán a la plantilla de personal existente. Por otra parte, se implementaron políticas de prevención de adicciones que buscaron mejorar los indicadores de salud pública e inseguridad, por lo que se crearon 30 nuevos centros para la atención de las adicciones.

Se buscaron participaciones con el sector privado vía los Proyectos de Prestación de Servicios en los sectores educación, salud, comunicación y cultura por un monto superior a los 3 mil millones de pesos. Además se continuó con los trabajos del Instituto Mexiquense del Emprendedor, que busca potenciar las oportunidades de negocios de las empresas de la entidad.

En cuanto a la modernización de la administración pública, destaca la digitalización de trámites y servicios, así como el Programa de Contraloría Social, donde se incorporaron casi 30 ciudadanos al proyecto.

Por último, mencionar que parte de las alianzas que se hicieron con el sector privado están dadas en el sector comunicaciones y transportes. Un ejemplo es la modernización del aeropuerto de la ciudad de Toluca, que coadyuva a desahogar el

²⁸ GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en <http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/resultadosdegobierno/informesdegobierno/index.htm>

tráfico aéreo de la Ciudad de México, así como la construcción de distintos libramientos y vialidades con la participación del sector privado cuyo objetivo es agilizar el tráfico de personas y mercancías en la entidad.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la vigésimo cuarta posición nacional en el rubro producto de un puntaje total de 0,547. Su principal ventaja está determinada por el índice de regulación, mientras que presenta como área de oportunidad el índice de dimensión del sector público.

Regulación: El principal ámbito de mejora lo proporciona el índice de seguridad, por otra parte, posee buenos números en el índice de sanidad. Su posición total en el índice de regulación es la octava debido a un puntaje de 0,578.

Comercio: Son necesarios 40 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio, además las empresas gastan en el rubro de trámites y servicios para su apertura una cantidad que significa el 0,3% del PIB. Ello posiciona a la entidad en el lugar décimo sexto del índice de comercio, con un indicador de 0,344.

Transparencia: Se ubica cerca de la mediana a nivel nacional en el índice de transparencia, ha obtenido un puntaje en la evaluación de su marco regulatorio por un total de 104,53 puntos que se han traducido en un indicador de 0,455 puntos.

Salud: Su gasto privado en salud como porcentaje del PIB es del 5,6%, tal indicador produce un ratio de gasto privado de 2,24 y un índice de salud de 0,355 puntos, que ubican a la entidad en el segundo lugar nacional.

Educación: Se ubica en el décimo tercer lugar en el índice de educación producto de un total de 0,810 puntos, su principal rezago se ubica en el rubro de alumnos

atendidos por escuelas con cargo al presupuesto estatal, con un porcentaje de 88,28%.

Dimensión del sector público: Obtiene el vigésimo noveno lugar nacional en el rubro, producto de un puntaje de 0,517. Su principal ventaja está definida por el índice balance financiero, mientras que observa como área de desarrollo el índice de deuda pública.

Deuda pública: El indicador respectivo es del 0,668, la deuda pública de la entidad medida en términos de PIB es del 0,82, lo que la posiciona en el trigésimo lugar nacional de la materia.

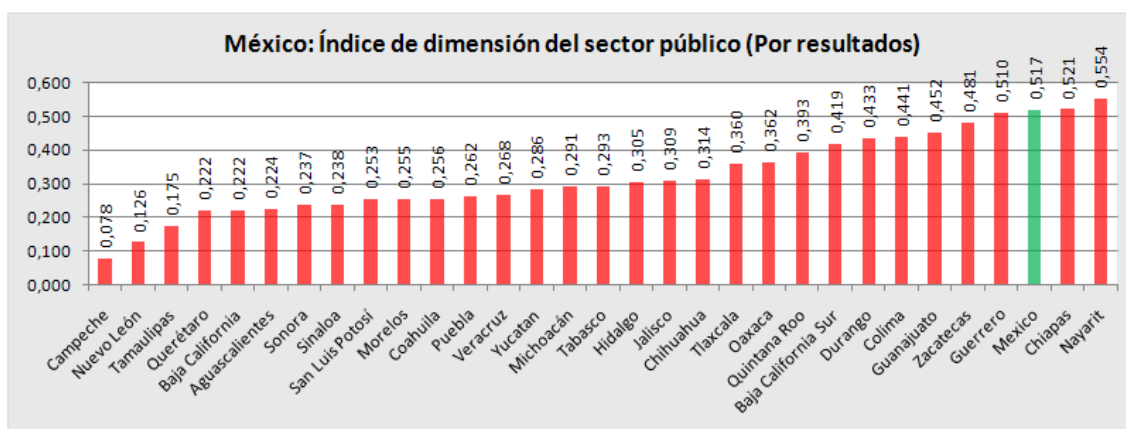
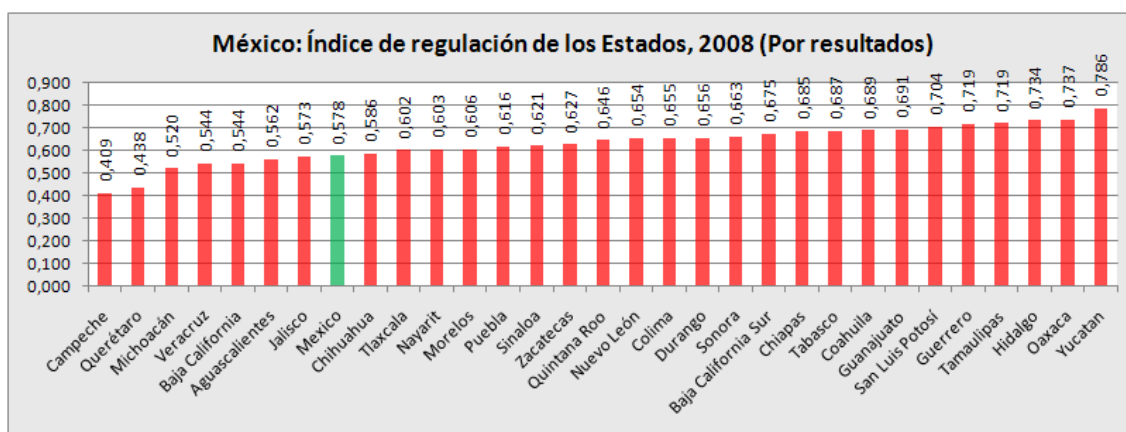
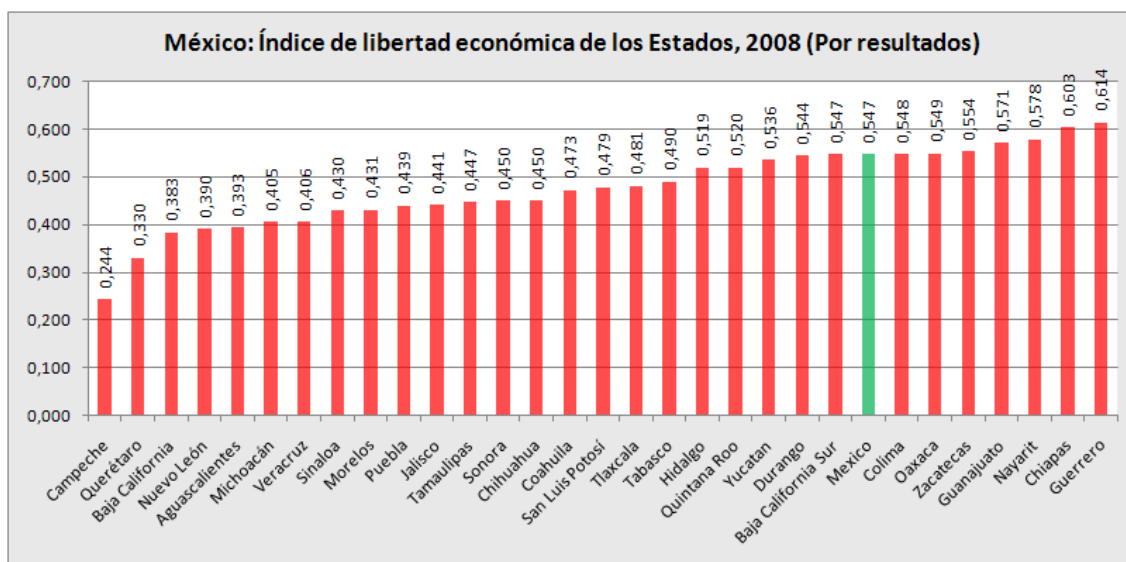
Balance financiero: Obtiene el undécimo lugar nacional en el índice de balance financiero producto de un superávit del 0,02% de su PIB y un indicador general de 0,284.

Burocracia estatal: El 3,76% de la población ocupada labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,183 y un vigésimo tercer lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Obtiene el vigésimo cuarto lugar nacional en el índice de gasto público debido a un puntaje de 0,522, el cual es resultado de unas erogaciones totales por parte del sector público del 14,24% de su PIB.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el vigésimo noveno lugar nacional en la materia como consecuencia de un índice de Frank de 0,072 y un puntaje general de 0,927.

c) Resultados gráficos.



4.14.15. Michoacán.

MICHOACÁN	
Población	3,977,964
Superficie (kilómetros cuadrados)	58,643
PIB per cápita (pesos corrientes)	72,100.4
Tasa de desempleo (%)	2.8
Escolaridad promedio (años)	7.6
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.8
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	3.3



MICHOACÁN	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
6 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
3 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
15 DE 31	

a) Resumen de políticas.²⁹

En el rubro de la educación, el gobierno del Estado, como estrategia principal, ha optado por el diseño y construcción de nuevos planes y programas educativos y por la formalización de acuerdos con los distintos sectores políticos de la entidad. Destaca la falta de acuerdos con el sector privado para la mejora educativa, salvo algunos logrados con universidades de este sector del Distrito Federal y con universidades de los EE. UU.

En cuanto al tema de la seguridad, la mayoría de acciones relativas a este ámbito han tenido que ver con el respeto a los derechos humanos, que de suyo son fundamentales, pero que es menester el complemento de estas medidas con otras inherentes a un mejor respeto a la legalidad.

En cuanto al desarrollo del sector privado, este concepto estuvo destacado por la creación y venta de terrenos dentro de los parques industriales. También vale la pena destacar la creación de un organismo público dedicado al financiamiento de la pequeña empresa michoacana, que abrió en 9 regiones de la entidad. En este caso, como es común en la mayoría de las entidades del país, se buscó la colaboración del sector privado para aumentar la colocación de recursos financieros en las pequeñas y medianas empresas. Por último, mencionar que se buscaron estrategias para disminuir los tiempos de apertura de nuevos negocios y aumentar el apoyo a los pequeños artesanos; los 2801 apoyos del gobierno estatal para este fin así lo indican.

En cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, destaca la creación de la Secretaría de Finanzas y Administración eliminando la Tesorería General del Estado y la Oficialía Mayor, por lo que se buscó la eficiencia administrativa vía la eliminación de dependencias cuya estructura no se adecuaba a los objetivos del programa de gobierno. Además, se buscó también terminar y adecuar los reglamentos internos de

²⁹ GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, (2009). *Primer Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.michoacan.gob.mx/Transparencia/Informe>

las dependencias y los manuales de procedimientos, de cara a volver más eficaz y eficiente el proceso de fiscalización y control de los recursos públicos.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Con un puntaje de 0,405 se infiere una libertad económica amplia. Su sexta posición nacional en la materia es en gran medida debida a su índice de regulación, mientras que manifiesta grandes oportunidades de desarrollo en el índice de dimensión del sector público.

Regulación: Se ubica en el tercer lugar nacional en el índice de regulación, con un total de 0,520 puntos. Sus principales ventajas están dadas por el índice de salud, mientras que en el índice de comercio puede tener espacio para la mejora.

Comercio: Se posiciona en el lugar vigésimo primero en el índice de comercio, con un indicador de 0,406. Ello es el resultado de los 38 días en promedio que se toman para la apertura de un nuevo negocio, así como del gasto por parte de las empresas por concepto de trámites y servicios por apertura por un monto del 0,4% del PIB.

Transparencia: Se ubica en la décimo séptima posición a nivel nacional en el índice de transparencia. Sus 100,30 puntos obtenidos en la evaluación de su marco regulatorio en la materia se han traducido en un indicador de 0,495.

Salud: Obtiene el primer lugar en el índice de salud producto de un ratio de gasto privado de 3,26.

Educación: Su principal rezago estriba en el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal, con un 87,77%. Por lo que se ubica en el décimo noveno lugar nacional en el índice de educación con un total de 0,859 puntos.

Dimensión del sector público: Su gobierno es de proporciones medianas, según indica su puntaje total de 0,291 que posiciona a la entidad en el décimo quinto lugar nacional en el rubro. Su principal área de oportunidad está definida por el índice de gasto público, mientras que presenta ventajas en el índice de balance financiero.

Deuda pública: Obtiene el vigésimo lugar nacional en el rubro producto de un indicador de 0,176 y una deuda pública medida en términos del PIB de 0,21%.

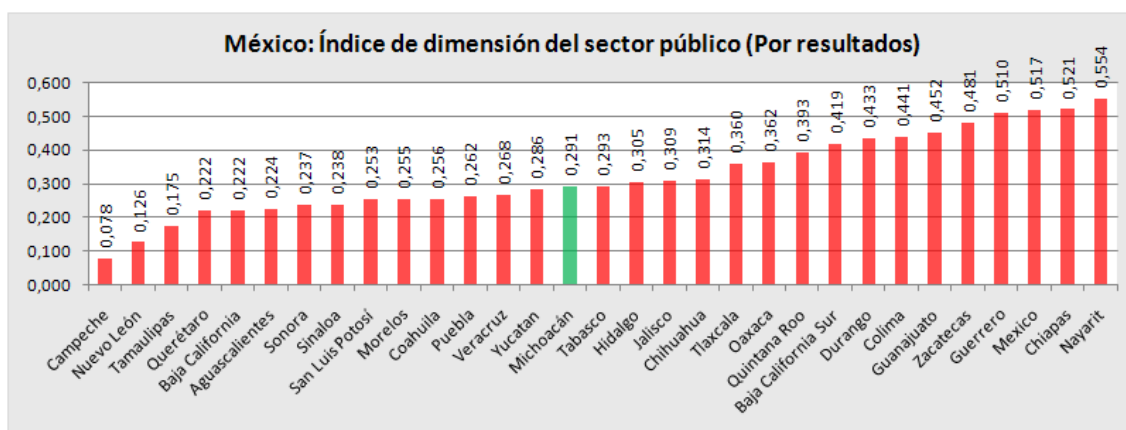
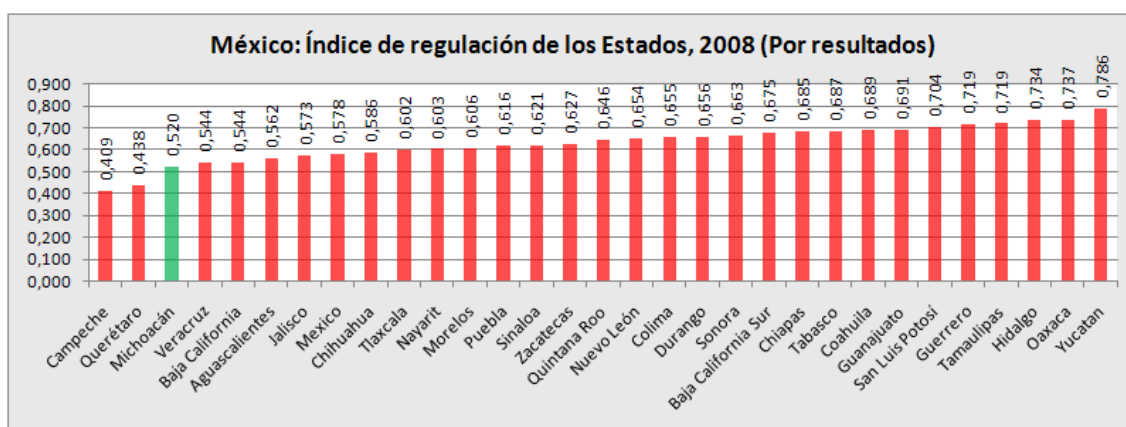
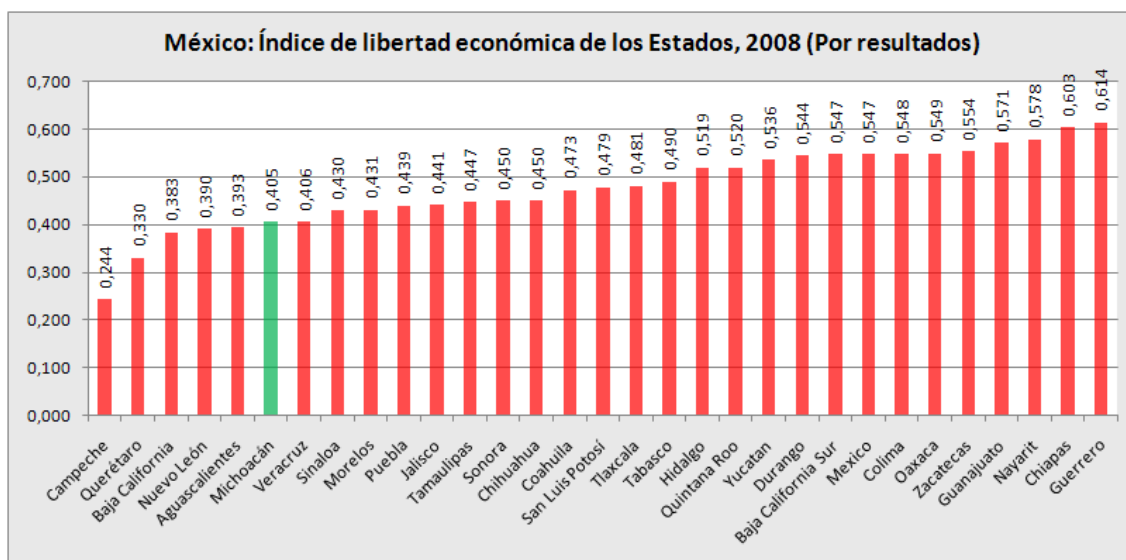
Balance financiero: El superávit financiero de la entidad alcanza el 0,02% si es medido en términos de su PIB, ello le ha producido un indicador general de 0,283 puntos y le otorga el décimo lugar nacional en la materia.

Burocracia estatal: El 2,45% de la población ocupada en la entidad trabaja para su sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,106 y el vigésimo primer lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Significa el 14,02% de su PIB, lo que le produce un indicador general de 0,512 y además le otorga el vigésimo segundo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,030, por lo que obtiene la décimo tercera posición nacional en la materia como consecuencia de un indicador general de 0,376.

c) Resultados gráficos.



4.14.16. Morelos.

MORELOS	
Población	1,661,813
Superficie (kilómetros cuadrados)	4,893
PIB per cápita (pesos corrientes)	72,729.2
Tasa de desempleo (%)	2.3
Escolaridad promedio (años)	9.2
Unidades médicas por 10.000 hab.	2
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	1.8



MORELOS	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
9 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
12 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
10 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁰

En cuanto a la salud, cabe destacar la conjunción de esfuerzos público-privados, ya que con la participación de empresas y grupos de la sociedad civil se adquirieron equipos de rayos X, de ultrasonido y monitores de signos vitales que fueron distribuidos en 5 hospitales generales del Estado. Por otra parte, se han realizado cuatro jornadas gratuitas de cirugía de cataratas sumando un total de 420 operados, las cuales se han realizado con la colaboración y participación de empresas privadas y asociaciones civiles.

En cuanto a seguridad, el gobierno del Estado creó un nuevo sistema de justicia penal y de seguridad pública, así como un centro de justicia alternativa, teniendo como finalidad el poder regular los medios alternos de solución de conflictos en materia penal, tales como la mediación, conciliación y negociación.

En cuanto al desarrollo del sector privado, las políticas públicas implementadas estuvieron estructuradas en torno a seis grandes ejes: I. Agilización del ejercicio de la inversión pública; II. Impulso especial a las micro y pequeñas y medianas empresas; III. Mayor inversión pública en infraestructura; IV. Incentivos fiscales; V. Acciones para articular el mercado laboral; VI. Mayor apoyo al sector agropecuario. Cabe destacar que se instrumentó el sistema de apertura rápida de empresas en 5 municipios.

Respecto a la mejora en la eficiencia del sector público, además de las auditorías de ley, no se muestra la implementación de estrategias claras para el combate a la corrupción de los funcionarios públicos, ni se visualizan estrategias para la optimización de los recursos sociales, los esfuerzos del Estado, se enfocaron principalmente a la capacitación de los servidores públicos para la mejora a la atención a los usuarios.

³⁰ GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, (2009). *Tercer Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.morelos.mx/00noticias/3erinforme/#>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Obtiene la novena posición nacional en la materia mediante un puntaje total de 0,431, por lo que se infiere una libertad económica alta. Mantiene cierto equilibrio en sus índices de dimensión del sector público y regulación, donde alcanza la décima y duodécima posición nacional, respectivamente.

Regulación: Posee una regulación que se ubica en un nivel medio a nivel nacional, su puntaje total es de 0,606. Como principal área para desarrollar se encuentra el índice de índice de comercio, mientras que su principal ventaja está provista por el índice de transparencia gubernamental.

Comercio: Se ubica en la trigésimo primera posición del índice de comercio, producto de su indicador de 0,622. Este ha sido resultado por los 65 días en promedio que se requieren en la entidad para la apertura de un nuevo negocio, así como por el desembolso por parte de las empresas de un monto anual del 0,3% del PIB por concepto de trámites y servicios por apertura.

Transparencia: Se ubica en la tercera posición nacional en el índice de transparencia. Ha obtenido un indicador de 0,061 puntos producto de una evaluación de su marco regulatorio que le ha beneficiado con 146,27 puntos.

Salud: Obtiene el undécimo lugar nacional en el índice de salud producto de un puntaje de 0,695. Su ratio de gasto privado es de 1,26 y es producto de un gasto privado en salud como porcentaje del PIB por un total de 4,3%.

Educación: Alcanza el quinto lugar nacional en el índice de educación con un puntaje de 0,690. Su principal rezago estriba en el porcentaje de alumnos atendidos por escuelas a cargo del presupuesto estatal, que llega al 85,57%.

Dimensión del sector público: Obtiene el décimo lugar nacional en la materia con un puntaje de 0,255, por lo que se puede afirmar que cuenta con un sector público de proporciones reducidas. Su principal ventaja está determinada por el índice de balance financiero, mientras que el índice de deuda pública cuenta con opciones de desarrollo.

Deuda pública: El indicador en la materia es de 0,241 y el porcentaje de deuda pública medido en términos de PIB es de 0,29%, lo que le otorga la vigésimo tercera posición en la materia.

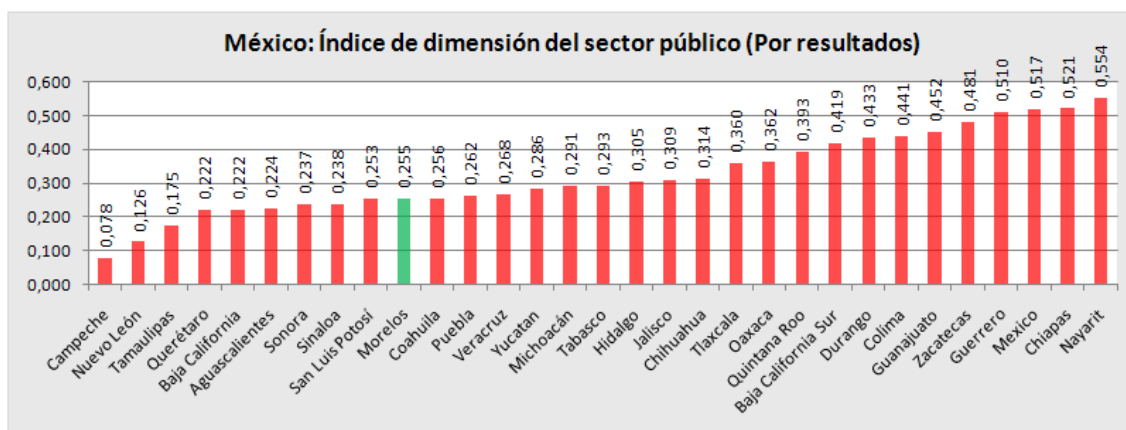
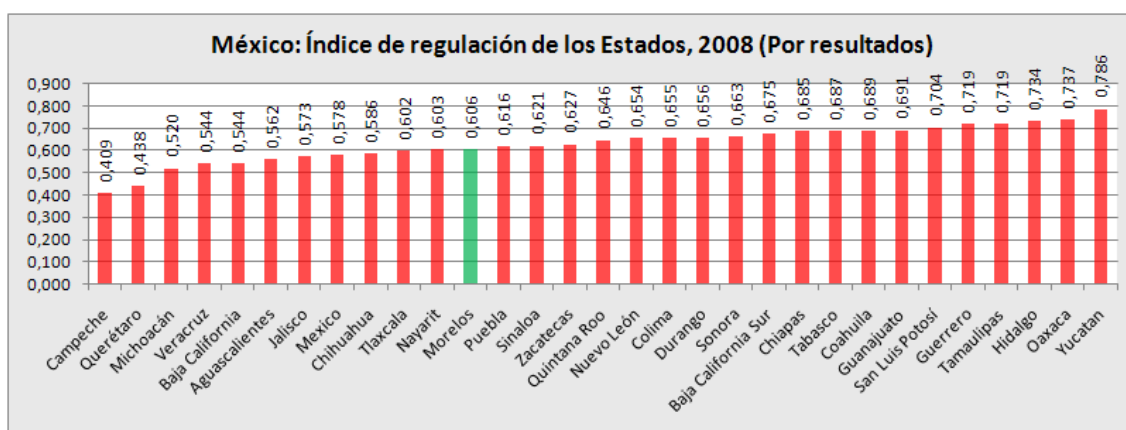
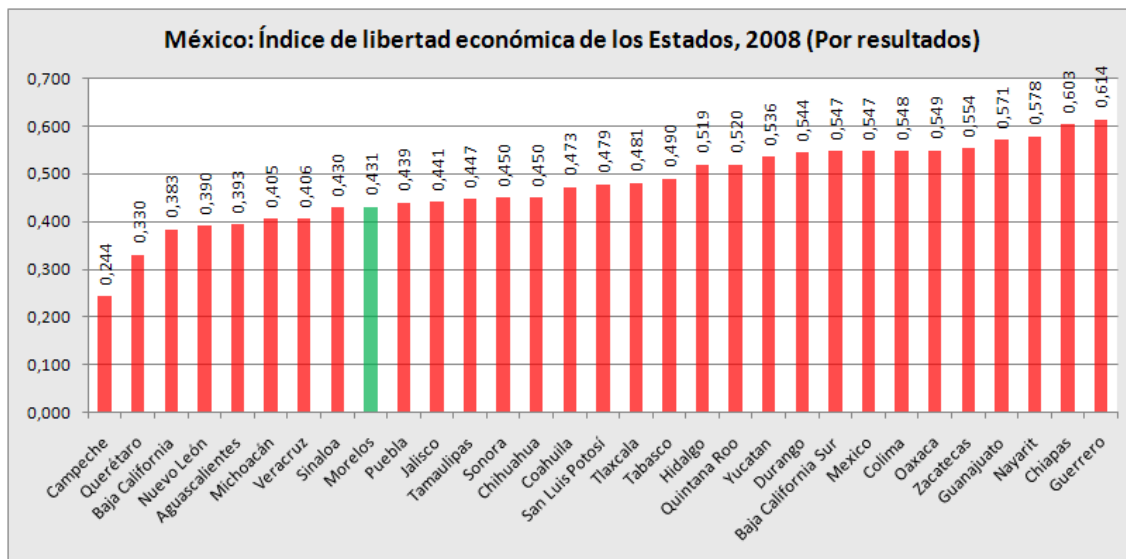
Balance financiero: Consigue el segundo lugar nacional en la materia producto de un superávit financiero del 0,29% de su PIB y un indicador en el rubro de 0,041 puntos.

Burocracia estatal: Su sexto lugar nacional en el rubro es producto de un porcentaje de población ocupada por el sector público como proporción del total de un 1,16% y un índice en la materia de 0,031.

Gasto público: Alcanza el vigésimo primer lugar nacional en el índice de gasto público debido a un indicador total de 0,502. El total de las erogaciones a cargo del gobierno estatal importa un 13,77% de su PIB.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el décimo noveno lugar nacional en el rubro, el cual es producto de un índice de Frank de 0,037 y un puntaje general de 0,462.

c) Resultados gráficos.



4.14.17. Nayarit.

NAYARIT	
Población	966,996
Superficie (kilómetros cuadrados)	27,815
PIB per cápita (pesos corrientes)	71,737.7
Tasa de desempleo (%)	2.5
Escolaridad promedio (años)	8.8
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.9
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	5



NAYARIT	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
29 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
11 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
31 DE 31	

a) Resumen de políticas.³¹

Los esfuerzos recientes de este Estado por alcanzar su desarrollo han sido encaminados hacia el rubro del turismo; la cercanía con ciudades importantes en el Occidente de México ha motivado que se busque como patrón de especialización el sector de servicios turísticos. En ese sentido, una de las obras más importantes en el período que se informa es la autopista Tepic-San Blas, que eslabona el Occidente de México con las zonas de playa de Nayarit.

En el rubro de educación, destaca la implementación del programa “Escuelas del Milenio” que en resumen se trata del modelo de escuelas de tiempo completo destinadas a hijos de jornaleros o padres de familia que trabajan a jornada completa. La política educativa se conceptualiza como una parte importante de la política social y se busca que el gasto en la misma coadyuve a mitigar las inequidades sociales.

En el tema de la salud, se han implementado medidas similares a otros Estados que cuentan con altas deficiencias en el sector: La implementación de unidades ambulantes o caravanas sanitarias. Además, se ha buscado ligar el tema de la salud al desarrollo económico ofreciendo 3 playas que se adecúan a la norma *NMX-AA-120-SCFI-2006* que regula la calidad sanitaria de las playas.

En cuanto a la eficiencia del sector público, es necesario mencionar que los esfuerzos relativos al período que se informa estuvieron encaminados a reforzar la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, de tal manera, que para este período se volvió obligatoria la declaración de bienes de los servidores públicos al servicio del gobierno estatal.

³¹ GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.seplan.gob.mx/informe4.html>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Debido a su indicador general de 0,578 que le representa el vigésimo noveno lugar nacional en el rubro, se puede inferir que el sector público de la entidad mantiene una elevada participación en la economía local. Su principal ventaja está definida por el índice de regulación, donde se ubica cerca de la zona de mejor regulación a nivel nacional. Sin embargo, su índice de dimensión del sector público provoca que en general, la entidad obtenga la puntuación referida.

Regulación: Su nivel de regulación se ubica en la zona media. Es decir, en el undécimo lugar nacional, ello es producto de un puntaje total de 0,603. Su principal área para desarrollar viene dada por el índice de educación, mientras que su principal ventaja está provista por el índice de seguridad.

Comercio: Comparte el primer lugar en tiempos para la apertura de nuevos negocios, al promediar 24 días; sin embargo, el casi 0,3% del PIB que gastan las empresas por concepto de trámites y servicios para la consecución de la apertura, envían a la entidad al sexto lugar en el índice de comercio, con un indicador de 0,167.

Transparencia: Obtiene el décimo cuarto lugar a nivel nacional en el índice de transparencia, ello ha sido producto de una evaluación de su marco regulatorio que le ha proporcionado 109,68 puntos que se han traducido en un indicador de 0,407 puntos.

Salud: Se ubica en la vigésima posición nacional en el índice de salud producto de un puntaje de 0,768. Su ratio de gasto privado es de 1,05, mientras que su gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 5,8%.

Educación: Obtiene el vigésimo sexto lugar nacional en el índice de educación con un puntaje total de 0,918. Observa puntos débiles en los porcentajes de alumnos y

docentes en escuelas a cargo del presupuesto estatal, con cifras de 92,66% y 97,28% respectivamente.

Dimensión del sector público: Obtiene el trigésimo primer lugar nacional en el rubro, producto de un puntaje de 0,554. Su principal ventaja está definida por el índice de deuda pública, mientras que tiene para desarrollo el índice de balance financiero.

Deuda pública: Su indicador en el rubro, con un puntaje total de 0,076, le otorga el duodécimo lugar nacional en el índice de deuda pública, la cual representa el 0,09% de su PIB.

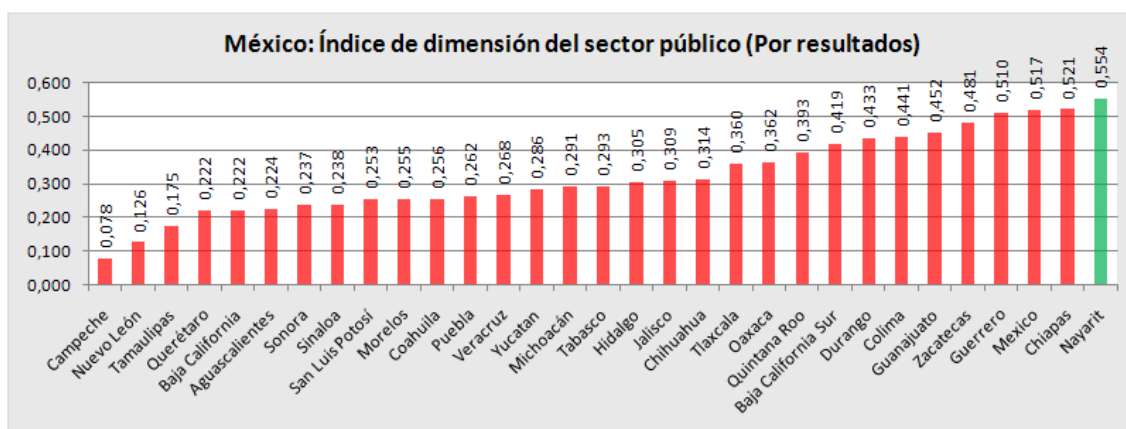
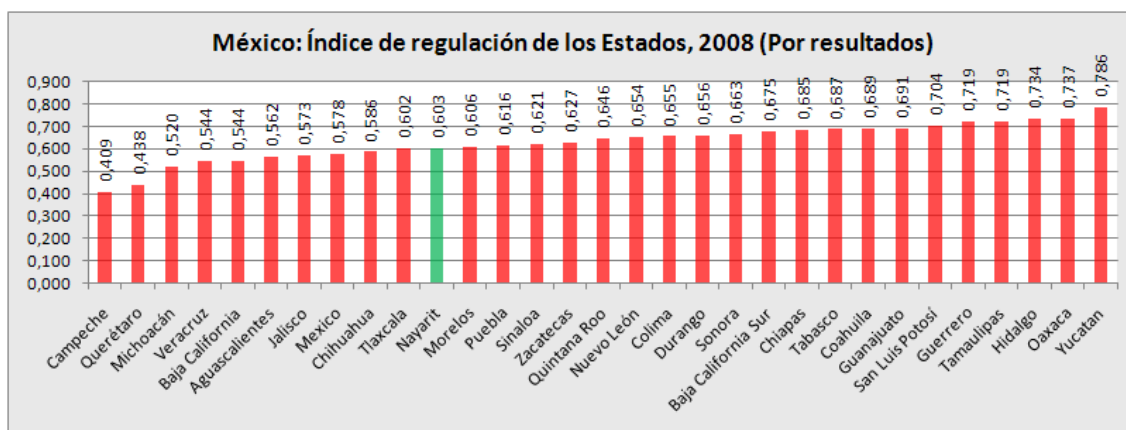
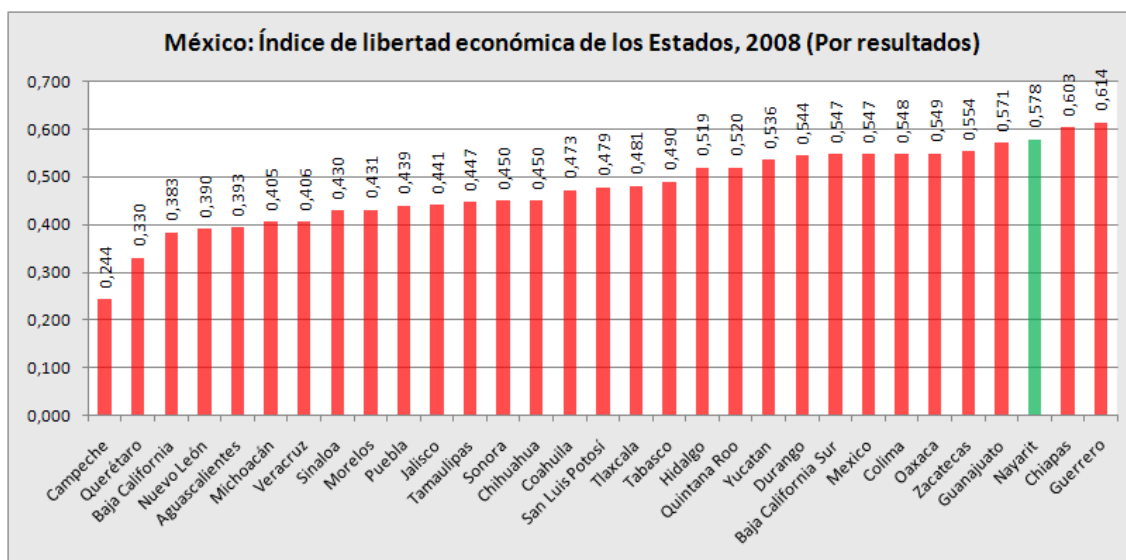
Balance financiero: Obtiene la trigésimo primera posición nacional en la materia ya que su déficit importa el 0,78% de su PIB y su puntaje total es de 1,000.

Burocracia estatal: El 2,20% de la población ocupada labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,092 y el décimo octavo lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Significa casi una quinta parte de su PIB, por lo que obtiene el vigésimo sexto lugar nacional en el índice de gasto público y un puntaje total en el rubro de 0,759.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,066 que se traduce en un puntaje de 0,842 que a su vez posiciona a la entidad en el vigésimo octavo lugar nacional en la materia.

c) Resultados gráficos.



4.14.18. Nuevo León.

NUEVO LEÓN	
Población	4,393,095
Superficie (kilómetros cuadrados)	64,220
PIB per cápita (pesos corrientes)	201,680.8
Tasa de desempleo (%)	4.3
Escolaridad promedio (años)	10.2
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.5
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.8



NUEVO LEÓN	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
4 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
17 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
2 DE 31	

a) Resumen de políticas.³²

La gestión pública de la entidad estuvo marcada por las estrategias tomadas a partir de un diagnóstico económico de largo plazo, sobre eso, se buscó influir en las estructuras económicas que habían posicionado a la entidad como una de las más prósperas del país y que para la fecha del informe observaban cierto desgaste, todo ello, en un marco de crisis económica, sanitaria, y de seguridad reconocidas, sumadas a la crisis demográfica ya que tal entidad es un polo de atracción para población de otras entidades.

Las políticas educativas estuvieron marcadas por la inversión en infraestructura y la transferencia de tecnología de otros lugares hacia Nuevo León. Al ubicarse esta entidad en una zona fronteriza y corredor comercial de capital importancia entre México y los EE. UU., los esfuerzos se ubicaron en la inversión para la educación tecnológica que permita la absorción de tecnologías existentes.

Esa misma condición de corredor comercial, obliga a emprender retos especiales en la seguridad pública y la protección de las transacciones comerciales, debido a ello se emprendieron reformas institucionales de gran calado como la creación de la Ley Estatal de Seguridad Pública, la Agencia Estatal de Seguridad Pública y el Instituto de Seguridad Pública. Asimismo se creó el Sistema de Juicios Orales y el Sistema Especial de Apoyo a Empresas de Seguridad Privada, por mencionar algunos.

Además, es necesario destacar que Nuevo León participa en fideicomisos para el desarrollo regional por la situación geográfica que ocupa, como el FIDENORESTE, que incluye a otros Estados de similar situación geográfica. Además, gran parte de sus políticas públicas buscan incluir la participación de los Estados fronterizos de los EE. UU. ya sea de manera activa o consultora.

³² GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en http://www.nl.gob.mx/?P=sexto_informe_transmision

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica. Se ubica en la parte alta de la tabla con un puntaje total de 0,390. Sin embargo, tiene vastas posibilidades de mejora en el índice de regulación, donde se ubica apenas debajo de la mediana nacional.

Regulación: En el índice de transparencia manifiesta amplias oportunidades de mejora, sus ventajas en la libertad económica están definidas por el índice de comercio y educación. Como resultado final, alcanza un índice de regulación de 0,654 puntos y se ubica en la zona de media regulación debido a su décimo séptima posición.

Comercio: Obtiene el segundo lugar en el índice de comercio producto con un indicador de 0,078. Este ha sido producto de los 31 días en promedio que se requieren para la apertura de un nuevo negocio, así como del gasto que realizan las empresas como porcentaje del PIB por concepto de trámites y servicios, que se ubica en un 0,1%.

Transparencia: Obtiene la posición trigésimo primera en el índice de transparencia, ello ha sido resultado de una evaluación de su marco regulatorio en materia de transparencia que le ha significado 46,84 puntos y se han traducido en un indicador de 1,000.

Salud: Alcanza la vigésimo tercera posición nacional en el índice de salud gracias a un puntaje de 0,804. Su ratio de gasto privado en salud es de 0,95 y su gasto privado en salud medido como porcentaje del PIB alcanza el 0,95%.

Educación: Se ubica en el segundo lugar nacional en el índice de educación, producto de un valor de 0,475 puntos. Es necesario destacar el principal rezago que

se tiene en esta área, que viene dado por el rubro de escuelas de las entidades como porcentaje del total, que llega al 52,90%.

Dimensión del sector público: Se ubica en la segunda posición nacional con un puntaje total de 0,126, por lo cual tiene un sector público reducido. Sus principales ventajas están determinadas por los índices de burocracia estatal y gasto público, mientras que presenta oportunidades de mejora en el índice de deuda pública.

Deuda pública: Obtiene el décimo cuarto lugar en el rubro, su deuda pública medida en términos del PIB es de 0,11% y su indicador en la materia es de 0,087.

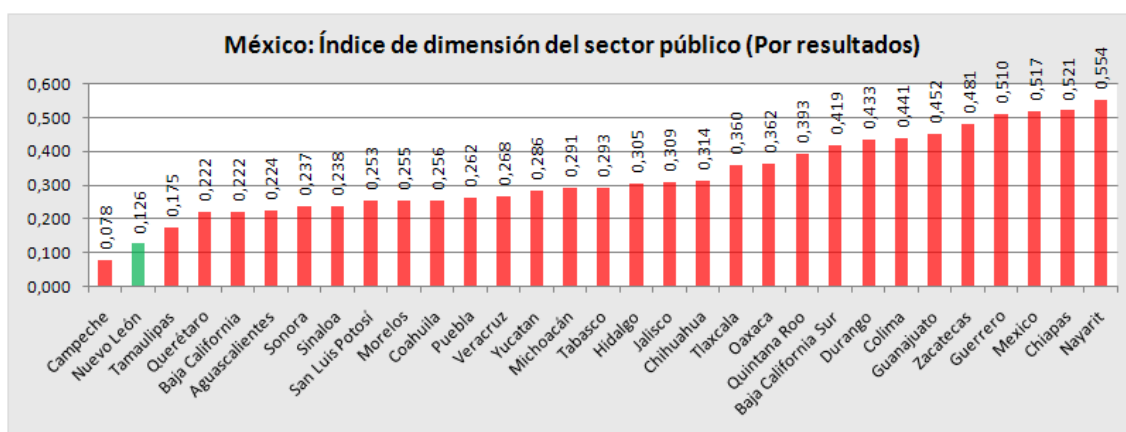
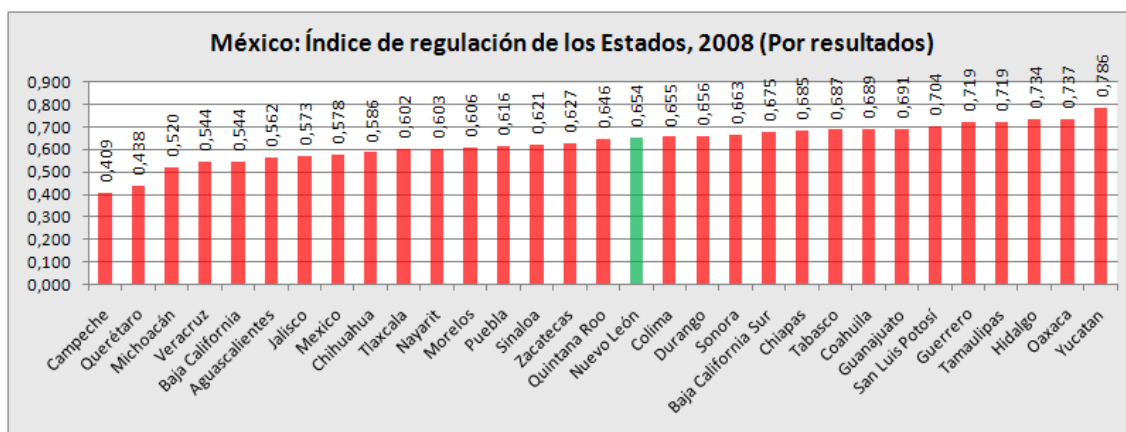
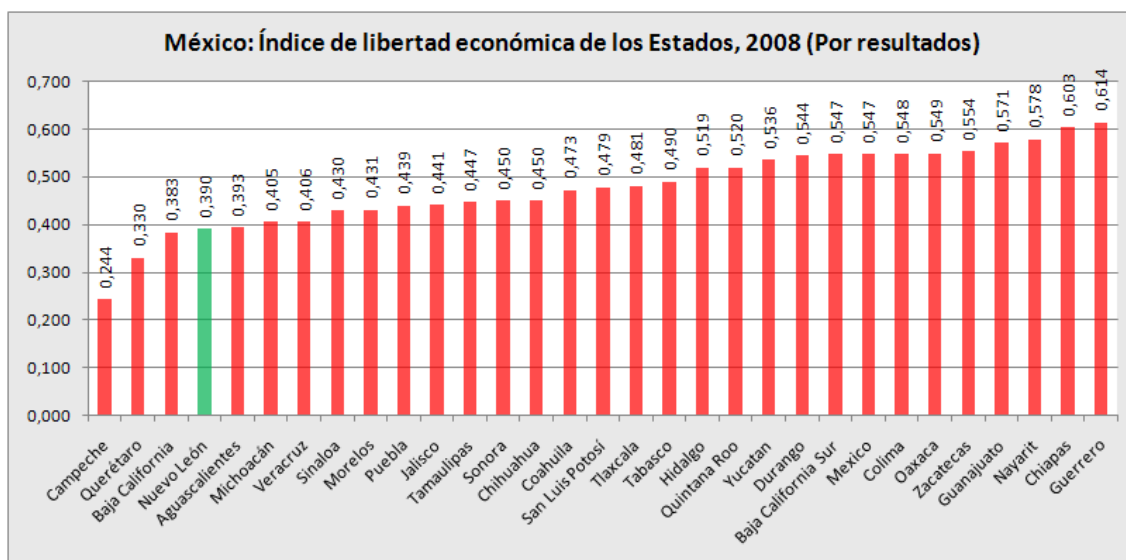
Balance financiero: La quinta posición nacional en la materia conseguida por esta entidad es producto de un superávit financiero como porcentaje del PIB del 0,09% y un indicador de 0,222.

Burocracia estatal: El 0,67% de la población ocupada en la entidad trabaja para su sector público, ello le proporciona el segundo lugar nacional en el rubro y le otorga un indicador general de 0,002.

Gasto público: Representa el 5,40% del PIB estatal, lo que le produce un indicador de general de 0,145 que le otorga el segundo lugar nacional en la materia.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el cuarto lugar nacional producto de un índice de Frank de 0,015 y un indicador en el rubro de 0,176.

c) Resultados gráficos.



4.14.19. Oaxaca.

OAXACA	
Población	3,552,300
Superficie (kilómetros cuadrados)	93,793
PIB per cápita (pesos corrientes)	48,765.9
Tasa de desempleo (%)	2
Escolaridad promedio (años)	6.9
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.9
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	35.3



OAXACA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
26 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
30 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
21 DE 31	

a) Resumen de políticas.³³

En el rubro de la salud, las acciones por parte del gobierno del Estado se orientaron a ampliar la cobertura, mejorar la eficiencia terminal, abatir el analfabetismo, gestionar la capacitación a docentes, construir con modalidades de gestión la infraestructura educativa y presupuestar inversiones multianuales.

Además, es importante señalar que esta entidad tiene un alto grado de población indígena, por lo que es necesario destacar que en el período revisado se logró la incorporación de la medicina tradicional indígena y la medicina alternativa en la cobertura del Sistema Estatal de Salud, mediante su reconocimiento y apoyo en la realización de tareas investigación, organización, capacitación y desarrollo.

En seguridad, se emprendió una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública en cuanto a la función preventiva, la generación de inteligencia estratégica, el análisis delincriminal, la participación ciudadana y la reinserción social. Asimismo, se ha procurado evaluar paulatinamente a los miembros de los cuerpos de seguridad pública. Por último, se realizó el mando único de las policías preventiva, ministerial, auxiliares y de tránsito.

Referente al fomento del sector privado, se implementó un corredor eólico en el Istmo de Tehuantepec, el cual tiene una inversión que asciende a mil 91 millones de dólares en seis centrales, creando mil 950 empleos directos y 2 mil 415 indirectos. Mientras que en cuanto a la mejora en la eficiencia de los recursos públicos, se actualizaron las estructuras administrativas del gobierno del Estado, así como la aplicación de auditorías de rigor para verificar que el gasto público se haya realizado dentro de los parámetros de la transparencia.

³³ GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: http://oaxaca.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=1

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se infiere debido a su puntaje total de 0,549, que en la entidad hay una relativamente alta intervención del sector público en la economía, como también lo indica su vigésimo sexto lugar nacional en el rubro. Sus principales ventajas están dadas por el índice de dimensión del sector público, mientras que tiene espacio para la mejora en el índice de regulación.

Regulación: Se ubica en la trigésima posición en el índice de regulación como consecuencia de un puntaje de 0,737. Su principal ventaja está definida por el índice de seguridad, mientras que su área de desarrollo está definida por el índice de comercio.

Comercio: En la entidad se requieren de 41 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio, además las empresas gastan una cifra similar al 0,4% del PIB por concepto de trámites y servicios para la apertura. Ello posiciona a la entidad en el vigésimo cuarto lugar del índice de comercio, con un indicador de 0,439.

Transparencia: En la evaluación de su marco regulatorio en materia de transparencia ha obtenido 81,65 puntos, que a su vez se han traducido en un indicador de 0,671 puntos y posicionan a la entidad en el lugar vigésimo sexto en la materia.

Salud: Su gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 5,6%, su ratio de gasto privado en salud es de 1,10 que posiciona a la entidad en el décimo octavo lugar nacional en el índice de salud con un puntaje de 0,753.

Educación: Obtiene la trigésimo primera posición en el índice de educación producto de un indicador total de 1,000. Su principal rezago es el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto de la entidad como porcentaje del total, que alcanza una cifra de 96,54%.

Dimensión del sector público: Se ubica en la vigésimo primera posición nacional mediante un puntaje total de 0,362. Su principal ventaja está definida por el índice de deuda pública, mientras que presenta áreas de desarrollo en el índice de gasto público.

Deuda pública: Alcanza el segundo lugar nacional en el índice de deuda pública con un indicador total de 0,001.

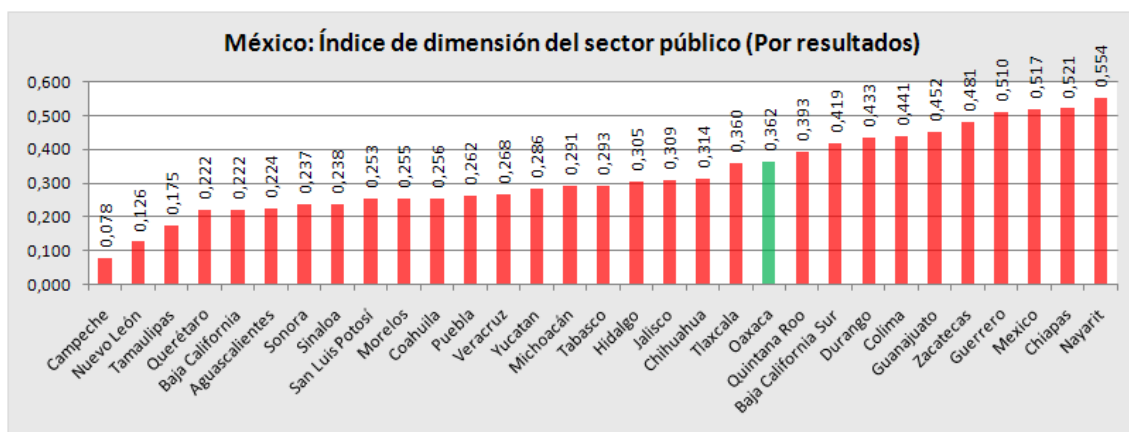
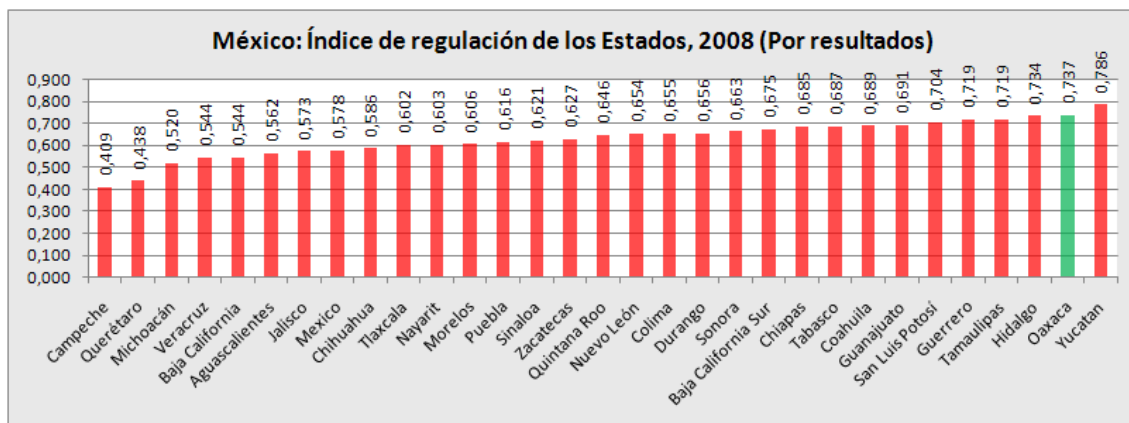
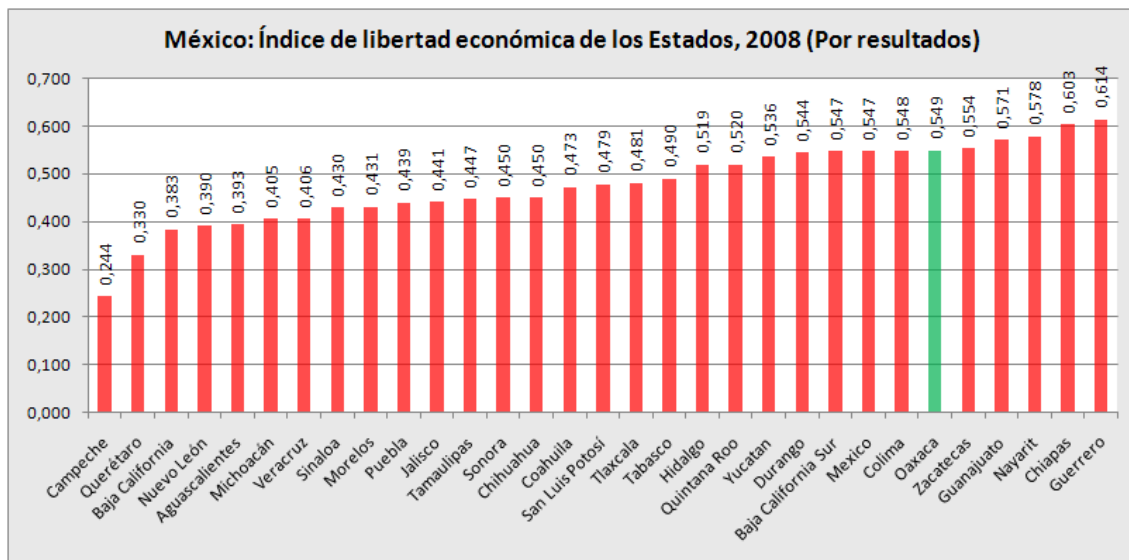
Balance financiero: Se ubica en la mediana nacional en el rubro, producto de un indicador total de 0,304 puntos y un balance financiero en equilibrio.

Burocracia estatal: El 1,68% de la población ocupada en la entidad labora para su sector público, lo que le produce un indicador de 0,061 y un décimo cuarto lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Representa casi una cuarta parte de su PIB, por lo que alcanza la trigésimo primera posición nacional en el índice de gasto público mediante un puntaje de 1,000.

Esfuerzo fiscal: Se ubica en la mediana nacional mediante un índice de Frank de 0,035 y un puntaje general de 0,442.

c) Resultados gráficos.



4.14.20. Puebla.

PUEBLA	
Población	5,595,760
Superficie (kilómetros cuadrados)	34,290
PIB per cápita (pesos corrientes)	70,508.6
Tasa de desempleo (%)	3
Escolaridad promedio (años)	8.0
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.2
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	11.7



PUEBLA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
10 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
13 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
12 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁴

En el rubro de la educación se optó por la formalización de acuerdos de colaboración entre los distintos niveles de gobierno, sociedad civil y sector privado. En este punto, la participación de empresas se hizo latente a través de un programa dirigido a alumnos de padres migrantes que inician estudios de nivel secundaria, en el período revisado se otorgaron 589 becas. Por otro lado, destaca la realización de 30 convenios con empresas para realización de prácticas profesionales.

En el tema de la salud, las políticas y estrategias han sido orientadas a la prevención de las enfermedades, el diagnóstico y tratamiento de padecimientos y la rehabilitación física, mental y social.

En cuanto al desarrollo del sector privado, se apoyaron 832 proyectos de exportación, por conducto de la asistencia a ferias y exposiciones internacionales, encuentros de negocios y la capacitación del personal, además, se buscó la participación del sector privado, por medio del aumento de la colocación de recursos financieros en las pequeñas y medianas empresas. También se trabajó en la disminución de tiempos de apertura de empresas.

En la materia de la mejora de la eficiencia del sector público, las estrategias implementadas para el combate a la corrupción de los servidores públicos destacan por la creación de una fiscalía anticorrupción, cuyo objetivo es intensificar las acciones en materia de transparencia y cultura de la legalidad para la prevención y combate a la corrupción en las dependencias y entidades de la administración pública. También se expidió un código de ética para los servidores públicos, en el que se establece un parámetro de actuación del quehacer gubernamental.

³⁴ GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en:

<http://www.transparencia.pue.gob.mx/transparencia/transparencia/searchTransparencia.jsp?fraccion=9&unidad=SFA>

Destaca, de manera especial, la firma de un convenio de colaboración para la prevención y combate a la corrupción con 52 universidades del Estado, a través de las denominadas brigadas anticorrupción, conformadas por estudiantes universitarios ubicados en puntos estratégicos de las áreas de prestación de servicios públicos con la función de vigilar la calidad de los mismos y los posibles actos de corrupción.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Obtiene la décima posición nacional en el rubro producto de un puntaje de 0,439, por lo que se ubica en la zona alta de la tabla. Sus indicadores de regulación y dimensión del sector público mantienen cierto equilibrio, ubicándose en el décimo tercer lugar y duodécimo lugar, respectivamente.

Regulación: Posee una regulación media a nivel nacional, ya que su indicador de regulación se sitúa en el décimo tercer lugar con un total de 0,616 puntos. Como principal ventaja cuenta con los índices de educación y sanidad, mientras que como área para desarrollar se encuentra el índice de transparencia.

Comercio: Ha obtenido el vigésimo segundo lugar en el índice de comercio, producto de un indicador de 0,411 puntos, el cual ha sido resultado de los 46 días en promedio que se requieren para la apertura de un nuevo negocio y el gasto por parte de las empresas por concepto de trámites y servicios, que importa el 0,3% del PIB.

Transparencia: Ha obtenido el vigésimo noveno lugar en el índice de transparencia. Ello ha sido producto de la evaluación de su marco regulatorio en la materia que ha arrojado un resultado de 73,80 puntos, que a su vez se han traducido en un indicador de 0,745 puntos.

Salud: Obtiene el cuarto lugar nacional en el índice de salud producto de un puntaje de 0,499, el cual es producto de un gasto privado como porcentaje del PIB por un total de 5,3% que produce un ratio de gasto privado de 1,83.

Educación: El principal rezago que mantiene esta entidad es su porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal como porcentaje del total, que alcanza un porcentaje de 59,85%. Debido a ello, alcanza el cuarto lugar nacional en el índice de educación con un indicador de 0,588 puntos.

Dimensión del sector público: Con un puntaje de 0,262 se ubica en la duodécima posición nacional en la materia, que indica un tamaño de su gobierno de cercano a la mediana. Presenta como área de desarrollo el índice de esfuerzo fiscal, mientras que su principal ventaja está definida por el índice de balance financiero.

Deuda pública: Alcanza el décimo séptimo lugar nacional en la materia, su indicador es de 0,106 y es producto de una deuda pública medida en términos de PIB del 0,13%.

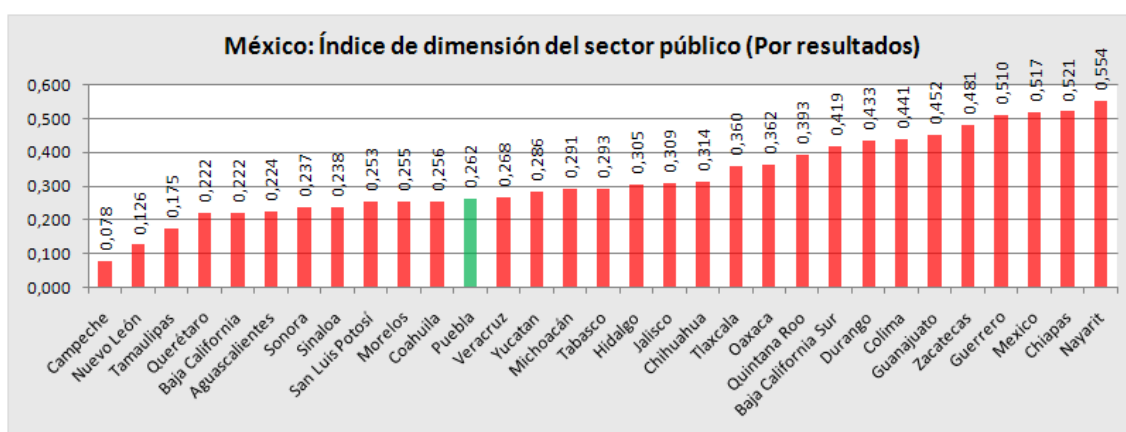
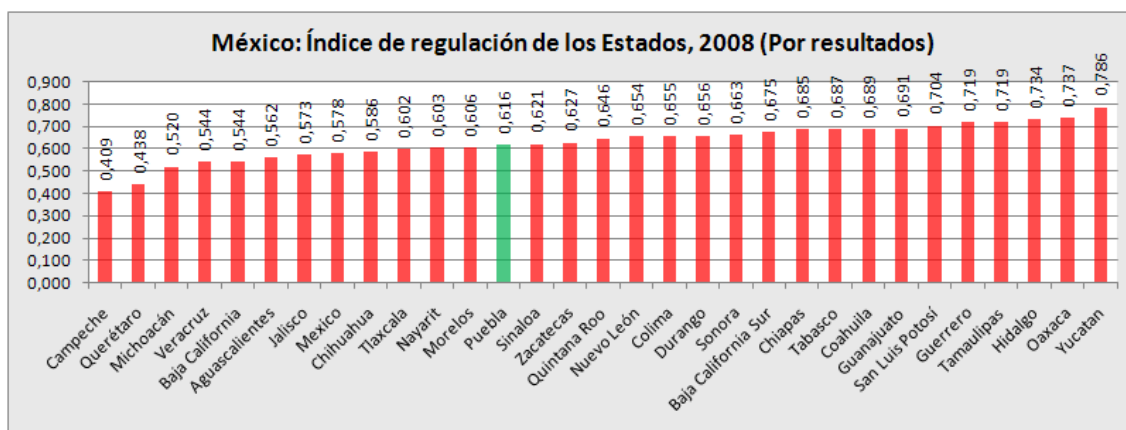
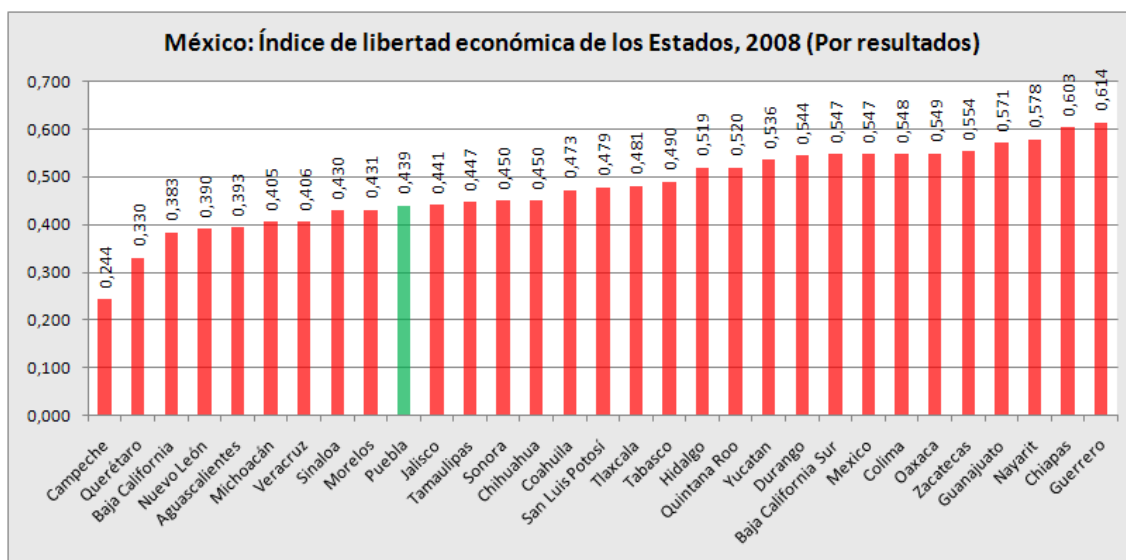
Balance financiero: Producto de un puntaje de 0,188 que es conseguido por un superávit financiero del 0,13% de su PIB alcanza la tercera posición nacional en la materia.

Burocracia estatal: El 2,44% de la población ocupada trabaja para el sector público de la entidad, lo que le produce un indicador general de 0,106 y el vigésimo lugar nacional en el rubro.

Gasto público: Significa el 12,04% de su PIB, lo que le produce un indicador general de 0,428 y le otorga el décimo sexto lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,038 lo cual es traducido en un puntaje general de 0,484 que le otorga el vigésimo primer lugar nacional en la materia.

c) Resultados gráficos.



4.14.21. Querétaro.

QUERÉTARO	
Población	1,690,042
Superficie (kilómetros cuadrados)	11,684
PIB per cápita (pesos corrientes)	127,053.6
Tasa de desempleo (%)	3.6
Escolaridad promedio (años)	9.2
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.2
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	1.7



QUERÉTARO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
2 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
2 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
4 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁵

En el ámbito de la salud, se buscó la participación privada con el objetivo de incrementar los indicadores de cobertura, particularmente se establecieron políticas para la población indígena, que según datos el 10% de la población total de dicha condición no alcanza a tener cobertura en el nivel primaria.

El sector privado se buscó fortalecer mediante la introducción de normas que permitieran el desarrollo del “turismo de especialización” así como de la creación de infraestructura necesaria para el desarrollo de la actividad. También se buscó participar en ferias y convenciones donde se buscaba exponer la oferta turística de la entidad. En cuanto a la promoción de la actividad económica en general, además de los créditos regulares en todo el país, se buscaron mecanismos para la reducción de los plazos de apertura de negocios, ya que en el sector terciario en general, se ocupa casi el 50% de la población empleada total.

En cuanto al sector público, vale la pena mencionar la intención abierta del gobierno del Estado por hacer uso de todas sus facultades tributarias establecidas en la ley para aumentar sus ingresos propios, ya que se ha detectado una baja en los ingresos tributarios que no permite la adecuada provisión de servicios públicos.

En cuanto a transparencia y rendición de cuentas, se detecta la posibilidad de corrupción ante un marco regulatorio saturado, en tal sentido, se buscó hacer una regulación eficiente de las obligaciones que el sector público mantiene con la transparencia. Además, se buscó implementar un esquema novedoso de fiscalización, que consiguiera una mejoría sustantiva en el manejo de los recursos públicos.

Uno de los principales problemas que en los últimos años ha enfrentado el Estado ha sido la profusa migración de otras regiones del país, por lo que la infraestructura en

³⁵ GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, (2004). *Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009*, Querétaro de Arteaga.

salud ha sido rebasada, como consecuencia de ello los esfuerzos en materia de salud han sido enfocados a la construcción de infraestructura.

b) Libertad económica.

Libertad económica: Obtiene la segunda posición nacional en la materia con un puntaje total de 0,330. Sus principales ventajas se obtienen en el índice de regulación, aunque en el índice de dimensión del sector público también se ubica en los primeros lugares a nivel nacional.

Regulación: Presenta los segundos mejores indicadores de regulación en el país, presenta ventajas en educación, donde obtiene los mejores indicadores inclusive en los parciales. Sin embargo, en el índice de comercio y transparencia se observa espacio para la mejora. Su puntaje total en regulación es de 0,438.

Comercio: Se posiciona en el quinto lugar en el índice de comercio, debido a la consecución de un puntaje de 0,139. El cual ha sido conseguido mediante el requerimiento de 29 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio y una erogación por parte de las empresas que alcanza el 0,2% del PIB por concepto de pagos por trámites y servicios relativos a la apertura de empresas.

Transparencia: Ha alcanzado un indicador de transparencia por un total de 0,546 puntos, producto de una evaluación de su marco regulatorio en la materia que le ha significado 94,89 puntos y ha posicionado a la entidad en el décimo noveno lugar nacional.

Salud: Producto de un ratio de gasto privado de 1,35 que es consecuencia de un gasto privado como porcentaje del PIB de 3,1% obtiene un puntaje de 0,666 que posiciona a la entidad en el noveno lugar nacional del índice de salud.

Educación: Obtiene el primer lugar nacional en el indicador, así como en los tres aspectos que componen el mismo.

Dimensión del sector público: Es de proporciones reducidas según su puntaje total de 0,222 y su cuarto lugar nacional en el rubro, su principal ventaja está determinada por el índice de burocracia estatal, mientras que presenta oportunidades de mejora en el índice de esfuerzo fiscal.

Deuda pública: Su octavo lugar nacional en el rubro es producto de una deuda pública como porcentaje del PIB de 0,06% y un indicador en la materia de 0,049.

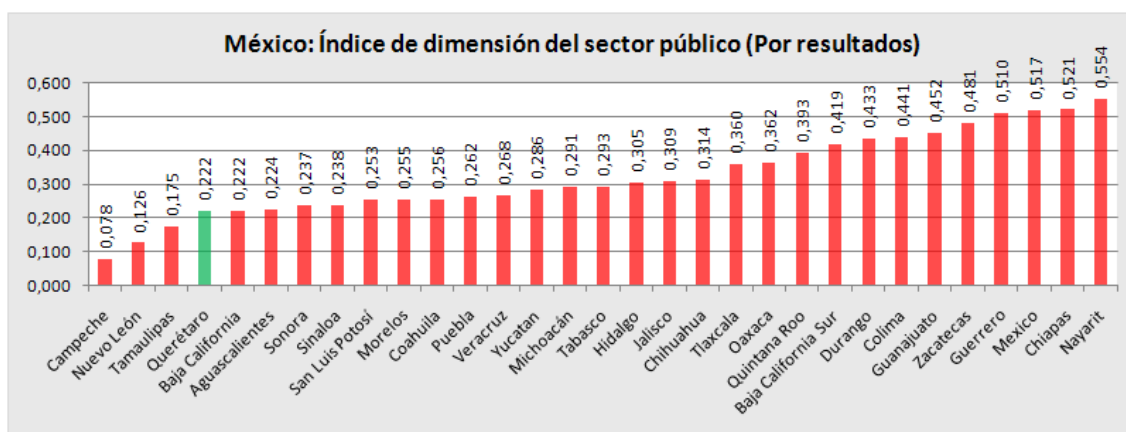
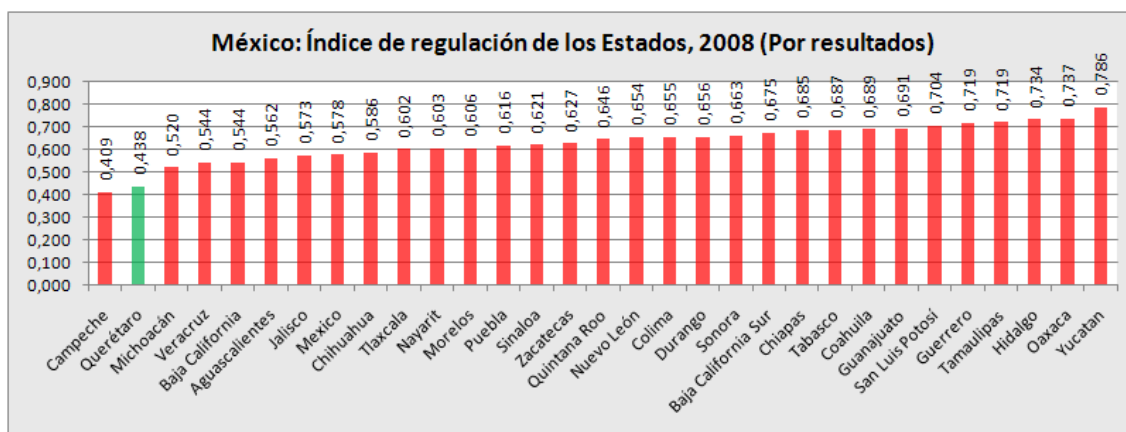
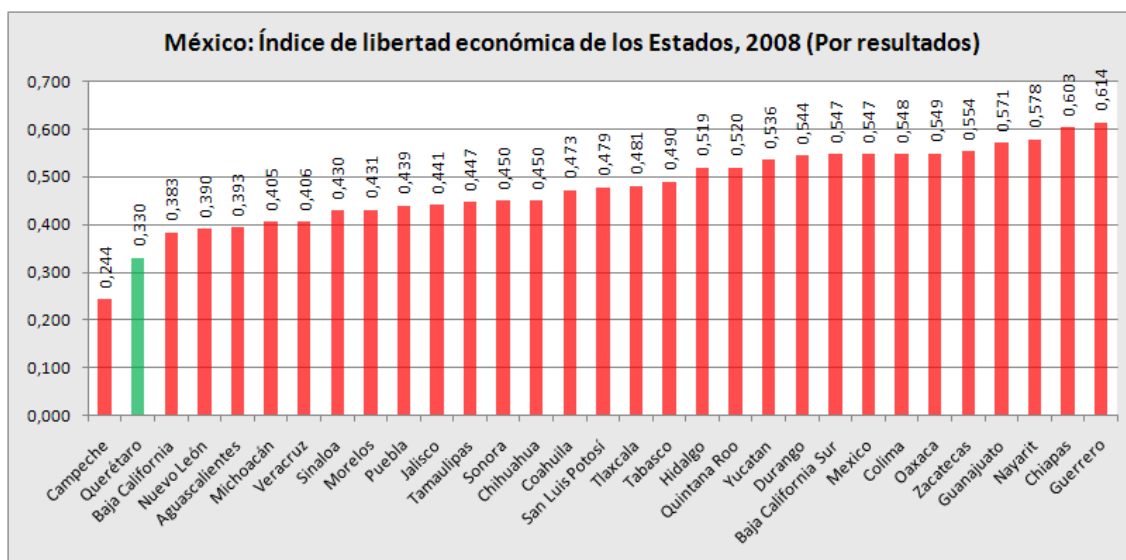
Balance financiero: Alcanza la décimo cuarta posición nacional en el índice de balance financiero ya que obtiene un superávit del 0,01% de su PIB y un indicador general de 0,299.

Burocracia estatal: El 0,93% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador de 0,017 y le otorga el cuarto lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Significa un 8,67% de su PIB, lo que produce un indicador general de 0,284 posiciona a la entidad en el séptimo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,037, lo que le produce un puntaje general de 0,462 y le otorga el décimo octavo lugar nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.22. Quintana Roo.

QUINTANA ROO	
Población	1,267,087
Superficie (kilómetros cuadrados)	42,361
PIB per cápita (pesos corrientes)	132,598.2
Tasa de desempleo (%)	2.7
Escolaridad promedio (años)	9.1
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.2
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	19.3



QUINTANA ROO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
20 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
16 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
22 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁶

En el tema de la educación, se destaca una estrategia del aumento de la cobertura, ya que se incorporaron 57 escuelas particulares al sistema educativo estatal. Además, se firmaron 2 convenios de colaboración con el sector privado para fortalecer la vinculación entre la universidad y la empresa, así como para incrementar el desarrollo científico y tecnológico.

En cuanto a la salud, la infraestructura se fortaleció con las inversiones de la iniciativa privada para mejorar la capacidad instalada de salud en el Estado. Por otro lado, se ha dado seguimiento al vínculo entre la sociedad y los prestadores de servicios de salud con la participación de los avales ciudadanos; una estrategia de vigilancia social para la evaluación de los servicios que permite fortalecer los procesos de atención.

En cuanto a seguridad y marco jurídico, se realizó una reforma al marco legal que transforma a las instituciones públicas con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos. En este sentido, se han publicado en el periódico oficial del Estado 11 nuevas leyes, 19 reformas de leyes, 92 reglamentos, 408 acuerdos y 9 convenios.

En cuanto al desarrollo del sector productivo, además de los créditos a las nuevas empresas, se avanzó en la consolidación del puente comercial entre Guatemala, México y Europa. En lo que respecta a la simplificación de trámites y tiempos de respuesta que permiten la apertura rápida de empresas. Los Centros Integrales de Tramitación y Asesoramiento, CITA, que operan los Sistemas de Apertura Rápida de Empresas, SARE, facilitaron que 685 actividades económicas de bajo riesgo iniciaran operaciones en 48 horas, una vez integrada la información documental.

Por último, en cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, se rediseñaron y autorizaron 24 estructuras orgánicas a igual número de dependencias del gobierno del Estado con apego a la plantilla laboral vigente. Con estas medidas se buscó compactar áreas, evitar duplicidad de funciones y promover servicios más eficientes.

³⁶ GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://cuartoinforme.qroo.gob.mx/>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Presenta una intervención media del sector público en la economía según se desprende de su vigésima posición nacional en el rubro como consecuencia de un indicador total de 0,520. Su principal ventaja está provista por el índice de regulación, mientras que su área para desarrollo está presentada por el índice de dimensión del sector público.

Regulación: Mantiene una regulación media a nivel nacional, ya que su puntaje es de 0,627. Su principal ventaja está provista por el índice de educación, mientras que manifiesta oportunidades de mejora en el índice de seguridad.

Comercio: Obtiene el vigésimo tercer lugar en el índice de comercio debido a sus 0,417 puntos, que a su vez son producidos por los 39 días en promedio que se requieren para la apertura de un negocio y por el 0,4% del PIB que las empresas gastan por concepto de trámites y servicios para la consecución de la misma.

Transparencia: La entidad ha obtenido el décimo tercer lugar en el índice de transparencia. Ello ha sido producto de un resultado de 110,83 puntos en la revisión del marco regulatorio en la materia, que a su vez ha sido traducido en un indicador de 0,396 puntos.

Salud: Obtiene el décimo lugar nacional en el índice de salud producto de un gasto privado como porcentaje del PIB de 2,6% que a su vez se traduce en un ratio de gasto privado de 1,30. Su puntaje en el índice es de 0,683.

Educación: El principal rezago que presenta la entidad viene dado por el porcentaje de docentes en escuelas a cargo del presupuesto estatal, cuya cantidad se ubica en un 79,22%. Debido a ello, se ubica en el octavo lugar nacional con un índice de educación de 0,771.

Dimensión del sector público: El gobierno de la entidad conserva proporciones grandes, ello se deriva de un puntaje de 0,393 que le otorga el vigésimo segundo lugar nacional en el rubro. Sus principales ventajas están definidas por el índice de burocracia estatal, mientras que manifiesta áreas de desarrollo en el índice de deuda pública.

Deuda pública: Su vigésimo octavo lugar nacional es producto de un indicador en la materia de 0,442 que es resultado de una deuda pública medida en términos de PIB del 0,54%.

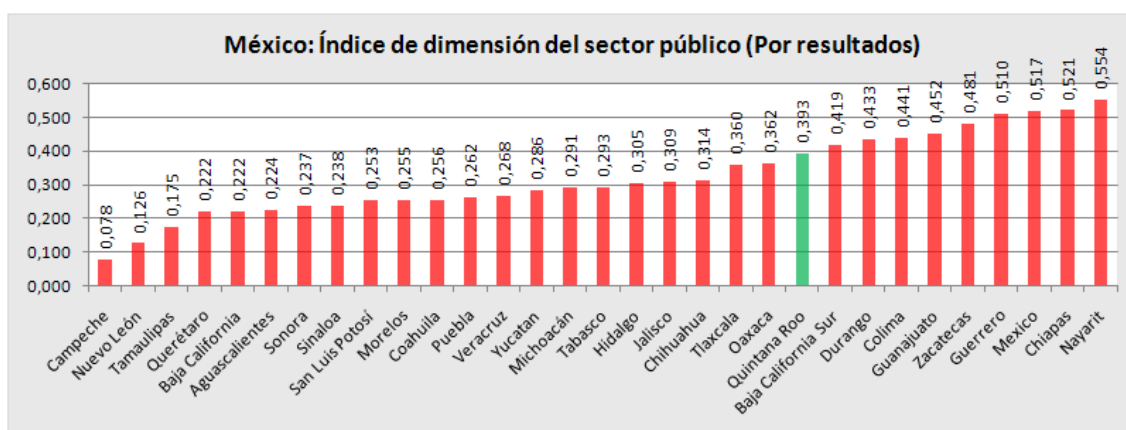
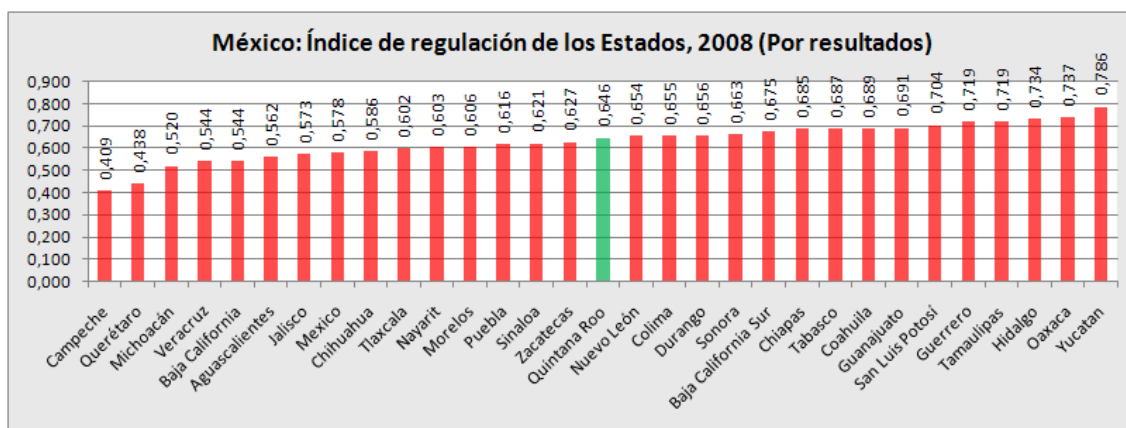
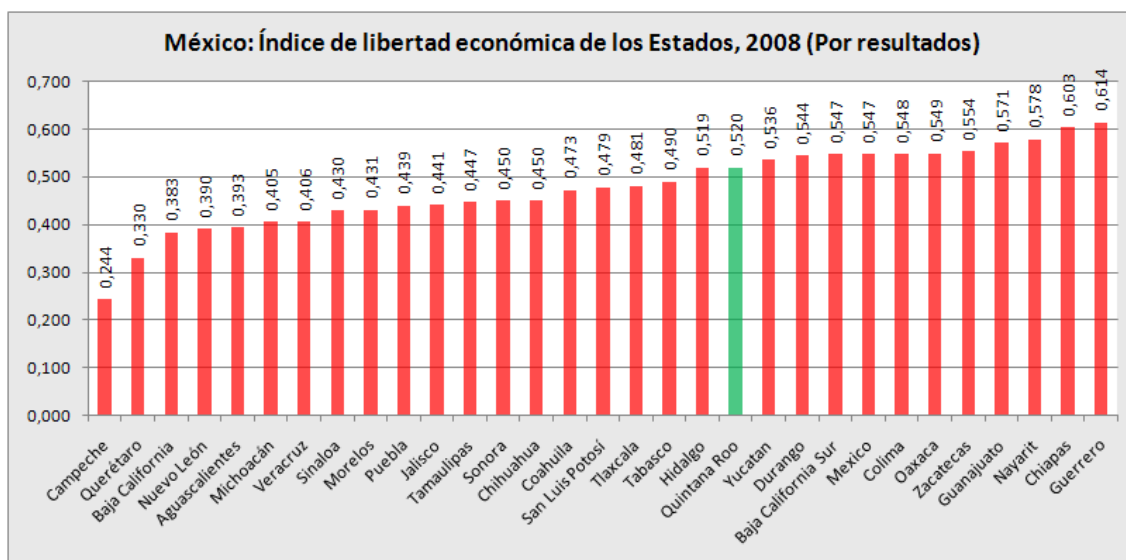
Balance financiero: Obtiene la vigésimo séptima posición nacional en el rubro ya que obtiene un déficit financiero del 0,38% del PIB, que le produce un puntaje total de 0,639.

Burocracia estatal: El 1,16% de la población ocupada en la entidad trabaja para el sector público estatal, por lo que obtiene un indicador general de 0,031 y un octavo lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Significa el 11,40% del PIB a nivel estatal, lo que produce un indicador general de 0,400 y posiciona a la entidad en el décimo cuarto lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Obtiene un índice de Frank de 0,036 que le produce un puntaje general de 0,454 y posiciona a la entidad en el décimo séptimo lugar nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.23. San Luis Potosí.

SAN LUIS POTOSÍ	
Población	2,473,678
Superficie (kilómetros cuadrados)	60,983
PIB per cápita (pesos corrientes)	88,080.0
Tasa de desempleo (%)	2.7
Escolaridad promedio (años)	8.5
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.6
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	11.1



SAN LUIS POTOSÍ	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
16 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
26 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
9 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁷

En el rubro de la salud, el gobierno del Estado se dio a la tarea de cerrar el plan estatal de desarrollo sexenal, el cual contemplaba el incremento sustancial en el presupuesto de la salud, en cuanto a la atención de primer nivel, se buscó ampliar la cobertura al 80-90%. Como en el resto de las entidades, la mayoría de los esfuerzos de dieron en torno al Seguro Popular.

En educación, los esfuerzos se orientaron al desarrollo de evaluaciones demográficas con la finalidad de construir nuevas escuelas o ampliar las ya existentes, también hubo proyectos encaminados a la educación comunitaria e indígena, así como a la educación con equidad. En adición, se trabajó con modelos de evaluación de tal manera que estos estuvieran en equilibrio con las metodologías internacionales.

Con la finalidad de promover el sector privado, se llevaron a cabo acciones orientadas a incrementar la competitividad, incrementar el mercado interno y externo con énfasis en la pequeña empresa, ampliar la infraestructura, impulsar y desarrollar la minería así como las artesanías y por último se buscó una mejora regulatoria que permitiera la disminución en los plazos para la apertura de nuevos negocios.

En cuanto a la seguridad, vale la pena la firma del Acuerdo Estatal por la Legalidad, la Seguridad y la Justicia, signado por los tres poderes de gobierno y los 58 municipios de la entidad, dicho acuerdo contempló compromisos orientados a la mejora en el sistema judicial.

³⁷ GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en: http://201.117.193.130/InfPubEstat2/_SECRETAR%20PARTICULAR%20DEL%20DESPA%20CHO%20DEL%20C.%20GOBERNADOR/Art%20adculo%2019.%20fracc.%20IX/Informe%20Anual%20de%20Actividades/6%20ba%20Informe%202003-2009/cualitativo/Informe.pdf

En cuanto a las funciones del sector público, estas se orientaron a mejorar la recaudación mediante impuestos, por lo que se modernizaron los mecanismos recaudatorios para hacer del pago de tributos una acción más eficiente.

b) Libertad económica.

Libertad económica: Es la mediana nacional con un puntaje total de 0,479. Sin embargo, presenta ciertas asimetrías en el nivel de sus índices parciales, ya que mientras en el indicador de dimensión del sector público se ubica en la zona alta de la tabla, en el índice de regulación se encuentra en la parte baja de la misma.

Regulación: Se ubica en la vigésimo sexta posición nacional en el índice de regulación como consecuencia de un puntaje de 0,704. Sus principales áreas de mejora se encuentran en los índices de educación, transparencia y seguridad, mientras que su principal ventaja está definida por el índice de comercio.

Comercio: En la entidad se requieren 49 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio, además las empresas erogan un monto igual al 0,1% del PIB por concepto de trámites y servicios por las aperturas, lo que posiciona a San Luis Potosí en el duodécimo lugar en el índice de comercio, con un total de 0,556 puntos.

Transparencia: En la evaluación de su marco regulatorio en materia de transparencia ha obtenido un total de 82,44 puntos, que le significan un indicador de transparencia de 0,664 puntos y posicionan a la entidad en el vigésimo quinto lugar nacional.

Salud: Su ratio de gasto privado en salud es de 1,18 mientras que el porcentaje de gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 3,9%, por lo que la entidad se ubica en la décimo cuarta posición a nivel nacional con un puntaje de 0,724.

Educación: Su principal rezago estriba en el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal, que llega al 90,15%. Por lo que se ubica en el vigésimo quinto lugar nacional en el índice de educación con un indicador total de 0,910.

Dimensión del sector público: Cuenta con un sector público de proporciones reducidas. Su principal ventaja está determinada por el índice de esfuerzo fiscal, mientras que presenta oportunidades de desarrollo en el índice de balance financiero. Su puntaje total es de 0,253.

Deuda pública: Obtiene el décimo octavo lugar nacional en el índice de deuda pública producto de un indicador de 0,126 y una deuda medida en términos del PIB de 0,15%.

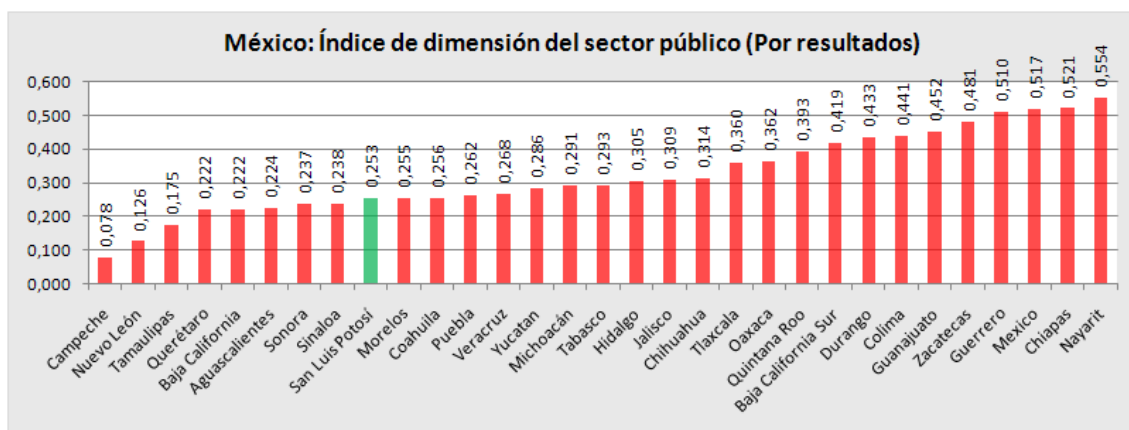
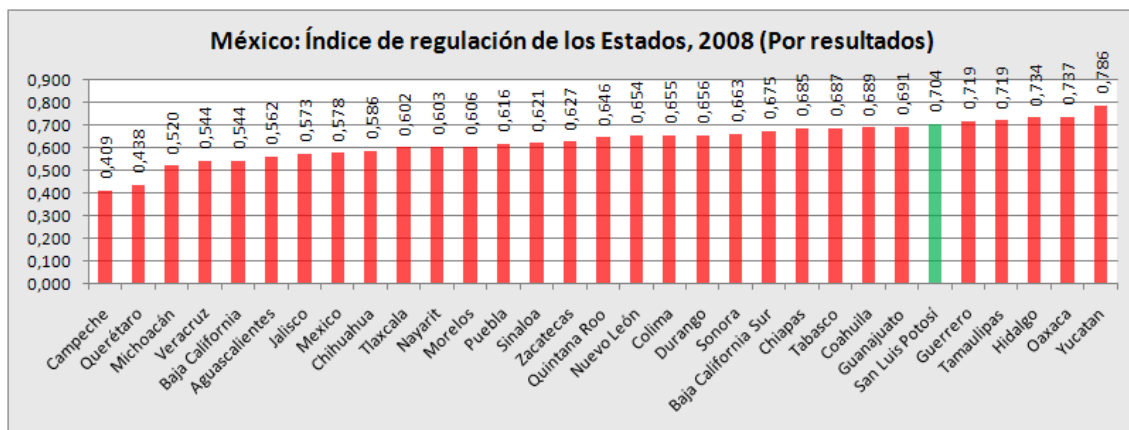
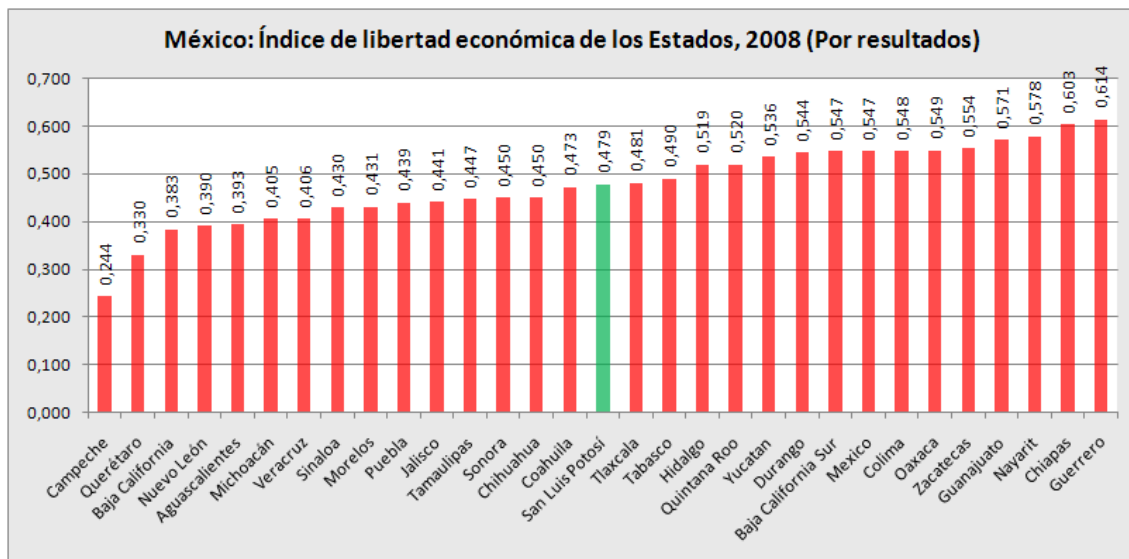
Balance financiero: Alcanza la vigésimo segunda posición nacional en el rubro ya que obtiene un déficit financiero del 0,02% de su PIB, el puntaje total es de 0,320.

Burocracia estatal: El 1,54% de la población ocupada labora para el sector público de la entidad, lo que le produce un índice general de 0,053 y un décimo tercer lugar nacional en la materia.

Gasto público: En la entidad, el sector público realizó erogaciones por un total del 11,38% de su PIB, lo que produce un indicador general de 0,400 el cual genera el décimo tercer lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,029, lo que posiciona a la entidad en el duodécimo lugar nacional en la materia como consecuencia de un indicador general de 0,369.

c) Resultados gráficos.



4.14.24. Sinaloa.

SINALOA	
Población	2,648,330
Superficie (kilómetros cuadrados)	57,377
PIB per cápita (pesos corrientes)	90,396.0
Tasa de desempleo (%)	2.7
Escolaridad promedio (años)	9.3
Unidades médicas por 10.000 hab.	2
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	1.3



SINALOA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
8 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
14 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
8 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁸

En cuanto al rubro de la educación, es importante mencionar la creación de un consejo de vinculación de sectores productivos y de las instituciones de educación superior del Estado. Entre las acciones que se han desarrollado a partir de este esfuerzo, figura la puesta en marcha del programa de Estancias Profesionales, la cual beneficia a cerca de mil jóvenes, quienes tendrán la oportunidad de desarrollar un proyecto en una empresa sinaloense.

En el tema de la salud, el gobierno del Estado identificó como grupo más vulnerable a las mujeres, en este sentido, se implementaron una serie de estrategias encaminadas a la protección y el cuidado de la salud de la mujer, por lo cual, en 2009 se hicieron 85 mil 642 consultas a mujeres en periodo de embarazo.

En cuanto al desarrollo del sector privado, se intensificó la tarea de disminuir los obstáculos para la creación y operación de nuevos negocios, otorgando facilidades a los ciudadanos con el objeto de establecer y operar nuevas empresas, optimizando y disminuyendo costos, tiempos y trámites requeridos. Para ello, la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria ha sido responsable de instrumentar y coordinar mecanismos, servicios y acciones a través de las veinte ventanillas de atención a las empresas llamadas Unidades Rápidas de Gestión Empresarial (URGE), ubicadas una en cada cabecera municipal.

Referente a la mejora en la eficiencia del sector público, el gobierno del Estado se abocó a la impartición de cursos, donde trató sobre los siguientes temas: Análisis y diseño de procesos, desarrollo de habilidades personales y laborales, planeación y evaluación, manejo de software directo, gestión por competencias, estructura administrativa de la administración pública y competencias de la administración pública, entre otros.

³⁸ GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en:

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:cgaip&id=2747:5to-informe-de-gobierno&Itemid=567

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Obtiene la octava posición nacional en el indicador mediante un puntaje total de 0,430, por lo que se infiere una libertad económica alta. Su principal ventaja está dada por el índice de dimensión del sector público, mientras que puede mejorar en el índice de regulación.

Regulación: Posee una regulación que se ubica en la zona media a nivel nacional, ya que su puntaje total en el rubro es de 0,621. Su principal ventaja está provista por el índice de transparencia, mientras que como aspecto a desarrollar se tiene al índice de de educación.

Comercio: Obtiene el décimo séptimo lugar en el índice de comercio producto de un puntaje de 0,344. Se requieren en la entidad de 25 días para la apertura de un nuevo negocio, mientras que las empresas erogan un monto igual al 0,5% del PIB por concepto de trámites y servicios por las aperturas.

Transparencia: Ha obtenido el octavo lugar nacional en el índice de transparencia. Ello ha sido posible gracias a los 122,74 puntos que le significaron la evaluación del marco regulatorio en la materia, que a su vez se han traducido en un indicador de 0,283 puntos.

Salud: Su proporción de gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 4,6%, su ratio de gasto privado en salud es de 1,12 y alcanza el décimo sexto lugar nacional en el índice de salud con un puntaje de 0,745.

Educación: Alcanza el vigésimo cuarto lugar nacional en el índice de comercio, producto de un indicador total de 0,897. Su principal rezago está determinado por el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal, que llega a un porcentaje de 89,41%.

Dimensión del sector público: Su principal ventaja está definida por el índice de esfuerzo fiscal, mientras que presenta oportunidades de desarrollo en el índice de balance financiero. Su puntaje es de 0,238, por lo que se puede afirmar que cuenta con un sector público de proporciones reducidas.

Deuda pública: El porcentaje de su deuda pública medido en términos de PIB es del 0,09%, lo que le produce un indicador de 0,073 y un décimo lugar nacional en el rubro.

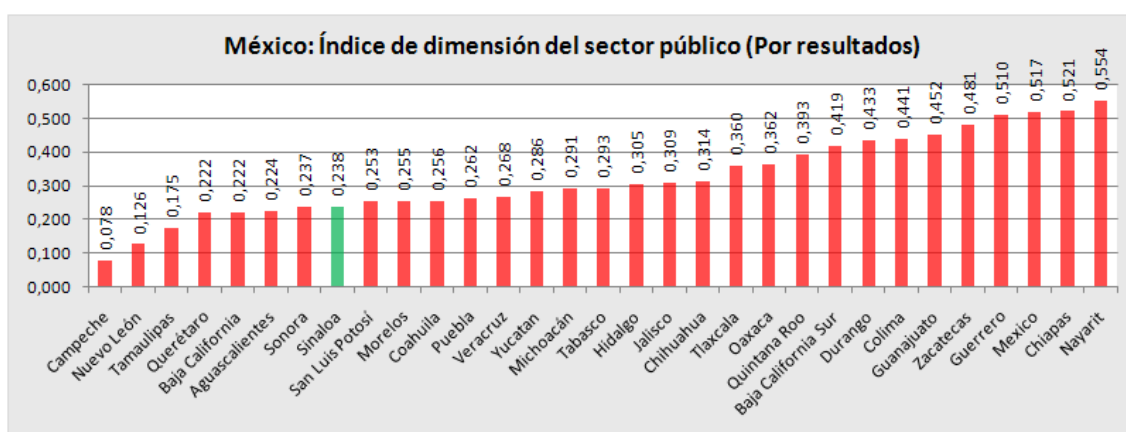
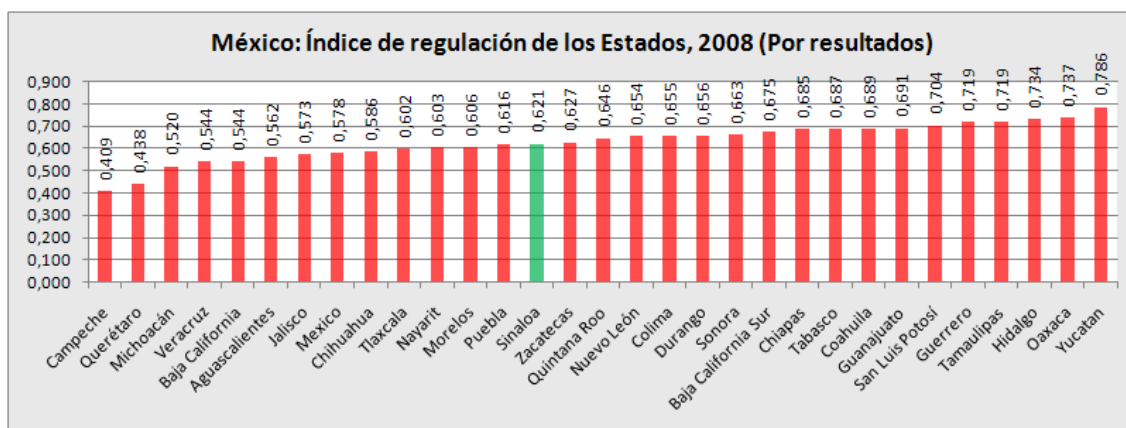
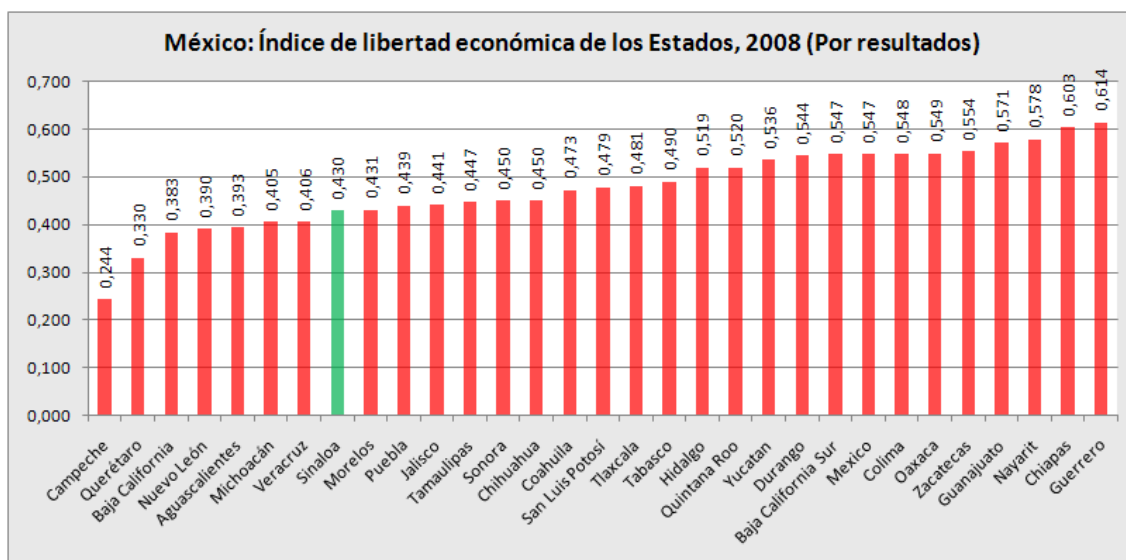
Balance financiero: Obtiene un indicador general de 0,304 puntos que han sido consecuencia de un balance financiero equilibrado. Alcanza la vigésima posición nacional en la materia.

Burocracia estatal: El 2,15% de la población ocupada trabaja para el sector público de la entidad, lo que le produce un indicador general de 0,089 y el décimo séptimo lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Representa el 11,68% del PIB en la entidad, lo que produce un indicador general de 0,413 y otorga el décimo quinto lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el séptimo lugar nacional en el rubro producto de un indicador general de 0,313 que es consecuencia de un índice de Frank de 0,025.

c) Resultados gráficos.



4.14.25. Sonora.

SONORA	
Población	2,487,608
Superficie (kilómetros cuadrados)	179,503
PIB per cápita (pesos corrientes)	115,925.1
Tasa de desempleo (%)	4
Escolaridad promedio (años)	9.6
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.8
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	2.5



SONORA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
13 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
20 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
7 DE 31	

a) Resumen de políticas.³⁹

En cuanto a la conducción de la actividad económica, Sonora diagnosticó las situaciones que pueden afectar un adecuado marco para los negocios, e hizo énfasis en que el impulso pasa por la desregulación y agilización de la actividad económica. En tal sentido, durante el período del informe, se promulgó la Ley para la Mejora Regulatoria, que está basada en el ordenamiento federal y que formó los Programas Operativos de Mejora Regulatoria, donde participaron miembros de la sociedad civil con ideas y propuestas que hicieran más fácil la apertura de nuevos negocios. Además se instrumentó una política pública que buscó dar certidumbre a la posesión de la tierra mediante la legalización de sus derechos de propiedad. A la par de lo anterior, se buscó fondear a las PYMES mediante diversos convenios con la iniciativa privada, como la Fundación para el Desarrollo Sostenible (FUNDES).

Sonora se destaca por contar en su geografía con diversas armadoras y maquiladoras de empresas de los EE. UU., como la constructora de automóviles Ford, en tal sentido, los esfuerzos de esta entidad estuvieron encaminados a la construcción de infraestructura y condiciones que mejoren la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, debido a que también cuenta con playas de relativamente reciente difusión nacional como Puerto Peñasco, se buscó hacer del turismo el otro polo del desarrollo, en tal sentido, se promulgó la Ley de Fomento al Turismo, ordenamiento que busca regular y coordinar la participación del sector público y privado en la entidad, además se intensificó la promoción internacional entre Estados fronterizos de los EE. UU., como California o Arizona, de los principales destinos turísticos de la entidad.

Sobre la educación, vale la pena destacar la implementación del “Programa de Inglés en (educación) Primaria” que buscó mejorar la calidad del capital humano de la entidad, sin embargo, por los recursos requeridos se implementará en etapas.

³⁹ GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, (2009). *Sexto Informe de Trabajo*, consultado en <http://sextoinforme.sonora.gob.mx/>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la zona media de la tabla, con un indicador de 0,450 y la décima tercera posición general en la materia. Se infiere una intervención media del sector público en la actividad económica.

Su principal ventaja está definida por el índice de dimensión del sector público, mientras que manifiesta oportunidades de mejora en su índice de regulación.

Regulación: Se ubica en la vigésima posición nacional en el índice de regulación producto de un puntaje de 0,663. Su ventaja está dada por el índice de transparencia, mientras que presenta espacio para la mejora en el índice de comercio.

Comercio: En la entidad las empresas realizan pagos por concepto de trámites y servicios por apertura por un monto que alcanza el 0,3% del PIB, además se requieren 55 días para conseguir el inicio de un nuevo negocio, estos indicadores producen un índice de comercio de 0,511 que envía a la entidad al vigésimo sexto lugar nacional.

Transparencia: Esta entidad del norte del país ha obtenido el noveno lugar en el índice de transparencia. Ello ha sido producto de una evaluación del marco regulatorio en la materia que le ha significado un total de 122,62 puntos, que a su vez se han traducido en un indicador de 0,284 puntos.

Salud: Debido a su ratio de gasto privado en salud que alcanza el 0,97, así como el gasto privado en salud medido como porcentaje del PIB que alcanza el 3%, su posición nacional en el índice de salud es la vigésimo segunda, con un indicador de 0,799.

Educación: Se ubica en el décimo quinto lugar nacional con un puntaje total de 0,824. El principal rezago está establecido en el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal, que llega al 80,74%.

Dimensión del sector público: Mantiene un gobierno estatal de proporciones reducidas, según indica su puntaje de 0,237. Sus principales ventajas están definidas por el índice de balance financiero y el índice de esfuerzo fiscal, mientras que presenta oportunidades de mejora en el índice de deuda pública.

Deuda pública: Alcanza el vigésimo lugar nacional ya que la deuda pública de la entidad medida en términos de PIB alcanza el 0,23%, lo que le produce un indicador de 0,186.

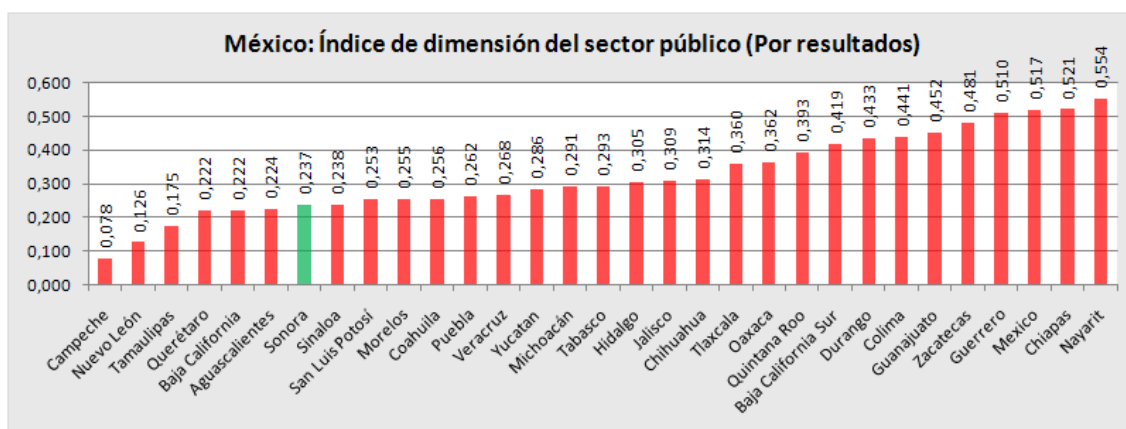
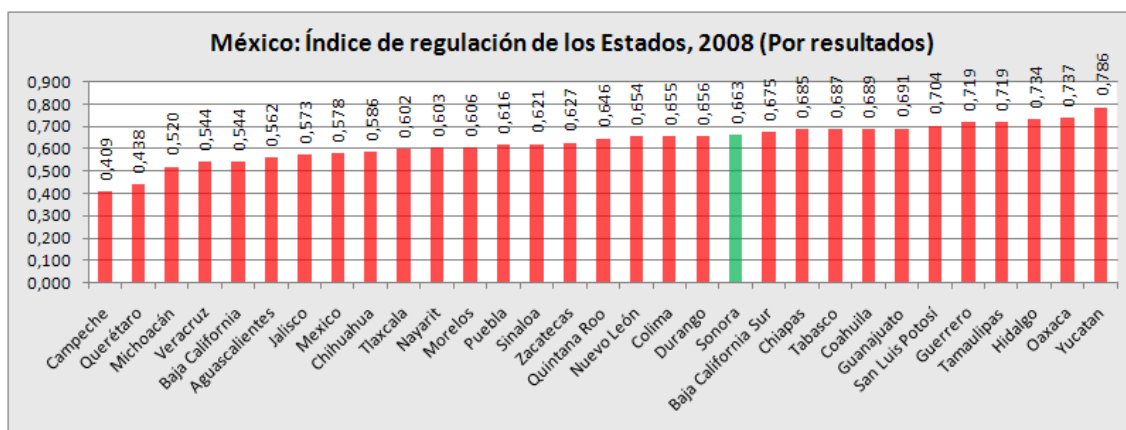
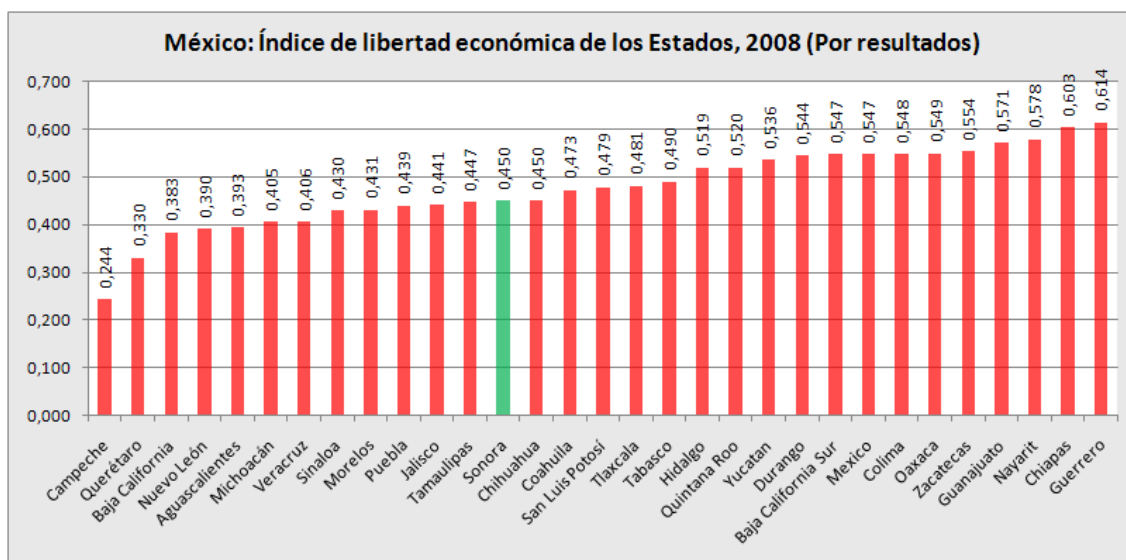
Balance financiero: Obtiene un superávit financiero como porcentaje del PIB del 0,05% y un puntaje total de 0,255 puntos, lo que le otorga el octavo lugar nacional en el índice de balance financiero.

Burocracia estatal: El 1,26% de la población ocupada labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general en el rubro de 0,036 y le otorga el noveno lugar nacional en la materia.

Gasto público: Significa el 11,09% de su PIB, lo que le produce un indicador general de 0,388 y posiciona a la entidad en el duodécimo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,025, lo que se traduce en un indicador general de 0,318 y le otorga la octava posición nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.26. Tabasco.

TABASCO	
Población	2,039,979
Superficie (kilómetros cuadrados)	24,738
PIB per cápita (pesos corrientes)	212,931.5
Tasa de desempleo (%)	3.9
Escolaridad promedio (años)	8.7
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.5
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	3



TABASCO	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
18 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
23 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
16 DE 31	

a) Resumen de políticas.⁴⁰

En el tema de la educación, destacan los esfuerzos de vinculación con el sector productivo, ya que se puso en marcha un programa de estadías profesionales bajo el enfoque del modelo alemán dual, el cual benefició a 2 mil 833 alumnos de sexto semestre de los planteles de educación media superior tecnológica, quienes contaron con la oportunidad de realizar estancias en empresas.

En el rubro de la salud, Las acciones implementadas por el gobierno del Estado se enfocaron en el combate de riesgos sanitarios como el virus de la influenza y el dengue. Así como a llevar los programas regulares de la entidad.

En cuanto al desarrollo del sector productivo, además de los créditos a las empresas normales en el resto de los Estados, con el afán de impulsar el establecimiento e inicio de operaciones de nuevos negocios, se implementaron acciones para la puesta en operación del Sistema de Apertura Rápida de Empresas, que facilita a negocios considerados de bajo riesgo ambiental, obtener en menos de 48 horas los permisos y anuencias municipales. Actualmente el sistema opera en 10 regiones de la entidad, lo que ha permitido crear 66 nuevas empresas y generar 908 empleos permanentes, con una inversión de más de 97 millones 675 mil pesos.

En cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, se establecieron los lineamientos metodológicos que son aplicados por las dependencias que ejercen programas sociales, por lo que a través de un padrón único de beneficiarios de los programas sociales, las diferentes instancias de gobierno cuentan con una base de datos que contiene el conjunto de registros sistematizados, que permiten la referencia geográfica y demás datos del beneficiario que dan lugar a su plena identificación. Con ello se articulan las acciones de política social, sobre un cimiento tecnológico que facilite su procesamiento, análisis y actualización permanente. Ello da pie a una mejor focalización de los programas sociales, así como un desarrollo adecuado de la transparencia gubernamental y rendición de cuentas de los mismos.

⁴⁰ GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, (2009). *Tercer Informe de Gobierno*, consultado en: http://seplan.tabasco.gob.mx/seplanet/subsria_planeacion/3er_informe/3er_informe.php

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Manifiesta una intervención media del sector público en la actividad económica de la entidad, lo anterior se puede inferir por su indicador total de 0,490 y la décima octava posición nacional en el rubro. Su principal ventaja está representada por el índice de dimensión del sector público, mientras que el índice de regulación presenta sus oportunidades de mejora.

Regulación: Su principal ventaja estriba en el índice de transparencia, mientras que observa oportunidades de mejora en el índice de salud. Se ubica en la vigésimo tercera posición nacional en el índice de regulación con un puntaje de 0,687.

Comercio: Son necesarios 57 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio, además son requeridas erogaciones que importan un 0,2% del PIB para la apertura de un nuevo negocio. Ello produce un indicador de 0,450 que posiciona a la entidad en el vigésimo quinto lugar en el índice de comercio.

Transparencia: Esta entidad del Golfo de México ha obtenido el cuarto lugar en el índice de transparencia. Ello ha sido resultado de un indicador de 0,100 puntos que ha sido resultado de una evaluación del marco regulatorio en la materia que le ha significado el total de 142,17 puntos.

Salud: En la entidad, el porcentaje de gasto privado en salud medido como porcentaje del PIB alcanza el 3,5%. Su ratio de gasto privado en salud es de 0,43 y su índice de salud es de 0,987, lo que posiciona a la entidad en el trigésimo lugar en el rubro respectivo.

Educación: En el vigésimo octavo lugar nacional en el índice de educación producto de un puntaje total de 0,953. Coincidentemente, tanto en el indicador de

alumnos, de docentes y escuelas, obtiene la misma posición, con porcentajes de 93,75%, 89,54% y 92,81% respectivamente.

Dimensión del sector público: Se ubica en la mediana nacional como consecuencia de su indicador de 0,293. Su principal ventaja está definida por el índice de esfuerzo fiscal, mientras que presenta áreas de desarrollo en el índice de deuda pública.

Deuda pública: Alcanza el vigésimo noveno lugar nacional en la materia producto de un indicador de 0,557 que es producto de una deuda pública medida en porcentaje del PIB de 0,68%.

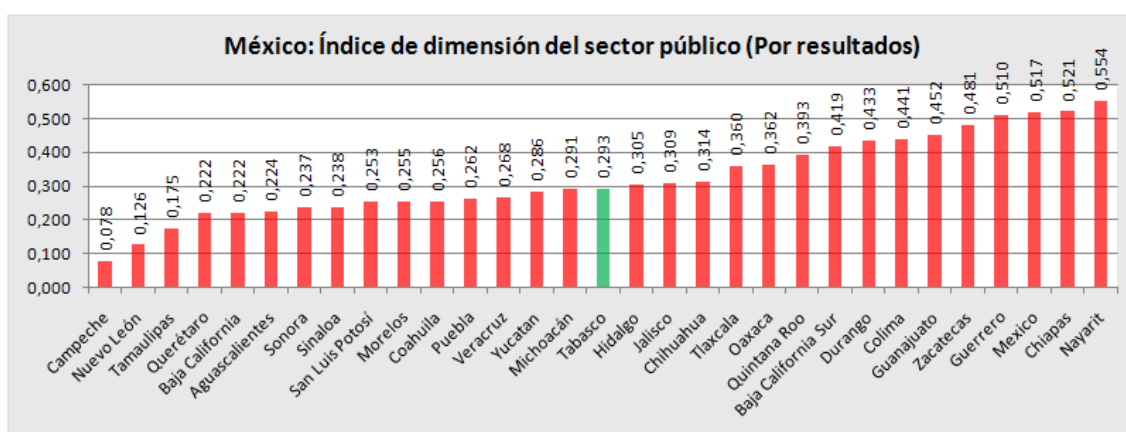
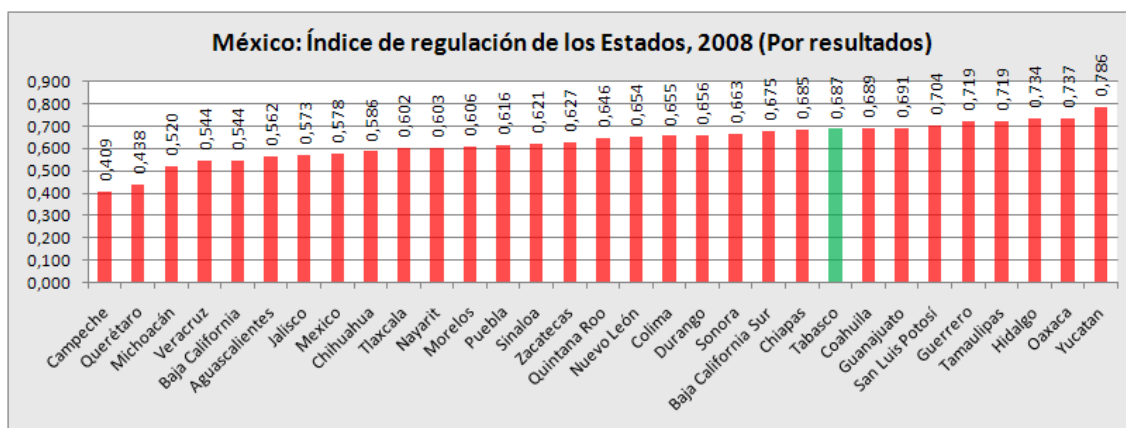
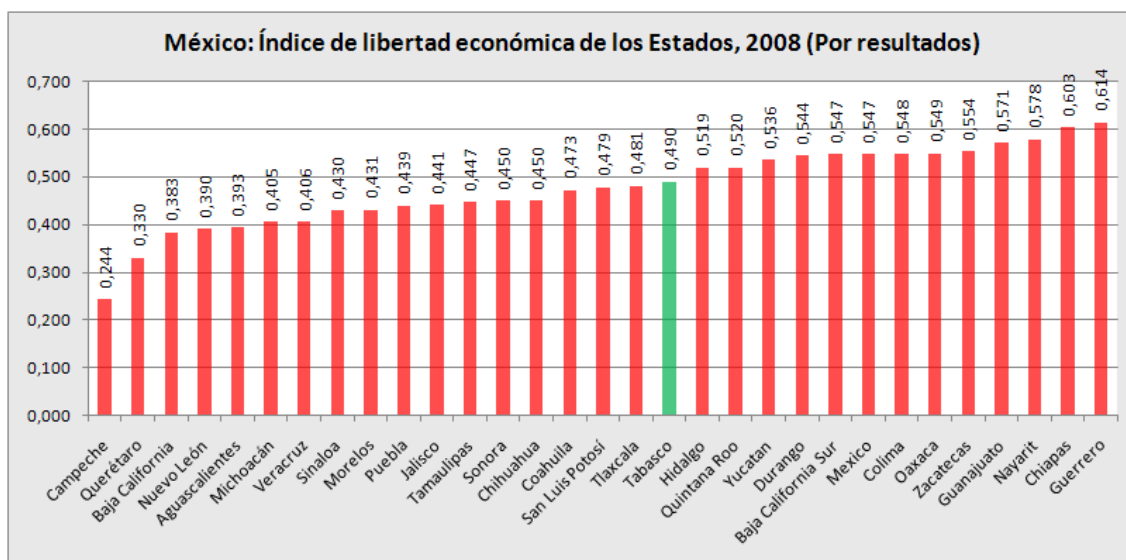
Balance financiero: Su puntaje total de 0,287 es producido por un superávit financiero como porcentaje del PIB del 0,02%, debido a ello alcanza décimo tercer lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: El 6,06% de la población ocupada trabaja para el sector público de la entidad, lo que le proporciona un indicador general de 0,319 y el vigésimo octavo lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Representa el 8,62% del PIB en la entidad, lo que genera un indicador de 0,282 que otorga la sexta posición nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Este rubro está marcado por un índice de Frank de 0,003, lo que se traduce en un indicador de esfuerzo fiscal de 0,022 y le vale para el segundo lugar nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.27. Tamaulipas.

TAMAULIPAS	
Población	3,154,947
Superficie (kilómetros cuadrados)	80,175
PIB per cápita (pesos corrientes)	128,454.9
Tasa de desempleo (%)	4.5
Escolaridad promedio (años)	9.3
Unidades médicas por 10.000 hab.	1.9
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.8



TAMAULIPAS	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
12 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
28 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
3 DE 31	

a) Resumen de políticas.⁴¹

En educación, vale la pena resaltar la formalización de convenios con empresas, mediante los cuales se ha vinculado a las universidades tecnológicas del estado de Tamaulipas con el sector productivo para que realicen estadías y capacitación de sus alumnos, que derivan en mejores oportunidades para su inserción en el mercado laboral.

En el ámbito de la salud, es importante señalar los avances registrados en cuanto la participación público-privada. En este sentido, se firmó un convenio de colaboración con una empresa especializada en la obtención de células madre, para la creación de un banco y un centro de biotecnología. También, empresas del estado han aportado más de 59 mil sobres de suplementos alimenticios, en la campaña estatal para la prevención y el tratamiento de la desnutrición infantil.

En cuanto a la promoción e la actividad económica, cabe resaltar que se lograron referenciar de manera geográfica los parques industriales del Estado y se incorporaron a la plataforma IRIS-WEB para dar a conocer a los empresarios nacionales y extranjeros, las características específicas de cada parque y sus ventajas logísticas. Además, se continuaron los trabajos del sistema de apertura rápida de empresas, otorgando mil 806 actas constitutivas, lo que se ha traducido en la generación de 11 mil empleos.

En cuanto a la mejora en la eficiencia del sector público, se emprendió un proceso de descentralización de la nueva institución registral y catastral con miras a fortalecer la inversión, certidumbre y seguridad jurídica de los bienes inmuebles. Por último, mediante el sistema de control y evaluación de la gestión pública del estado, se realizaron programas preventivos y de fiscalización.

⁴¹ GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://quintoinforme.tamaulipas.gob.mx/>

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la zona media de la tabla con un indicador de 0,447 y la duodécima posición nacional en el rubro. Manifiesta desequilibrios en los indicadores, ya que mientras en el índice de regulación se localiza en el vigésimo octavo lugar nacional, en el índice de dimensión del sector público alcanza una de las tres primeras posiciones en el país.

Regulación: En el índice de comercio presenta ventajas, mientras que en el índice de educación presenta áreas de oportunidad. Se ubica en la vigésimo octava posición nacional en el índice de regulación, con un indicador de 0,719.

Comercio: Alcanza el octavo lugar en el índice de comercio producto de un puntaje de 0,233. Ello ha sido producto de los 30 días que se requieren en promedio para la apertura de un negocio y al 0,3% del PIB que las empresas costean por motivo de trámites y servicios por las aperturas.

Transparencia: Entidad fronteriza que ha obtenido el vigésimo octavo lugar en el indicador de transparencia. Ello ha sido resultado de un indicador en la materia de 0,706 que es producto de una evaluación del marco regulatorio de la transparencia y rendición de cuentas que produjo un total de 78 puntos.

Salud: El gasto privado en salud como porcentaje del PIB alcanza el 2,3%, mientras que su ratio de gasto privado en salud es del 0,74. Debido a ello, se posiciona en el vigésimo sexto lugar nacional en el índice de salud con un puntaje de 0,877.

Educación: Su principal rezago se ubica en el porcentaje de alumnos atendidos por escuelas a cargo del presupuesto estatal, que alcanza el 88,72%. Tal porcentaje ubica a la entidad en el décimo octavo lugar nacional en el índice de educación, con 0,844 puntos.

Dimensión del sector público: Cuenta con un gobierno estatal relativamente pequeño, según indica su puntaje total de 0,175 y su tercer lugar nacional en la materia. Su principal ventaja está definida por el índice de gasto público, mientras que presenta oportunidades de mejora en el índice de deuda pública.

Deuda pública: Obtiene el noveno lugar nacional en el índice de deuda pública producto de un indicador de 0,054 que es consecuencia de un porcentaje de 0,07% del PIB.

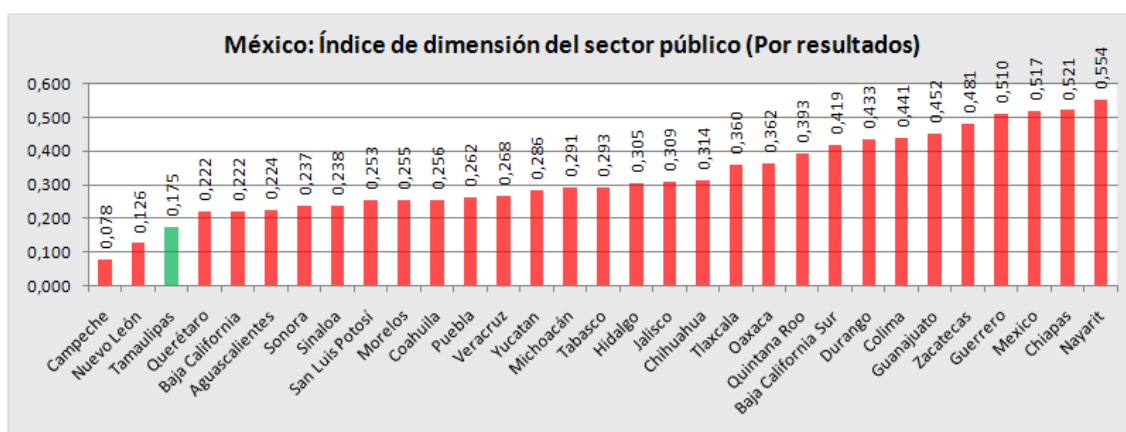
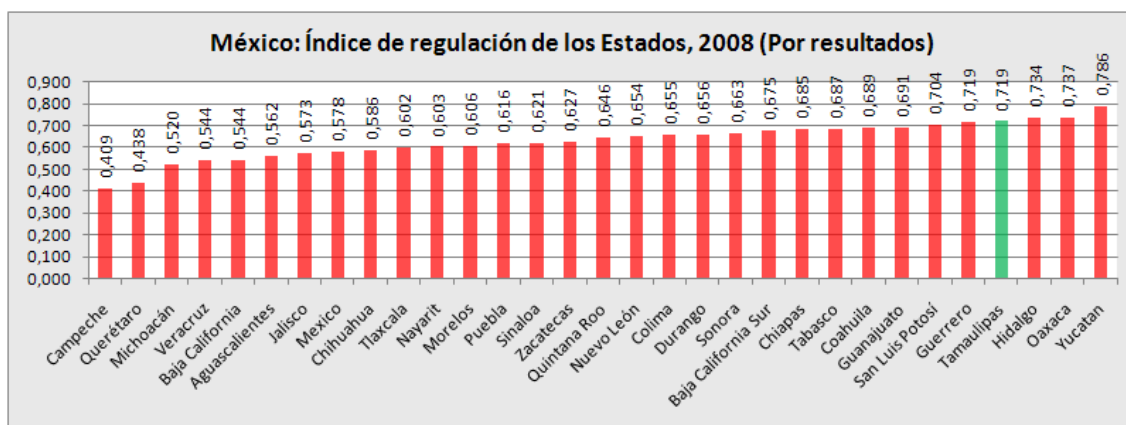
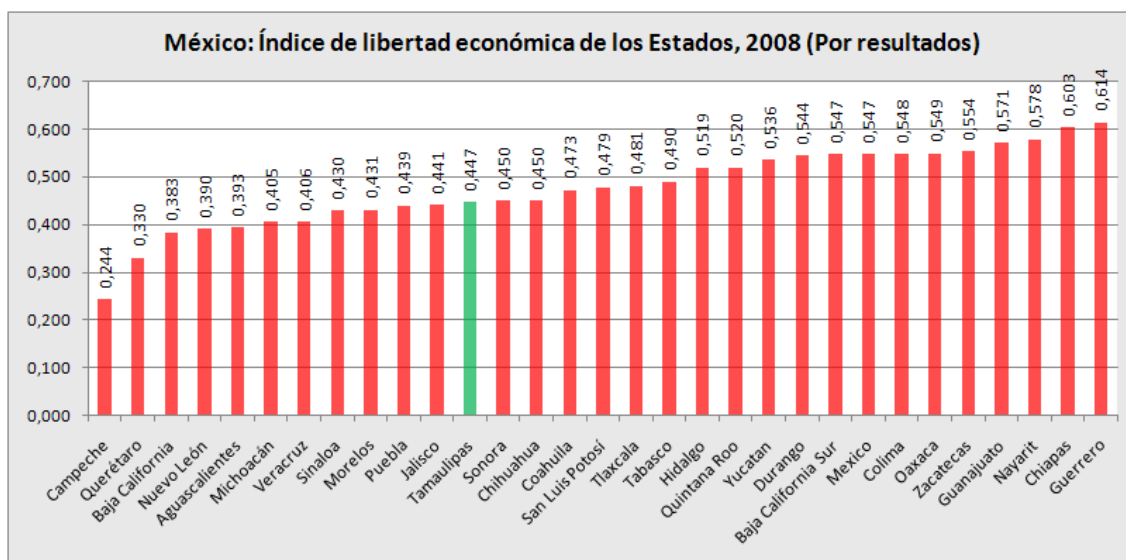
Balance financiero: Cuenta con un superávit financiero como porcentaje del PIB del 0,06%, lo cual le produce un indicador general en la materia de 0,250 y le otorga el sexto lugar nacional en el rubro.

Burocracia estatal: El 1,04% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le produce un puntaje de 0,023 que le otorga el sexto lugar nacional en la materia.

Gasto público: Representa el 8,27% del PIB de la entidad, lo que es traducido en un indicador general de 0,267 y además produce un cuarto lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el quinto lugar nacional producto de un indicador de 0,279 que es resultado de un índice de Frank de 0,222.

c) Resultados gráficos.



4.14.28. Tlaxcala.

TLAXCALA	
Población	1,119,819
Superficie (kilómetros cuadrados)	3,991
PIB per cápita (pesos corrientes)	54,797.8
Tasa de desempleo (%)	5.5
Escolaridad promedio (años)	8.9
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.4
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	2.5



TLAXCALA	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
17 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
10 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
20 DE 31	

a) Resumen de políticas.⁴²

En el rubro de educación, destaca la vinculación con el sector productivo, ya que se han suscrito 32 convenios con empresas e instituciones, al mismo tiempo, se mantienen vigentes 290 más con empresas y cuyo fin es la realización de visitas, estancias y estadías de los estudiantes en las mismas. Además, con la operación de un centro integral de incubación de desarrollo empresarial, se han desarrollado 19 proyectos productivos.

En cuanto a la salud, la estrategia más importante fue el establecimiento del Plan Maestro de Salud, el cual permitió diseñar las políticas públicas orientadas hacia la protección y promoción de la salud, sustentada en la construcción de infraestructura, inhibir y prevenir la presencia de enfermedades y contribuir al equilibrio físico y mental de las personas.

Respecto de las acciones para la promoción del sector productivo, se han establecido mecanismos para generar las condiciones para reactivar el campo, generar nuevas fuentes de empleo y propiciar el crecimiento del mercado interno, a través, de una diversificación y competitividad de los sectores productivos y la atracción de nuevas inversiones.

En cuanto a la mejora de la eficiencia del sector público, una de las estrategias implementadas, es el rediseño de las medidas de racionalidad y disciplina presupuestal para optimizar los recursos públicos. Además, se creó un sistema integral para el control de adquisiciones, con el propósito de transparentar las actividades en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Finalmente, se ha iniciado la operación del “TRAMITLAX”, estrategia gubernamental mediante la cual se brinda a la sociedad información relativa a requisitos, costos, tiempos, responsables y lugares de atención de más de 600 trámites y servicios que brinda la administración, el cual opera a través de un centro de

⁴² GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.tlaxcala.gob.mx/gobernador/imagenes/quinto-red.pdf>

atención con la línea telefónica gratuita, donde el personal asignado, ofrece de manera expedita y actualizada, la información sobre los trámites y servicios estatales.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Con un puntaje total de 0,481 alcanza la décimo séptima posición nacional en el rubro, lo que sugiere una intervención media del sector público en la actividad económica. Su principal ventaja la proporciona el índice de regulación, mientras que en el índice de dimensión del sector público se encuentra su principal área de oportunidad.

Regulación: Es el décimo lugar nacional en el índice de regulación producto de un puntaje de 0,602. Observa espacio para el desarrollo de manera conjunta en los índices de de salud y educación, mientras que en su principal ventaja está provista por el índice de seguridad.

Comercio: En la entidad se requieren de 30 días para la apertura de un nuevo negocio, además es necesario que las empresas costeen un monto igual al 0,4% del PIB por concepto de trámites y servicios, ello constituye un indicador de 0,317 y posiciona a la entidad en el décimo cuarto lugar en el índice de comercio.

Tlaxcala: En la evaluación del marco regulatorio en la materia, la entidad ha obtenido 100,46 puntos, que se traducen en un indicador de transparencia de 0,494 y posiciona a la entidad en el décimo sexto lugar nacional.

Salud: Su ratio de gasto privado en salud es de 1,11, mientras que su proporción de gasto privado en salud como porcentaje del PIB es de 5%, lo que ubica a la entidad en el décimo séptimo lugar nacional en el índice de salud con un puntaje de 0,749.

Educación: Se ubica en el décimo séptimo lugar nacional en el índice de educación producto de un total de 0,839 puntos. Su principal rezago estriba en el

porcentaje de alumnos atendidos por escuelas a cargo del presupuesto estatal, que alcanza el 90,39%.

Dimensión del sector público: Su puntaje total es de 0,360 por lo que se ubica en la vigésima posición nacional. Su principal ventaja está definida por el índice de balance financiero, mientras que presenta áreas de oportunidad en el índice de gasto público.

Deuda pública: Medida en términos de su PIB importa el 0,35%, lo que le otorga el vigésimo séptimo lugar nacional en la materia mediante un indicador de 0,288.

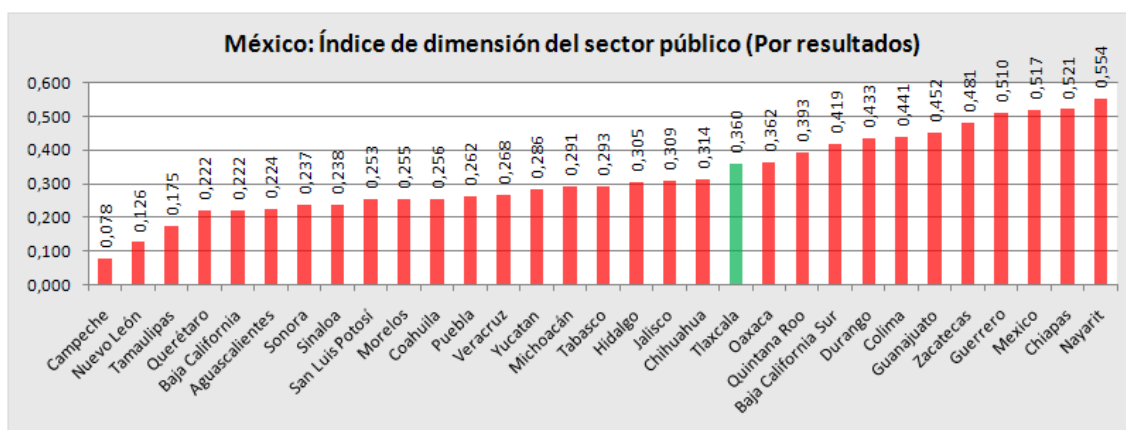
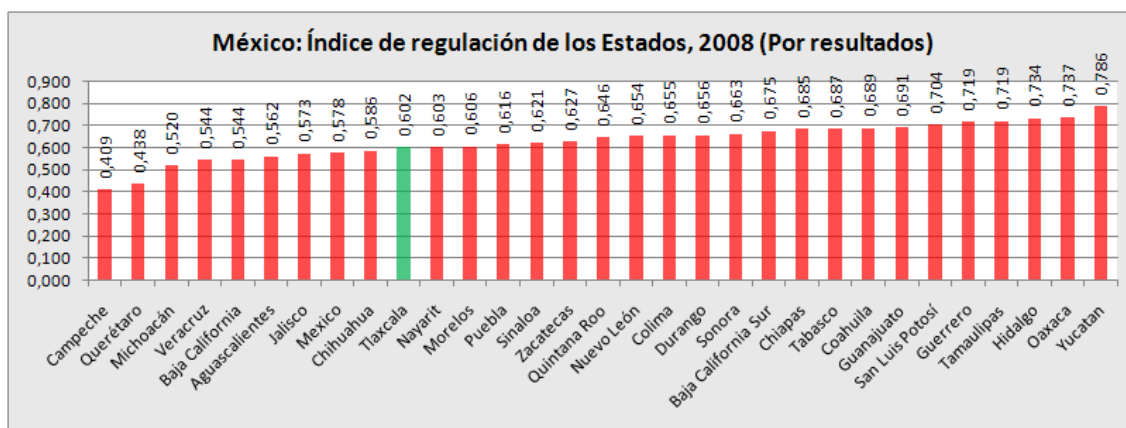
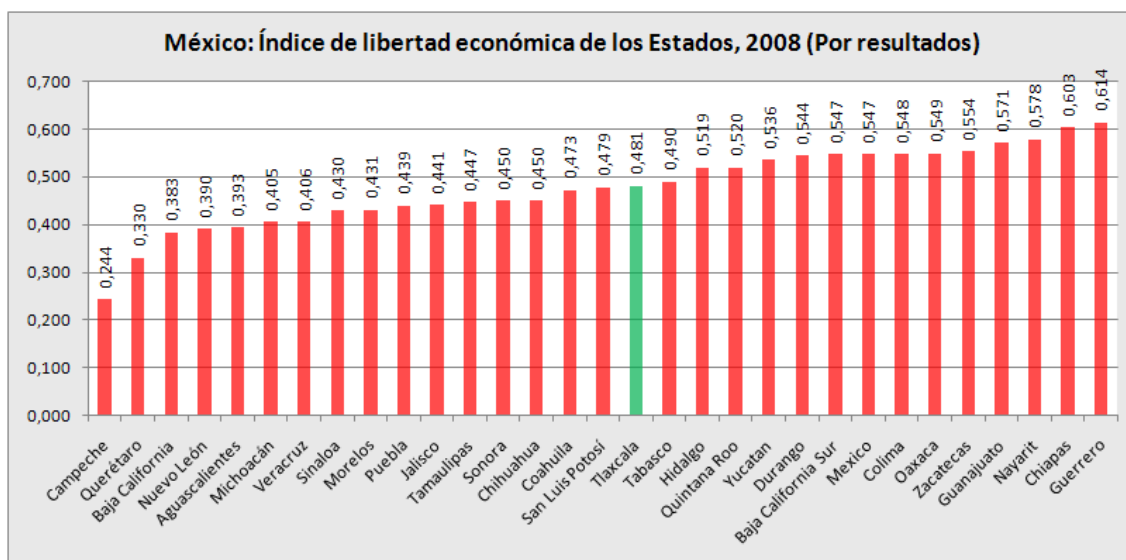
Balance financiero: Obtiene el primer lugar nacional en el índice relativo debido a que mantuvo un superávit financiero como porcentaje de su PIB por un monto del 0,34%.

Burocracia estatal: El 1,43% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general en la materia de 0,046 y un décimo lugar nacional en el rubro.

Gasto público: Representa el 22,78% de su PIB, por lo que obtiene el vigésimo noveno lugar en el índice de gasto público mediante un puntaje total de 0,886.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,045 y su puntaje general es de 0,577 lo cual es causa de su vigésimo cuarto lugar nacional en el rubro.

c) Resultados gráficos.



4.14.29. Veracruz.

VERACRUZ	
Población	7,261,119
Superficie (kilómetros cuadrados)	71,820
PIB per cápita (pesos corrientes)	74,607.3
Tasa de desempleo (%)	2
Escolaridad promedio (años)	7.7
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.5
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	9.5



VERACRUZ	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
7 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
4 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
13 DE 31	

a) Resumen de políticas.⁴³

En Veracruz, en el año informado se continuó por el sendero de la búsqueda del crecimiento económico que se traduzca en desarrollo social mediante la instrumentación de políticas públicas que atiendan los criterios más rigurosos de transparencia, participación democrática y rendición de cuentas. En los índices elaborados en esta investigación, se tiene que la transparencia ha sido la norma en las conductas del sector público; una prueba de ello, ha sido el programa Manos Limpias y Cuentas Claras, a través del cual se realizaron casi tres centenas de auditorías.

En la búsqueda del crecimiento económico se han regionalizado y municipalizado las estrategias de gobierno, ya que cada parte de la geografía estatal presenta sus propios diagnósticos y retos para la consecución del desarrollo. La coordinación de las políticas económicas y de asistencia social a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia ha sido fundamental en el Estado para la disminución de la vulnerabilidad económica.

En el tema de la regulación, se ha trabajado en la disminución de plazos y costos de trámites gubernamentales, así como en la eliminación de ordenamientos que limitaban el surgimiento de nuevas empresas. El programa de Gobierno Electrónico implementado en el Estado ha sido clave en la mejora de la regulación de la actividad económica. Además, los 15 Centros de Desarrollo Empresarial, los 8 Centros de Apertura Rápida de Empresas y las labores del Instituto Veracruzano para la Calidad y la Competitividad han participado en la creación de nuevas empresas.

El sector turismo es una fuente muy importante de ingresos para el Estado, en tal sentido, se modernizó la infraestructura turística y se concretaron importantes acuerdos con el sector privado nacional e internacional para la ejecución de inversiones productivas. En 2008 también se gestionaron inversiones por parte del Gobierno Estatal en rubros distintos al turismo, como en el ramo siderúrgico, donde se consiguieron inversiones internacionales por varios cientos de millones de dólares.

⁴³ GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, México: Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Asimismo, Veracruz permanece en los primeros lugares en la producción nacional de naranja, piña, papaya, caña de azúcar y café, entre otros cultivos. También se mantiene como el principal productor nacional de carne de bovino y ave. Ello solo es posible mediante la activa participación del sector privado.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Se ubica en la parte alta de la tabla debido a una séptima posición nacional y un puntaje total de 0,406. Manifiesta amplias ventajas en el índice de regulación, mientras que puede mejorar en el índice de dimensión del sector público, donde se ubica en la zona media a nivel nacional.

Regulación: Es el primer lugar en el índice de transparencia gubernamental, lo que posiciona a la entidad en el cuarto lugar nacional en el índice de regulación con un puntaje de 0,544. Su espacio de mejora viene dado por el índice de educación.

Comercio: Alcanza el séptimo lugar nacional en el índice de comercio producto de un puntaje de 0,228. Los 37 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio, así como el 0,2% del PIB que las empresas pagan por concepto de trámites y servicios inherentes a la apertura componen el puntaje mencionado.

Transparencia: Primer lugar en transparencia. Esta posición es el resultado de una evaluación del marco regulatorio en la materia que arrojó un total de 152,75 puntos y que a su vez se han traducido en un indicador de transparencia de 0,000.

Salud: Se posiciona en el duodécimo lugar en el índice de salud a nivel nacional con un puntaje de 0,708. Su ratio de gasto privado es de 1,23 y es producto de un porcentaje de gasto privado como porcentaje del PIB de 5,4%.

Educación: Se posiciona en el vigésimo séptimo lugar con un índice de educación de 0,931. Como área de oportunidad se cuenta el porcentaje de escuelas a cargo del presupuesto estatal, donde la cifra llega a 92,22% y hace que se disminuyan posiciones en el índice total.

Dimensión del sector público: Las proporciones de su gobierno son menores a las de la mediana, según indica su puntaje total de 0,268 y su décimo tercer lugar nacional en el rubro. Su principal ventaja está definida por el índice de deuda pública, mientras que presenta áreas de mejora en el índice de burocracia estatal.

Deuda pública: Sin deuda pública como porcentaje del PIB, obtiene el primer lugar nacional en el indicador de deuda pública con un puntaje de 0,000.

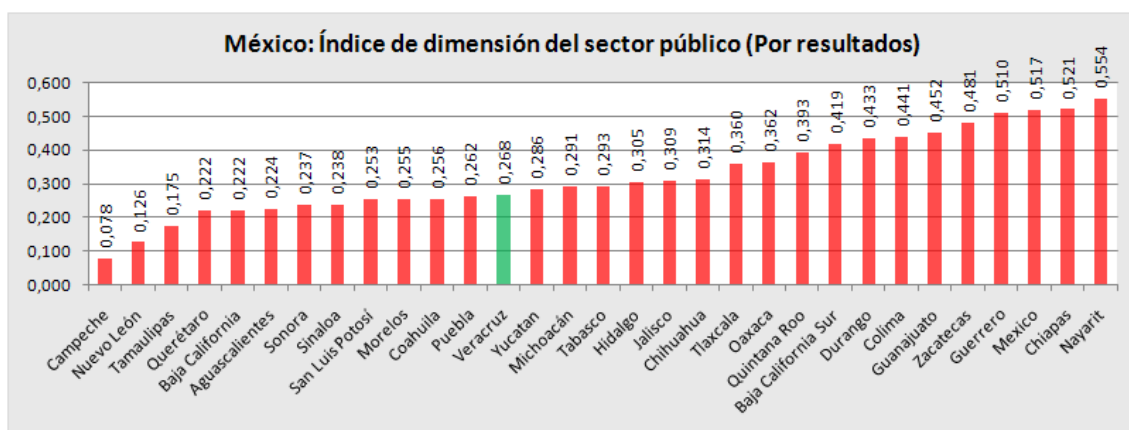
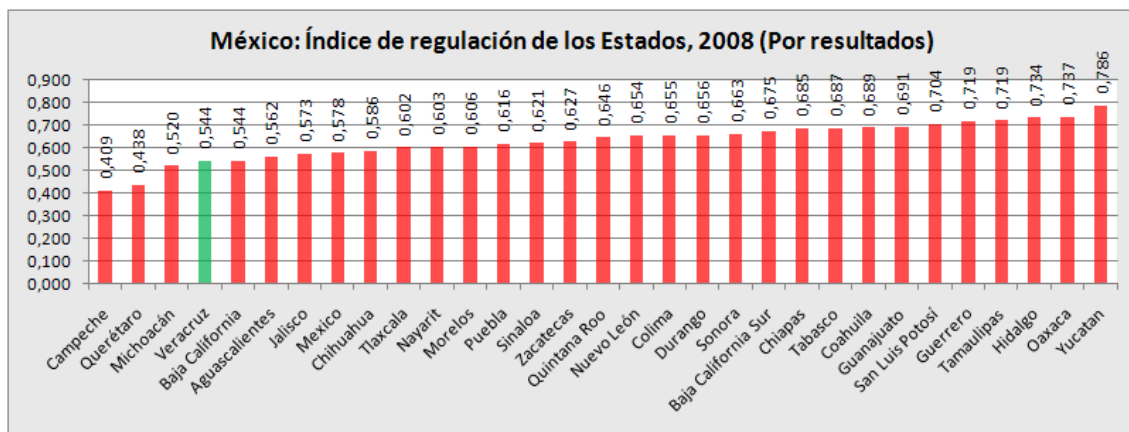
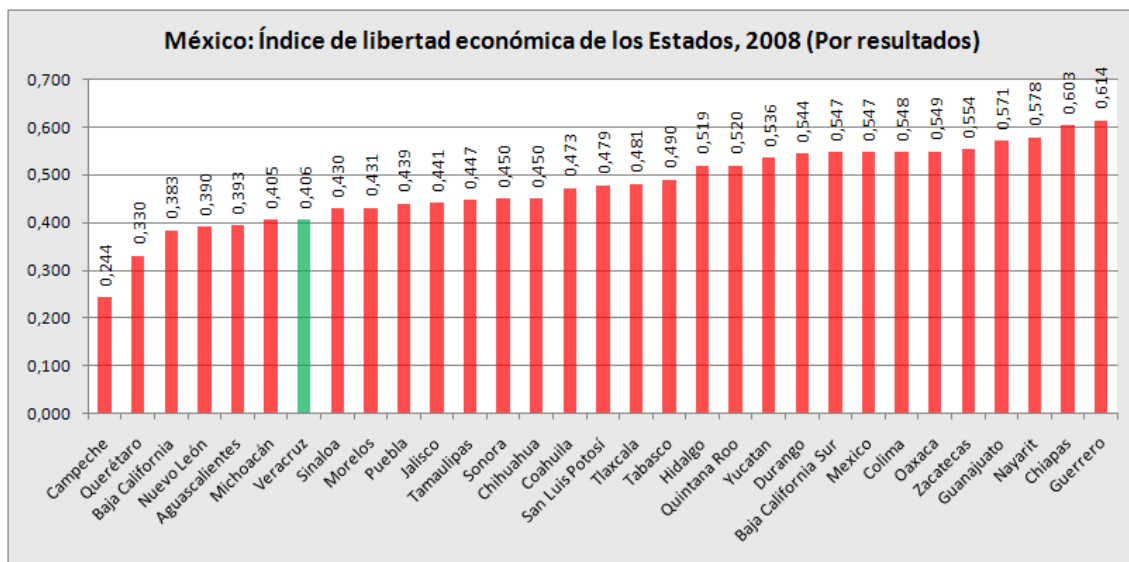
Balance financiero: Su balance es equilibrado, por lo que obtiene el vigésimo primer lugar nacional en el rubro y un puntaje de 0,304.

Burocracia estatal: El 2,84% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le produce un índice general de 0,129 y el vigésimo segundo lugar nacional en la materia.

Gasto público: Significa el 13,48% de su PIB, lo que le produce un puntaje total de 0,490 y además otorga el vigésimo lugar nacional en el índice de gasto público.

Esfuerzo fiscal: Su índice de Frank es de 0,033, lo que posiciona a la entidad en el décimo quinto lugar nacional como consecuencia de un indicador general de 0,419.

c) Resultados gráficos.



4.14.30. Yucatán.

YUCATÁN	
Población	1,898,086
Superficie (kilómetros cuadrados)	39,612
PIB per cápita (pesos corrientes)	83,366.1
Tasa de desempleo (%)	2.3
Escolaridad promedio (años)	8.1
Unidades médicas por 10.000 hab.	2.1
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	33.5



YUCATÁN	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
21 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
31 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
14 DE 31	

a) Resumen de políticas.⁴⁴

El Estado concentra una de las proporciones más importantes de poblaciones indígenas del país, por lo que las políticas públicas dirigidas a este sector ocupan una gran porción de los programas, ya que los presupuestos educativos están orientados principalmente a la cobertura educativa de tales grupos sociales. En cuanto a la vinculación del Estado con el sector privado, cabe resaltar la firma de un convenio con más de 60 empresas del ramo tecnológico, con el fin de colocar en puestos de trabajo a los egresados de los niveles educativos medio superior y superior, formados en tecnologías de la información, ingenierías y administración.

Con el objeto de establecer vínculos entre el sector productivo del Estado y las instituciones educativas, se destaca la realización de ferias de emprendedores, por lo que en el período revisado se realizaron 19 eventos, con la participación de más de 2 500 jóvenes.

En el rubro de la salud, la diferenciación por segmento, edad y género para la aplicación de las acciones y objetivos en este rubro ha sido la principal estrategia para la elaboración de una política pública en el ramo. En la cobertura en salud de las comunidades mayas, destaca la firma de convenios con médicos especialistas del sector privado, en el cual los galenos aceptaron brindar consultas gratuitas a la población de escasos recursos, llegando en el período que se informa a más de 500 consultas.

Referente a la eficiencia del sector público, es importante mencionar que en el período revisado fue aprobada una ley de proyectos para la prestación de servicios, la cual hace posible la inversión privada en la ejecución de obras públicas, sin que ello constituya deuda pública. También se aprobó una ley de deuda pública, que contiene disposiciones tendientes a clarificar los procedimientos para que el Estado y los ayuntamientos tengan acceso a créditos destinados a promover el desarrollo económico de la entidad. Además, cabe señalar que el 24 de abril de 2008 inició sus funciones un instituto estatal para el combate a la corrupción, la cual es la instancia facultada para recibir, analizar y responder a las quejas ciudadanas respecto a presuntos actos de corrupción atribuidos a los funcionarios que laboran en la

⁴⁴ GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, (2009). *Segundo Informe de Gobierno*, consultado en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.htm

administración pública del Estado. En el período que se informa, se iniciaron 56 auditorías en 18 entidades de la administración, de las cuales 14 fueron de programa, 34 de seguimiento, cinco de sistemas y tres auditorías especiales.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Alcanza la vigésimo primera posición nacional en el rubro producto de un indicador general en la materia de 0,536 que infiere que en la entidad hay una intervención media del sector público en la economía. Su principal ventaja está representada por el índice de dimensión del sector público, mientras que tiene como área para el desarrollo el índice de regulación.

Regulación: Obtiene la trigésimo primer posición en el índice de regulación como consecuencia de un puntaje de 0,786. Su principal ventaja está definida por el índice de educación, mientras que presenta espacios de mejora en los índices de sanidad y seguridad.

Comercio: Obtuvo un indicador de 0,583 que ubica a la entidad en la vigésimo octava posición nacional, ello ha sido producto de los 69 días en promedio que se requieren para la apertura de un negocio, que por cierto es la cifra más alta en el país, y el 0,2% del PIB que las empresas deben costear por concepto de trámites y servicios de apertura.

Transparencia: Esta entidad peninsular ha obtenido un indicador de transparencia de 0,604 puntos, que han sido producto de una evaluación del marco regulatorio en la materia y que significó 88,83 puntos que han posicionado a la entidad en el vigésimo tercer lugar nacional en la materia.

Salud: El indicador obtenido de 0,958 en el índice de salud posiciona a la entidad en el vigésimo noveno lugar nacional. Su ratio de gasto privado en salud es de 0,51 y el porcentaje de gasto privado en salud en términos de PIB alcanza el 2,4%.

Educación: Su principal rezago se ubica en el porcentaje de alumnos atendidos por escuelas con cargo al presupuesto estatal, con un total de 87,62%. Por lo cual obtiene un indicador general en el índice de educación por un total de 0,818 puntos, que ubican a la entidad en el décimo cuarto lugar nacional.

Dimensión del sector público: Se ubica en el décimo cuarto lugar nacional en el rubro, producto de un puntaje de 0,286. Su principal ventaja está definida por el índice de deuda pública, mientras que presenta áreas de desarrollo en el índice de burocracia estatal. Su puntaje total ubica a su gobierno como de proporciones medianas.

Deuda pública: Su deuda pública importa un 0,05% del PIB, por ello obtiene un indicador de 0,043 y alcanza el quinto lugar nacional en el rubro.

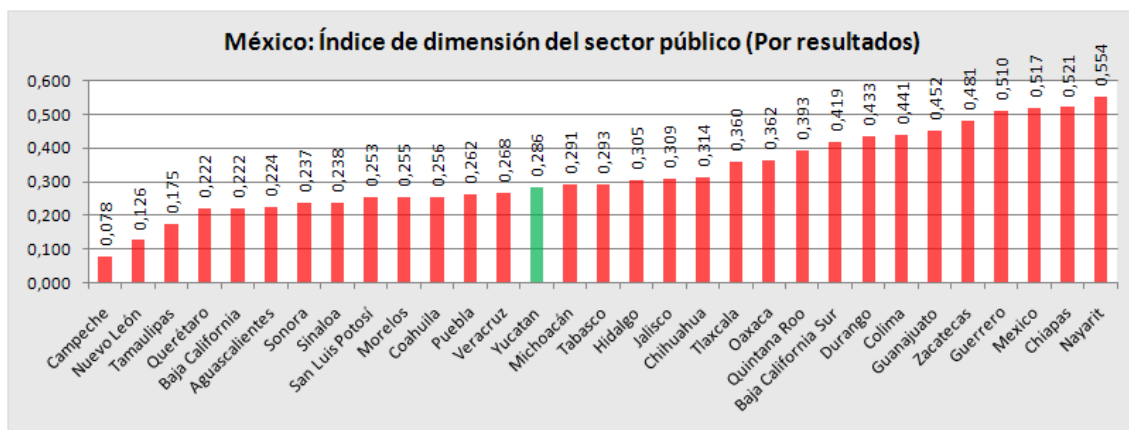
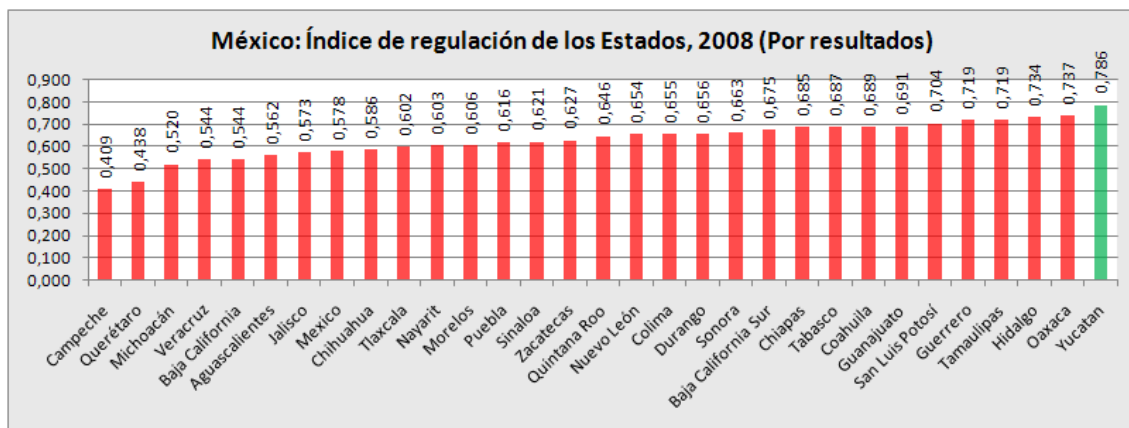
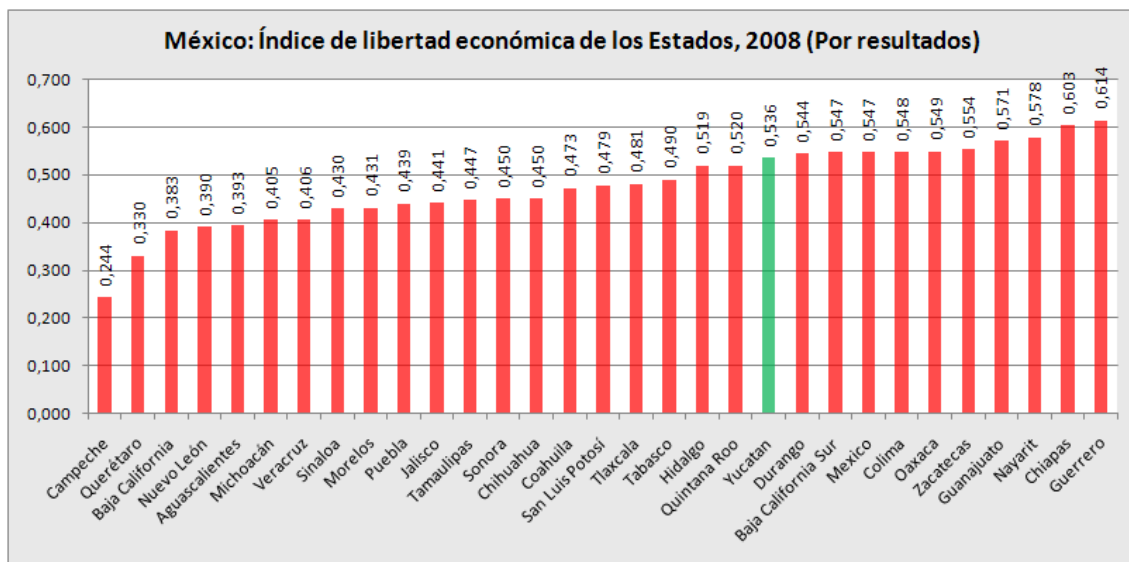
Balance financiero: Su déficit financiero como porcentaje del PIB es de 0,12%, lo que le proporciona un puntaje total de 0,407 y posiciona a la entidad en el vigésimo tercer lugar nacional en la materia.

Burocracia estatal: El 4,04% de la población ocupada en la entidad labora para el sector público estatal, lo que le produce un indicador general de 0,200 y un vigésimo cuarto lugar nacional en el índice de burocracia estatal.

Gasto público: Se ubica en la mediana nacional en el rubro, ya que el total de las erogaciones del sector público de la entidad representan el 11,84% de su PIB. Su indicador total de gasto público es de 0,419.

Esfuerzo fiscal: Obtiene el undécimo lugar nacional en el rubro producto de un índice de Frank de 0,029 y un puntaje general en la materia de 0,358.

c) Resultados gráficos.



4.14.31. Zacatecas.

ZACATECAS	
Población	1,381,399
Superficie (kilómetros cuadrados)	75,539
PIB per cápita (pesos corrientes)	65,616.8
Tasa de desempleo (%)	4
Escolaridad promedio (años)	7.8
Unidades médicas por 10.000 hab.	3.3
% de población de 5 años o más hablante de lengua indígena	0.3



ZACATECAS	
ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA	
27 DE 31	
ÍNDICE DE REGULACIÓN	
15 DE 31	
ÍNDICE DE DIMENSIÓN DEL SECTOR PÚBLICO	
27 DE 31	

a) **Resumen de políticas.**⁴⁵

En el tema de la educación, el gobierno del Estado, ha escogido como estrategia principal mejorar la calidad de los servicios educativos y consolidar la cobertura, construyendo infraestructura física en todos los niveles educativos así como el desarrollo de nuevos planes y programas educativos.

En el rubro de la salud, la participación del sector privado se ha establecido por medio de mecanismos de subrogación, entre los que destacan la prestación de servicios en materia de estudios de laboratorio nuclear, sesiones de radioterapia y tratamientos psiquiátricos.

En cuanto al desarrollo del sector privado, las estrategias emprendidas estuvieron marcadas por la articulación de incentivos fiscales y la capacitación industrial y laboral. También han sido adquiridos terrenos y se habilitaron los parques industriales actuales. Por otro lado, se implementó un sistema de información económica, el cual contiene monografías de cada uno de los municipios. También se trabajó en la disminución de tiempos en la apertura de nuevos negocios.

Por último, en cuanto a los programas de mejora en la eficiencia en el sector público, destacan las revisiones y adecuaciones de instrumentos legales, tales como programas, guías y manuales de organización. En este sentido destaca la formulación del manual de organización de la Contraloría Interna del gobierno del estado. También, se actualizaron las estructuras orgánico-funcionales de 16 dependencias del poder central.

Por primera vez, se elaboró un anteproyecto de presupuesto por programa, subprograma, proyecto y proceso, asignando presupuestos a cada una de las unidades administrativas, por lo que se puede manejar un control presupuestal por

⁴⁵ GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.zacatecas.gob.mx/informes.php>

área administrativa a nivel de direcciones y subdirecciones. También se implementó un nuevo sistema de control presupuestal interno, el cual permite conocer, al detalle, el gasto por área, comparando lo asignado contra lo ejercido en el período.

b) Índice de libertad económica.

Libertad económica: Mientras en el índice de regulación se ubica en la media nacional, en el índice de dimensión del sector público obtiene resultados menos favorables. Ello produce un puntaje total de 0,554 que otorga el vigésimo séptimo lugar nacional en el rubro y que indica que en la entidad hay una relativamente alta intervención del sector público en la economía.

Regulación: Posee una regulación que se ubica en la zona media a nivel nacional, ya que su puntaje es de 0,627. Su principal área para desarrollar está provista por el índice de educación, mientras que su ventaja más importante es provista por el índice de salud.

Comercio: En la entidad, las empresas deben costear el equivalente al 0,4% del PIB por concepto de trámites y servicios, aunado a los 34 días en promedio para la apertura de un nuevo negocio, se obtiene un indicador de 0,361, que posiciona a la entidad en el décimo noveno lugar nacional en el índice de comercio.

Transparencia: Ha obtenido el décimo primer lugar nacional en el índice de transparencia. Ello ha sido consecuencia de los 112,90 puntos obtenidos en la revisión del marco regulatorio en la materia, que a su vez se han traducido en 0,376 puntos en el indicador respectivo.

Sanidad: Con un ratio de gasto privado de 1,56 producto de un porcentaje de gasto privado en salud como porcentaje del PIB del 7,5% se ubica en la quinta posición nacional del índice de salud con un puntaje de 0,591.

Educación: En los indicadores parciales de alumnos, docentes y escuelas se posiciona en el mismo escalón; es decir, en el vigésimo noveno lugar, ello es producto de porcentajes respectivos de 94,98%, 90,98% y 95,23, que juntos producen un indicador total de 0,976.

Dimensión del sector público: Su principal área para desarrollo está definida por el índice de balance financiero, mientras que su principal ventaja está representada por el índice de deuda pública. Obtiene un puntaje total en el rubro de 0,481 que es traducido en el vigésimo séptimo lugar nacional.

Deuda pública: Su séptimo lugar nacional en el rubro es producto de un indicador de 0,049 y una deuda pública como porcentaje del PIB de 0,06%.

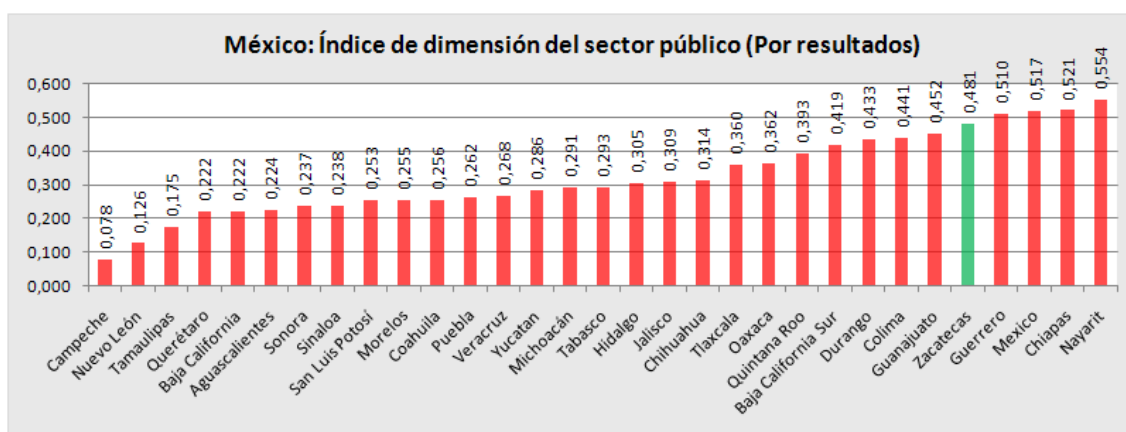
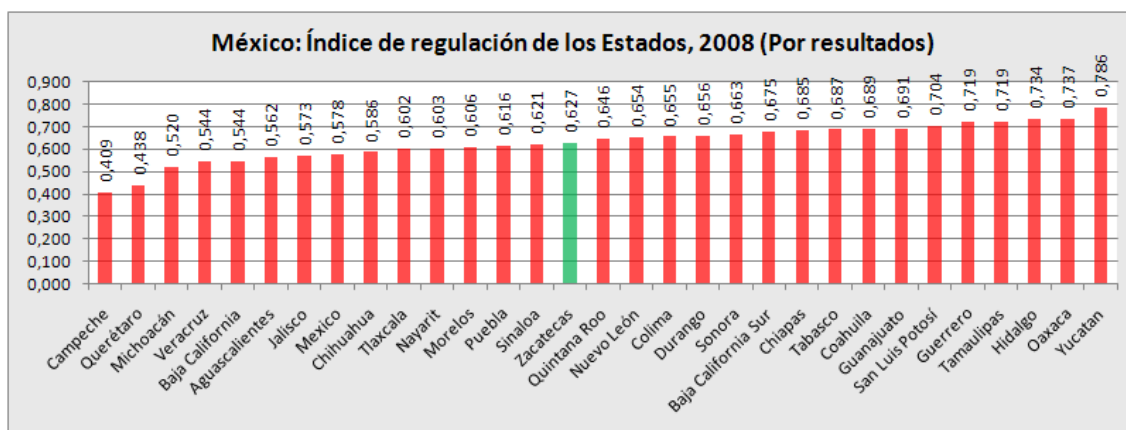
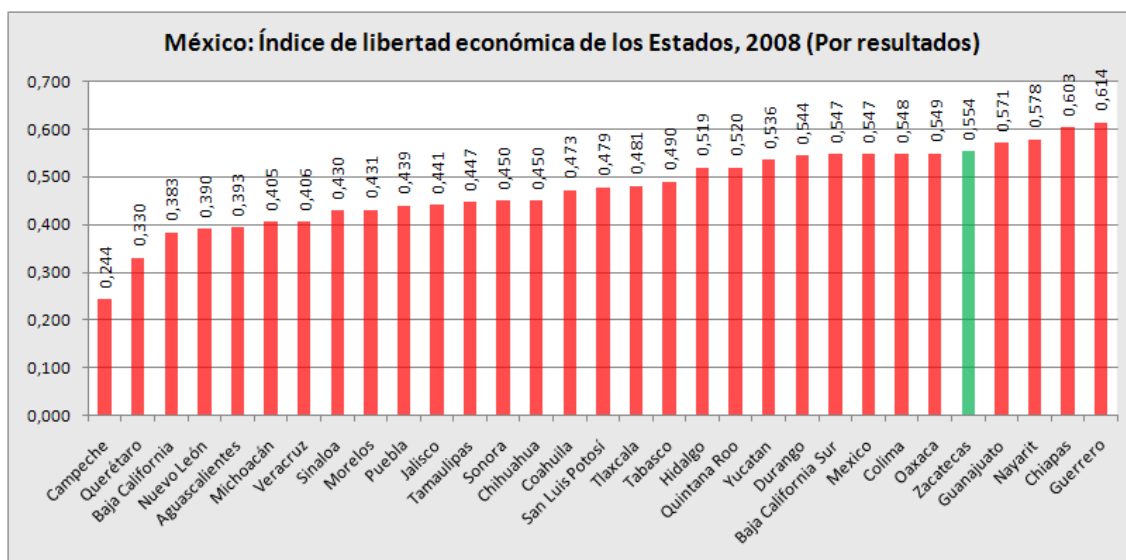
Balance financiero: Obtiene la trigésima posición nacional en el índice de balance financiero, ya que su déficit fiscal alcanza el 0,66% del PIB y su puntaje en el rubro es de 0,892.

Burocracia estatal: Alcanza el undécimo lugar nacional en el índice de burocracia estatal ya que en la entidad el 1,45% de la población ocupada trabaja para el sector público estatal, lo que le produce un indicador total de 0,048.

Gasto público: Representa el 21,52% de su PIB, por lo que alcanza el vigésimo octavo lugar nacional en el índice de gasto público mediante un puntaje total de 0,833.

Esfuerzo fiscal: Obtiene la vigésimo quinta posición nacional en la materia producto de un índice de Frank de 0,046 y un puntaje general de 0,584.

c) Resultados gráficos.



5.- CONCLUSIONES.

Se ha presentado diferente literatura, publicaciones y estudios que correlacionan, o mejor dicho, concluyen que hay una determinación de libertad económica y crecimiento económico; todos los documentos mencionados en la tesis realizan ligeras variaciones a los indicadores, la selección de los mismos y metodologías, que obviamente, dependen de la singularidad de los objetos de estudio y la disponibilidad de datos. Sin embargo, todas las publicaciones están orientadas al monitoreo de las medidas e indicadores que encaminan a un mercado libre, aunado a un ambiente donde cada agente económico asuma las consecuencias de sus propias decisiones, y además, pueda disfrutar de los frutos de su trabajo sin intromisiones arbitrarias del sector público. Al final, se presenta la metodología y resultados de un índice de libertad económica, que tiene sus virtudes, pero también manifiesta puntos a mejorar, que principalmente están dados por la ausencia de información para los mismos. En la medida en que la cantidad y calidad de la información disponible incremente, así como en el grado en que otros estudiosos del tema se involucren en el desarrollo del concepto, se podrá integrar un índice de mayor utilidad para la elaboración de políticas públicas a nivel subcentral.

Se observa, que en México existen amplias condiciones para promover la creación de nuevas políticas federales, esta situación se ha originado por la reciente descentralización política y fiscal que se ha dado en el país. En años anteriores, todos los niveles de gobierno buscaban homologar el sentido de las políticas que marcaba un gobierno central decisorio, la competencia fiscal no existía y los Estados no presentaban mayores ventajas a las compuestas por su situación geográfica y recursos naturales. Actualmente, los Estados se han insertado en una situación en la cual ellos mismos se han estado convirtiendo en los decisores principales de las políticas públicas, ahora existe un sector central que tiene cierta influencia jurídica y administrativa sobre los Estados, pero ha perdido gran parte de la influencia política que antaño se daba. Es por ello, que en los informes de gobierno mostrados, una sección de las políticas empleadas por los Estados muestran algunas características similares, así como diferencias sustanciales, ello puede deberse a la facilidad con que la información fluye de entidad a entidad, pero también, puede deberse a que los Estados, de manera gradual, están siendo conscientes de su responsabilidad en el bienestar social de manera amplia. Actualmente, a pesar del corto tiempo que tiene el proceso de descentralización de las políticas federales, se pueden percibir diferencias en cuanto a la implementación de programas y proyectos en cada Entidad.

En otro orden de ideas, vale la pena destacar el contexto actual donde los procesos federalistas mexicanos se han dado; los agentes económicos no perciben claramente una estrategia del gobierno central para la consecución del desarrollo del país, una muestra de ello es el poco crecimiento económico que en la última década se ha manifestado a nivel nacional, que raya en lo endémico. Los Estados, por lo tanto, están obligados a tomar de manera decidida las riendas y generar estrategias de crecimiento, entre otras alternativas, mediante la provisión de un marco de negocios que promueva la libre empresa. Las condiciones económicas y sociales de México hacen necesario que el crecimiento económico sea la principal variable de interés para los gobiernos subcentrales, la libertad económica puede contribuir a la consecución del mismo, por lo que es factible y deseable incorporarla a los objetivos primordiales de política pública de los Estados.

Además, es importante destacar la característica principal de los desequilibrios fiscales que el federalismo mexicano presenta: En primer lugar, un desequilibrio vertical agudo originado por las pocas potestades fiscales que los Estados poseen, y que es debido casi en su mayoría a la Federación y a los tiempos de control del gobierno central en la medida en que limitaba la autonomía hacendaria de los Estados, y en segundo lugar, un desequilibrio horizontal de menor grado que puede ser combatido de manera efectiva por políticas económicas locales encaminadas al libre mercado.

Teórica y estadísticamente, hay un consenso generalizado sobre el impacto positivo que la descentralización de la política económica tiene sobre las entidades subnacionales que forman parte de cualquier federación de estados. Se han expuesto diversos motivos en los cuales se fundamenta que bajo ciertas circunstancias, el gasto realizado por las entidades subnacionales es más eficiente económicamente.

Sobre los resultados finales, es posible extraer algunas conclusiones acerca de los indicadores interiores de la libertad económica, que a la postre producen significativas diferencias en el resultado final del índice. Importa destacar que en los resultados relativos a la dimensión del sector público se observan diferencias más agudas que en los relativos a la regulación. En primer lugar, el índice de deuda muestra que existen Estados que realizan de manera importante acciones de endeudamiento con el objetivo de satisfacer sus necesidades inmediatas de gasto corriente e inversión, mientras que hay otros que optan por la disciplina fiscal que

favorece la libertad económica, en este caso, es importante analizar cuidadosamente la revisión de los límites al endeudamiento que un Estado puede realizar. La teoría de la elección pública, así como los desarrollos teóricos recientes, ponen especial énfasis en el trazo de políticas de deuda alejadas de las coyunturas y los ciclos políticos.

En segundo lugar, se destacan las amplias diferencias que hay en el tamaño del sector público, ya que mientras hay Estados donde solamente dos pesos de cada cien son gastados por el gobierno estatal, existen otros donde esa cifra llega a ser un peso de cada cuatro, ello representa una gran carga a la libertad económica de los Estados.

En el caso del índice de comercio, se muestra la amplia diferencia en semanas que se requieren para abrir un negocio de Estado a Estado, este elemento, podría correlacionarse con el esfuerzo fiscal. Es decir, en la agenda de investigación queda por demostrar que ante las pocas facultades fiscales que los Estados tienen, estos buscan allegarse de ingresos propios por la vía tributaria, impactando de manera negativa las facilidades para abrir una empresa, por lo que el daño a la libertad económica en este caso viene de manera doble.

Por otra parte, es importante destacar que un mismo grupo de Estados encabeza la mayoría de las clasificaciones de indicadores parciales, situación que muestra que el indicador general de libertad económica, así como los parciales de regulación y dimensión del sector público observan cierta consistencia, y que los mismos Estados, manifiestan una trayectoria definida en las políticas que persiguen. La libertad económica y el crecimiento económico no son una cuestión geográfica, cualquier Estado tiene posibilidades de realizar políticas que mejoren la libertad, ello redituará en mejores inversiones, más empleos y mejor remunerados. El mapa de resultados indica que puede haber experiencias exitosas en el golfo, centro, occidente, norte o sur del país, por lo que las ventajas o desventajas naturales que antes de la descentralización política se dieran, han perdido relevancia, ya que mediante políticas económicas es posible sobreponerse a dotaciones iniciales de los factores desventajosas.

Se concluye, que es posible la elaboración de un índice de libertad económica para los Estados de México; tal proyecto, tiene como objetivo guiar al sector público en la formulación de las políticas económicas, y también guiar al sector privado sobre los mejores lugares para incrementar la rentabilidad de sus inversiones, así como opciones de consumo para las familias.

El índice de libertad económica es una herramienta valiosa para orientar políticas encaminadas al crecimiento económico, y aunque por sí sola, como todos los estudios citados mencionan, no garantiza el incremento en la actividad económica, sin duda es un elemento muy importante en la consecución de la misma. Además, es necesario tener en cuenta las limitaciones metodológicas y conceptuales del índice, saber bien qué puede ofrecer un índice de libertad económica y qué no, qué puede ofrecer en el presente, y qué podrá ofrecer en el futuro de conformidad con el avance en la producción de información económica.

Es necesario tener presente que México está abierto a la competencia económica internacional, un ejemplo, es que se encuentra en una fase de integración con el resto de países de América del Norte, es por ello, necesario voltear hacia tales latitudes y analizar las políticas de fomento a la inversión que se realizan en aquellos lugares con el objetivo de competir económicamente de manera paritaria. El índice de libertad económica ofrece una excelente plataforma de comparación de estrategias.

El índice de libertad económica ha demostrado su valía en la evaluación y formulación de políticas económicas en otras latitudes, en el estudio quedó de manifiesto su utilidad e importancia teórica y estadística, por lo que es necesario, en proyectos futuros, robustecer el proyecto y darle una mayor utilidad en la formulación de políticas de crecimiento económico.

Además, es importante destacar, que en los tiempos actuales, donde la información viaja en tiempo real y es posible conocer en un rincón del mundo lo que sucede en el otro, que es fundamental generar y ordenar la información adecuada para el sector privado. Al día de hoy son comunes las monografías que muestran la competitividad, el ambiente de negocios, la transparencia internacional y recientemente la libertad económica, por lo que es necesario mejorar la contabilidad social y rendición de cuentas, así como trazar políticas amigables con el intercambio económico, ello disminuirá el riesgo, la incertidumbre y hará simétrica la información inherente al consumo e inversión. Estas acciones ofrecerán la certeza de que en alguna parte del mundo, alguien se enterará de las medidas tomadas y vendrá a invertir mejorando la calidad de vida de cada Estado.

Para tal objetivo, los Estados deben intensificar la unificación de criterios contables y de generación de información con la finalidad de construir plataformas de

comparación y transparencia más creíbles y útiles para los ciudadanos y el sector privado en general.

Una vez definido el índice de libertad económica en México, queda en la agenda de investigación la acentuación en los trabajos de correlación y determinación entre el índice y diversas variables económicas. Es decir, este estudio puede generar trabajos parciales que afinen cada elemento componente del índice general, para de esa manera, depurar errores y ganar precisión en la elaboración de este tipo de estudios.

Este trabajo, de manera paralela, reitera la importancia del buen diseño institucional en la conducción de toda política de bienestar social, ya que estas deben ser producto de normas, instituciones y consensos, y no de coyunturas o inquietudes personales que solamente incrementan el tamaño del sector público y menoscaban las libertades sociales, civiles y económicas.

En adición, mencionar que en México, el proceso de descentralización se ha dado a través de conductos que no necesariamente son los mejores para el desarrollo económico y el bienestar social de las entidades. Las participaciones federales, que son las transferencias no condicionadas, deben dejar espacio para que la población de un Estado, de manera libre y democrática, elija la cesta fiscal que mejor convenga a sus intereses como colectividad; lo que infiere, que en México es necesaria la devolución de potestades fiscales a los Estados, ello puede eliminar el control político por parte del gobierno central, de conformidad con las teorías recientes del federalismo, así como fomentar la participación política de manera libre, democrática y abierta de la sociedad.

Al final, reiterar que la presente investigación no niega la vital importancia que tiene el sector público para la vida en sociedad, reconoce que dentro del marco de las libertades individuales, tiene funciones insoslayables, de alto beneficio y trascendencia pública.

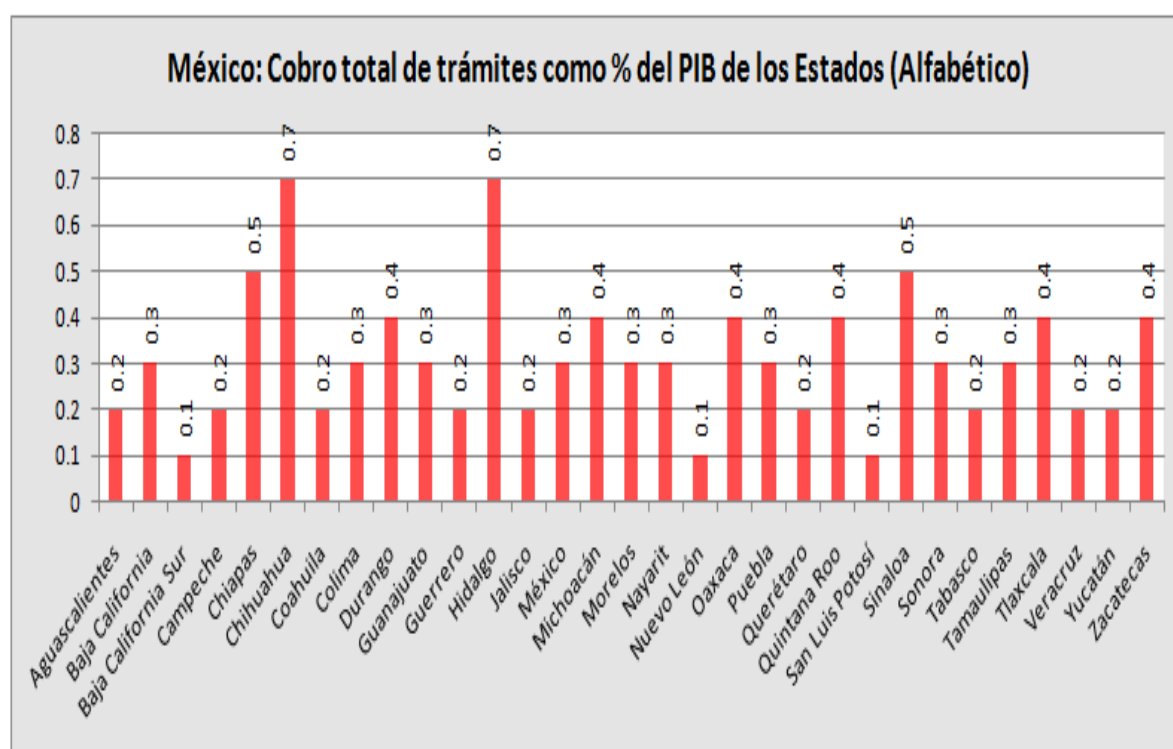
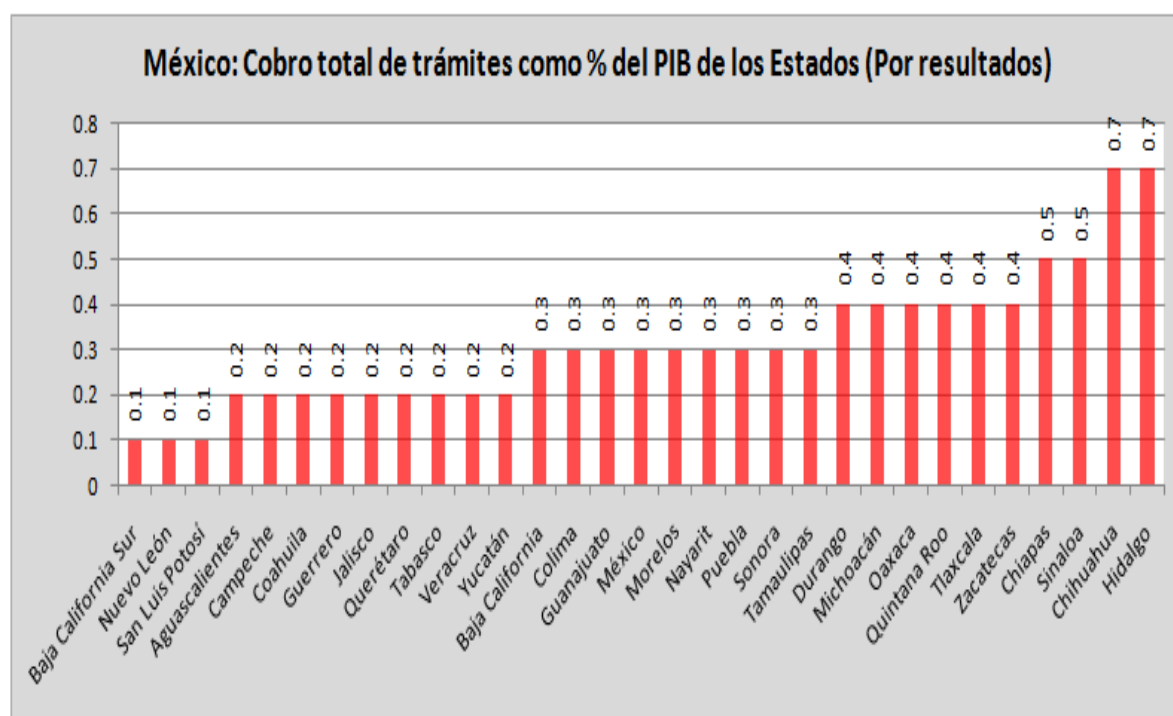
6.- APÉNDICE

a) Regulación.

MÉXICO: MAGNITUD DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA PARA ABRIR UN NUEVO NEGOCIO EN LOS ESTADOS (Por resultados)			
	Estado	Cobros por trámite como % del PIB	Índice
1	Baja California Sur	0.1	0.000
2	Nuevo León	0.1	0.000
3	San Luis Potosí	0.1	0.000
4	Aguascalientes	0.2	0.167
5	Campeche	0.2	0.167
6	Coahuila	0.2	0.167
7	Guerrero	0.2	0.167
8	Jalisco	0.2	0.167
9	Querétaro	0.2	0.167
10	Tabasco	0.2	0.167
11	Veracruz	0.2	0.167
12	Yucatán	0.2	0.167
13	Baja California	0.3	0.333
14	Colima	0.3	0.333
15	Guanajuato	0.3	0.333
16	México	0.3	0.333
17	Morelos	0.3	0.333
18	Nayarit	0.3	0.333
19	Puebla	0.3	0.333
20	Sonora	0.3	0.333
21	Tamaulipas	0.3	0.333
22	Durango	0.4	0.500
23	Michoacán	0.4	0.500
24	Oaxaca	0.4	0.500
25	Quintana Roo	0.4	0.500
26	Tlaxcala	0.4	0.500
27	Zacatecas	0.4	0.500
28	Chiapas	0.5	0.667
29	Sinaloa	0.5	0.667
30	Chihuahua	0.7	1.000
31	Hidalgo	0.7	1.000

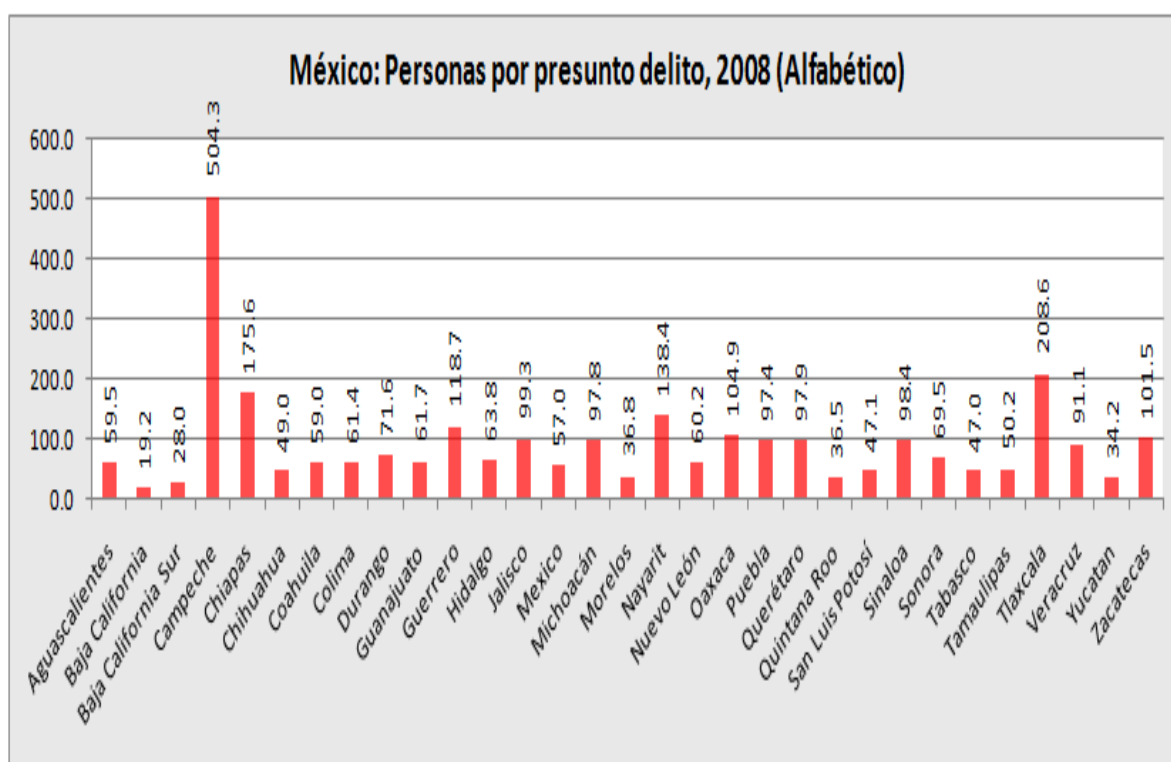
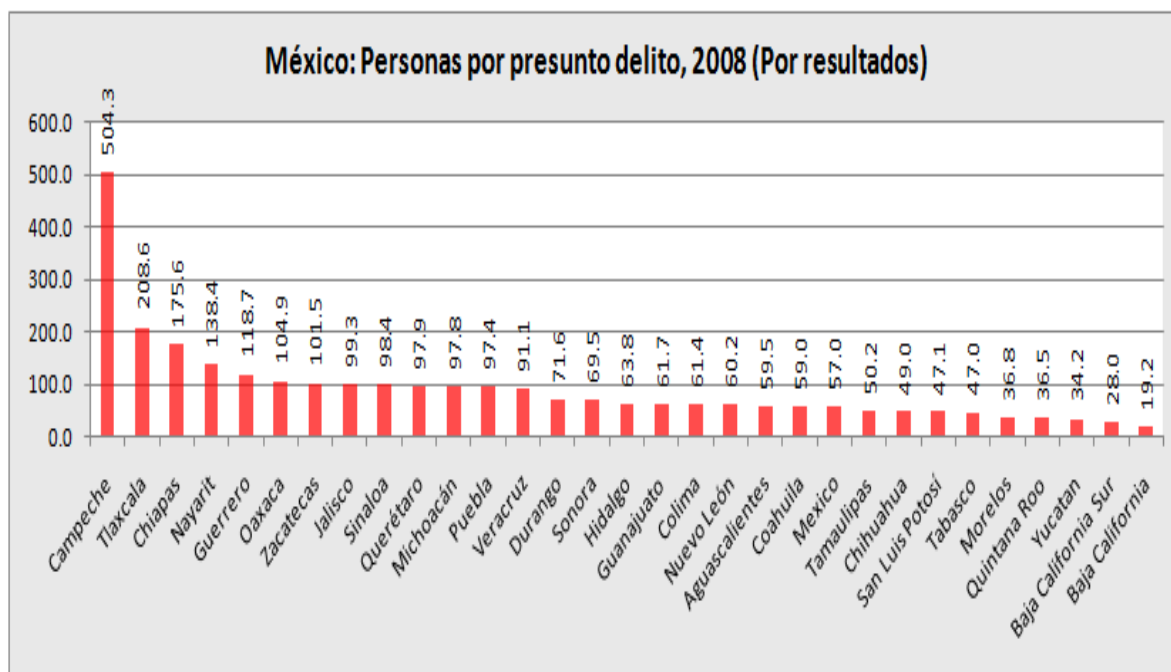
FUENTE: Elaboración propia con datos de: IMCO. (2009). *Competitividad Estatal de México*, 2008.

MÉXICO: MAGNITUD DE INTERVENCIÓN ECONÓMICA PARA ABRIR UN NUEVO NEGOCIO EN LOS ESTADOS (Alfabético)			
	Estado	Cobros por trámite como % del PIB	Índice
1	Aguascalientes	0.2	0.167
2	Baja California	0.3	0.333
3	Baja California Sur	0.1	0.000
4	Campeche	0.2	0.167
5	Chiapas	0.5	0.667
6	Chihuahua	0.7	1.000
7	Coahuila	0.2	0.167
8	Colima	0.3	0.333
9	Durango	0.4	0.500
10	Guanajuato	0.3	0.333
11	Guerrero	0.2	0.167
12	Hidalgo	0.7	1.000
13	Jalisco	0.2	0.167
14	México	0.3	0.333
15	Michoacán	0.4	0.500
16	Morelos	0.3	0.333
17	Nayarit	0.3	0.333
18	Nuevo León	0.1	0.000
19	Oaxaca	0.4	0.500
20	Puebla	0.3	0.333
21	Querétaro	0.2	0.167
22	Quintana Roo	0.4	0.500
23	San Luis Potosí	0.1	0.000
24	Sinaloa	0.5	0.667
25	Sonora	0.3	0.333
26	Tabasco	0.2	0.167
27	Tamaulipas	0.3	0.333
28	Tlaxcala	0.4	0.500
29	Veracruz	0.2	0.167
30	Yucatán	0.2	0.167
31	Zacatecas	0.4	0.500
FUENTE: Elaboración propia con datos de: IMCO. (2009). <i>Competitividad Estatal de México</i> , 2008.			



MÉXICO: PRESUNTOS DELITOS Y POBLACIÓN, 2008				
	Estado	Población 2008	Hechos presumiblemente delictuosos. Fuero común.	Personas por presunto delito
1	Aguascalientes	1,124,288	18,894	59.5
2	Baja California	3,079,363	160,058	19.2
3	Baja California Sur	551,525	19,669	28.0
4	Campeche	786,753	1,560	504.3
5	Chiapas	4,460,013	25,392	175.6
6	Chihuahua	3,359,934	68,536	49.0
7	Coahuila	2,601,884	44,115	59.0
8	Colima	593,224	9,664	61.4
9	Durango	1,544,614	21,583	71.6
10	Guanajuato	5,020,800	81,349	61.7
11	Guerrero	3,145,656	26,497	118.7
12	Hidalgo	2,409,162	37,755	63.8
13	Jalisco	6,960,799	70,132	99.3
14	Mexico	14,638,436	256,963	57.0
15	Michoacán	3,977,964	40,661	97.8
16	Morelos	1,661,813	45,141	36.8
17	Nayarit	966,996	6,987	138.4
18	Nuevo León	4,393,095	72,931	60.2
19	Oaxaca	3,552,300	33,870	104.9
20	Puebla	5,595,760	57,447	97.4
21	Querétaro	1,690,042	17,270	97.9
22	Quintana Roo	1,267,087	34,719	36.5
23	San Luis Potosí	2,473,678	52,475	47.1
24	Sinaloa	2,648,330	26,913	98.4
25	Sonora	2,487,608	35,776	69.5
26	Tabasco	2,039,979	43,395	47.0
27	Tamaulipas	3,154,947	62,801	50.2
28	Tlaxcala	1,119,819	5,369	208.6
29	Veracruz	7,261,119	79,690	91.1
30	Yucatan	1,898,086	55,419	34.2
31	Zacatecas	1,381,399	13,607	101.5

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173. Para población se utilizaron estimaciones del CONAPO, consultadas en http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=234



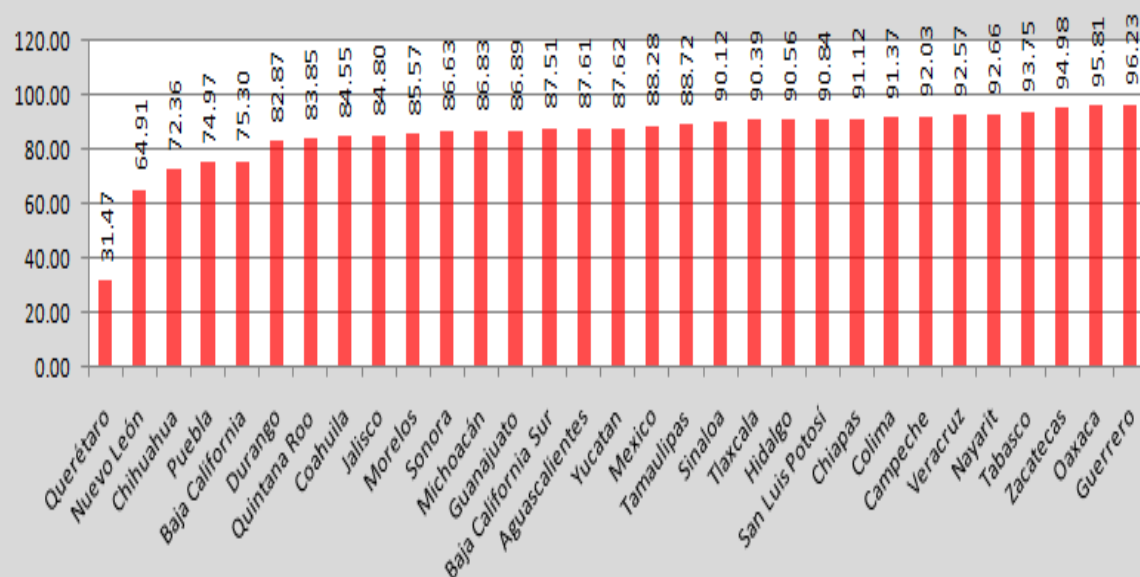
MÉXICO: ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN LOS ESTADOS, 2008 (POR TIPO DE SOSTENIMIENTO) POR RESULTADOS						
	Estado	Alumnos			Alumnos sector público como % del total	Índice
		Estatad	Privado	Total		
1	Querétaro	33716	73405	107121	31.47	0.000
2	Nuevo León	352032	190276	542308	64.91	0.516
3	Chihuahua	237644	90797	328441	72.36	0.631
4	Puebla	529946	176971	706917	74.97	0.672
5	Baja California	290862	95385	386247	75.30	0.677
6	Durango	141665	29276	170941	82.87	0.794
7	Quintana Roo	261709	50414	312123	83.85	0.809
8	Coahuila	559198	102217	661415	84.55	0.820
9	Jalisco	1448212	259607	1707819	84.80	0.823
10	Morelos	359311	60593	419904	85.57	0.835
11	Sonora	507245	78264	585509	86.63	0.852
12	Michoacán	767302	116368	883670	86.83	0.855
13	Guanajuato	1229873	185589	1415462	86.89	0.856
14	Baja California Sur	98861	14106	112967	87.51	0.865
15	Aguascalientes	259182	36645	295827	87.61	0.867
16	Yucatan	408091	57646	465737	87.62	0.867
17	Mexico	3219884	427487	3647371	88.28	0.877
18	Tamaulipas	648411	82461	730872	88.72	0.884
19	Sinaloa	599115	65681	664796	90.12	0.906
20	Tlaxcala	275837	29337	305174	90.39	0.910
21	Hidalgo	593585	61897	655482	90.56	0.912
22	San Luis Potosí	644526	64964	709490	90.84	0.917
23	Chiapas	446780	43539	490319	91.12	0.921
24	Colima	119198	11264	130462	91.37	0.925
25	Campeche	176808	15322	192130	92.03	0.935
26	Veracruz	1741395	139869	1881264	92.57	0.943
27	Nayarit	227029	17989	245018	92.66	0.945
28	Tabasco	572344	38136	610480	93.75	0.962
29	Zacatecas	359867	19028	378895	94.98	0.981
30	Oaxaca	1006220	43950	1050170	95.81	0.994
31	Guerrero	905500	35509	941009	96.23	1.000

****NOTA:** Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.

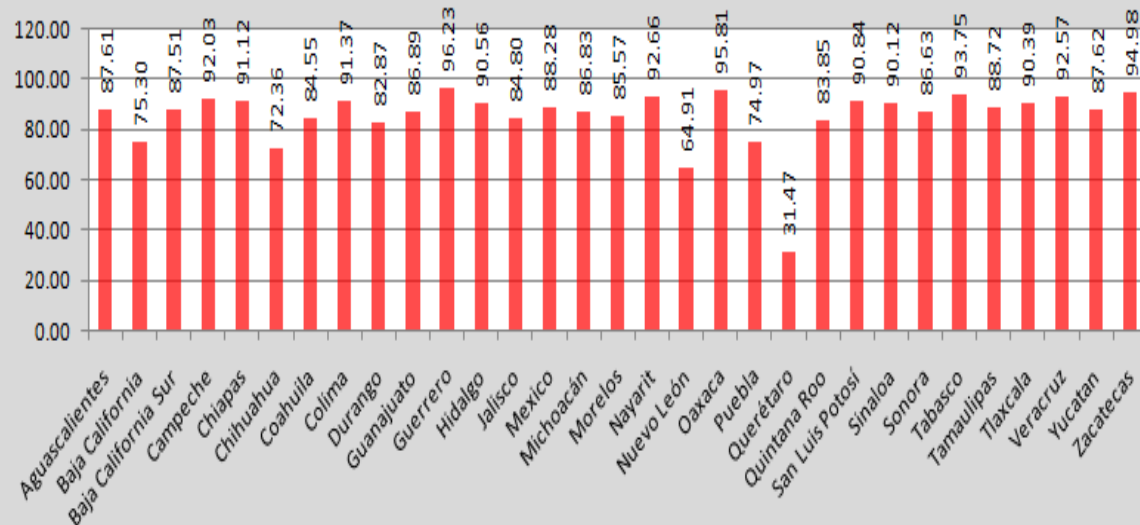
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

MÉXICO: ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN LOS ESTADOS, 2008 (POR TIPO DE SOSTENIMIENTO) ALFABÉTICO						
	Estado	Alumnos			Alumnos sector público como % del total	Índice
		Estatad	Privado	Total		
1	Aguascalientes	259182	36645	295827	87.61	0.867
2	Baja California	290862	95385	386247	75.30	0.677
3	Baja California Sur	98861	14106	112967	87.51	0.865
4	Campeche	176808	15322	192130	92.03	0.935
5	Chiapas	446780	43539	490319	91.12	0.921
6	Chihuahua	237644	90797	328441	72.36	0.631
7	Coahuila	559198	102217	661415	84.55	0.820
8	Colima	119198	11264	130462	91.37	0.925
9	Durango	141665	29276	170941	82.87	0.794
10	Guanajuato	1229873	185589	1415462	86.89	0.856
11	Guerrero	905500	35509	941009	96.23	1.000
12	Hidalgo	593585	61897	655482	90.56	0.912
13	Jalisco	1448212	259607	1707819	84.80	0.823
14	Mexico	3219884	427487	3647371	88.28	0.877
15	Michoacán	767302	116368	883670	86.83	0.855
16	Morelos	359311	60593	419904	85.57	0.835
17	Nayarit	227029	17989	245018	92.66	0.945
18	Nuevo León	352032	190276	542308	64.91	0.516
19	Oaxaca	1006220	43950	1050170	95.81	0.994
20	Puebla	529946	176971	706917	74.97	0.672
21	Querétaro	33716	73405	107121	31.47	0.000
22	Quintana Roo	261709	50414	312123	83.85	0.809
23	San Luis Potosí	644526	64964	709490	90.84	0.917
24	Sinaloa	599115	65681	664796	90.12	0.906
25	Sonora	507245	78264	585509	86.63	0.852
26	Tabasco	572344	38136	610480	93.75	0.962
27	Tamaulipas	648411	82461	730872	88.72	0.884
28	Tlaxcala	275837	29337	305174	90.39	0.910
29	Veracruz	1741395	139869	1881264	92.57	0.943
30	Yucatan	408091	57646	465737	87.62	0.867
31	Zacatecas	359867	19028	378895	94.98	0.981
**NOTA: Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.						
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173						

México: Porcentaje de alumnos matriculados de los Estados en escuelas de financiamiento estatal, 2008 (Por resultados)



México: Porcentaje de alumnos matriculados de los Estados en escuelas de financiamiento estatal, 2008 (Alfabético)



MÉXICO: DOCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN LOS ESTADOS, 2008 (POR TIPO DE SOSTENIMIENTO)						
POR RESULTADOS						
	Estado	Personal docente			Docentes sector público como % del total	Índice
		Estatad	Privado	Total		
1	Querétaro	1518	5129	6647	22.84	0.000
2	Nuevo León	16611	14385	30996	53.59	0.435
3	Puebla	21730	14578	36308	59.85	0.524
4	Chihuahua	10313	6386	16699	61.76	0.551
5	Morelos	14507	7316	21823	66.48	0.618
6	Baja California	14134	6995	21129	66.89	0.624
7	Coahuila	25304	9348	34652	73.02	0.710
8	Baja California Sur	4317	1390	5707	75.64	0.747
9	Durango	7238	2281	9519	76.04	0.753
10	Guanajuato	51038	15576	66614	76.62	0.761
11	Jalisco	59489	17467	76956	77.30	0.771
12	Aguascalientes	10752	3036	13788	77.98	0.780
13	Quintana Roo	10816	2837	13653	79.22	0.798
14	Yucatan	18889	4731	23620	79.97	0.809
15	Sonora	19374	4779	24153	80.21	0.812
16	Mexico	129205	31433	160638	80.43	0.815
17	Tamaulipas	26770	6372	33142	80.77	0.820
18	Michoacán	36615	8368	44983	81.40	0.829
19	Tlaxcala	11323	2528	13851	81.75	0.834
20	Chiapas	18992	4234	23226	81.77	0.834
21	Campeche	8545	1863	10408	82.10	0.839
22	Hidalgo	27038	5084	32122	84.17	0.868
23	Sinaloa	30146	5558	35704	84.43	0.872
24	Colima	6145	1040	7185	85.53	0.887
25	San Luis Potosí	30001	4978	34979	85.77	0.891
26	Veracruz	82408	12804	95212	86.55	0.902
27	Nayarit	11772	1715	13487	87.28	0.912
28	Tabasco	22649	2670	25319	89.45	0.943
29	Zacatecas	17111	1697	18808	90.98	0.964
30	Oaxaca	47756	3368	51124	93.41	0.999
31	Guerrero	47128	3283	50411	93.49	1.000

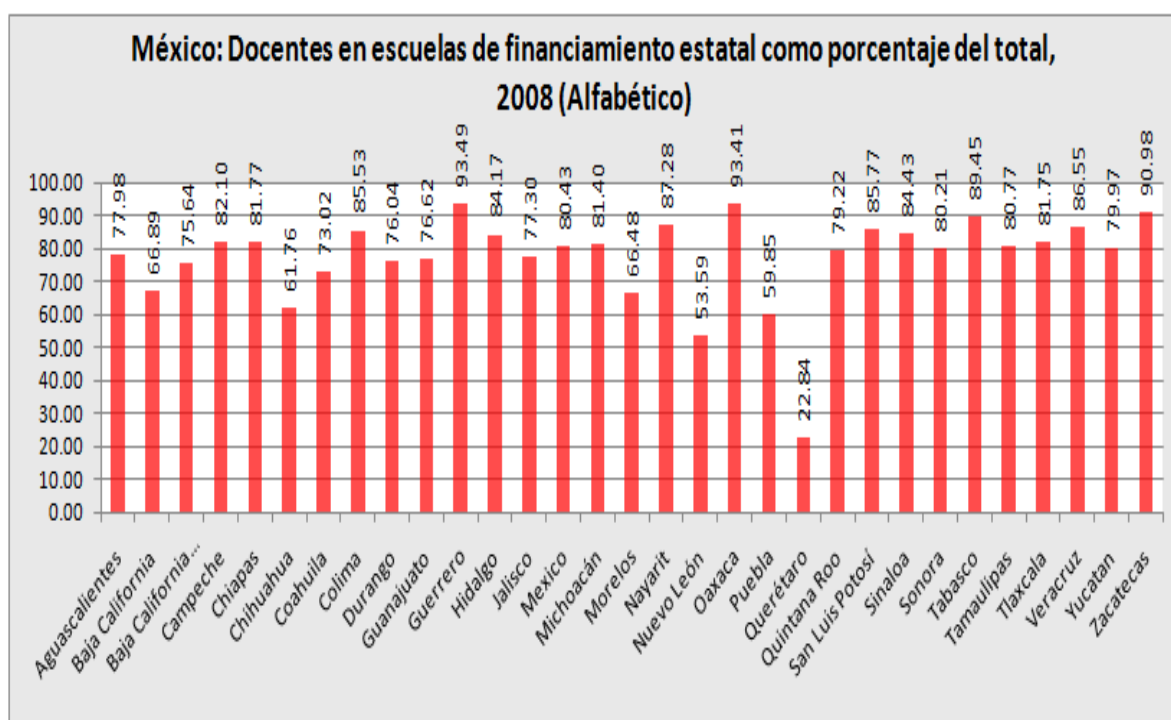
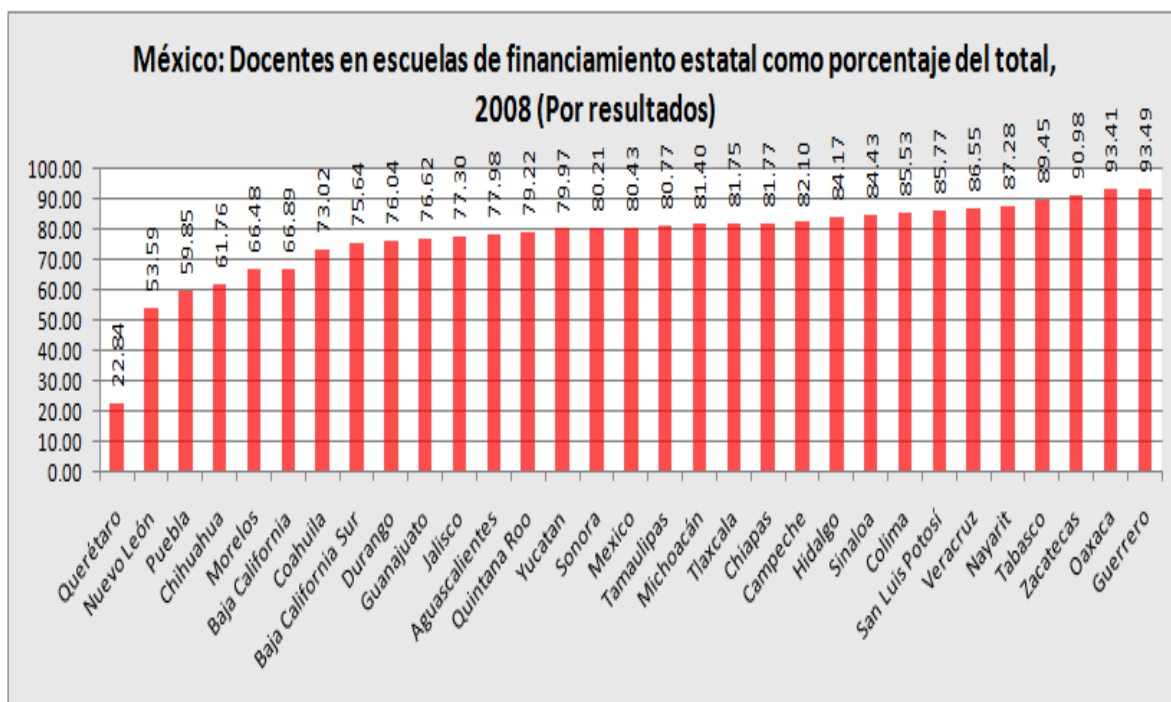
****NOTA:** Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

MÉXICO: DOCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR EN LOS ESTADOS, 2008 (POR TIPO DE SOSTENIMIENTO)						
ALFABÉTICO						
	Estado	Personal docente			Docentes sector público como % del total	Índice
		Estatad	Privado	Total		
1	Aguascalientes	10752	3036	13788	77.98	0.780
2	Baja California	14134	6995	21129	66.89	0.624
3	Baja California Sur	4317	1390	5707	75.64	0.747
4	Campeche	8545	1863	10408	82.10	0.839
5	Chiapas	18992	4234	23226	81.77	0.834
6	Chihuahua	10313	6386	16699	61.76	0.551
7	Coahuila	25304	9348	34652	73.02	0.710
8	Colima	6145	1040	7185	85.53	0.887
9	Durango	7238	2281	9519	76.04	0.753
10	Guanajuato	51038	15576	66614	76.62	0.761
11	Guerrero	47128	3283	50411	93.49	1.000
12	Hidalgo	27038	5084	32122	84.17	0.868
13	Jalisco	59489	17467	76956	77.30	0.771
14	Mexico	129205	31433	160638	80.43	0.815
15	Michoacán	36615	8368	44983	81.40	0.829
16	Morelos	14507	7316	21823	66.48	0.618
17	Nayarit	11772	1715	13487	87.28	0.912
18	Nuevo León	16611	14385	30996	53.59	0.435
19	Oaxaca	47756	3368	51124	93.41	0.999
20	Puebla	21730	14578	36308	59.85	0.524
21	Querétaro	1518	5129	6647	22.84	0.000
22	Quintana Roo	10816	2837	13653	79.22	0.798
23	San Luis Potosí	30001	4978	34979	85.77	0.891
24	Sinaloa	30146	5558	35704	84.43	0.872
25	Sonora	19374	4779	24153	80.21	0.812
26	Tabasco	22649	2670	25319	89.45	0.943
27	Tamaulipas	26770	6372	33142	80.77	0.820
28	Tlaxcala	11323	2528	13851	81.75	0.834
29	Veracruz	82408	12804	95212	86.55	0.902
30	Yucatan	18889	4731	23620	79.97	0.809
31	Zacatecas	17111	1697	18808	90.98	0.964

****NOTA:** Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173



MÉXICO: ESCUELAS DE LOS ESTADOS COMO % DE LA SUMA DE ESCUELAS ESTATALES Y PRIVADAS, 2008 (Resultados)						
	Estado	Escuelas			Escuelas sostenidas por los Estados como % del total	Índice
		Estatad	Privado	Total		
1	Querétaro	106	659	765	13.86	0.000
2	Baja California	1051	951	2002	52.50	0.467
3	Nuevo León	1714	1526	3240	52.90	0.472
4	Chihuahua	1253	832	2085	60.10	0.559
5	Puebla	3233	2082	5315	60.83	0.568
6	Morelos	1730	940	2670	64.79	0.616
7	Quintana Roo	1236	474	1710	72.28	0.707
8	Mexico	14645	4895	19540	74.95	0.739
9	Coahuila	3079	947	4026	76.48	0.757
10	Tlaxcala	1350	384	1734	77.85	0.774
11	Yucatan	2313	647	2960	78.14	0.777
12	Aguascalientes	1286	353	1639	78.46	0.781
13	Jalisco	9412	2412	11824	79.60	0.795
14	Durango	1256	318	1574	79.80	0.797
15	Baja California Sur	584	145	729	80.11	0.801
16	Sonora	3102	740	3842	80.74	0.809
17	Tamaulipas	3898	831	4729	82.43	0.829
18	Colima	752	138	890	84.49	0.854
19	Guanajuato	8861	1608	10469	84.64	0.856
20	Michoacán	7602	1059	8661	87.77	0.894
21	Hidalgo	5042	697	5739	87.86	0.895
22	Nayarit	2214	300	2514	88.07	0.898
23	Campeche	1374	181	1555	88.36	0.901
24	Chiapas	3726	484	4210	88.50	0.903
25	Sinaloa	4405	522	4927	89.41	0.914
26	San Luis Potosí	6217	679	6896	90.15	0.923
27	Veracruz	17460	1473	18933	92.22	0.948
28	Tabasco	4146	321	4467	92.81	0.955
29	Zacatecas	4070	204	4274	95.23	0.984
30	Guerrero	8152	352	8504	95.86	0.992
31	Oaxaca	10559	378	10937	96.54	1.000

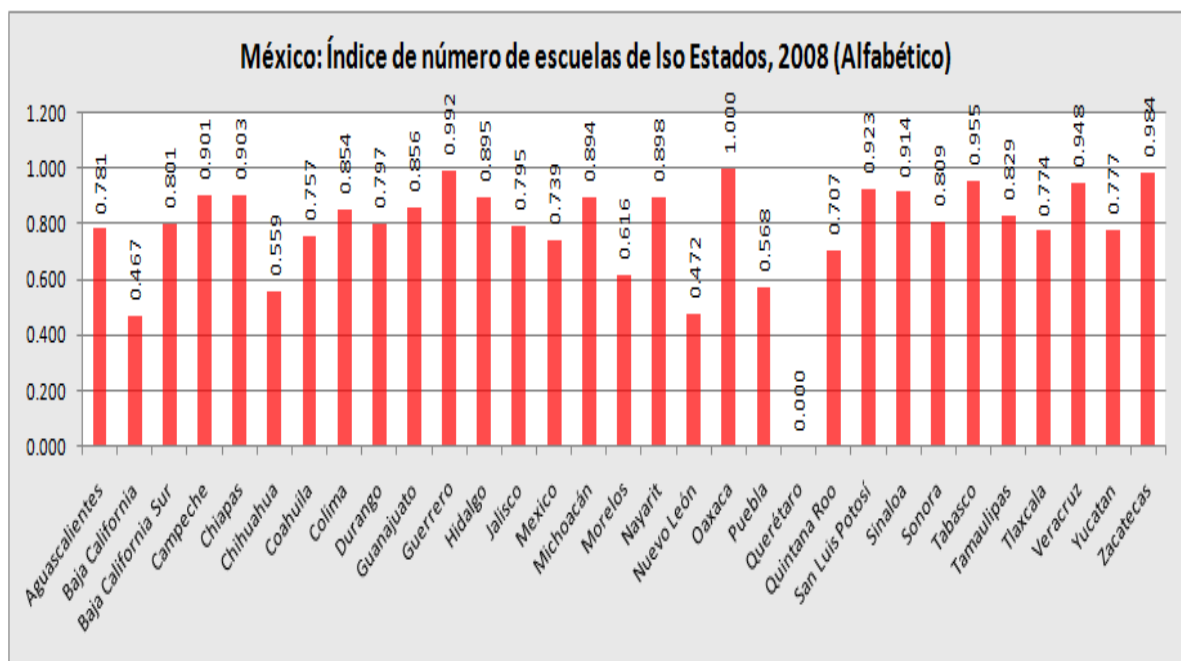
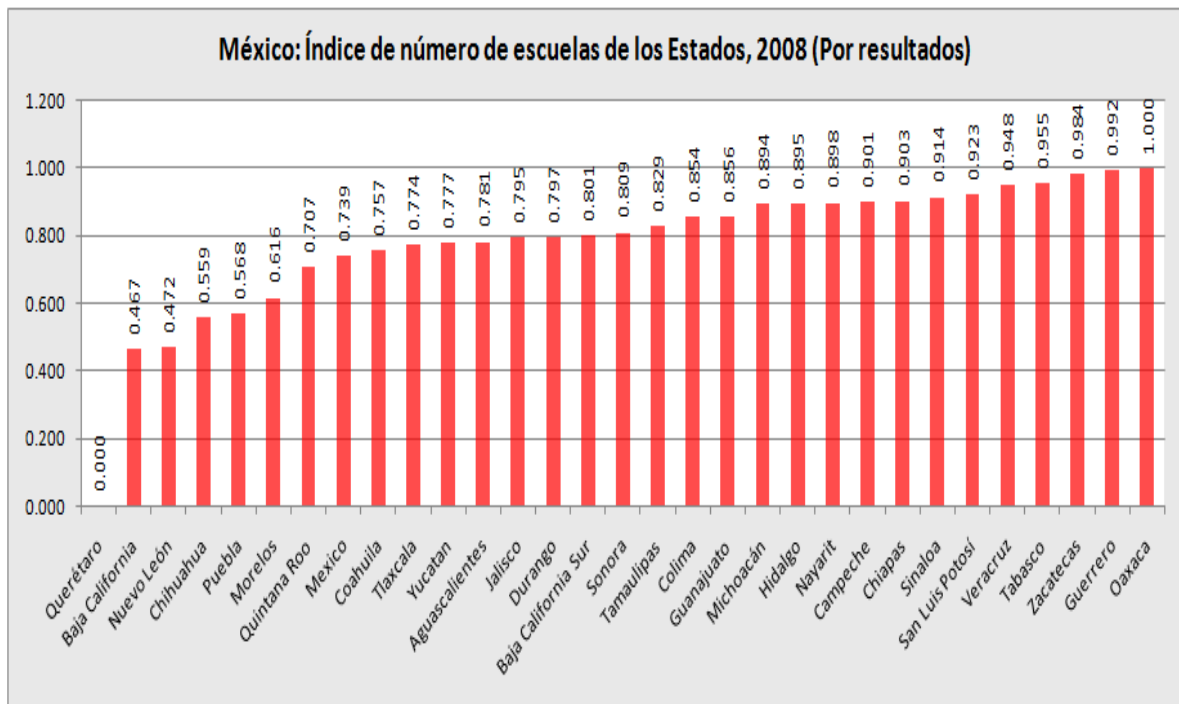
****NOTA:** Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

MÉXICO: ESCUELAS DE LOS ESTADOS COMO % DE LA SUMA DE ESCUELAS ESTATALES Y PRIVADAS, 2008 (Alfabético)						
	Estado	Escuelas			Escuelas sostenidas por los Estados como % del total	Índice
		Estatad	Privado	Total		
1	Aguascalientes	1286	353	1639	78.46	0.781
2	Baja California	1051	951	2002	52.50	0.467
3	Baja California Sur	584	145	729	80.11	0.801
4	Campeche	1374	181	1555	88.36	0.901
5	Chiapas	3726	484	4210	88.50	0.903
6	Chihuahua	1253	832	2085	60.10	0.559
7	Coahuila	3079	947	4026	76.48	0.757
8	Colima	752	138	890	84.49	0.854
9	Durango	1256	318	1574	79.80	0.797
10	Guanajuato	8861	1608	10469	84.64	0.856
11	Guerrero	8152	352	8504	95.86	0.992
12	Hidalgo	5042	697	5739	87.86	0.895
13	Jalisco	9412	2412	11824	79.60	0.795
14	Mexico	14645	4895	19540	74.95	0.739
15	Michoacán	7602	1059	8661	87.77	0.894
16	Morelos	1730	940	2670	64.79	0.616
17	Nayarit	2214	300	2514	88.07	0.898
18	Nuevo León	1714	1526	3240	52.90	0.472
19	Oaxaca	10559	378	10937	96.54	1.000
20	Puebla	3233	2082	5315	60.83	0.568
21	Querétaro	106	659	765	13.86	0.000
22	Quintana Roo	1236	474	1710	72.28	0.707
23	San Luis Potosí	6217	679	6896	90.15	0.923
24	Sinaloa	4405	522	4927	89.41	0.914
25	Sonora	3102	740	3842	80.74	0.809
26	Tabasco	4146	321	4467	92.81	0.955
27	Tamaulipas	3898	831	4729	82.43	0.829
28	Tlaxcala	1350	384	1734	77.85	0.774
29	Veracruz	17460	1473	18933	92.22	0.948
30	Yucatan	2313	647	2960	78.14	0.777
31	Zacatecas	4070	204	4274	95.23	0.984

****NOTA:** Comprende las escuelas federalizadas o transferidas a los Estados. Se excluyen las escuelas autónomas y las financiadas por la Federación.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

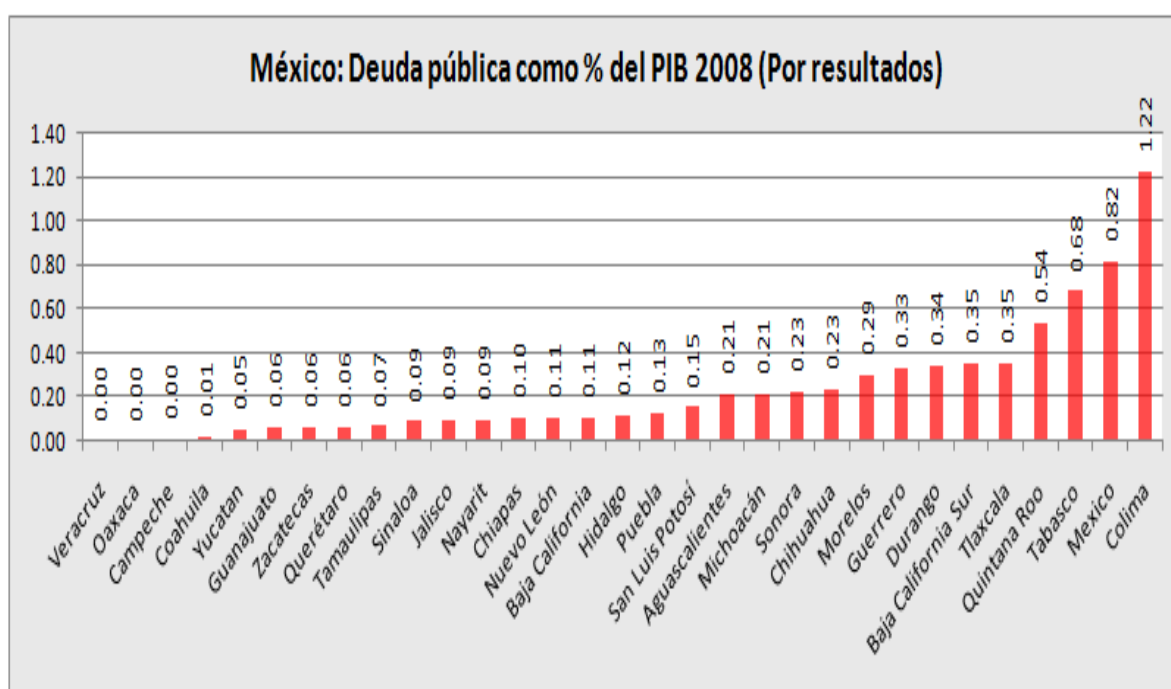
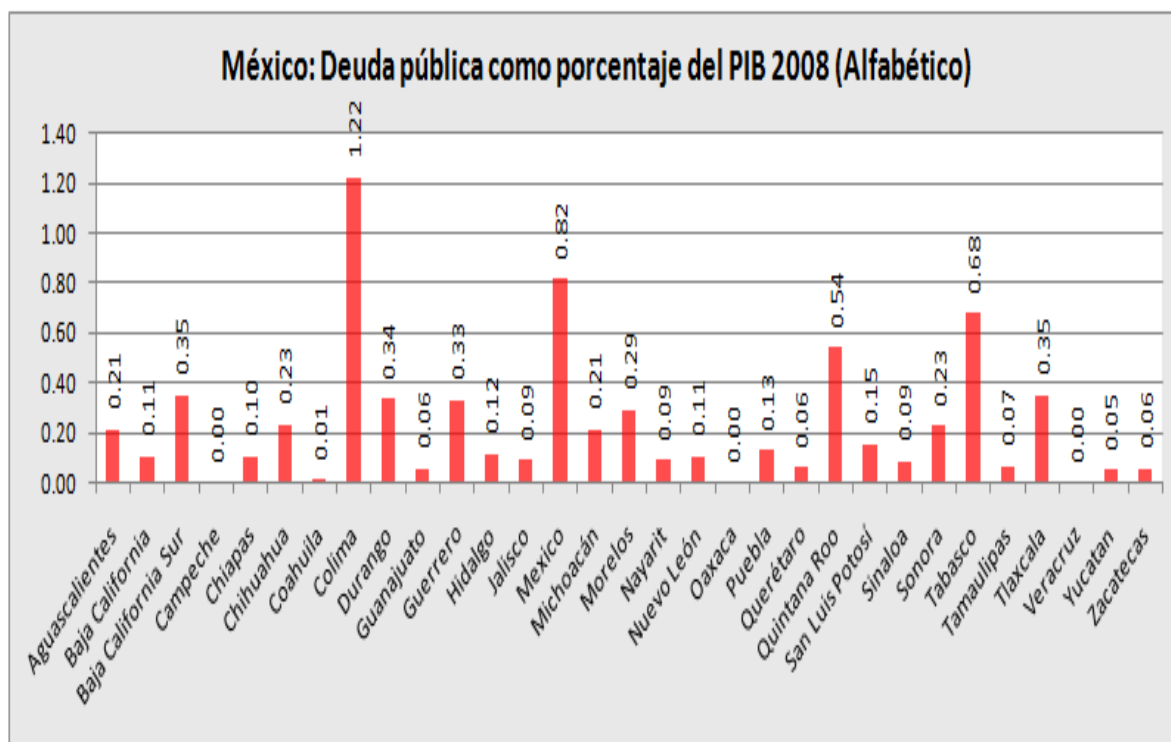


b) Dimensión del sector público.

MÉXICO: DEUDA PÚBLICA COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2008				
	Estado	PIB 2008 (miles de pesos)	Deuda Pública 2008	% del PIB
1	Aguascalientes	121,079,102	257,683,277	0.21
2	Baja California	330,168,949	352,176,831	0.11
3	Baja California Sur	67,402,355	234,527,464	0.35
4	Campeche	812,661,051	25,268,000	0.00
5	Chiapas	212,350,342	219,180,975	0.10
6	Chihuahua	367,052,091	859,642,046	0.23
7	Coahuila	372,154,768	52,219,301	0.01
8	Colima	60,887,312	744,552,378	1.22
9	Durango	141,351,983	476,405,892	0.34
10	Guanajuato	427,502,955	248,672,363	0.06
11	Guerrero	168,703,065	560,441,600	0.33
12	Hidalgo	180,196,820	210,651,284	0.12
13	Jalisco	728,915,571	667,358,933	0.09
14	Mexico	1,039,335,167	8,473,781,900	0.82
15	Michoacán	286,812,895	615,171,684	0.21
16	Morelos	120,862,260	355,573,974	0.29
17	Nayarit	69,370,117	64,137,604	0.09
18	Nuevo León	886,003,130	937,733,086	0.11
19	Oaxaca	173,231,003	3,049,000	0.00
20	Puebla	394,549,457	509,197,400	0.13
21	Querétaro	214,725,894	127,970,000	0.06
22	Quintana Roo	168,013,399	905,975,658	0.54
23	San Luis Potosí	217,881,481	333,611,657	0.15
24	Sinaloa	239,398,533	212,305,658	0.09
25	Sonora	288,376,237	654,112,224	0.23
26	Tabasco	434,375,738	2,953,035,562	0.68
27	Tamaulipas	405,268,365	265,222,449	0.07
28	Tlaxcala	61,363,608	215,642,765	0.35
29	Veracruz	541,732,585	-	0.00
30	Yucatan	158,236,081	82,423,944	0.05
31	Zacatecas	90,642,988	53,845,778	0.06

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, consultado en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288> y con datos de INEGI consultados en <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00> 15/03/2010

Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf



MÉXICO: BALANCE FINANCIERO POR ESTADO, 2008.										
(Pesos mexicanos)										
	Estado	PIB 2008 (miles de pesos)	Ingresos financieros 2008	Financiamiento 2008	Egresos financieros 2008	Amortización de la deuda 2008	Ingresos netos 2008	Egresos netos 2008	Balance Financiero 2008	% del PIB 2008
1	Aguascalientes	121,079,102	12,965,369,000		12,965,369,000	71,614,000	12,965,369,000	12,893,755,000	71,614,000	0.06
2	Baja California	330,168,949	27,159,227,001	80,000,413	27,159,227,001	146,630,681	27,079,226,588	27,012,596,320	66,630,268	0.02
3	Baja California Sur	67,402,355	8,741,557,246	455,000,000	8,741,557,246	151,602,602	8,286,557,246	8,589,954,644	-303,397,398	-0.45
4	Campeche	812,661,051	16,356,690,698		16,356,690,698		16,356,690,698	16,356,690,698	0	0.00
5	Chiapas	212,350,342	49,744,793,942		49,744,793,942	219,180,975	49,744,793,942	49,525,612,967	219,180,975	0.10
6	Chihuahua	367,052,091	35,244,217,296		35,244,217,296		35,244,217,296	35,244,217,296	0	0.00
7	Coahuila	372,154,768	31,409,155,000	1,300,000,000	31,409,155,000		30,109,155,000	31,409,155,000	-1,300,000,000	-0.35
8	Colima	60,887,312	8,769,197,821	614,737,287	8,769,197,821	639,952,914	8,154,460,534	8,129,244,907	25,215,627	0.04
9	Durango	141,351,983	17,558,079,307	588,250,000	17,558,079,307	20,415,366	16,969,829,307	17,537,663,941	-567,834,634	-0.40
10	Guanajuato	427,502,955	47,314,451,791		47,314,451,791	13,933,736	47,314,451,791	47,300,518,055	13,933,736	0.00
11	Guerrero	168,703,065	34,750,783,700	680,438,200	34,750,783,700	382,335,621	34,070,345,500	34,368,448,079	-298,102,579	-0.18
12	Hidalgo	180,196,820	25,543,129,995		25,543,129,995		25,543,129,995	25,543,129,995	0	0.00
13	Jalisco	728,915,571	64,754,488,593	2,020,000,000	64,754,488,593	131,576,274	62,734,488,593	64,622,912,319	-1,888,423,726	-0.26
14	México	1,039,335,167	147,992,564,200	2,054,182,000	147,992,564,200	2,276,276,300	145,938,382,200	145,716,287,900	222,094,300	0.02
15	Michoacán	286,812,895	40,218,079,098		40,218,079,098	66,051,938	40,218,079,098	40,152,027,160	66,051,938	0.02
16	Morelos	120,862,260	16,637,536,000		16,637,536,000	355,573,974	16,637,536,000	16,281,962,026	355,573,974	0.29
17	Nayarit	69,370,117	13,737,968,108	545,046,236	13,737,968,108	1,666,667	13,192,921,872	13,736,301,441	-543,379,569	-0.78
18	Nuevo León	886,003,130	47,879,016,000		47,879,016,000	811,265,690	47,879,016,000	47,067,750,310	811,265,690	0.09
19	Oaxaca	173,231,003	44,092,268,000		44,092,268,000	6,000	44,092,268,000	44,092,262,000	6,000	0.00
20	Puebla	394,549,457	47,485,060,400		47,485,060,400	509,197,400	47,485,060,400	46,975,863,000	509,197,400	0.13
21	Querétaro	214,725,894	18,616,891,000		18,616,891,000	10,744,000	18,616,891,000	18,606,147,000	10,744,000	0.01
22	Quintana Roo	168,013,399	19,146,021,000	1,350,000,000	19,146,021,000	718,200,000	17,796,021,000	18,427,821,000	-631,800,000	-0.38
23	San Luis Potosí	217,881,481	24,797,190,000	111,890,000	24,797,190,000	71,570,245	24,685,300,000	24,725,619,755	-40,319,755	-0.02
24	Sinaloa	239,398,533	27,965,443,324		27,965,443,324		27,965,443,324	27,965,443,324	0	0.00
25	Sonora	288,376,237	31,990,677,154	76,771,320	31,990,677,154	232,723,899	31,913,905,834	31,757,953,255	155,952,579	0.05
26	Tabasco	434,375,738	37,437,758,599		37,437,758,599	82,310,041	37,437,758,599	37,355,448,558	82,310,041	0.02
27	Tamaulipas	405,268,365	33,523,224,870		33,523,224,870	241,563,149	33,523,224,870	33,281,661,721	241,563,149	0.06
28	Tlaxcala	61,363,608	13,981,045,986		13,981,045,986	210,000,000	13,981,045,986	13,771,045,986	210,000,000	0.34
29	Veracruz	541,732,585	73,048,174,232		73,048,174,232		73,048,174,232	73,048,174,232	0	0.00
30	Yucatán	158,236,081	18,727,860,428	240,000,000	18,727,860,428	55,872,084	18,487,860,428	18,671,988,344	-184,127,916	-0.12
31	Zacatecas	90,642,988	19,510,599,424	636,348,417	19,510,599,424	38,511,785	18,874,251,007	19,472,087,639	-597,836,632	-0.66
FUENTE: Elaboración propia con datos de INEGI. (2009). Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008, consultado en										
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/tdFinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288										
y con datos de INEGI consultados en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?pry=finanzas&edi=0000&ent=00 15/03/2010										
Para PIB, se tomaron datos de: INEGI. Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008, consultado en http://www.inegi.org.mx/ind_serv/contenidos/espanol/inegi/productos/derivada/regionales/pib/PBE2008.pdf										

MÉXICO: PEA OCUPADA POR EL SECTOR PÚBLICO DE LOS ESTADOS, 2008				
	Estado	PEA Ocupada 2008	Personal ocupado en el gobierno del estado 2008	Como % de la PEA Ocupada
1	Aguascalientes	435,158	4,236	0.97
2	Baja California	1,308,531	8,393	0.64
3	Baja California Sur	261,062	4,011	1.54
4	Campeche	336,503	7,045	2.09
5	Chiapas	1,576,563	115,670	7.34
6	Chihuahua	1,355,940	56,134	4.14
7	Coahuila**	1,057,262	52,210	4.94
8	Colima	281,090	5,076	1.81
9	Durango	575,382	42,313	7.35
10	Guanajuato	1,901,011	323,340	17.01
11	Guerrero	1,256,706	27,795	2.21
12	Hidalgo	912,321	8,205	0.90
13	Jalisco	2,961,189	178,108	6.01
14	Mexico	5,837,760	219,525	3.76
15	Michoacán	1,561,513	38,247	2.45
16	Morelos	701,287	8,137	1.16
17	Nayarit	419,055	9,214	2.20
18	Nuevo León	1,943,701	12,974	0.67
19	Oaxaca	1,400,835	23,550	1.68
20	Puebla	2,263,264	55,217	2.44
21	Querétaro	662,613	6,160	0.93
22	Quintana Roo	632,035	7,360	1.16
23	San Luis Potosí	972,653	14,951	1.54
24	Sinaloa	1,122,383	24,082	2.15
25	Sonora	985,471	12,384	1.26
26	Tabasco	758,530	46,000	6.06
27	Tamaulipas	1,306,517	13,574	1.04
28	Tlaxcala	429,237	6,117	1.43
29	Veracruz	2,773,605	78,792	2.84
30	Yucatan	871,087	35,207	4.04
31	Zacatecas	533,241	7,745	1.45
**NOTA: Para Coahuila en cuanto a empleados del gobierno se tomó la cifra del apartado 9 (Trabajo) de su anuario estadístico ya que carecía de información en el apartado relativo al sector público				
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). Anuarios estadísticos de cada uno de los 31 Estados, consultados en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173				

MÉXICO: GASTO PÚBLICO EN LOS ESTADOS COMO % DEL PIB, 2008.				
	Estado	PIB 2008 (miles de pesos)	Egresos financieros 2008	% del PIB 2008
1	Aguascalientes	121,079,102	12,965,369,000	10.71
2	Baja California	330,168,949	27,159,227,001	8.23
3	Baja California Sur	67,402,355	8,741,557,246	12.97
4	Campeche	812,661,051	16,356,690,698	2.01
5	Chiapas	212,350,342	49,744,793,942	23.43
6	Chihuahua	367,052,091	35,244,217,296	9.60
7	Coahuila	372,154,768	31,409,155,000	8.44
8	Colima	60,887,312	8,769,197,821	14.40
9	Durango	141,351,983	17,558,079,307	12.42
10	Guanajuato	427,502,955	47,314,451,791	11.07
11	Guerrero	168,703,065	34,750,783,700	20.60
12	Hidalgo	180,196,820	25,543,129,995	14.18
13	Jalisco	728,915,571	64,754,488,593	8.88
14	Mexico	1,039,335,167	147,992,564,200	14.24
15	Michoacán	286,812,895	40,218,079,098	14.02
16	Morelos	120,862,260	16,637,536,000	13.77
17	Nayarit	69,370,117	13,737,968,108	19.80
18	Nuevo León	886,003,130	47,879,016,000	5.40
19	Oaxaca	173,231,003	44,092,268,000	25.45
20	Puebla	394,549,457	47,485,060,400	12.04
21	Querétaro	214,725,894	18,616,891,000	8.67
22	Quintana Roo	168,013,399	19,146,021,000	11.40
23	San Luis Potosí	217,881,481	24,797,190,000	11.38
24	Sinaloa	239,398,533	27,965,443,324	11.68
25	Sonora	288,376,237	31,990,677,154	11.09
26	Tabasco	434,375,738	37,437,758,599	8.62
27	Tamaulipas	405,268,365	33,523,224,870	8.27
28	Tlaxcala	61,363,608	13,981,045,986	22.78
29	Veracruz	541,732,585	73,048,174,232	13.48
30	Yucatan	158,236,081	18,727,860,428	11.84
31	Zacatecas	90,642,988	19,510,599,424	21.52
FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI. (2009). <i>Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008</i> , consultado en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288 y con datos de INEGI consultados en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00 15/03/2010 Para P.I.B. se tomaron datos de: INEGI. <i>Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008</i> , consultado en http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf				

MÉXICO: ESFUERZO FISCAL DE LOS ESTADOS, 2008.							
	Estado	PIB 2008 (miles de pesos)	Impuestos locales 2008 (pesos)	Población 2008	PIB per cápita 2008 (pesos)	Presión fiscal 2008 %	Esfuerzo fiscal 2008 (l. Frank)**
1	Aguascalientes	121,079,102	320,583,000	1,124,288	107,694.0	0.26	0.025
2	Baja California	330,168,949	1,326,020,384	3,079,363	107,219.9	0.40	0.037
3	Baja California Sur	67,402,355	379,462,333	551,525	122,210.9	0.56	0.046
4	Campeche**	812,661,051	492,451,000	786,753	1,032,930.3	0.06	0.001
5	Chiapas	212,350,342	790,151,889	4,460,013	47,612.0	0.37	0.078
6	Chihuahua	367,052,091	1,729,642,520	3,359,934	109,243.8	0.47	0.043
7	Coahuila	372,154,768	571,497,000	2,601,884	143,032.8	0.15	0.011
8	Colima	60,887,312	169,782,451	593,224	102,638.0	0.28	0.027
9	Durango	141,351,983	398,271,981	1,544,614	91,512.8	0.28	0.031
10	Guanajuato	427,502,955	1,501,875,663	5,020,800	85,146.4	0.35	0.041
11	Guerrero	168,703,065	656,446,700	3,145,656	53,630.5	0.39	0.073
12	Hidalgo	180,196,820	626,645,969	2,409,162	74,796.5	0.35	0.046
13	Jalisco	728,915,571	2,000,432,485	6,960,799	104,717.2	0.27	0.026
14	México	1,039,335,167	5,339,600,000	14,638,436	71,000.4	0.51	0.072
15	Michoacán	286,812,895	619,626,684	3,977,964	72,100.4	0.22	0.030
16	Morelos	120,862,260	321,504,000	1,661,813	72,729.2	0.27	0.037
17	Nayarit	69,370,117	327,588,036	966,996	71,737.7	0.47	0.066
18	Nuevo León	886,003,130	2,600,555,141	4,393,095	201,680.8	0.29	0.015
19	Oaxaca	173,231,003	296,093,000	3,552,300	48,765.9	0.17	0.035
20	Puebla	394,549,457	1,064,578,000	5,595,760	70,508.6	0.27	0.038
21	Querétaro	214,725,894	997,541,489	1,690,042	127,053.6	0.46	0.037
22	Quintana Roo	168,013,399	800,739,000	1,267,087	132,598.2	0.48	0.036
23	San Luis Potosí	217,881,481	564,503,000	2,473,678	88,080.0	0.26	0.029
24	Sinaloa	239,398,533	542,419,669	2,648,330	90,396.0	0.23	0.025
25	Sonora	288,376,237	851,921,764	2,487,608	115,925.1	0.30	0.025
26	Tabasco**	434,375,738	252,475,440	2,039,979	212,931.5	0.06	0.003
27	Tamaulipas	405,268,365	1,171,066,186	3,154,947	128,454.9	0.29	0.022
28	Tlaxcala	61,363,608	152,795,310	1,119,819	54,797.8	0.25	0.045
29	Veracruz	541,732,585	1,344,200,000	7,261,119	74,607.3	0.25	0.033
30	Yucatán	158,236,081	377,149,401	1,898,086	83,366.1	0.24	0.029
31	Zacatecas	90,642,988	273,454,733	1,381,399	65,616.8	0.30	0.046

NOTA: Para el año 2008, Campeche y Tabasco registraron un crecimiento nominal del PIB superior al 30% debido principalmente al alza de precios en la industria de la minería petrolera.

** En este caso, un índice de esfuerzo fiscal de 0.025 indica que un ciudadano de un Estado soporta 0.025 puntos básicos de impuestos por cada cien pesos de ingreso per cápita.

FUENTE: Elaboración propia con datos de: INEGI 2010. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa, 2003-2008. y de <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/continuas/economicas/bd/FinanzasPublicas/FPEst.asp?s=est&c=11288> y de: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&ed=0000&ent=00> 15/03/2010

7.- BIBLIOGRAFÍA.

- ALBI, E. et al. (2000). *Economía Pública*, Tomos I y II, Madrid: Ariel.
- ANDERSON, D.R. et al. (1999). *Estadística para administración y economía*, México: Thomson.
- AROSON, H. J. (1990). *Financing State and Local Governments*, Washington, D.C.: The Brookings Institution.
- ASHBY, N. J. et al. (2010). *Economic Freedom of North America 2010*, Canadá: the Fraser Institute.
- ASTUDILLO, M. (2009). *Conceptos básicos de federalismo fiscal: el caso de México*, México: Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.
- AYALA, J. (2003). *Instituciones para mejorar el desarrollo*, México: F.C.E.
- , (2001). *Economía del Sector Público Mexicano*, México: Ed. Esfinge.
- , (2000). *Diccionario Moderno de la Economía del Sector Público*, México: Diana.
- , (1999). *Instituciones y economía: Una introducción al neoinstitucionalismo económico*, México: F.C.E.
- BARCEINAS, C. M. et al. (2009). *Origen y funcionamiento del ramo 33*, consultado en: http://www.e-local.gob.mx/work/resources/SPC/analisis_sintetico_ramo33.pdf
- BARRERA, J. et al. (2004). *Temas Hacendarios*, México: U.N.A.M.
- BECKER, G. S. (1985). *Human capital: A theoretical and empirical analysis; with special reference to education*, Chicago: The University of Chicago.
- BEHN, R. (2003). Why Measure Performance? Different Purposes Require Different Measures. *Public Administration Review*, pp. 586-606

BERGVALL, D. et al. (2006). *Intergovernmental Transfers and Decentralized Public Expending*, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government, 3, consultado en: <http://www.oecd.org/dataoecd/52/52/37388377.pdf>

BIRD, R. M. (1993). *Threading the Fiscal Labyrinth: Some Issues in Fiscal Decentralization*, National Tax Journal, 46

BLANCHARD, O. (2000). *Macroeconomía*, Madrid: Prentice Hall.

BOADWAY, R. et al. (1994). *The Reform of Fiscal Systems in Developing and Emerging Market Economies*, World Bank Working Paper, 1259, consultado en: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/IW3P/IB/1994/02/01/000009265_3961006021533/Rendered/PDF/multi0page.pdf

BOBBIO, N. (1989). *La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político*, México: F.C.E.

BOLTVINIK, J. (2004). "Políticas focalizadas de combate a la pobreza en México. El Progreso/Oportunidades" Boltvinik Julio, et al. (Coord.), *La Pobreza en México y el Mundo*, México: Ed. Siglo XXI.

BONETE, R. (2006). "El presupuesto comunitario y su financiación: La necesidad de un nuevo sistema a la altura de los nuevos tiempos" en Alarcón Gloria y Ruiz-Huerta Jesús (directores), *Los nuevos retos de la fiscalidad*, Madrid: Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros-Thomson Civitas.

BRENNAN G. y BUCHANAN J. M. (1987). *El poder fiscal*, Madrid: Unión Editorial.

BUCHANAN, J. M. (1990). *Ensayos de Economía Política*, México: Alianza Editorial Mexicana.

----. (1987). *Economía Política Constitucional*, Valladolid: Conferencia pronunciada el 2-XII-1987 en la Universidad de Valladolid, mimeo.

----. (1981). *Los Límites de la Libertad*, México: Premia editora de libros, S.A.

- . (1973). *La Hacienda Pública en un Proceso Democrático*, Madrid: Aguilar.
- BUCHANAN, J. M. y FLOWERS M. R. (1980). *Introducción a la Ciencia de la Hacienda Pública*, Madrid: Editorial de Derecho Financiero.
- BUCHANAN, J. M. y MUSGRAVE, R. (2001). *Public Finance and Public Choice: Two Contrasting Visions of the State*, EE. UU.: M. I. T. Press.
- BUCHANAN, J. M. et al. (1983). *Déficit del sector público y democracia*, Madrid: Ediciones Rialp, S. A.
- BUSTOS, A. (2007). *Curso básico de Hacienda Pública*, Colex, Madrid.
- . (2007). *Lecciones de Hacienda Pública*, Ed. Colex, Madrid.
- CABRERO, E. (2008). “La trampa del federalismo fiscal” en: *Nexos*, noviembre, núm. 371, México.
- CABRILLO, F. (2008). *Libertad económica en las Comunidades Autónomas*, Madrid: Universidad Complutense de Madrid-Marcial Pons.
- CABRILLO, F. et al. (2008). *Estrategias para un gobierno eficaz*, Madrid: LID.
- CÁRDENAS, E. (1996). *La política económica en México, 1950-1994*, México: F.C.E.
- CARRETÓN, A. (2006). “Financiación autonómica: Retos y tendencias de futuro” en Alarcón Gloria y Ruiz-Huerta Jesús (directores), *Los nuevos retos de la fiscalidad*, Madrid: Instituto Universitario de Estudios Fiscales y Financieros-Thomson Civitas.
- CASTRO, J. (2001). “El federalismo en Canadá 130 años después”, en Castro, et al. (Coord.) *El Nuevo Federalismo en América del Norte*, México: UNAM.
- CEFP, (2009). “La contribución del Ramo 33 al gasto de inversión en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio 2009”, documento núm. CEF/004/2009, enero.
- , (2006). “Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios” *Serie Cuadernos de Finanzas Públicas*, 2006, México, núm. 9, septiembre.

---, (2006a). "Recaudación Federal Participable" *Serie Cuadernos de Finanzas Públicas*, 2006, México, núm. 7, septiembre.

COLE, J. H: (2005). "Libertad económica y crecimiento económico mundial: Evidencia e implicaciones" en: Roemer, A. *Felicidad: Un enfoque de Derecho y Economía*, México: U.N.A.M.

COLLEN, A. (1996). "Descentralización fiscal y federalismo en México". *Federalismo y Desarrollo*, año 9, núm. 53, enero-marzo, México.

COLLIER, P. (2007). *El Club de la Miseria*, Madrid: Ed. Turner.

CONAPO. (2010). *Proyecciones de la población de México 2005-2050*, consultado en http://www.conapo.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=36&Itemid=234

CONVENCIÓN NACIONAL HACENDARIA. (2004). *Declaratoria a la Nación y Acuerdos de los Trabajos de la Primera Convención Nacional Hacendaria*, consultado en:
<http://www.conago.org.mx/reuniones/documentos/DeclaratoriaNacion/declaratoria.pdf>

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Consultada en <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf>

CORDERA, R. (2008). *Laberintos del estancamiento*, consultado en:
http://www.rolandocordera.org.mx/periodico/abr_2008/laberintos28.pdf

COSSÍO, D. (1969). *El Sistema Político Mexicano*, México: Cuadernos de Joaquín Mortiz.

CRUZ, A. (2004). *Federalismo Fiscal Mexicano*, México: Porrúa.

DEPARTMENT OF JUSTICE OF CANADA, (2001). "The Constitution Act. 1867", en: *A Consolidation of the Constitution Acts 1967 to 1982*, Department of Justice of Canada, Canadá.

DAMIÁN, A. (2004). "Panorama de la pobreza en América Latina y México", en Boltvinik Julio, et al. (Comp.), *La pobreza en México y en el mundo*, México: Ed. Siglo XXI.

DAVODI, H. D. et al. (1995). "Fiscal Decentralization and Economic Growth in the United States", Banco Mundial, mimeo.

DOLLAR, D. y KRAAY, A. (2001). *Growth is good for the poor*, World Bank Policy Research Working Paper, 2587, mimeo.

DESAI, R. et al. (2003). *Fiscal Federalism and Regional Growth: Evidence from the Russian Federation in the 1990s*, World Bank Working Paper, 3138. mimeo.

DORNBUSCH, R. et al. (1999). *Macroeconomía*, España: Ed. McGraw-Hill.

DOWNS, A. (1973). *Teoría económica de la democracia*, Madrid: Aguilar.

FRIEDMAN, M. (1999). *La economía monetarista*, Madrid: Altaya.

FUKASAKU, K. et al. (1998). "Fiscal Decentralization and Macroeconomic Stability: The Experience of Large Developing and Transition Economies" en: Kiichiro Fukasaku, et al. *Democracy, Decentralization and Deficits in Latin America*, Paris: OECD.

GIBBONS, R. (1992). *Un primer curso de teoría de juegos*, España: Antoni Bosch.

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.aguascalientes.gob.mx/seplade/crie/prod/pdf/SeguimientoGubernamental/5to.%20Informe%20de%20Gobierno.pdf>

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, (2009). *Segundo Informe de Labores*, consultado en: <http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/2informe/2informe.jsp>

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.bcs.gob.mx/informes-de-gobierno.html>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.portal.camp.gob.mx/Informes%20de%20Gobierno/default.aspx>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS, (2009). *Tercer Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.informe.chiapas.gob.mx/tercer-informe>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: [http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/spe/uploads/Quinto_Informe\(1\).pdf](http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/spe/uploads/Quinto_Informe(1).pdf)

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.e-pages.dk/coahuilagobmx/41/fullpdf/full4b3a658bd208a.pdf>

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.planeacion.gob.mx/informes/index.php?ninf=2009>

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.durango.gob.mx/site/descargas/cuartoInforme.pdf>

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO, (2008). *Segundo Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.guanajuato.gob.mx/gestiones/oliva/2doInforme/pdf/intro.pdf>

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.guerrero.gob.mx/?P=readart&ArtOrder=ReadArt&Article=7621>

GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: http://www.hidalgo.gob.mx/descargables/transparencia/informes_gob/admon_actual/2009/4toInforme.swf

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, (2009). *Segundo Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.informe.jalisco.gob.mx/?q=segundo-informe>

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, (2009). *Primer Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.michoacan.gob.mx/Transparencia/Informe>

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en <http://portal2.edomex.gob.mx/edomex/gobierno/resultadosdegobierno/informesdegobierno/index.htm>

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, (2009). *Tercer Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.morelos.mx/00noticias/3erinforme/#>

GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en <http://www.seplan.gob.mx/informe4.html>

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en http://www.nl.gob.mx/?P=sexto_informe_transmision

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: http://oaxaca.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=190&Itemid=1

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en:

<http://www.transparencia.pue.gob.mx/transparencia/transparencia/searchTransparencia.jsp?fraccion=9&unidad=SFA>

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO, (2004). *Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009*, Querétaro de Arteaga.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, (2009). *Cuarto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://cuartoinforme.qroo.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, (2009). *Sexto Informe de Gobierno*, consultado en: http://201.117.193.130/InfPubEstat2/_SECRETAR%c3%8dA%20PARTICULAR%20DEL%20DESPACHO%20DEL%20C.%20GOBERNADOR/Art%c3%adculo%2019.%20fracc.%20IX/Informe%20Anual%20de%20Actividades/6%c2%ba%20Informe%202003-2009/cualitativo/Informe.pdf

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&catid=8:cgaip&id=2747:5to-informe-de-gobierno&Itemid=567

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA, (2009). *Sexto Informe de Trabajo*, consultado en <http://sextoinforme.sonora.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, (2009). *Tercer Informe de Gobierno*, consultado en: http://seplan.tabasco.gob.mx/seplanet/subsria_planeacion/3er_informe/3er_informe.php

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://quintoinforme.tamaulipas.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.tlaxcala.gob.mx/gobernador/imagenes/quinto-red.pdf>

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, México: Editado por el autor.

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN, (2009). *Segundo Informe de Gobierno*, consultado en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.htm

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, (2009). *Quinto Informe de Gobierno*, consultado en: <http://www.zacatecas.gob.mx/informes.php>

GÓMEZ, P. y VILLANUEVA, E. (2007). *Indicadores de Transparencia y reforma al artículo 6 constitucional*, México: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y Libertad de Información-México, A.C.

GONZÁLEZ, J.A. (2007). "Diagnóstico y reflexiones sobre el sistema de transferencias federales", mimeo.

GWARTNEY, J. D. et al. (2010). *Economic Freedom of the World: 2010 Annual Report*, consultado en: www.fraserinstitute.org

HATRY, H. (1999). *Performance measurement: Getting results*. Washington, D.C.: The Urban Institute Press

HERNÁNDEZ, A. (1996). "Las tensiones internas del federalismo mexicano" en Hernández, A. *¿Hacia un nuevo federalismo?*, México: El Colegio de México, A.C.

HOCKLEY, G. C. (1992). *Fiscal policy: an introduction*, London: Routledge.

IBARRA, D. (2005). *Ensayos sobre economía mexicana*, México: Ed. F.C.E.

INAP, (1996). *Diagnóstico del Sistema de Contribución y Distribución de la Hacienda Pública Estatal y Municipal*, México: INAP.

INEGI, (2009). *Anuario Estadístico del Estado del Estado de Aguascalientes*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Baja California*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Baja California Sur*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Campeche*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Chiapas*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Chihuahua*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Coahuila de Zaragoza*, México.

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Baja Colima*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Durango*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Guanajuato*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Guerrero*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Hidalgo*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Jalisco*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de México*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Michoacán de Ocampo*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Morelos*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Nayarit*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Nuevo León*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Oaxaca*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Puebla*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

----. (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Querétaro de Arteaga*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173

- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Quintana Roo*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosí*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Sinaloa*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Sonora*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Tabasco*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Tamaulipas*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Tlaxcala*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Yucatán*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Anuario Estadístico del Estado de Zacatecas*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/catalogo/Default.asp?accion=1&upc=702825201173
- . (2009). *Finanzas públicas estatales y municipales de México 2005-2008*, México, consultado en: <http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/sistemas/sisnav/default.aspx?proy=finanzas&edi=0000&ent=00>
- . *Producto Interno Bruto por entidad federativa, 2003-2008*, consultado en: http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/derivada/regionales/pib/PIBE2008.pdf
- . (2009). *Síntesis Metodológica de la Estadística de Finanzas Públicas Estatales y Municipales*, México.

----. (2000). *Estadísticas Históricas de México*, Tomos I y II, INEGI, México.

INMAN, R. (1997). "Rethinking Federalism" *Journal of Economic Perspective*, 11, mimeo.

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY, (2010). *La Competitividad de los Estados Mexicanos 2010*, consultado en <http://www.itesm.mx/webtools/competitividad/>

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL SENADO DE LA REPÚBLICA, (2001). *El Federalismo Fiscal en México*, México: Senado de la República.

INSTITUTO MEXICANO PARA LA COMPETITIVIDAD, A. C. (2008). *La Competitividad Estatal de México*, consultado en www.imco.org.mx

IZQUIERDO, A.D. (2008). "EL FAFEF: Aspectos Determinantes de su Distribución", en *INDETEC: Federalismo Hacendario*, volumen 152, México.

KIM, S. (1995). *Fiscal Decentralization, Fiscal Structure, and Economic Performance: Three Empirical Studies*. Universidad de Maryland: Tesis Doctoral.

KNIGHT, J. (1992). *Institutions and social conflict*, Cambridge: Cambridge University Press.

LAUBACH, T. (2005). *Fiscal Relations Across Levels of Government in the United States*, Economics Department Working Papers, OCDE, 462, consultado en: [http://www.oilis.oecd.org/oilis/2005doc.nsf/LinkTo/NT000046C2/\\$FILE/JT00195165.PDF](http://www.oilis.oecd.org/oilis/2005doc.nsf/LinkTo/NT000046C2/$FILE/JT00195165.PDF)

LEY DE COORDINACIÓN FISCAL, consultada en <http://www.sncf.gob.mx/sinacofi/Legislacion/lcf.aspx>.

LOMELÍ, L. et al. (1998). *La política económica de México en el Congreso de la Unión (1970-1982)*, México: F.C.E.

- LOPEZ, A.I. (2008). "Efectos de la Nueva Distribución de Participaciones", en *INDETEC: Federalismo Hacendario*, volumen 152, México.
- MACGREGOR, J. (2001). *State and Local Politics Government by People*, EE. UU. Prentice Hall.
- MALIZIA, E. E. et al. (1999). *Understanding Local Economic Development*, New Jersey: Center for Urban Policy Research, Rutgers.
- MANDUJANO, N. (2010). *Federalismo Fiscal en México*, México: UNAM.
- MANKIW, G. (2000). *Macroeconomía*, Barcelona: Antoni Bosch.
- MENDEL, T. (2007): "Access to Information: The Existing State of Affairs Around The World" en Villanueva, E. (Coord.), *Derecho de la Información*, México: UNAM, pp. 3-12.
- MUSGRAVE, R. et al. (1992). *"Hacienda Pública: Teoría y Aplicada"*, México: Editorial McGraw Hill.
- MUSGRAVE, R. A. (1969). *Teoría de la Hacienda Pública*, Madrid: Aguilar.
- NICHOLSON, W. (2001). *Microeconomía intermedia*, Colombia: McGraw-Hill.
- NISKANEN. W. A. (1980). *Cara y cruz de la burocracia*, Madrid: Espasa Calpe, S. A
- NISKANEN. W. A. (1971). *Bureaucracy and representative government*, Chicago: Aldine.
- NORTH, D. C. (1993). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México: F.C.E.
- NOVALES, A. (1997). *Estadística y econometría*, España: McGraw-Hill.
- NUÑO, J.A. (2007). "La Reforma Fiscal 2008 en las Finanzas Municipales" mimeo.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO, (2008). *Estadísticas del Comercio Internacional*, consultado en: http://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2008_s/its2008_s.pdf

OATES, W. (2008): "On The Evolution of Fiscal Federalism: Theory and Institutions" en *National Tax Journal*, vol. LXI, núm. 2, pp. 313-334, consultado en: [http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/B7375E5B50FB988A85257483004935A2/\\$FILE/08-Art8.pdf](http://ntj.tax.org/wwtax/ntjrec.nsf/B7375E5B50FB988A85257483004935A2/$FILE/08-Art8.pdf)

---, (2005): "Toward A Second-Generation Theory of Fiscal Federalism" en *International Tax and Public Finance*, 12, pp. 349-373, consultado en: <http://econweb.umd.edu/~oates/research/2ndGenerationFiscalFederalism.pdf>

---, (1991). *Studies in Fiscal Federalism*, EE. UU.: Ed. Edward Elgar.

---, (1977). *Federalismo Fiscal*, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local.

OCDE, (2006). *Políticas Públicas Para un Mejor Desempeño Económico*, México: Secretaría de Relaciones Exteriores-OCDE.

PINDICK, R.S. et al. (2001). *Econometría: modelos y pronósticos*, México: McGraw-Hill.

PINEDA, J.D. et al. (2006). *El estudio de la nueva ciencia política*, México: Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística.

PORTO, A. (2010). "Las teorías del federalismo fiscal (FGT y SGT) y aplicaciones a la Argentina" en *13 Seminario de Federalismo Fiscal en conmemoración del Bicentenario de la Argentina, 1810-2010*, consultado en: www.cippec.org/files/documents/Ponencias/Porto-13.ppt

POWELL, B. (2003). *Libertad económica y crecimiento económico: El caso de Irlanda*, consultado en: <http://www.elcato.org/node/1257>

RICHARDSON, H. W. (1973). *Regional Growth Theory*, John Wiley and Sons, Nueva York.

RODDEN, J.A. (2008). "Federalism" en Weingast, B. R. y Wittman, D. A (editores). *The Oxford Handbook of Political Economy*, Great Britain: Oxford University Press.

ROSEN, H. S. (2002). *Hacienda Pública*, Madrid: Ed. Mc Graw Hill.

SABINE, G. H. (1981). *Historia de la teoría política*, México: F.C.E.

SALINAS, J. y SALINAS, M. del Mar. (2007). "Corrupción y actividad económica: una visión panorámica" en *Hacienda Pública Española/Revista de Economía Pública*, 1-2007, España: Instituto de Estudios Fiscales, consultado en: http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/hac_pub/180_Salinas.pdf

SCHMELKES, S (2008) "México y el logro de la educación primaria universal", consultado en: http://www.cmq.edu.mx/documentos/Mexico_Metas_Milenio/Milenio_Sylvia.pdf

SECRETARÍA DE SALUD. (2007). *Programa Nacional de Salud*, México, consultado en: http://portal.salud.gob.mx/sites/salud/descargas/pdf/pns_version_completa.pdf

SHAH, A. (2005). *Fiscal Decentralization and Fiscal Performance*, World Bank Working Paper, 3786, consultado en: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSCContentServer/IW3P/IB/2005/12/02/000016406_20051202162434/Rendered/PDF/wps3786.pdf

----. (2004). *Fiscal Decentralization in Developing and Transition Economies: Progress, Problems, and the Promise*, World Bank Working Paper, 3282, EE. UU.

SMITH, A. (1999). *Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones*, México: Ed. F.C.E.

SOBARZO, H. (2005). *Federalismo fiscal en México*, consultado en: http://www.cmq.edu.mx/documentos/Revista/dosier/estdossier_4.pdf

STIGLITZ, J. (2000). *La economía del sector público*, España: Ed. Antoni Bosch.

STUART, J. (1984). *Sobre la libertad*, España: Ed. Sarpe.

SZÉKELY, M. (2005). "Pobreza y desigualdad en México entre 1950 y el 2004", *Serie documentos de investigación*, México: SEDESOL.

TER-MINASSIAN, T. (1997). "Intergovernmental fiscal relations in a macroeconomic perspective: an overview" en *Fiscal Federalism in theory and practice*, Washington, D.C.: I.M.F.

TIEBOUT, C. M. (1956). "A pure theory of local expenditures", *The Journal of Political Economy*, vol. 64, núm, 5, October, Chicago: The University of Chicago Press.

THE HERITAGE FOUNDATION-THE WALL STREET JOURNAL. (2010). *2010 Index of Economic Freedom*, Washington, D.C.

TRUJILLO, L.P. (2008). "Transferencias gubernamentales y gasto local" en *Gestión y Política Pública*, Vol. 17, número 2, México: Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), A.C.

TULLOCK, G. (1974). *Necesidades Privadas y Medios Públicos*, Madrid: Aguilar.

URZÚA, C. M. (2000). "Vicisitudes del Federalismo Mexicano" *Serie Documentos de Trabajo*, núm. VII, Centro de Estudios Económicos, El Colegio de México, A.C., consultado en: <http://www.colmex.mx/centros/cee/documentos/2000/DT%20VII-2000.PDF>

UVALLE, R. (2005). *Descentralización y Federalismo*, México: IEFM.

VEGA M. J. y ÁLVAREZ J. L. (2005) "Libertad y crecimiento económico: Un estudio de causalidad" en: Roemer, A. *Felicidad: Un enfoque de Derecho y Economía*, México: U.N.A.M.

VILLANUEVA, L.F. (1992). *La descentralización de las políticas públicas*, México: UNAM.

WIESNER, E. (2005). *Fiscal Federalism in Latin America*, Washington, EE. UU.: Inter-American Development Bank.

WEINGAST, B. R. (2006): "Second Generation Fiscal Federalism: Implications for Decentralized Democratic Governance and Economic Development" (Proyecto para discusión), consultado en: <http://politicalscience.stanford.edu/faculty/documents/Weingast-second%20generation%20fiscal%20federalism.pdf>

WEINGAST, B.R. y WITTMAN, D.A. (2008). "The Reach of Political Economy" en Weingast, B. R. y Wittman, D. A (editores). *The Oxford Handbook of Political Economy*, Great Britain: Oxford University Press.

WILDASIN, D. E. (2008). "Fiscal Competition" en Weingast, B. R. y Wittman, D. A (Editores). *The Oxford Handbook of Political Economy*, Great Britain: Oxford University Press.

WRIGHT, D.S. (1997). *Para entender las relaciones intergubernamentales*, México: Ed. F.C.E.

WOOLDRIDGE, J. M. (2001). *Introducción a la Econometría*, México: Thomson.

WORLD BANK, (1999). *World Development Report 1999-2000*, Washington, D.C.: The World Bank.